

Vivian Andrea Ladino Mosquera

Periferias diferenciadas en *Cali*

Estudio sobre la construcción del espacio social
en los barrios *Suerte 90 y Terrón Colorado*



Universidad
del Valle

Programa Editorial

Esta obra presenta un estudio de caso sobre la configuración del espacio social en dos barrios de la ciudad de Cali, uno llamado Terrón Colorado, en la comuna 1, ladera oeste, y el otro, Suerte 90, ubicado en la comuna 21, zona oriental plana. Este contraste dio cuenta de que la construcción de las zonas residenciales, así sea de autoconstrucción o agenciadas por el Estado, responde a la combinación del espacio social, el espacio simbólico y el espacio físico, los cuales concretan un capital espacial específico que tendrá ventajas o desventajas entre distintos lugares de la ciudad, y además es un proceso dirigido por agentes sociales.

El texto es un aporte a la sociología de la ciudad que centra su análisis en las relaciones sociales de producción y reproducción en el espacio, conectando lo físico y lo simbólico. Además, contribuye a los estudios históricos de la ciudad, dado que aún no se han desarrollado las investigaciones suficientes sobre los barrios de Cali y, con mayor razón, bajo una perspectiva comparada que promueve el método del estudio de caso como forma de conocer la complejidad de la realidad social. Esta metodología también permitió combinar distintas técnicas de investigación como el trabajo de campo con entrevistas, diarios, conversaciones informales, la revisión documental, análisis de datos estadísticos y bibliográficos.

Periferias diferenciadas en *Cali*

Estudio sobre la construcción del espacio social
en los barrios *Suerte 90 y Terrón Colorado*



Colección Ciencias Sociales

Ladino Mosquera, Vivian Andrea

Periferias diferenciadas en Cali: Estudio sobre la construcción del espacio social en los barrios Suerte 90 y Terrón Colorado / Vivian Andrea Ladino Mosquera - Primera edición

Cali : Universidad del Valle - Programa Editorial, 2026.

172 páginas ; 21.5 x 28 cm. -- (Colección: Ciencias Sociales)

1. Sociología urbana – 2. Periferias urbanas – 3. Segregación socioespacial – 4. Espacio social – 5. Desarrollo urbano – 6. Barrios populares – 7. Desigualdad urbana – 8. Cali (Valle del Cauca)

307.76 CDD. 22 ed.

L155

Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle

Programa Editorial

Título: Periferias diferenciadas en Cali: Estudio sobre la construcción del espacio social en los barrios Suerte 90 y Terrón Colorado

Autores:  Vivian Andrea Ladino Mosquera

ISBN-PDF: 978-958-507-611-2

DOI: [10.25100/peu.1109](https://doi.org/10.25100/peu.1109)

Colección: Ciencias Sociales

Primera edición

Rector de la Universidad del Valle: Guillermo Murillo Vargas

Vicerrectora de Investigaciones: Mónica García Solarte

Director del Programa Editorial: John Wilmer Escobar

© Universidad del Valle

© Vivian Andrea Ladino-Mosquera

Diseño de carátula: Angela Arboleda

Diagramación: Danny Stivenz Pacheco Bravo

Corrección de estilo: Juan Carlos García M. (G&G Editores)

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.

[CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 

Cali, Colombia, noviembre de 2026

Vivian Andrea Ladino Mosquera

Periferias diferenciadas en *Cali*

Estudio sobre la construcción del espacio social
en los barrios *Suerte 90 y Terrón Colorado*



Colección Ciencias Sociales

*Este esfuerzo lo dedico a mis padres,
que con sus valientes trayectorias me permitieron
movilidad en lo complejo del espacio social...*

PRÓLOGO

Prologar un libro de una de mis estudiantes siempre será una gran responsabilidad y un gran honor, más cuando se trata de una publicación producto del trabajo desarrollado durante su investigación doctoral. Acepté tan grande responsabilidad porque deseaba expresar mi admiración y aprecio por Vivian, quien demostró gran valentía al concluir un estudio de tan grande envergadura, a pesar de las considerables dificultades de contexto.

Dificultades que produjeron fuertes turbulencias en todos los procesos académicos e investigativos por cuenta de la caótica situación social por exposición a una mortal pandemia global que condujo a un estado de cuarentena de toda actividad y dinámica poblacional entre el 2020 y el 2022, y la compleja situación que, en estos escenarios, brotó en Colombia —pero con mayor fuerza en la ciudad de Cali—, dados los eventos asociados al estallido social que germinó desde las bases sociales de la sociedad colombiana contra las nefastas políticas neoliberales y sus derivados, potenciadas por el gobierno de ultraderecha de aquella época.

El resultado de esta increíble voluntad valerosa para culminar un estudio doctoral *en* y *sobre* la ciudad a pesar de tener que enfrentar estos complejos eventos, todos con impactos poderosos en el contexto urbano, donde incluso se puso en riesgo la salud y la integridad física de Vivian Ladino, fue una tesis con honores y un reconocimiento meritorio.

Este sugestivo libro que nos convida Vivian Andrea Ladino Mosquera, desde el enfoque de la sociología de la ciudad, es significativo para el conjunto de las ciencias sociales porque contribuye con un ejercicio práctico de investigación comparada —o de sociología de las diferencias— y de interconexión de la sociología en diálogo directo con la geografía y la historia; además, porque simboliza un claro ejemplo de lucha contra la antinomia (*couples ennemis*) que señaló en su momento Pierre Bourdieu cuando llamó la atención a los sociólogos acerca de evitar el teoricismo vacío y el empirismo ciego.

Nuestra autora se enfrentó, cara a cara, con un objeto de investigación de gran complejidad: la ciudad, resemantizando este escenario más allá de un mero artefacto construido a entenderla como un constructo social dotado de vida, de relaciones de poder y donde confluyen el espacio social y el espacio geográfico como dimensiones complementarias. Logró enlazar unos planteamientos

teóricos sobre los fenómenos socioespaciales —que han dado vueltas entre las reflexiones académicas—, con casos concretos o estudios de caso —geográfica y sociológicamente muy bien localizados e identificados—.

Ejercicio que demarcó esa enmarañada interrelación entre los *procesos sociales* y las *formas espaciales*, cuestión esta que ha sido abordada en las propuestas de las geografías críticas de la pluma de David Harvey, especialmente en su maravilloso libro *Urbanismo y desigualdad*, y por Pierre Bourdieu en su esclarecedor texto «Efectos de lugar», incluido en *La miseria del mundo*. Vivian Ladino Mosquera usó como pretexto el estudio de la construcción social de la periferia urbana para develar el conglomerado de hechos sociales que emergen del efecto de interacción entre procesos sociales y formas espaciales.

Tomó como casos de análisis dos barrios reconocidos como sectores marginales y urbanos de Santiago de Cali: el primero, el barrio Terrón Colorado, un sector muy tradicional que fue construido hacia mediados del siglo XX con características de entramado urbano informal y cuyo asentamiento se desplegó sobre las zonas de ladera en el piedemonte cordillerano, identificado como zona de alto riesgo por desastre de remoción en masa; el segundo barrio, denominado Suerte 90, localizado al oriente de la ciudad, junto al río Cauca, con eventual exposición al riesgo de desastre por inundación y licuefacción, fue construido bajo unos esquemas de planeación formal entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En ambos procesos, retoma situaciones humanas que demarcan la expresión de problemas que son parte del vivir cotidiano de muchos ciudadanos en los marcos de la vida en ciudad como la segregación de la población y la producción social de la condición de marginalidad.

Aunque ambos sectores barriales son calificados como fragmentos periféricos, asimétricos y marginales, producidos por la intencionalidad de grupos poblacionales desconectados de las dinámicas más generales de la ciudad, del país y del mundo, Ladino Mosquera aplicó la perspectiva de la crítica teórica y la crítica histórica, así como la crítica epistemológica y la crítica social, para cuestionar, develar y demostrar que la construcción social

de estos asentamientos no fue un proceso homogéneo y espontáneo como regularmente se presenta en el mundo político y en las sociologías espontáneas, y que, además, en cada caso abordado, los factores asociados a los *efectos de lugar* propuestos por Pierre Bourdieu actuaban y operaban de modo diferencial. Un efecto de lugar que es alimentado por distintos tipos de efectos interconectados como el de la ilusión empirista, el de la naturalización, el efecto de proximidad o acercamiento social, el de pantalla, el efecto club y el de arrastre.

Esto condujo a la autora a replantear la cuestión de la producción de la periferia urbana, no en sentido singular, sino en un sentido plural: las periferias urbanas, y en conexión con la acumulación y distribución del capital. Retomemos lo expuesto por Harvey (2018) cuando nos indicaba que «la particular dialéctica de atracción y repulsión que exhibe la acumulación de capital respecto a los diferentes lugares dentro de la red de urbanización varía espacio-temporalmente, así como con la facción del capital de la que se trata» (p. 533).

El campo de conocimiento de la historia ingresa en este análisis como un dispositivo poderoso y fructífero que permitió combatir las formas establecidas de pensamiento desde las cuales se ofrecían explicaciones a hechos tan trascendentales como estos, por lo que se logró realizar y revisar nuevas indagaciones y archivos documentales, para develar y descubrir los mecanismos diferenciales y ocultos de estructuración de estos barrios, muy a pesar de que, ambos lugares de estudio, estaban asociados por unas mismas dinámicas contextuales, en este caso, en los marcos de las fronteras de la historia urbana de Santiago de Cali.

En esta estructuración diferencial de las periferias surgen observaciones interesantes con respecto al papel que en ello cumplen las condiciones iniciales o de sociogénesis espacial que dieron origen a cada uno de los sectores, así como los contextos políticos, económicos y sociales, la gestión de los conflictos que enfrentan los propios pobladores en cuanto a la defensa de la vivienda digna e, incluso, observaciones con respecto a los agentes que intervinieron, promovieron, dinamizaron o potenciaron estos procesos de producción distintiva y diferencial de los espacios.

Este efecto que, parece, se puede evidenciar en Santiago de Cali, ha sido notorio en otros escenarios de la ciudad colombiana y, en general, de Latinoamérica, como sucede con las denominadas «villas de miseria» en países como Argentina, muy bien estudiadas por María Carman (2011), o los sectores marginales y segregados en países como Brasil y Chile. La comprensión de la construcción de las periferias urbanas y el descubrir sus complejos dinamismos nos conduce a leer de otro modo la categoría «tiempo/espacio» urbano y a delinear esquemas de pensamiento maestros de un análisis crítico.

Implica superar la visión causa-efecto, desmontando los lugares comunes, para instalar una renovada manera de vislumbrar de forma más compleja, multirrelacional y multicausal, de tal modo que, con estos nuevos hallazgos conseguidos en el tiempo presente sobre el desarrollo de la ciudad, no solo se nos transforma lo que nos había sido dado y explicado sobre el pasado urbano de estas ciudades, sino que también se nos conecta potencialmente con el porvenir de ellas. En otros términos, el análisis renovado desde el presente urbano transforma bidireccionalmente el orden de los hechos del pasado, como la proyección y el orden de los hechos futuros.

Este ejercicio de espacio/tiempo/sociedad nos incita a todos aquellos que estamos interesados en los objetos de estudio de la sociología de la ciudad, a volver sobre los temas que hemos analizado y estudiado para tratar de descubrir lo que, otrora, no descubrimos por nuestras cegueras o nuestros sesgos analíticos. Es una invitación a

superar el modo tradicional de abordar los estudios de ciudad, de motivarnos a activar renovadas formas de discernir, más integrales, más interdisciplinarias, más interconectadas, para que podamos romper con las interpretaciones comunes y, a veces, distantes de los acontecimientos reales. Una ciencia sociológica que se abre a la complejidad del pensamiento y a los hechos como sistemas sociológicos complejos.

Un elemento poderoso de este libro de Vivian está en que aporta también a dar más elementos de comprensión sobre el uso de la perspectiva teórica de Bourdieu en temas socioespaciales en clave de las relaciones de poder. Aunque los geógrafos poca atención le han prestado a Bourdieu, el libro de Ladino se convierte en un interesante ejemplo que puede ser de motivación para que nuestros colegas geógrafos se apresten a aprovechar los aportes de estas sociologías críticas del constructivismo-estructural, donde las dimensiones sociales solo son posibles en el universo del tiempo/espacio. Recordar que, como seres sociales, además de ser temporales también, e indiscutiblemente, somos espaciales, pues la sociedad y su espacio social se materializa y se despliega en interacción con el espacio geográfico, que de hecho es un producto social que se produce y se consume.

Nos encontramos así con geografías críticas, historias críticas y sociologías críticas, más que en confrontación, en una interesante y necesaria complementariedad, al momento de asumir y apropiarnos intelectualmente con responsabilidad y grandeza de temas tan ininteligibles como los asociados a las cuestiones de la sociología de la ciudad.

Hernando Uribe-Castro
22 de octubre de 2024

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al doctor Hernando Uribe Castro por su acompañamiento en esta investigación, especialmente por su claridad para enfocarme en la búsqueda de nuevo conocimiento y centrarme para ser rigurosa y metódica en la escritura. A las colegas Ana Isabel Meneses y Juliana Sinisterra Quintero, que con sus conversaciones enriquecieron desde el principio el diseño y desarrollo de este trabajo. Además, agradezco a los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle por las discusiones teóricas y metodológicas que enriquecieron los hallazgos, en especial a la profesora María Eugenia Ibarra Melo, quien apoyó las gestiones administrativas y académicas del proceso.

El respaldo de los líderes comunitarios y habitantes de los barrios Terrón Colorado y Suerte 90 fue clave en el acompañamiento a los recorridos en el espacio social, por lo cual agradezco que me permitieran dialogar sobre sus vidas urbanas, contar historias y confiar en el proceso de investigación social. Así mismo, a los profesionales sociales que me brindaron información sobre su quehacer en la intervención como insumo de contraste institucional con los habitantes de los barrios, y a los docentes que accedieron a entrevistas para complementar con datos históricos y teóricos la triangulación de fuentes secundarias y primarias.

De igual forma, este ejercicio contó con el apoyo financiero del programa Becas Bicentenario en su segundo corte, liderado por MinCiencias, Colfuturo y acompañado por el equipo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle; agradezco que desde el 2021 trabajaron en alianza para el desarrollo administrativo del programa de financiamiento. Que sea esta la oportunidad de reivindicar la financiación estatal en educación y ciencia para propender a la calidad y al impacto futuro de las comunidades y entidades gubernamentales.

Agradecimientos especiales a Julián Andrés Rincón por su compañía y escucha ante los dilemas teóricos y metodológicos que se presentaban a diario. A mis padres, Miguel Fernando Ladino y Mery Yolanda Mosquera, por el cuidado brindado durante la investigación y la comprensión de un proceso atravesado por el encierro y la pandemia. A mis hermanos, Diana y Víctor, y en general a mi familia por la confianza y el apoyo incondicional que requiere el ejercicio académico. Espero que más adelante pueda retomar también la historia de nuestro barrio.

RESUMEN

La investigación presenta la configuración de dos periferias urbanas de la ciudad de Cali en la ladera oeste de la ciudad y el oriente del río Cauca, particularmente en los barrios Terrón Colorado y Suerte 90, desde mediados del siglo XX hasta inicios del siglo XXI. Estas dos zonas comparten características socioeconómicas que las ubican dentro de la segregación espacial, que a su vez ha reproducido situaciones de marginalidad y desigualdad social en sus territorios, aunque la exclusión se vive de forma distinta por los habitantes de cada comuna. Interesa además dar cuenta del proceso histórico de formación de las periferias, contrastando el surgimiento espacial de los dos casos de estudio, a la vez que identificar el tipo de conflictos urbanos que presentan en la actualidad y de qué forma se relacionan entre sí.

El análisis se basa en la teoría efectos de lugar, donde el espacio social (campos) se define por la distinción de las posiciones que ocupan los agentes sociales en el lugar (espacio físico), lo que a su vez genera una estructura de yuxtaposiciones que jerarquiza el espacio y ubica a los agentes en posiciones privilegiadas o desiguales, de acuerdo con los capitales que poseen para moverse en el espacio social urbano, estableciendo distancias y oposiciones respecto de los bienes y las cosas. El poder (posesión de capitales) sobre el espacio se expresa en el espacio físico apropiado; es decir, que existe una relación entre la estructura espacial donde se distribuyen los agentes con la estructura física donde se encuentran los bienes; una posición del agente en el espacio social, se refleja en un lugar del espacio físico.

Se considera a los actores sociales como sujetos de conocimiento que a partir de sus relatos dan cuenta de las estructuras sociales en las que están inscritos, por lo cual hay un contraste entre aspectos microsociales y macrosociales, que a su vez son una apuesta epistemológica por el análisis intermedio de la realidad social. Se tiene en cuenta como informantes claves a líderes sociales, organizaciones de base, miembros de la junta de acción comunal (JAC), además de fuentes secundarias como archivos de Planeación Municipal, archivos históricos, prensa, bibliografía académica, estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La metodología se centró en el estudio de caso como una forma de reconocer la complejidad de la realidad social, la necesidad de estudiar los fenómenos sociales por

tiempos prolongados y recoger fuentes diferenciadas que al final se triangulan para entender la acción humana en escenarios naturales.

Este viaje histórico por el crecimiento de Cali en el siglo XX es el paso necesario para definir las luchas actuales por la vivienda y el espacio social en la ciudad, donde todavía prevalecen cifras de marginalidad y disputas entre las burocracias altas y burocracias bajas del Estado. Esas características

espaciales se conectan con la forma en que se expandió Cali en la primera mitad del siglo XX, dado que la definición de la plaza de Cayzedo como centro fundacional estaba asociado a las élites de poder, diferenciando a los pobladores que se asentaban de forma irregular en las laderas oeste y la zona plana oriental.

Palabras clave: espacio social, capital espacial, periferias urbanas, barrios, agentes sociales.

ABSTRACT

The research presents the configuration of two urban peripheries of Cali on the western slope of the city and east of the Cauca River, particularly in the Terrón Colorado and Suerte 90 neighborhoods from the mid-twentieth century to the beginning of the twenty-first century. These two areas have been characterized by their dynamics of social inequality, marginality, and exclusion, which are experienced differently by their inhabitants according to their origin and urban practices. It is also interesting to account for the historical periphery formation processes, contrasting the spatial emergence of the two case studies, emphasizing how the inhabitants manage urban conflicts amid social interactions.

The analysis is based on the place effects theory, where social space (fields) is defined by the distinction of the positions occupied by social agents in the place (physical space), which in turn generates a structure of juxtapositions that hierarchizes space and places agents in privileged or unequal positions, according to the capitals they possess to move in the urban social space, establishing distances and oppositions concerning goods and things. The power (possession of capitals) over space is expressed in the appropriate physical space, that is to say, there is a relationship between the spatial structure where the agents are distributed with the spatial structure where the goods are located, a position of the agent in the social space is reflected in a place in the physical space.

The aim is to investigate the social reality based on the actors and the frames of reference in which they are inscribed, thus contrasting micro-social and macro-social aspects; in that sense, an intermediate analysis of the social reality is proposed. Key informants include social leaders, grassroots organizations, members of the Community Action Board (JAC, for its acronym in Spanish), in addition to secondary sources such as municipal planning archives, historical archives, press, academic bibliography, and statistics from the National Administrative Department of Statistics (DANE). The chosen method was the case study, which allows for the analysis of social realities in natural scenarios and human actions in long periods of observation, thus collecting diversity of sources to triangulate data and account for the complexity of social reality.

This journey through the urban expansion of Cali during the 20th century allows understanding the current conditions of the city in the new century, where central characteristics such as marginality, urban segregation, and the defense of decent housing amid conflicts for space between the institutions and the population can be referenced. Social facts that have their structural origin in the way in which

the city was divided since the beginning of the 20th century, in the foundational center for some elites, and later to the north and south of the city destined for other power groups, excluding and marginalizing the inhabitants of the western slopes and flat eastern zone.

Keywords: social space, spatial capital, urban peripheries, neighborhoods, social agents.

CONTENIDO

Introducción.	21
Recorrido de los estudios urbanos	21
Aproximaciones metodológicas	23
Estructura del libro	24
 Capítulo 1	
Pensar la ciudad reciente desde la historia y el espacio social	27
Cali: entre la ciudad colombiana y el ordenamiento.	28
La incesante búsqueda del desarrollo	29
Una ciudad diversa, marginada y segregada	31
Cali como un espacio social: de lo teórico a la realidad social	34
La teoría sobre el efecto de lugar	36
El espacio social urbano.	36
Nuevos estudios urbanos	38
El concepto de capital espacial	40
La ciudad latinoamericana	42
 Capítulo 2	
Configuración de Cali como ciudad región y construcción de periferias urbanas.	45
Introducción	45
Crecimiento de la ciudad de Cali y producción de periferias: principios del siglo xx	46
Cali y el despegue en los años veinte	51
Cali y el apogeo de los años cuarenta	55
Los barrios ilegales y periféricos de Cali entre 1940 y 1980	58
La ciudad desigual y marginal de finales del siglo xx	63
La cara del oriente y la ladera en el siglo xxi.	68

Capítulo 3	
Configuración de la periferia oeste de Cali a partir del caso de Terrón Colorado.	.73
Introducción	73
Sobre los orígenes del barrio	73
De corredor comercial a barrio	79
Dinámica poblacional de la comuna 1.	83
Conflictos urbanos	89
Capítulo 4	
Configuración de la periferia en la ribera oriental del río Cauca, a partir del caso Suerte 90	.95
Introducción	95
La consolidación de la comuna 21.	96
Sobre los orígenes del barrio Suerte 90	100
Ubicación y movilidad del barrio	107
Lucha por la vivienda digna.	116
Avance en materia de autoconstrucción	119
Construcción estatal de espacios urbanos racializados	120
Capítulo 5	
Los conflictos urbanos como dinámica espacial diferenciada en la periferia de Cali.	125
Introducción	125
Producción espacial del Estado: uso del espacio y relaciones	125
Tipos de conflictos urbanos.	138
Capital espacial, clases socioterritoriales y habitus en las periferias de Cali.	154
A modo de cierre	159
Conclusiones	161
Referencias	165
La autora	173

INTRODUCCIÓN

Recorrido de los estudios urbanos

El estudio de los procesos de urbanización en medio de las revoluciones industriales de los siglos XVII y XVIII en las ciudades europeas y posteriormente en los siglos XIX y XX en Estados Unidos, fue lo que generó el surgimiento de la línea de estudios urbanos en la ciencia sociológica de inicios del siglo XX. Posterior a ello se han fortalecido estudios en otras ciencias sociales como la geografía, la historia, la antropología y la estadística, para describir casos particulares de otros países y ciudades capitales en el mundo, nutriendo diversos métodos y enfoques para la comprensión de las ciudades modernas y contemporáneas.

En el caso de la línea urbana para la comprensión del poblamiento y urbanización en América Latina, se dio, entre inicios y mediados del siglo XX, con la consolidación de la sociología, la antropología y demás ciencias sociales, recogiendo las pistas que dejó la ciudad colonial para entender las principales cuadrículas de las ciudades, su expansión y actual situación, donde es necesario continuar estudiando los casos particulares, volviendo a los registros históricos y la actualidad del hábitat urbano que permite el trabajo de investigación en campo.

En Colombia el estudio de sus ciudades es importante porque la planificación tiene una historia reciente en términos normativos, que se remonta a las décadas de los años treinta y cuarenta, que inició con disposiciones para la capital y luego fueron llegando a otras ciudades como Cali, que para esta época contó con su primer Plan Piloto (1949), antecesor del Plan General de Desarrollo de Cali (1969), y del Plan Integral de Desarrollo de Cali y su área metropolitana (1979). El anterior preámbulo fue necesario para contar en 1997 con una Ley de Planes de Ordenamiento Territorial, que propició que Cali tuviera en el año 2000 su primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (Acuerdo 069 de 2000), y actualmente sigue vigente su revisión ordinaria del año 2014. Este instrumento de planificación es el rector de la organización de la ciudad en todos sus niveles, y consta en su formulación, discusión, aprobación y ejecución, con la participación de los sectores empresarial, académico, profesional, de funcionarios del Gobierno y de la sociedad civil.

En este orden, la configuración espacial urbana de una ciudad como Cali media entre procesos informales y oficiales de configuración territorial y planificación urbana que se dieron de forma álgida y acelerada en el siglo XX, como en el resto de Colombia, sobre los cuales existe amplia bibliografía en distintas áreas de conocimiento de las ciencias sociales y que en los últimos años viene explorando esas características en el siglo XXI. Particularmente los historiadores y sociólogos vienen desarrollando estudios de casos sobre los barrios de Cali en el siglo XXI y consolidando líneas de investigación en lo económico, empresarial, ambiental, acción colectiva, memoria histórica, entre otras categorías de la formación de ciudad.

Por eso es relevante describir cómo se ha dado el proceso de configuración de la ciudad en el siglo XXI, donde ya no son simplemente los albores de la industrialización, la expansión, la migración, el déficit habitacional o los grandes proyectos de vivienda y renovación urbana los que marcan la configuración espacial de Cali, sino que entran en juego otras características desde la globalización, la desigualdad, la segregación, lo étnico-racial, la marginalidad, entre otras múltiples intersecciones de los sujetos, que sirven de contraste con los hallazgos de las investigaciones sobre la ciudad en el siglo XX.

Para contribuir con la línea de estudios sobre la sociología de la ciudad, este libro se centró en el estudio de dos casos diferenciados, un barrio de la ladera oeste de Cali que se configuró a mediados del siglo XX en medio de luchas urbanas, mientras que el otro es un barrio de la zona plana oriental que surgió de la política de vivienda social de finales de los años noventa y comienzos del siglo XXI. Para ello se recogieron datos secundarios en archivos históricos y entrevistas con habitantes de las dos zonas, con lo cual se detallará el contexto histórico de la conformación de las periferias en Cali y se verá cómo se conectan dos zonas opuestas geográficamente en la transición entre los siglos XX y XXI.

En consecuencia, el análisis de estos casos escogidos para la investigación necesita un recuento de hechos, procesos, relaciones y actores, con dos hitos en 1960 y en el 2000, que son la antesala para mostrar la particularidad de los barrios y luego

unirlos mediante el contraste de los conflictos urbanos que se gestan a partir de la década del noventa hasta el 2020, que fue el año de inicio de la investigación, y será además la temporalidad que aporte novedad a los estudios previos sobre las periferias de Cali durante el siglo XX.

Es decir que el énfasis que se le da a la historia del siglo XX es necesario para entender la relación estructural y macrosocial de la ciudad y para que no se vea la actualidad como hechos aislados, sin historicidad, al mismo tiempo que se busca situar una particularidad del siglo XXI que conecta hoy la realidad de las distintas periferias y es la consolidación del libre mercado y la financiarización en la definición del uso del suelo y de las relaciones materiales de producción y reproducción que definen los capitales sociales para cada barrio, lo cual, dentro de la mirada histórica del objeto, se relaciona con la transición de las políticas de vivienda que surgen de las reformas políticas impulsadas por la Constitución de 1991 y que siguen aún vigentes. Por lo tanto, no hay una preponderancia del siglo XX sobre el periodo delimitado.

También interesa analizar el proceso de negociación y concertación entre la totalidad de actores de la sociedad, no solo como pilar fundamental de la democracia, sino porque es la garantía de procesos de intercambio y construcción conjunta de la adecuación y uso de los espacios, de la apropiación y disfrute equitativo de las ciudades, cualidades que llevan al desarrollo y mejora en la calidad de vida en lo ambiental, económico, cultural y político administrativo. Los procesos de planificación no pueden llevarse a cabo con éxito si no se cuenta con la legitimación y colaboración de sus ciudadanos, por eso no se puede prescindir, en la ejecución de la política pública, del análisis e inclusión de los procesos sociales y subjetivos de los actores.

La posibilidad de contrastar dos zonas diferentes de la ciudad como lo son la ladera y el oriente, es un aporte a los estudios sobre Cali, debido a que las periferias no son homogéneas y a pesar de que ciertas áreas puedan compartir condiciones sociales y estructurales de la organización urbana que son similares, como lo han dicho otros historiadores del siglo XX, la configuración de estos barrios puede variar o permanecer en el siglo XXI y es lo que se

pretende encontrar a partir del estudio de los barrios Suerte 90, en la comuna 21, y Terrón Colorado, en la comuna 1.

Aproximaciones metodológicas

Bajo este contexto, el método de caso hace grandes aportes en la medida que conoce la realidad a partir de fuentes primarias y secundarias, toma en cuenta a los sujetos y a los documentos para triangular información y darle validez al proceso investigativo. Desde esta metodología es fundamental el trabajo de campo y la búsqueda en archivos históricos, bibliografía, bases de datos, además de ser una ventaja el hecho de conocer previamente el contexto del oriente de Cali y de las laderas, donde la investigadora ha trabajado de forma previa y ha acompañado algunos procesos de investigación, lo que permitió contactos para facilitar el proceso de entrada y el desarrollo total de la investigación.

El estudio de caso aproxima a las realidades sociales en escenarios naturales y a las acciones humanas en periodos largos de observación que posibilitan recoger diversidad de fuentes para triangular los datos, viendo la complejidad de la realidad social (Arzaluz, 2005); además, esta autora propone que es un método que «proporciona al investigador un panorama de los vaivenes de la vida social en el tiempo y el despliegue de los patrones de la vida cotidiana tal como ésta cambia» (p. 119). Para esta investigación se escogieron casos heterogéneos que permitieran ver las unidades de análisis de acuerdo con diferencias geográficas, temporales, históricas y de las características de grupos poblacionales, conectando fuentes primarias y secundarias, procurando el análisis intermedio de procesos estructurales y realidades cotidianas.

De esta forma, el caso de estudio de Terrón Colorado, al configurarse en la segunda mitad del siglo XX, en medio de la consolidación de la planeación municipal de la ciudad, con unas características estatales y de política pública proteccionistas, donde la acción colectiva fue clave para enfrentar el problema de la vivienda con las autoridades locales y funcionarios del Estado, difiere del proceso agenciado por el Estado con la política de vivienda

de interés social (VIS) de la década de los noventa y de los dos mil, en el caso de Suerte 90, donde el Estado Social de Derecho ya tenía unas características claves como el neoliberalismo y el libre mercado en la consecución de derechos sociales como la vivienda.

Ambos casos, al ser distintos, se propone encontrarlos en el análisis de la configuración del espacio social de la década de los años noventa, recalcando que la particularidad del surgimiento histórico no los aleja de una coyuntura común a Cali, Colombia, Latinoamérica y el resto del mundo, como lo es la financiarización del suelo y la entrada del mercado en la definición de usos, costos y modos de vida en la ciudad. Es por lo que los primeros capítulos se centran en la descripción de los casos en el momento del surgimiento de cada barrio y en el último capítulo se analiza su situación actual respecto a los conflictos urbanos que tienen en común, que la definición de la periferia no es un lugar exclusivamente geográfico y de borde, sino de valor económico y de reproducción material definida por los actores sociales en función del capital.

Los casos escogidos aquí permitieron aplicar las características que para este diseño de investigación define Hernández Sampieri (2014), como lo son la flexibilidad en las herramientas de captura de información entre revisión de archivos, entrevistas y diarios de campo; la interacción constante entre la investigadora y el objeto de estudio en campo, con un sentido holístico; el sentido contextual del caso, pues el entorno y las dimensiones sociales donde se hallan los barrios es fundamental como el caso mismo; y la inclusión de las diversas perspectivas de los participantes, puesto que se habló con habitantes de la zona, funcionarios y profesionales de campo en contraste con fuentes de archivo.

El estudio de caso comparte con otras estrategias y modalidades de investigación cualitativa su carácter holístico. El caso es analizado desde diversas perspectivas y en todas sus dimensiones: social (relaciones, estructuras, posiciones, roles); cultural (categorías o formas simbólicas mediante las cuales los individuos representan el mundo social, lo producen, reproducen y transmiten) y psicológica (procesos que les permiten a los individuos ordenar el mundo y ejercer acciones sobre él). (Galeano Marín, 2018, p. 87)

Así las cosas, el análisis fue de tipo interdisciplinar, tomando herramientas metodológicas de la sociología, la historia, la etnografía y la geografía, con las cuales se pretendía analizar la conformación de la ciudad periférica en los últimos veinte años, desde la perspectiva de los habitantes de los sectores, las instituciones y el Gobierno. Así mismo, se realizó la triangulación de fuentes (documentos del Archivo Histórico de Cali, noticias y datos del periódico *El País*, entrevistas a los líderes, documentos institucionales de la Secretaría de Planeación Municipal, mapas, datos de estudios estadísticos), con el objetivo de develar los significados que se han construido sobre la ciudad y sus problemáticas desde posturas políticas, culturales y sociales diversas.

Entre las técnicas de recolección de datos elegidas se encuentran la revisión documental (Archivo Histórico, Planeación Municipal, marcos normativos para el ordenamiento urbano territorial, mapas y prensa), entrevistas semiestructuradas, observación participante y análisis de datos estadísticos. Empezando por la entrevista, se destaca que es una técnica valiosa para la investigación cualitativa porque permite conocer y escuchar el pensar de los otros, y aunque hay varias modalidades, en este caso se escoge la semiestructurada porque no se plantea una guía o camisa de fuerza inicial, sino unos ejes que orienten la conversación para que sea fluida (Bonilla y Rodríguez, 2005). Luego de definir la modalidad de entrevista, es necesario decidir sobre el tipo de preguntas, el nivel de detalle que se quiere alcanzar, duración de la entrevista, analizar los requerimientos de información, según los objetivos.

La investigación tenía el interés principal por las fuentes secundarias, pero el trabajo de campo aportó elementos centrales para la triangulación de datos, por lo cual se destaca la voz de los habitantes de los barrios, algunos académicos que estudian la ciudad de Cali y profesionales sociales que han trabajado en las comunas 1 y 21. Los líderes de las comunas fueron la entrada a esos relatos sobre el origen del barrio y los conflictos urbanos recientes, además de jóvenes de la comuna 21 que están organizados y buscan la visibilización de sus zonas, por eso se agradece de forma especial a quienes

brindaron parte de sus historias de vida para el desarrollo del estudio.

Por su parte, la revisión de archivo también fue una técnica de contraste con las fuentes orales, dado que los momentos de configuración de uno de los barrios requería de fuentes secundarias como fotografías, periódicos, otros archivos, pero su uso pasa también por «el reconocimiento de sus límites; de tener una actitud crítica frente a la información secundaria; de la evaluación e interpretación del material documental disponible» (Sandoval, como se citó en Carvajal, 2006, p. 59); es decir, que deben primero rastrearse los documentos, clasificarlos, seleccionarlos según su pertinencia y leerlos en profundidad. De igual forma se hizo revisión de datos y cifras de los informes «Cali cómo vamos» y de los censos del DANE que suministraban información sociodemográfica de la ciudad.

Estructura del libro

El libro tiene un primer capítulo donde se plantea el contexto histórico de la investigación con los antecedentes del tema central y con las discusiones teóricas de los nuevos estudios urbanos que a partir de la década de los ochenta ven consolidada la segregación y marginalidad a gran escala en medio del declive de los Estados de bienestar y la ampliación de las políticas neoliberales.

Luego se presenta el capítulo dos centrado en el desarrollo histórico de las periferias en el siglo XX, destacando las fases por las que ha pasado Cali, los datos sociodemográficos y los procesos formales e informales en la expansión de los barrios. Retomando los principales trabajos desde Vásquez, Aprile-Gnisset, Mosquera, entre otros, se detalla cómo se fue transformando la ciudad desde ese vestigio colonial hasta el desarrollo y la caída industrial entre las décadas del veinte, cuarenta y sesenta, respectivamente, cerrando el siglo XX con los movimientos sociales provivienda, las acciones colectivas que llevaron a la legalización en los ochenta y el surgimiento de las VIS entre los noventa y los dos mil.

Posteriormente aparecen los capítulos tres y cuatro que se centran en la historia de los barrios Terrón Colorado y Suerte 90, su ubicación, sus

características sociodemográficas, los principales conflictos urbanos que viven sus habitantes y su diferenciación espacial respecto de esa formación histórica de la marginalidad y segregación en la que se ubican hoy las comunas 1 y 21 dentro de las mediciones del Sisbén. En estos capítulos, como en el anterior, se contrastan las fuentes de archivo para reconstruir el relato histórico de estas zonas, además de las voces de los actores y su visión sobre el espacio.

Por último aparece el capítulo cinco, el cual recoge la propuesta conceptual del libro que es la construcción diferenciada de periferias, planteando la discusión teórica sobre el espacio como

relación social, contrastando los dos barrios a partir de las condiciones estructurales de exclusión que comparten, al mismo tiempo que se comparten las diferencias que presentan en cuanto a los conflictos urbanos y los distintos efectos espaciales que experimentan sus habitantes, donde se marcan con fuerza otras dimensiones identitarias de los sujetos como factores étnicos, de género y clase que dan una movilidad distinta a los sujetos dentro del espacio, pero que en últimas concluyen que las periferias sí han sido pensadas, sí son producto de cálculos económicos de quienes poseen los capitales, de élites que desean mantener una ciudad segregada, como se ha logrado sostener en el tiempo.

CAPÍTULO 1

PENSAR LA CIUDAD RECIENTE DESDE LA HISTORIA Y EL ESPACIO SOCIAL

El estudio histórico de las ciudades puede tomar de referencia varios siglos hacia atrás e incluso desde la estructura de las grandes civilizaciones, por eso es necesario clarificar que el problema de investigación que aquí se registra está relacionado con los procesos sociales de la ciudad moderna y se inscribe en los debates de la «sociología de la ciudad», la cual busca diferenciarse de los estudios de lo urbano que florecieron a inicios del siglo XX en EE. UU. y enfatizaban más en las interacciones sociales —como lo hizo el investigador Louis Wirth— que en las relaciones sociales que imprimían un carácter conflictivo y estructural —según la perspectiva de los neomarxistas, al estilo de Manuel Castells—.

Esta sociología de la ciudad busca entender la configuración de zonas urbanas desde la dialéctica de aspectos estructurales, con dinámicas micro-sociales, donde los agentes sociales son vitales para comprender el espacio social y los capitales espaciales en Latinoamérica, pues a diferencia de las ciudades europeas y estadounidenses, tuvieron su florecimiento durante el siglo XX, en medio de particularidades históricas, sociales, económicas y culturales. Por eso es indispensable realizar un contraste entre los hechos que configuraron la ciudad desde el proceso de industrialización hasta la crisis neoliberal, conectando las consecuencias urbanas del siglo XXI, pasando desde la distribución física de la ciudad hasta las relaciones de los actores que interfieren en la distribución diferenciada del espacio.

Para empezar, la ciudad latinoamericana da cuenta de un proceso común en varios países, la *primacía urbana*, que hace referencia a cómo la concentración urbana acelerada se debe a factores como la migración del campo a la ciudad, el incremento demográfico y la industrialización apresurada, que se dio en varias de las capitales de países como Argentina y Brasil, pero que en Colombia empieza en los años treinta y gira en torno a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (Gouëset, 1998). Esta fragmentación regional que fortaleció a las cuatro ciudades también tuvo que ver con las características territoriales del país y que, a pesar de la distancia, se convirtieron en focos de la industrialización.

De esta forma, Gouëset (1998) propone una característica para delimitar el caso urbano de Colombia en el resto de la región y es la *cuadricefalia*, que permitió su desarrollo en cuatro ciudades durante el siglo XX, y esto se debió

a los siguientes factores, dados a principios de ese siglo: las dificultades del relieve colombiano para conectar la población y establecer vías directas; la ocupación discontinua de zonas geográficas de mucha población o zonas que no tienen ninguna (aspecto relacionado con la no integración cultural ni política de las tribus colombianas desde la Colonia); ausencia de redes y vías de comunicación entre las regiones; y las características espaciales de una economía regional.

No obstante, fue una combinación de factores que llevaron a la consolidación de esos núcleos de expansión acelerada de la ciudad y dentro de ellos se destaca la migración interna que impactó la fragmentación territorial de los habitantes:

La dispersión de la población colombiana era considerable entre 1930 y 1960, en la época crucial en que se combinaron la explosión demográfica, el éxodo rural, el crecimiento y la concentración urbana; es decir, durante todo el período en que se estableció el esquema de cuadricefalia. Hay más que una coincidencia cronológica entre ambos fenómenos: la emergencia de varias grandes ciudades es en parte una consecuencia de la fragmentación territorial de la población, de la misma manera como fue condicionada por la fragmentación del relieve. (Gouëset, 1998, p. 33)

Cali: entre la ciudad colombiana y el ordenamiento

Historiadores coinciden en que el tránsito hacia el desarrollo moderno de la ciudad de Cali se despliega a inicios del siglo XX, y esto se ve reflejado en varios procesos como la consolidación de la traza de la plaza de Cayzedo y el uso institucional de las élites que crearon el *centro* administrativo de la ciudad (Aprile-Gnisset, 2010). Esto además estuvo relacionado con la designación de Cali como capital del departamento en 1910 y la construcción del ferrocarril en 1915, que son hitos que destaca Vásquez (2001), los cuales impulsan la llegada de población y la expansión de la ciudad moderna en la segunda década del siglo. Pero el crecimiento no era únicamente arquitectónico o poblacional para catalogar de moderna la ciudad, Rodríguez y Sáenz (2018) dice que la característica central de la modernidad es el

desarrollo de las instituciones que se crean para regular la vida social o para controlar, y esto en Cali se venía gestando desde mediados del siglo XIX.

Estos avances de inicios del siglo XX propician que a mitad del siglo se dé un proceso de impulso para la producción e industrialización en la ciudad, centrado sobre todo en la manufactura y la expansión de las fábricas que fueron atrayendo más «refugiados», como lo dice Becerra (2014), en una ciudad de tránsito. Vásquez (1990) plantea que la ola migratoria de mitad del siglo XX estuvo relacionada con el desplazamiento de la zona industrial de la ciudad hacia el corredor Cali-Yumbo. Específicamente para las décadas de los años treinta y cincuenta, la población aumentó 5,7 veces y tuvo mucho que ver el proceso de inmigración, pues para el censo de 1964, la población nativa era solamente el 42,3 %.

En la década de los sesenta, la tasa de crecimiento poblacional y la inmigración descendieron, pero el proceso de expansión física de la ciudad continuó en todas las direcciones, hacia el sur, el norte, el sureste y el noroeste. Vásquez también refiere que iniciados los años setenta, instituciones como el Instituto de Crédito Territorial [ICT] e Invicali, y mecanismos financieros como el sistema UPAC propiciaron el acceso a vivienda en sectores de medianos y bajos ingresos, y a pesar de la baja tasa demográfica, otros factores económicos y sociodemográficos influyeron en el aumento de la demanda de vivienda: fraccionamiento de hogares nucleares, crecimiento de los ingresos provenientes del sector informal, mejoramiento en el ingreso de algunos sectores, creación de empleo en obras de infraestructura vial (Vásquez, 1990).

La construcción de los jarillones¹ (1968-1980) fue otro detonante en el crecimiento de la ciudad, pues se generó una tercera ola migratoria que desembocó en la ocupación de la zona, donde las tierras fueron loteadas por hacendados y agencias gubernamentales, o tomadas a la fuerza. Ya en los años ochenta, cuando se concluye la construcción del segundo jarillón (río Cali), se acentúa el crecimiento poblacional hacia las zonas de ladera, el noroeste de la ciudad y los diques (Uribe, 2009). Crecimiento

¹ Diques de contención que protegen a la ciudad contra inundaciones del río Cauca.

que luego va a contrastar con los procesos de viviendas de interés social que se empiezan a gestar en los años noventa, en el oriente de la ciudad.

En todo lo anterior no se puede dejar de lado el aspecto normativo y legal del ordenamiento urbano, por lo que vale la pena resaltar que la planificación en Colombia es tan reciente como la historia del crecimiento de sus ciudades, dado que los primeros referentes normativos se remontan a las décadas de los años treinta y cuarenta, que inició con disposiciones para la capital y luego fueron llegando a las demás ciudades como Cali, que para esta época contó con su primer Plan Piloto (1949), antecesor del Plan General de Desarrollo de Cali (1969) y del Plan Integral de Desarrollo de Cali y su área metropolitana (1979) (Tabla 1).

Este preámbulo fue necesario para contar en 1997 con una Ley de Planes de Ordenamiento Territorial, que facilitó que Cali contara en el año 2000 con su primer POT, y actualmente sigue vigente su revisión ordinaria del año 2014. Este instrumento de planificación es el ente rector de la organización de la ciudad en todos sus niveles, y consta de la participación de varios sectores en su formulación, discusión, aprobación y ejecución, como sectores empresariales, academia, profesionales, funcionarios del Gobierno y sociedad civil.

La incesante búsqueda del desarrollo

Cali se entenderá aquí como una ciudad desigual, desindustrializada, globalizada y étnico-racializada. Para ello, la delimitación de este problema de investigación se centrará en la descripción de las

características y transformaciones de la ciudad durante el siglo XX. Inicialmente se ubica la configuración moderna de la ciudad entre 1910 y 1960, centrada en la autonomía político-administrativa que buscaba establecer el Estado-nación colombiano, el desarrollo y la industria, y de 1960 en adelante como la reconfiguración contemporánea marcada por la globalización económica y la recomposición del poder mundial. En esa primera etapa fue clave la consolidación del Valle como región y de Cali como centro político, económico y administrativo del departamento (Almario, 2012).

Esta configuración hacia una ciudad contemporánea se daba en medio de las teorías desarrollistas, como lo menciona Almario (2012), las cuales respondían al modelo neoliberal de acatar políticas internacionales para llegar a la fase última del desarrollo que de forma contradictoria imponen la dependencia y, en la misma lógica, generan estancamiento, limitan el Estado de bienestar e incluso generan desindustrialización como efecto de equilibrio para los grandes capitales: «el desarrollo capitalista se acompaña siempre de fenómenos igualmente contradictorios como la dependencia, el subdesarrollo y el desarrollo desigual de los distintos países, con todas las consecuencias conocidas» (Almario, 2012, p. 82).

Esa transición de lo moderno a lo contemporáneo está centrada en la región globalizada, como lo explica Almario (2012), donde lo central no es el bienestar social de la región, sino la consolidación de un nodo entre ciudades que configuren una gran región como el suroccidente, en función de entrar a los mercados internacionales. Y es en medio de la centralidad por la productividad y el mercado externo que se agudiza la cuestión social, que en la ciudad latinoamericana contemporánea sería la

Tabla 1. Antecedentes de la planificación de Cali.

Plan Piloto de Cali	Plan General de Desarrollo de Cali (PGD)	Pideca (Plan Integral de Desarrollo de Cali y su área metropolitana)
<ul style="list-style-type: none">• Antecedido por el Acuerdo 30 del Cabildo Municipal en 1927 y el Acuerdo 35 de 1940 (plano futuro de Cali).• Ley 88 de 1947, nacen los Planes Reguladores.• 1950, se crea el plan por la firma TPA de Nueva York (Espinosa, 2006).	<ul style="list-style-type: none">• 1969, ícono histórico de la ejecución de una política pública de urbanismo.• Fruto del consenso popular, a través de encuestas a líderes comunales, empresarios, gremios, etc. (Vergara, 2009).	<ul style="list-style-type: none">• 1979, por Rodrigo Escobar Navia.• Eficiencia económica, equidad social, protección ambiente.• Consenso entre Concejo, foros populares, gremios privados (Velasco, 2009).

pobreza, y como lo menciona Ziccardi (2001), no puede ser revertida por el mismo sistema económico, sino que la respuesta estatal e institucional seguirá siendo la focalización que a nivel estructural mantiene la exclusión:

El discurso gubernamental debe ajustarse a las restricciones que presenta el gasto social, por ello, ante la magnitud de las demandas, apela a una noción de vulnerabilidad que le permite ajustar aún más los criterios de focalización que orientan las políticas sociales de atención a la pobreza. Es algo así como la focalización de la focalización, elegir los más pobres entre los pobres para atenderlos prioritariamente. (Ziccardi, 2001, p. 61)

Lo anterior está ejemplificando que los procesos de urbanización de finales del siglo XX no son los mismos que la primera ciudad manufacturera, como refiere Ziccardi (2001), sino que la sociedad se ha modificado y ahora es prioritario analizar las relaciones entre sociedad y territorio a partir de fenómenos sociales como globalización de la economía (desterritorialización de los procesos productivos que llevan a la desindustrialización de las ciudades y el aumento de la informalidad laboral a causa de la tercerización económica), reforma del Estado de bienestar (aunque no se desarrolla plenamente en América Latina, se reduce la acción estatal y por ende menos intervención en políticas urbanas, transfiriendo la responsabilidad a la sociedad) y la revolución informacional (la tecnología ha acortado las distancias y la cultura de las ciudades tiende a globalizarse, aunque persisten las contradicciones por las identidades culturales locales que se mantienen).

Para el caso de Latinoamérica, continúa la autora, en 1990 se hablaba de un 70 % de población urbana y una esperanza de vida promedio de 68,5 años. A esto se suma la migración por mejores oportunidades de empleo o por conflictos armados internos, lo que a su vez permite identificar nuevas características de las ciudades latinoamericanas contemporáneas con problemas sociales particulares:

i) Un fuerte peso de la población inactiva sobre la activa; ii) una creciente demanda de empleos y de bienes y servicios colectivos (salud, educación, deportes, cultura) que debe ser atendida por las instituciones gubernamentales a pesar de las recientes tendencias a la privatización, iii) una carga mayor sobre la seguridad social en materia de jubilaciones en un contexto de descapitalización de los fondos tras varias décadas de procesos inflacionarios graves, y iv) un proceso de urbanización, feminización e infantilización de la pobreza, los cuales son consecuencia no sólo de la dinámica demográfica, sino principalmente de las modalidades que posee el empleo urbano. (Ziccardi, 2001, p. 91)

El desempleo es otro de los factores que más destaca en las ciudades latinoamericanas, además de la informalidad y la precariedad laboral, que para los años noventa estaba entre 30 % a 50 % (Ziccardi, 2001), producto de los ya mencionados procesos de desindustrialización y tercerización de la economía, donde además quienes más se veían afectados y precarizados eran las mujeres y los niños. La pobreza y la exclusión social son características sobresalientes en el panorama latinoamericano, y se suman, junto con otras privaciones, a la categoría de desigualdades sociales, bajo la cual se puede entender la dinámica actual de las ciudades como Cali. De igual forma, estos efectos en la urbanización empiezan a asentarse en las zonas periféricas y no se reducen únicamente a factores económicos y políticos, sino a otros elementos de la cotidianidad urbana regional:

Problemas sociales como la pobreza impulsan la ocupación de periferias y zonas de ladera en ciudades latinoamericanas, el agotamiento de tierras o los altos valores del suelo urbanizable de mejor aptitud urbana expulsan actividades residenciales e industriales a entornos inmediatos o a veces distantes de la ciudad central o fenómenos de desplazamiento forzado, como en Colombia, obligan la ocupación de zonas marginales o de ecosistemas estratégicos en la periferia de la ciudad. (Galeano y Londoño, 2019, p. 73)

Dichos problemas son los que van a caracterizar a la ciudad-región y a sus periferias, por eso es relevante destacar la diversidad que ha tenido la ciudad desde su constitución. A propósito de la ciu-

dad-región, aprovechar esta referencia para plantear que hay dos perspectivas para definirla, una que se ha configurado históricamente en lo físico y otra que ha sido más normativa desde el ordenamiento territorial fraccionado. Los autores identifican una mancha urbana que se expandió mayoritariamente en el siglo XX y que entre los años de 1964 a 1993 estuvo marcada desde el centro urbano de Cali hacia las zonas intermunicipales del departamento del Cauca (las zonas con mayor dinámica de expansión en esta época son Jamundí, Cali, Candelaria, Yumbo, Suárez y Palmira). Para los años de 1993 a 2014 se disminuye la mancha intermunicipal y aumenta hacia el norte del departamento del Cauca (Guachené, Caldon, Miranda, Jamundí, Vijes, Jambaló, Caloto, Toribío, Villa Rica y Puerto Tejada), y también se destaca el incremento de la expansión hacia la periferia rural (Galeano y Londoño, 2019). Estas características actuales de la expansión de la ciudad también deben considerarse a lo largo de la investigación.

Una ciudad diversa, marginada y segregada

Por otra parte, retomando la diversidad en la consolidación de la ciudad en el siglo XX, vale la pena destacar que Cali ha sido un corredor migratorio que recibió a la población del suroccidente colombiano, especialmente del Pacífico, lo que hace obligatorio reconocer el componente étnico racial en la caracterización desigual de la ciudad reciente. Lo anterior se ve respaldado en las cifras demográficas donde «del total poblacional en Cali, el 26,2 % corresponde a población afrocolombiana, que equivale al 12,6 % del total nacional de esta población, de tal manera que en valores absolutos la ciudad ocupa el primer lugar en la jerarquía de población afrocolombiana» (Vivas, 2013, p. 131).

Al respecto, Urrea (2012) refiere que entre finales del siglo XIX e inicios del XX, Cali ya se había consolidado como uno de los tres epicentros urbanos después de Bogotá y Medellín, pero su población estaba sobre todo en la zona rural de las haciendas. La presencia negra en el valle geográfico del río Cauca ha tenido su origen histórico en la

población esclava de la minería en el Pacífico, que siglos después, con las olas libertarias de mediados del XIX, se convierten en las clases populares rurales y urbanas negras: artesanos, sirvientes domésticos, campesinos, quienes sufrieron muchos conflictos étnico-raciales con los hacendados blancos de Cali y Popayán. Se señala que la población indígena se ubicaba sobre todo en las zonas montañosas.

Para 1918 la población negra y mestiza era de más 55 % en relación con la expansión acelerada de la población urbana que a finales del siglo XX estaba en 70 %; en 1938 era de 87 % y a partir de 1964 era de 94 %, lo que demuestra lo agitado de la expansión demográfica en el siglo XX. Los años de mayor crecimiento se dan entre 1912 y 1964, donde se pasó de tasas de crecimiento de 3,5 veces a 5,5. Sin embargo, se destaca que de 1964 al 2005 la tasa bajó, y se cita un porcentaje muy bajo a partir de 1993, que Urrea (2012) asocia con los flujos de migración al exterior.

Sobre el tema de la migración se hace énfasis en el papel preponderante de la población negra a lo largo del siglo XX, pues específicamente quienes vienen de la costa nariñense, el Cauca y el puerto de Buenaventura son los que van a destacarse en tres oleadas, marcadas también con la acumulación de capital de las familias, la formación en educación superior para desempeñarse en áreas de docencia y búsqueda de oportunidades de empleo. La llegada a Cali de esta población se concentró en el oriente de la ciudad, entre los años ochenta y noventa.

Entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI se encuentra que el mayor crecimiento poblacional lo tiene la zona oriente, específicamente las comunas 13, 14 y 15, seguida por el crecimiento en las laderas, especialmente en las comunas 1, 18 y 20. Para el caso del oriente, las comunas poseen mayor población afrodescendiente al ser un lugar central en la recepción de los flujos migratorios provenientes del Pacífico, norte del Cauca y sur del Valle; mientras que la población mestiza, indígena y blanca se ubica en las laderas. Estos dos conglomerados recogen las clases populares de Cali con mayor vulnerabilidad en la ciudad, pues presentan

mayores índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Otro aspecto que se debe tener en cuenta al analizar la ciudad de finales del siglo XX en medio de una globalización neoliberal, es la expansión que se da en un contexto de bajo control institucional, sumado a la concentración de la propiedad en pocas manos, donde el acceso a la vivienda podía hacerse a través del capital financiero, hecho fundamental en la configuración de Cali, como lo refieren Uribe *et al.* (2017), dado que los que no poseían este recurso quedaban limitados a tres opciones: abstraerse del mercado del suelo, endeudarse el resto de vida con el capital financiero o tomar por la fuerza esas tierras periféricas de las ciudades. Opciones que se pueden evidenciar en las dos comunas escogidas para el estudio, pues a finales de los años noventa empiezan los proyectos de VIS en el oriente, mientras que en las laderas se producen tomas de tierra por la fuerza, que se dan incluso décadas atrás, lo que hace pertinente contrastar la configuración urbana de esos dos espacios sociales en el siglo XXI, tratando de identificar cuáles procesos se mantienen en relación con el siglo XX y cuáles han cambiado (Tabla 2).

Tabla 2. Oleadas de poblamiento en el siglo XX.

1.ª ola migratoria	Ferrocarril, servicios públicos, transporte (1915).
2.ª ola migratoria	Industrialización, migración (1944-1966).
3.ª ola migratoria	Construcción de jarillones, poblamiento del distrito (1970-1980).
Finales del siglo XX	Déficit habitacional, asentamientos informales (1980-1990).
Inicios del siglo XXI	Crecimiento desordenado, planos y diseños arquitectónicos distantes de lo aplicado.

Fuente: Elaboración propia a partir de Vásquez (1990), Uribe (2009), Becerra (2014).

Por eso se plantea que en Cali existe un gran número de personas marginadas y desposeídas, que la hacen una «ciudad desbordada» por la prác-

tica de constituir asentamientos humanos de desarrollo incompleto, los cuales se dan en dos sentidos: por un lado estarían los asentamientos ilegales que responden a vías de hecho por parte de los marginados del sistema social, y, por otro, los asentamientos informales que se corresponden con los procesos de poblamiento irregular que han sido avalados por el Estado, y que con el paso del tiempo han llegado a institucionalizarse (Uribe *et al.*, 2017). Esa segunda forma se corresponde con la historia de muchos barrios que primero fueron autogestionados por los habitantes y posteriormente se legitimaron ante las instituciones gubernamentales y de planificación urbana.

En este orden, la configuración de las formas espaciales de la ciudad no puede aislarse de los procesos sociales históricos que han instalado ciertas estructuras en Cali, por eso se continúa con la idea de los autores de ver la ciudad como una «colcha de retazos» entre las diversas formas de apropiación, planeación, construcción y ocupación del espacio que han hecho sus habitantes en distintos momentos y coexisten hasta la actualidad (Uribe *et al.*, 2017). Esas estructuras son: la tradicional, hasta los años cincuenta del siglo XX; la modernizadora entre los años cincuenta y sesenta; la ilegal desde los años setenta hasta la actualidad; y la urbana moderna en el siglo XXI. Lo anterior trae como resultado una ciudad que fluctúa entre aspectos republicanos y coloniales con la urbanización neoliberal que:

Segregó la población y las actividades en dos espacios claramente definidos: (I) el occidente, sobre el pie de la cordillera hasta el ferrocarril, y (II) el oriente, entre el ferrocarril y el río Cauca, desde el norte hasta el sur. Una segregación socioespacial que va a marcar una forma diferencial en términos de densidad poblacional, equipamiento urbano, caracterización étnico-racial, capacidad adquisitiva y salarial, niveles de educación y características de la violencia, criminalidad y delincuencia para cada uno de los lados. (Uribe *et al.*, 2017, pp. 29-30)

De otra parte, se menciona que la ciudad estuvo marcada de manera fuerte por la migración producto de la Violencia en el país, pero también

por factores sociales y económicos en busca de mejores condiciones de vida y empleo, lo cual hizo confluir muchas variables de vulnerabilidad para la población que se fue asentando en Cali, que encontraban en los bordes y límites de la ciudad una oportunidad de permanecer sobre zonas no aptas para la vivienda, mitigando el abandono del Estado, que no ha llegado precisamente con educación, salud, oportunidades laborales y de desarrollo humano, sino con el monopolio legítimo del uso de la violencia, militarizando los territorios. Por eso han sido las organizaciones de base, las instituciones privadas, caritativas y las ONG las que han actuado frente a la desresponsabilización del Estado, y, dentro del marco de la gobernanza, siguen delegando a las poblaciones más vulnerables de la ciudad su responsabilidad de salvarse de las geografías de la muerte (Vargas y Amparo Alves, 2010). Lo que predomina en ciudades como Cali es,

La simbiosis entre racismo y pobreza hace que las comunas del oriente de la ciudad —aquellas con el mayor porcentaje de población afro y pobre— produzcan también la más alta tasa [sic] de homicidio. Mientras la violencia urbana es generalizada en la ciudad —con un promedio de 35 asesinatos a la semana— son los barrios de la ladera y del oriente los que concentran las principales tasas [sic] de muertes violentas. (Alves *et al.*, 2014, p. 9)

Es decir, que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las periferias crecen en contextos donde son objeto de múltiples vulnerabilidades que acrecientan las pocas oportunidades de una mejor calidad de vida, lo que los lleva por variados caminos, a encontrarse con la violencia, con las pandillas, con el hurto o con la muerte. De ahí que, como lo sugieren Alves *et al.* (2014), estudiar la ciudad y sus problemáticas no puede pasar por alto las identidades de raza, clase y género, pues son categorías que definen el acceso a las oportunidades sociales y económicas de los jóvenes y que deberán incorporarse en el análisis posterior del tema de investigación.

En consecuencia, el análisis actual de la ciudad también debe considerar la condición de marginalidad y no solo la segregación socioespacial, pues

esto permite conectar con otras dimensiones sociales que impactan la distribución y la experiencia de habitar la urbe. Por ello se retoma el análisis de Franco (2020), quien refiere que en Cali lo que persiste es una segregación socioeconómica que viene de la Colonia, en la cual las élites políticas han sostenido un tipo de planeación que no posibilita la conexión entre población históricamente dividida; por lo tanto, factores como la clase, los ingresos, la raza y la etnia deben ser tenidos en cuenta. Sobre todo refiere la autora que hay estudios que demuestran que tener la piel oscura es una condición para ubicarse en la escala social más baja. En este orden, la marginalidad es una constante de la configuración urbana de Cali, que lleva años instalada en las periferias:

La falta de voluntad política para intervenir en el mercado del suelo, que favorece a los propietarios privados, ha impulsado la ubicación de viviendas sociales en la periferia de la ciudad, desconectadas de los nodos laborales y de los servicios urbanos básicos. Además, el enfoque de déficit habitacional que ha regido las políticas ha producido la reducción constante de áreas a los estándares mínimos, rebajando la calidad espacial tanto de los barrios como de las viviendas. En las áreas desarrolladas bajo este modelo, han surgido rápidamente medios informales para adaptar las viviendas o los espacios públicos a las necesidades de los usuarios, reduciendo la ya de por sí baja calidad de las viviendas y las áreas públicas. (Franco, 2020, p. 50; traducción propia)

Así las cosas, la segregación de la ciudad establece cuatro ciudades diferenciadas a finales del siglo XX: (a) la de los cerros occidentales donde a lo largo del siglo XX crecieron asentamientos informales de pobladores pobres y donde también han surgido pequeños conjuntos cerrados de pobladores de clase media y alta, los cuales corresponden a las comunas 1, 18 y 20; (b) el eje norte-sur, donde se ubican negocios y zonas residenciales de clase media-alta y alta, representados por las comunas 2, 17, 19 y 22; (c) el área central, en la cual se ubican los centros de negocios y los barrios posteriores a la industrialización, aunque vienen perdiendo po-

blación y calidad de vida, que corresponden a las comunas 4, 5, 8, 11 y 12; (d) finalmente está la ciudad del oriente, en la cual predomina la población pobre y casualmente es donde se han desarrollado las viviendas de interés social, ahí la población enfrenta problemas de desempleo, violencia, segregación étnico-racial, falta de educación, y corresponde a las comunas 13, 14, 15 y 21 (Franco, 2020).

Bajo esa mirada de la segregación urbana que se consolidó en el siglo XX y se conecta con factores sociales, étnico-raciales y económicos, vale la pena investigar las causas para que esa división de la ciudad se mantenga en el siglo XXI. Particularmente el interés del estudio fue la consolidación de las formas espaciales de dos zonas periféricas de la ciudad: por un lado Terrón Colorado, en la comuna 1, y Suerte 90, en la comuna 21, con el fin de profundizar esas transformaciones en dos espacios que han tenido una configuración espacial distinta.

El proyecto centra su temporalidad en el siglo XXI, con el fin de complementar el estudio de la configuración urbana de Cali en el siglo anterior, donde se tienen investigaciones alrededor del crecimiento industrial de las primeras décadas del siglo XX, su posterior expansión de la mano de los barrios obreros y procesos de migración a mediados de siglo, a la vez que las características formales e informales del crecimiento de las periferias entre los años setenta y ochenta, sumado al déficit habitacional de esas épocas y las respuestas de viviendas que se ofrecieron para los años noventa.

Estas realidades compartidas por muchas ciudades colombianas en el siglo XX van a tener unas características más complejas y distintas en lo corrido del siglo XXI (2000-2020) en Cali, que a pesar de seguir siendo centro de recepción de migrantes y diversidad étnica y cultural, afronta un proceso de desindustrialización más agudo, desempleo, violencia, microtráfico, segregación y marginalidad que se transforma constantemente en cada rincón de la ciudad, por lo que se propone contrastar estas características macrosociales y la manera en que sus habitantes experimentan la ciudad en dos periferias distintas.

Cali como un espacio social: de lo teórico a la realidad social

El abordaje de la investigación parte de la consideración de la ciudad moderna como objeto de estudio en las ciencias sociales, por lo que el estudio de caso se ubica en la perspectiva de la sociología de la ciudad que representa una de las orillas de los debates teóricos que surgieron a inicios del siglo XX, de tal forma que se delimitará el enfoque escogido y los conceptos centrales para la interpretación de la configuración de las periferias urbanas en Cali.

Lo primero es mencionar que un rasgo distintivo del mundo moderno es el crecimiento de las ciudades, donde ellas son producto de la expansión y no surgen de improvisto, como lo explica Louis Wirth (1962). La definición de la ciudad tiene una base administrativa y se ve representada en la delimitación de los bordes urbanos, por ejemplo, en las definiciones censales. «Es un establecimiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos» (Wirth, 1962, p. 16). Es decir, que el crecimiento de la ciudad se da en la medida que más áreas de tierra se usan para los asentamientos humanos y el crecimiento tiene que ver con la densidad poblacional que aumenta.

Desde esta visión, el urbanismo es un modo de vida que puede variar, que toma en cuenta a los grupos sociales antes que a lo físico, por eso Wirth menciona que lo que le interesa al sociólogo es identificar las formas de acción y de organización social que emergen de la agrupación heterogénea de individuos en un espacio, e identifica además que el aumento de población genera una alta diferenciación entre los individuos. Ese proceso social que se da en la interacción entre los sujetos es lo que se entendería como *configuración socioespacial*, pues afecta la forma de ocupar el suelo y al mismo tiempo impacta la forma de vida. De ahí que el autor proponga que el estudio empírico de la ciudad debe tener tres dimensiones:

- 1) Como una estructura física que comprende una base de población, una tecnología y un orden ecológico; 2) como un sistema de organización social que involucra una estructura social característica, una serie de instituciones sociales

y una pauta típica de relaciones sociales; y 3) como un conjunto de actitudes e ideas y una constelación de personalidades comprometidas en formas típicas de conducta colectiva y sujetas a mecanismos característicos de control social. (Wirth, 1962, p. 34)

Por otra parte, la visión de Manuel Castells (2008) busca diferenciarse de la acepción culturalista que establece el determinismo entre un tipo de producción, un sistema de valores (cultura) y un asentamiento definido por la densidad y dimensión que se convierten en ciudad. Propone ver lo urbano como producto natural del excedente de la producción que surge de cierta capacidad técnica y determinada organización social, pues cuando el hombre se puede alejar del cultivo y tiene dónde invertir los ingresos es que surgen las ciudades, que serán el centro geográfico donde funcione la superestructura político-administrativa de la sociedad que ha ampliado su fuerza de trabajo.

De lo que se compone la ciudad, para Castells (2008), es de sistema de clases, sistema político, sistema institucional para invertir en la técnica y la cultura, y un sistema para intercambiar hacia el exterior. Sin embargo, esta superestructura que beneficia a una clase dominante, también deja de ser tan fácilmente controlada y es ahí donde devienen los problemas de la urbanización, como la aparición de zonas subdesarrolladas que no son iguales a las primeras etapas de industrialización de los países capitalistas, por lo que hay una aceleración del ritmo urbano, surgen nuevas formas urbanas en el caso de grandes ciudades, y estas a su vez se articulan con modos de producción distintos que incluso quieren superar el modo de producción capitalista.

Para evitar la generalización de un único tipo de urbanización al que corresponde un único tipo de forma cultural, en donde se opone por ejemplo lo rural/urbano o pequeños/grandes asentamientos humanos y se crea la confusión de por qué otras aglomeraciones medievales o antiguas no se llamaban ciudades, el autor propone que se hable de «producción social de formas espaciales», donde lo que define a la ciudad no es el aumento de densidad, sino el surgimiento de actividades y funciones en el espacio que son independientes de la proximidad geográfica:

En dicha área espacial tiene lugar todo tipo de actividades básicas, ya sean de producción (incluida la agricultura), de consumo (en sentido amplio: reproducción de la fuerza de trabajo), de intercambio y de gestión [...] Otras funciones, por el contrario, se reparten en el conjunto de la metrópoli con densidades variables (la habitación, los servicios de primera necesidad) [...] Esta forma espacial es el producto directo de una determinada estructura social. (Castells, 2008, pp. 28-29)

Los anteriores debates teóricos recogen una distinción característica en la sociología urbana que es entre «la ciudad y lo urbano», como lo propone Delgado (1999), en la cual la ciudad hace referencia a un asentamiento humano que es denso, de construcciones estables y con población heterogénea. Y lo urbano tiene que ver con un estilo de vida en que las relaciones sociales son precarias y deslocalizadas. Por ende, la ciudad es lo opuesto a lo rural, mientras que lo urbano es lo opuesto a lo comunal, dado que en el estilo de vida urbano se pierden los controles sociales y la vigilancia, que en las pequeñas comunidades sí se dan con mayor facilidad por contactos cercanos, francos y de cosmovisiones compartidas.

Para el autor, la polis que aparece a finales del siglo XVIII es una ciudad que es sinónimo de control, regulación, organización y codificación de prácticas sociales intrincadas, al mismo tiempo que hay racionalidad en los espacios que se dan en su interior y se ponen al servicio de un proyecto que es acorde con el poder político. Pero lo urbano es sinónimo de una sociedad interminable e inconclusa.

La ciudad, en cambio, es una realidad más amplia, que sí que puede y debe ser objeto de una mirada global y, a partir de ella, de programas que, más allá del enjambre de discontinuidades que cobija, garanticen los máximos niveles posibles de justicia e igualdad en sus habitantes. (p. 205)

Por eso, Delgado (1999) plantea, retomando los postulados de Bourdieu, que las relaciones urbanas son estructuras estructurantes: «sistemas definidos de diferencias, posiciones y relaciones que organizan tanto las prácticas como las percepciones» (p. 25), pero que no son fijadas ni dadas definitivamente, sino

que todo el tiempo cambian, están en proceso. De ahí la sugerencia de que se estudie a la ciudad como una red de relaciones, no como parcelas aisladas culturalmente, que era la mirada de la Escuela de Chicago, en la primera mitad del siglo XX, vista incluso con un modelo organicista de lo urbano.

El enfoque teórico de la investigación se sitúa así en la sociología de la ciudad más que de lo urbano, pues,

la ciudad se puede interpretar, lo urbano no. [...] La ciudad puede ser vista estructurándose a la manera de un lenguaje. En cambio, lo urbano provoca una disposición lacustre, hecha de disoluciones y coagulaciones fugaces, de socialidades minimalistas y frías conectadas entre sí hasta el infinito, pero también constantemente interrumpidas de repente. (Delgado, 1999, p. 189)

La teoría sobre el efecto de lugar

La teoría central para el desarrollo de la investigación es la propuesta sobre el efecto de lugar de Pierre Bourdieu (1999), la cual propone un análisis de las relaciones entre estructuras del espacio social y el espacio físico, es decir, la unión de la naturaleza social y material en un lugar físico, donde aparecen las cosas, los agentes sociales, la relación entre las partes en una localización específica. De igual forma, los agentes sociales se ubican dentro de ciertos campos sociales y las relaciones que mantienen dentro de ese espacio social los ubica en posiciones jerarquizadas, es decir, el espacio social es una yuxtaposición que refleja las distancias sociales.

El poder (posesión de capitales) sobre el espacio se expresa en el espacio físico apropiado, es decir, que existe una relación entre la estructura espacial donde se distribuyen los agentes con la estructura espacial donde se encuentran los bienes; una posición del agente en el espacio social se refleja en un lugar del espacio físico. Los espacios sociales físicamente objetivados se superponen; por ejemplo, la concentración de propietarios y bienes escasos en un lugar, que se oponen a la agrupación de los más desfavorecidos en otro lugar. Esas oposiciones sociales también se expresan a través del lenguaje y del pensamiento.

El espacio social está inscrito en estructuras espaciales y al mismo tiempo en estructuras mentales, por eso el espacio es un lugar donde se ejerce poder simbólico. La capacidad de dominar un espacio depende de los capitales que tenga el sujeto, mientras que los que no tienen capital se mantienen a distancia física y simbólica. Para entenderlo de una manera más operativa, el efecto lugar se expresa en otros efectos socioespaciales (Tabla 3).

El espacio social urbano

La forma en que se interioriza el espacio uniendo lo material, lo físico y lo simbólico en medio de interacciones que tienen los habitantes de determinado lugar, permite reconocer que es una relación compleja que no se reduce a pensar la expansión desde las cifras, sino a «pensar el crecimiento de la ciudad no sólo desde la lógica de los planos y de la arquitectura, sino detrás de los sujetos que finalmente vivirán en ella» (Ladino-Mosquera, 2021, p. 76). Esta idea de espacio social es el producto del ordenamiento de las instituciones como superestructuras sociales.

El espacio es una relación social, pero inherente a las relaciones de propiedad (la propiedad del suelo, de la tierra en particular), y que por otro lado está ligado a las fuerzas productivas (que conforman esa tierra, ese suelo); vemos, pues, que el espacio social manifiesta su polivalencia, su «realidad» a la vez formal y material. Producto que se utiliza, que se consume, es también medio de producción: redes de cambio, flujos de materias primas y de energías que configuran el espacio y que son determinados por él. En consecuencia, ese medio de producción, producido como tal, no puede ser separado de las fuerzas productivas, incluyendo la técnica y el conocimiento, ni separado de la división social del trabajo, que lo modela, ni de la naturaleza, ni del Estado y las superestructuras de la sociedad. (Lefebvre, 2013, p. 141)

Se podría pensar esta relación como una especie de láminas que se funden entre sí, un entrecruzamiento de múltiples espacios, pues las posiciones no son fijas, todo el tiempo interactúan y coexisten, entonces es posible decir que se yuxtapone lo

Tabla 3. Operativización de la teoría del efecto lugar.

Tipo de efecto	Consiste en
La ilusión empirista	Romper con el discurso común producido por aquellos que sin conocer el fenómeno que se presenta en un lugar, poseen los medios para imponer ideas falsas como verdades sobre ese lugar. Por lo tanto, no basta con solo «ir a ver», sino que es necesario establecer un campo relacional analítico donde las evidencias y experiencias de vida dadas en un lugar tienen su origen en otro que es distinto.
Efecto de naturalización	Tratar de comprender y romper con la idea aquella que plantea que la situación existente y dada en un lugar es resultado de un proceso natural, y que desconoce por tanto que los hechos dados implican realidades sociales producidas por la <i>lógica histórica</i> .
Efecto del poder simbólico	Reconocer que el espacio es uno de los lugares donde se afirma el poder bajo la sutileza de la violencia simbólica de la arquitectura y el diseño civil a veces invisible e inadvertido a las personas. Algunos productos arquitectónicos amenazan sutilmente al cuerpo y a la cultura para lograr que sean reverenciados. Son escenarios físicos con obras y arquitecturas que, estando físicamente, son distantes e inalcanzables al individuo o colectivo.
Efecto de la delegación	El poder de existir y actuar a distancia por persona interpuesta. La capacidad de dominar el espacio, en especial apropiándose de los bienes escasos que se distribuyen en él, depende del capital que se tiene. Éste permite mantener a distancia a las personas y las cosas indeseables, al mismo tiempo que acercarse a las personas y las cosas deseables, la acumulación de capital social y, más concretamente, al posibilitar el aprovechamiento constante de los encuentros a la vez fortuitos y previsibles que asegura el hecho de frecuentar los lugares de buena concurrencia (Bourdieu, 2002, p. 122).
Efecto de proximidad/ efecto de acercamiento social	Develar cómo la proximidad física facilita la proximidad social de unos agentes que comparten determinada condición de clase y de acumulación de capital. De este modo, el hábitat contribuye a formar el <i>habitus</i> , el <i>habitus</i> contribuye a su vez a formar el hábitat a través de los usos sociales del espacio: Así, se llega a poner en duda la creencia de que el acercamiento espacial de agentes muy alejados en el espacio social pueda tener, de por sí, un efecto de acercamiento social: de hecho, nada es más intolerable que la proximidad física de individuos socialmente muy distantes. (Bourdieu, 2002, p. 123)
Efecto pantalla	Develar en tiempo presente el conflicto en un lugar. El conflicto que se da entre agentes (por ejemplo, entre vecinos en un sector) que comparten un espacio físico regularmente, pueden ocultar expresiones de solidaridad entre ellos mismo, cuando su posición social ocupada es interpelada por agentes que pertenecen a otras ocupaciones del espacio social.
Efecto club	Demostrar cómo el capital social y simbólico juega un papel significativo a la hora de incluir o excluir a determinadas personas de reuniones o espacios selectos. De personas que «tienen en común no ser comunes». La selectividad en este caso que permite el acceso a este espacio físico que es también social, excluye a quienes no poseen las características deseadas o «propiedades indeseadas».
Efecto de arrastre	Espacio físico y social actúan como procesos de acumulación. Si son lugares elegantes o exclusivos posibilitan, de modo muy cerrado, la participación de sus habitantes en la acumulación del capital y los consagra como habitantes deseables, hecho que se verá reflejado en la presentación tanto física como social de ese lugar. Al contrario, en lugares estigmatizados, los habitantes acumulan simbólicamente degradación, que se va a ver reflejada en la presentación física y social del lugar habitado. Se refuerza así la posesión o desposesión de capitales sociales, relacionales, culturales. El lugar arrastra a sus habitantes y sus habitantes arrastran al lugar.

Fuente: Uribe (2022), elaborado a partir de Bourdieu (1999).

mundial, lo nacional, lo regional y lo local. El espacio es una obra resultado de la concentración y el encuentro de las formas espaciales. «¿Qué es lo que se concentra? Todo lo que hay en el espacio, todo lo que está producido, bien por la naturaleza, bien por la sociedad [...] Todo: seres vivos, cosas, objetos, obras, signos y símbolos» (Lefebvre, 2013, p. 156).

El contenido ontológico de los planteamientos de Lefebvre dota de sentido social a la espacialidad física que otras ciencias sociales estudiaron de forma opuesta, por eso es un enfoque de teoría intermedia en donde la sociedad no es un sistema funcional y separado de partes, sino que, las estructuras, las instituciones, los imaginarios y

las experiencias de los sujetos están todo el tiempo unidos, relacionados. Es por esto por lo que el espacio es una realidad social donde existen las relaciones sociales y estas se dan sobre un espacio, es un producto y un medio.

El estudio del espacio permite responder que las relaciones sociales poseen una existencia social en tanto que tienen existencia espacial; se proyectan sobre el espacio, se inscriben en él, y en ese curso lo producen. De no ser así, las relaciones sociales permanecerían en la «pura» abstracción, es decir, en las representaciones y, en consecuencia, en la ideología —dicho de otro modo, en el verbalismo, la verborrea y la palabrería. (Lefebvre, 2013, p. 182)

En esta misma línea aparecen las ideas de David Harvey (1977) respecto al espacio como resultado de los procesos sociales y las formas espaciales. Definiendo que:

El espacio social, por consiguiente, está compuesto por un conjunto de sentimientos, imágenes y reacciones con respecto al simbolismo espacial que rodea al individuo. Cada persona, según parece, vive en su propia red de relaciones espaciales personalmente construidas, contenidas en su propio sistema geométrico. Todo esto nos conduciría a un panorama desolador desde el punto de vista analítico si no fuera por el hecho de que algunos grupos de gente parecen tener sustancialmente las mismas imágenes con respecto al espacio que les rodea y desarrollar parecidas maneras de juzgar su significado y de comportarse dentro del espacio. (Harvey, 1977, p. 28)

El poder sobre el espacio se refleja en el espacio físico apropiado. Ese poder es la posesión de capitales que, sumados, permiten ejercer poder simbólico a través de distintos efectos, de ahí que la mirada deba centrarse en los agentes sociales, las experiencias de los sujetos en el espacio, las imágenes que se crean en la interacción, lo simbólico. Este punto de análisis parte de poner en diálogo la mirada sociológica y geográfica del espacio, por lo cual la ciudad se considera un sistema dinámico en donde interactúan los procesos sociales y formas espaciales (Harvey, 1977), la cual se expresa en la categoría de configuración espacial que hace posible

explicar la transformación de las ciudades desde la interacción de lo físico y lo simbólico; por lo tanto, lo conceptual tiene una apuesta metodológica de unir los procesos y las formas antes que mostrar unidireccionalidad y causalidad.

No podemos decir de modo significativo que una forma espacial es causa de un proceso social (o viceversa), así como tampoco es correcto considerar las formas espaciales y los procesos sociales como si fuesen variables que se encuentran, de alguna manera, en continua interacción [...]. Esto sugiere que una estrategia adecuada para lograr la conjunción entre la forma espacial y el proceso social sería de tipo iterativo, en la cual iríamos de la manipulación de la forma espacial (manteniendo constantes los procesos sociales) hacia las implicaciones del proceso social (manteniendo constante la nueva forma espacial). Podemos movernos en cualquiera de estas dos direcciones, y no hay ninguna razón por la cual no pudiéramos manipular tanto la forma espacial como el proceso social en diferentes etapas de una secuencia iterativa. (Harvey, 1977, pp. 42-43)

En síntesis, en esta investigación se analiza el surgimiento de los barrios de la zona de la ladera y del oriente de Cali como un producto de relaciones productivas y económicas que impactan lo social; muestra la configuración de la periferia desde las fuerzas productivas que definen el uso del suelo históricamente, y la forma en que han sostenido relaciones de poder simbólico en manos de los agentes que planifican, dividen y ordenan la ciudad. El logro es una comprensión dialéctica de la configuración urbana, un análisis intermedio de las instituciones y los actores sociales en el siglo XXI a partir de casos comparados.

Nuevos estudios urbanos

Estudiar la configuración urbana implica tener en cuenta las características históricas de la aparición y crecimiento de las ciudades modernas en el mundo, pero atendiendo al tema central de la investigación, se retomarán las perspectivas que problematizan los procesos formales e informales de ocupación de los espacios, partiendo de la existencia de la segregación, la persistencia de la desigualdad y los círculos

de pobreza en las urbes latinoamericanas. Esta mirada, que se gestó entre las décadas del ochenta y noventa supone una ciudad dual fragmentada, la cual se ejemplifica a partir de los procesos posindustriales de urbes como Nueva York o Chicago, que dejan ver las nuevas formas de la desigualdad y se pueden contrastar con otros espacios geográficos como Latinoamérica (Auyero, 2001); a pesar de no ser similares, permiten ahondar en el estudio de los enclaves de pobreza a finales del siglo XX.

Así, Wacquant (2001) retoma la discusión de esas dos sociedades desiguales en Norteamérica que marcaron una distancia económica, social y cultural bastante amplia entre las minorías y el resto de la sociedad, delimitando la existencia de un *gueto comunitario* a mediados del siglo XX, compacto, con conciencia colectiva y de clases negras enlazadas, pero que en la época posindustrial de los ochenta y noventa se va a reconfigurar como *hipergueto*, donde lo espacial, institucional y demográfico será distinto. Así, la persistencia de la desigualdad en esta población no se reduce a la ecuación mecánica de la desindustrialización, sino que «se trata, más bien, del producto de una transformación de la articulación política de la raza, la clase y el espacio urbano tanto en el discurso como en la realidad objetiva» (Wacquant, 2001, p. 40).

Dicho abordaje sirve de referencia para la investigación que aquí se propone sobre las experiencias de vida urbana de los habitantes de la periferia de Cali en la configuración del espacio social en los últimos veinte años, dado que la propuesta de Wacquant es enlazar los factores externos y objetivos que configuran el territorio social y simbólico del gueto con la producción interna de la significación de pertenecer al gueto, relacionado con el análisis de la experiencia; es decir, que se toman de manera dialéctica los recursos materiales y simbólicos para la comprensión de un espacio objetivo. Su mirada es la sociología comparativa.

Para el autor, la guetificación negra en Norteamérica se da originalmente a inicios del siglo XX, con la acumulación y expansión de la población blanca, y es ante todo una institución de exclusión racial, mientras que los migrantes blancos (irlandeses, polacos, italianos, judíos, entre otros) estuvieron en barrios bajos con características étnicas

heterogéneas pero como un proceso de transición hacia la sociedad blanca, el cual era voluntario más que obligatorio como en el caso de la población negra que vivió una separación forzada de la vivienda y una segregación completa en escolarización, empleo, representación política, servicios públicos, etc. Lo novedoso en la época posfordista de los ochenta es que está descentralizada y diferenciada en lo espacial e institucional, además de que se ha intensificado la segregación, pero hay más despoblación, desocupación y baja organización (Wacquant, 2001).

Además, hace un estudio comparativo de las formas contemporáneas de desigualdad urbana y su conexión con la exclusión étnico-racial y de clase en Europa occidental, sin desconocer las particularidades de cada contexto y las limitaciones de aplicar los conceptos de manera mecánica. Su propuesta se basa en una sociología comparativa que analiza las estructuras sociales y mentales que se dan en los procesos de exclusión urbana entre el *cinturón rojo francés* (ciudades obreras periféricas como La Courneuve, de París) y el *cinturón negro norteamericano* (gueto negro como el South Side, de Chicago). Para el autor las estructuras de esa nueva pobreza tienen manifestaciones empíricas que son comunes y traspasan las fronteras nacionales:

El desempleo de larga data o la actividad ocupacional precaria, la acumulación de múltiples privaciones en los mismos hogares y barrios, el achicamiento de las redes sociales y el aflojamiento de los lazos sociales, y la dificultad de las formas tradicionales de seguro social y asistencia pública para remediar o poner un freno a las penurias y el aislamiento: todas estas situaciones pueden observarse, en grados diversos, en todas las sociedades avanzadas. (Wacquant, 2001, p. 124)

En esa formación socioespacial francesa y norteamericana se encontró que coincidían la población joven, trabajadores del servicio no calificado, trabajadores manuales, minorías étnicas, población desocupada a causa de la desindustrialización y la transformación del mercado laboral, pero con notorias diferencias en aspectos institucionales de segregación: «la exclusión actúa sobre la base del

color y es reforzada por la clase y el Estado en el cinturón negro, pero principalmente sobre la base de la clase y mitigada por la acción estatal en el cinturón rojo» (Wacquant, 2001, p. 128). Es decir que, el gueto negro se asemeja más a un universo racial y cultural homogéneo con baja penetración estatal, y el cinturón rojo francés más bien es heterogéneo en términos de clase y etnia, pero con una presencia destacada de las instituciones públicas.

Otro aspecto que menciona el autor y se conecta con los intereses de la presente investigación, es que el estudio de la nueva pobreza urbana no puede dejar a un lado el estigma que implica vivir en zonas segregadas, pues esto hace parte de la experiencia de quienes habitan la ciudad y de las estrategias que asumen para enfrentarlas. Esa experiencia además sigue marcada por condiciones estructurales como el resurgimiento de la desigualdad social (dinámica macrosocial), la mutación del trabajo asalariado (dinámica económica), la reconstrucción de los Estados de bienestar (dinámica política) y la concentración y estigmatización (dinámica espacial), aspectos que son claves para tener en cuenta en la presente investigación.

En la misma idea sobre la marginalidad de las poblaciones más pobres en las periferias de la ciudad, se retoma la mirada de Sabatini y Brain (2008) en Latinoamérica, quienes afirman que la segregación de grupos populares tiene efectos urbanos y sociales, es decir, dificultades para el acceso a servicios básicos en los lugares donde residen y desintegración social y empobrecimiento. Esos primeros efectos son los más conocidos mientras que los segundos, que son los efectos sociales, son los que se están acrecentando y vienen tomando nuevas formas, y que no eran tan agudas en los años ochenta, con el ejemplo de Chile:

En el pasado la segregación de las familias de menos ingresos tenía efectos tanto negativos como positivos, ahora se están agravando sus efectos más complicados de descomposición social. Igualmente o, incluso, menores niveles de segregación espacial —en Santiago la segregación retrocedió en forma importante entre 1992 y 2002— estarían dando lugar hoy a fenómenos de «guetización» de los barrios populares (drogas, crimen, deserción escolar) que no existían antes o que eran mucho menores.

La «guetización» parece ser el último eslabón de un proceso que comienza con la reducción de las oportunidades. (Sabatini y Brain, 2008, p. 11)

En consecuencia, se viene dando entre los grupos urbanos vulnerables una intención de movilidad espacial hacia el centro de la ciudad o permanecer en los sitios que no son periferia, esto con el fin de no aumentar las condiciones de marginalidad sino de mejorar el acceso a empleo, servicios, zonas seguras, entre otros, que a su vez desemboca en conflictos sobre el derecho a la ciudad. Esto es interesante porque las ciudades latinoamericanas no necesariamente están aumentando la segregación espacial hacia la periferia como comúnmente se explica, sino que dentro de la ciudad se sigue marcando la desigualdad, pero se acorta la distancia social entre los grupos, generando una gentrificación donde hay coexistencia de distintas clases y grupos sociales en zonas centrales.

La gentrificación afecta a la periferia popular, pero podría tratarse de una «gentrificación sin expulsión», esto es, de una invasión de los más ricos que no da lugar necesariamente a la expulsión de los residentes de menores ingresos. Por tratarse de la periferia, los «gentrificadores» encuentran sitios eriazos; y por predominar entre los residentes de condición popular formas de tenencia del suelo distintas que el arrendamiento (ya sea la informalidad o la propiedad privada de la vivienda social), la expulsión es más difícil. El resultado espontáneo es la reducción de la distancia entre los grupos sociales que ocupan los extremos de la escala social, es decir, una reducción de la segregación residencial. (Sabatini y Brain, 2008, p. 14)

El concepto de capital espacial

En América Latina viene tomando fuerza el concepto de capital espacial que delimitan Apaolaza y Blanco (2015), quienes sostienen que el espacio en que se habita proporciona las oportunidades de adquirir mayores capacidades o experiencias urbanas para saber moverse dentro de los lugares. Y esas experiencias también generan capital, por eso la definición apunta a las «ventajas urbanas

diferenciales que no dependen exclusivamente de variables infraestructurales o económicas, y/o que evidencian la importancia de la movilidad, el acceso y/o el control de redes y escalas en la apropiación de la ciudad» (Apaolaza y Blanco, 2015, p. 3).

Algo interesante que rescatan los autores es que del 100 % de los documentos consultados, la mitad (48 %) es en inglés, 32 % en francés, solo 17 % en español y 3 % en italiano y portugués. Además de indicar que son estudios que en su mayoría se han desarrollado al inicio del siglo XXI, destacando que solamente el 8 % de la producción académica es antes del año 2000. Esto indica la novedad del tema y la forma en que viene cobrando relevancia para América Latina.

La trascendencia de este trabajo radica en que es un estado del arte sobre el concepto y hace una búsqueda inicial de doscientos documentos que luego organiza por temáticas de abordaje. Una línea importante son los estudios sobre geografía y estudios urbanos en los que la teoría de base es el capital espacial de Bourdieu. Aquí se recoge que los dos polos de abordaje del concepto están centrados en el capital social como atributo del espacio o el capital social como atributo de los sujetos.

En cuanto a los que analizan el capital como atributo del territorio se dice que hay una materialidad del espacio expresada en las infraestructuras, la accesibilidad, que luego se transforman en relaciones sociales; por ende, el lugar donde se vive, trabaja y circula en la ciudad hará que los sujetos dispongan de mayor o menor capital espacial que otros. Pero existe otro capital externo a los sujetos y que no necesariamente es material y es el de aglomeración territorializada, un capital de la comunidad que se traduce en capital para la cohesión grupal y otro en la capacidad de innovación con un factor económico, en el sentido de localizar las capacidades productivas humanas dentro de un espacio particular.

El otro de los tipos de capital espacial es el que está asociado a los sujetos y que retoma con más fuerza los planteamientos de Bourdieu, donde los autores describen que son los atributos de los individuos los que se expresan en capacidades, experiencias y competencias. Aquí también se habla de escalas de apropiación geográfica; es decir, que

también hay capacidad de apropiación. Una línea adicional es la que retoma el capital espacial como atributo de un sujeto y territorialmente imbricado que retoma las dos partes de los capitales sociales combinándolos, y esta premisa conserva las ideas de Bourdieu acerca de que el capital es acumulable e intercambiable, pero siempre condicionado por lo material del territorio. Hay una conjunción de lo subjetivo y objetivo y lo que brinda una ventaja es la capacidad diferencial de apropiación.

El capital espacial detentado por un sujeto o grupo podría variar tanto si su contexto territorial se modificara (mayor oferta de transporte, diferente infraestructura de servicios, etc.) como si así lo hicieran sus capacidades de apropiación (incremento de ingresos, adquisición de habilidades para la movilidad, etc.). Por ello, el análisis desde este enfoque demanda una aproximación dialéctica de las relaciones entre la dimensión subjetiva y la territorial. (p. 11)

Una forma de operacionalizar esta categoría es con elementos como «la localización», «experiencias metropolitanas acumuladas», «recursos espaciales del individuo», «habilidades del contexto (cognitivas sobre cómo moverse en el lugar; conductuales de civilidad en el espacio público y privado; técnicas corporales que le permitan saber conducir, reservar el boleto de viaje)». Aquí los autores también citan a Levy, que habla de capital de posición y situación, donde el segundo puede ser un capital acumulativo.

La perspectiva de los autores sugiere que lo diferencial lo da la apropiación del sujeto, pero en esta investigación no se pierde de vista que lo diferencial está marcado por el capital económico de los grupos que trazan el destino del uso de los suelos y la distribución de dónde van a vivir los habitantes en cada zona de la ciudad. Incluso los autores dicen que unas mismas características territoriales generan apropiación y ventajas distintas para los grupos, y aunque en esta investigación no se detalla ese nivel particular y subjetivo del capital, se logra entender que así los sujetos tengan capitales adicionales en el mismo territorio, una zona segregada y marginada no va a generar *per se* mejores condiciones de habitabilidad como los habitantes

de ciertos territorios mejor ubicados respecto al acceso a la ciudad, equipamientos, movilidad.

La ciudad latinoamericana

El referente del desarrollo de lo que se comprende como ciudad moderna y contemporánea, se asocia a las urbes industrializadas y a las grandes metrópolis que destacaron a mediados del siglo XX con el auge del capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, como en Estados Unidos o con las ciudades reconstruidas en Europa. Este efecto también llegó a América Latina y consolidó una fisonomía urbana entre 1950 y el 2000, como lo plantea Macuacé (2017), llevando a las ciudades del sur del continente a un desarrollo urbano del 80 %, que fue desacelerándose hacia finales del siglo.

En Latinoamérica se ha presentado un proceso heterogéneo de consolidación de ciudades; no obstante, una situación común en todas ellas son los procesos que sobrepasan el límite urbano y se introducen en zonas de transición entre lo urbano y lo rural. Lo particular es que la presión que coloca la población al insertarse en estos procesos urbanos trae fuertes impactos para las zonas en términos económicos, sociales y ambientales. (Macuacé, 2017, p. 69)

La rururbanización está asociada a un proceso más amplio que es la desconcentración urbana a nivel suburbano y exurbano, que es la ampliación de las periferias rurales más allá de los límites de la ciudad, como lo plantea Otero (2017); el primero puede ejemplificarse con los asentamientos periféricos que tienen baja calidad de vida, mientras que el segundo alude a las clases altas que buscan la naturaleza como un lujo y las condiciones de vida permanecen óptimas. Dichos procesos periféricos también se denominan la ciudad difusa o *sprawl*. Para el caso de países iberoamericanos se utiliza otro concepto: *slums*, para dar cuenta de vecindarios contemporáneos «en los que la mitad o más de sus hogares carecen de agua potable, de mejoras en el saneamiento, de espacio vital suficiente, de una construcción sólida, de una tenencia asegurada o de la combinación de estos factores» (Otero,

2017, p. 268). Y cuando se convierten en grandes cinturones de hacinamiento, desempleo, pobreza, infraviviendas y contaminación en las periferias, se les denominan *megaslums*.

Al respecto, Ziccardi (2001) refiere que la **exclusión** en América Latina tiene que ver con los factores que impiden a los sujetos tener un nivel de vida decente y participar plenamente de los procesos de desarrollo, por lo que hay unos campos que permiten operacionalizar el concepto y entenderlo mejor: «las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a los servicios sociales, a la instrucción; el analfabetismo; la pobreza; el aislamiento territorial; la discriminación por género; la discriminación política; la carencia de viviendas; la discriminación étnico-lingüística» (p. 99), los cuales se convierten en factores riesgo social.

Esta perspectiva hace posible ubicar a las ciudades colombianas dentro del marco de la exclusión y la desigualdad social a causa de la aplicación del modelo neoliberal que se ejecutó desde la década de los años noventa, y lo que se investigó en este trabajo permitió mostrar cómo estas disposiciones sociales tienen que ver con la reconfiguración territorial de Cali. Por eso la perspectiva de la desigualdad que retoma Ziccardi (2001), a partir de los aportes de autores franceses, refiere una nueva era de desigualdades que no tienen que ver únicamente con categorías homogéneas, sino que tienen un nuevo repertorio y están fundadas en:

- i) la desaparición del modelo clásico de trabajo asalariado, bajo el efecto de la desocupación masiva que no afecta a todos los individuos al mismo tiempo y no depende sólo de las capacidades individuales, sino de la forma como se relacionan estos con la coyuntura; ii) las mujeres que se han integrado a la economía pero aceptando numerosas diferencias con los hombres en materia salarial, de precarización del trabajo, y entre las que se advierten mayores índices de desempleo; iii) las desigualdades geográficas entre regiones de un país o áreas en una ciudad que expresan territorialmente las desigualdades sociales; iv) las prestaciones sociales que están condicionadas a los recursos del beneficiario potencial; v) las facilidades u obstáculos para acceder al sistema financiero; vi) la situación diferencial que se advierte en la vida cotidiana frente a la salud, la vivienda, a los equipamientos públicos, al transporte. (p. 100)

Entender de qué manera se han dado los repertorios de desigualdad en los últimos veinte años en dos comunas de la periferia de Cali fue uno de los objetivos de la investigación, donde se logró identificar a los sujetos que han hecho parte de la configuración territorial, partiendo por considerar a quienes son vulnerables socialmente, pues como lo refiere la autora, hay grupos sociales como los niños, las mujeres, los ancianos, los indígenas, que a causa de su edad, ciclo económico u otra circunstancia, se encuentran al margen de la economía y es por eso que los programas sociales se centran en ellos al momento de diseñar las políticas de asistencia social, y es ahí donde se puede analizar también la nueva cuestión social.

Dichos procesos de exclusión estructural también se manifiestan en la manera en que la ciudad se organiza, y es por esto que dentro del análisis el concepto de **periferia** es importante, el cual, como refieren Hiernaux y Lindon (2004), es propio de la región, dado que a finales del siglo XIX e inicios del XX se refería más a los *arrabales*, como las zonas externas de la ciudad, con gran influencia en miradas europeas, mientras que a mediados del siglo XX usaban la expresión *suburbios*, como un referente más interior de la ciudad y con influencia norteamericana, y en la década de los años setenta se empieza a usar la palabra *periferia*, la cual

tiene un sentido geométrico: es la circunferencia o el contorno de un círculo, en este caso el círculo es la ciudad. Así, primero fueron arrabales porque estaban fuera de la ciudad. Luego esa posición externa se transformó en cercanía, sobre todo por la expansión de los medios de comunicación (particularmente las vías férreas). Y por último, la complejidad que significa estar afuera (arrabal) o ubicarse de manera próxima (suburbio), fue reducida a la visión geométrica que está contenida en la expresión periferia. (Hiernaux y Lindon, 2004, p. 104)

Además de la perspectiva geométrica que está implícita en el concepto, un referente importante es la discusión de teorías sobre centro-periferia en el marco de la producción capitalista, que además permite entender el orden mundial entre dominantes y dominados, países industrializados y no industrializados, ricos y pobres; es decir, que la periferia

es el círculo exterior de las ciudades donde se encuentra la población más pobre, despojada y dominada (Hiernaux y Lindon, 2004).

En este orden, la idea de periferia en Latinoamérica también se ha trabajado bajo la premisa del acceso a vivienda por medios alternativos informales que han utilizado los ciudadanos excluidos del mercado inmobiliario formal, bien sea a través de invasión, loteos irregulares, luchas urbanas y acciones individuales y colectivas que poco a poco obtuvieron acceso a servicios domiciliarios y equipamientos colectivos por parte de las autoridades urbanas (Beuf, 2012). No obstante, se viene ampliando esa mirada de la ciudad dual para entender que la periferia latinoamericana está viviendo otro tipo de procesos donde entra, por ejemplo, la especulación inmobiliaria y la renovación urbana en zonas que vienen ganando centralidad, y que ya no solo afectan a zonas de origen informal sino también a las formales, y se denomina *nuevo modelo de urbanidad periférica*:

Si bien las invasiones y los fraccionamientos ilegales siguen en los sectores más marginales, se observa también la llegada a las periferias populares de importantes flujos de capitales, nacionales o globales, que impulsan transformaciones de los sectores más valorizados, más «centrales». Las periferias populares, entendidas como sectores amplios que abarcan tanto barrios de origen informal como barrios formales para clases medias bajas y bajas, se vuelven entonces nuevos espacios de inversión para distintos tipos de actores económicos que apuntan al «potencial de desarrollo» de estos espacios. (Beuf, 2012, p. 475)

Estas inversiones donde pueden ubicarse constructoras, cadenas de distribución comercial, empresas de servicios, entre otros, también tienen impacto en el espacio urbano al generar cambios en las actividades productoras o en el espacio público, y a su vez esas transformaciones en el paisaje urbano afectan las relaciones que tienen los sujetos con la ciudad, la manera en que apropian el espacio (Beuf, 2012), por eso se debe tener en cuenta esta mirada al momento de analizar las particularidades de periferias como las que conforman las comunas 1 y 21 de Cali.

CAPÍTULO 2

CONFIGURACIÓN DE CALI COMO CIUDAD REGIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PERIFERIAS URBANAS

Introducción

Este capítulo tiene como propósito describir el proceso de desarrollo urbano de Santiago de Cali y la formación de sectores periféricos distintos en la zona plana oriental y en la zona de ladera occidental. Para alcanzar esta meta, se recurrió a la estrategia de la indagación documental y la revisión de fuentes históricas con las cuales se realizó la reconstrucción del desarrollo urbano de la ciudad de Cali durante el siglo XX, época en la que esta urbe se configura como núcleo urbano regional y como lugar en donde confluyen dinámicas poblacionales que condujeron a la expansión urbana y la conformación de sectores periféricos.

En la descripción se retoman las dimensiones económicas, sociales, culturales y espaciales que confluyeron para el crecimiento urbano, con la particularidad de ir identificando aquellos elementos históricos que posibilitaron la construcción de las zonas periféricas. Sobre el particular existen importantes aportes investigativos que se suman al estado de arte sobre la producción del desarrollo urbano, pero el análisis se enfocará en potenciar la mirada hacia la comprensión de la configuración de las periferias. Para esto, el lector encontrará fuentes secundarias sobre historia de Cali, el uso de cartografías históricas y archivo fotográfico que plasman las transformaciones socioespaciales de una ciudad en crecimiento.

Adicionalmente, antes de centrar la mirada en los procesos de consolidación de la ciudad capital del departamento durante el siglo XX, investigadores como Mosquera y Aprile-Gnisset (1978) plantean que la ciudad colombiana pasó por dos momentos comunes en el desarrollo de las ciudades que son: la dispersión y poblamiento, y luego el surgimiento de nuevos fenómenos que traen otras consecuencias aunadas a la urbanización, fase en la que es notoria la expansión acelerada del espacio ocupado, habitantes, estructura de la ciudad y demás redes e instituciones que la constituyen. Al momento de retratar la ciudad en la segunda mitad del siglo XX, los autores definen a Cali en ese periodo «como de transformación de una sociedad agraria en sociedad netamente urbana» (Mosquera y Aprile-Gnisset, 1978, p. 9). A continuación se revisará dicho proceso de transición.

Estos autores también destacan que la construcción actual de las periferias no se sitúa únicamente en la consolidación de la ciudad moderna del siglo XX, sino que desde la ciudad colonial se establecieron las bases de la segregación bajo las leyes de Indias, donde se transformaron los cortes horizontales al lado del río, de las minas o platanares que establecían los pueblos de indios antes de la llegada de los españoles, los cuales poco a poco se fueron transformando en la cuadrícula del sistema de dominación que situaba como centro a la plaza, donde se agrupaban los poderes militar, político, ideológico religioso, económico y judicial. Esta cuadrícula va a cambiar con el impulso económico de inicios del siglo XX y va a ordenar los alrededores de la plaza frente a las nuevas líneas comerciales y delimitaciones de vivienda para cada clase social, que es lo que se verá en detalle en el capítulo.

Crecimiento de la ciudad de Cali y producción de periferias: principios del siglo XX

La historiografía regional (Almario, 2012; Garzón, 2020; Vásquez, 2001) ha considerado que en el desarrollo histórico de Cali se pueden detectar una serie de fases que marcan claramente el proceso de transformación de ser una aldea para convertirse en una ciudad principal y capital del departamento. Vásquez (2001) también plantea que había una clase burguesa en la ciudad que empezó a pensar desde el siglo XIX en diferenciarse de la tradición de Popayán para consolidar una unidad territorial pujante y capaz de hacerle frente al comercio internacional y explotar el potencial geográfico del Valle. Sobre todo, porque Cali tenía como principal ventaja el puerto de Buenaventura, que desde aquellos tiempos se avizoraba como una puerta que abría grandes oportunidades mercantiles (Eder, 1954).

No es raro, entonces, que en 1910 esta élite lograra su segregación del Cauca para fundar lo que sería el nuevo departamento del Valle del Cauca, con Cali como ciudad capital (Rojas, 1985). Esta segregación del Cauca abrió grandes oportunidades

para construir una nueva burocracia administrativa sintonizada con el gobierno central y con la dinámica comercial del empresariado internacional. Este primer salto es lo que Vásquez (2001) denominó el periodo de transición de villa a ciudad, a lo que vendrían después las diferentes fases del progreso de Cali.

En la Tabla 4 se aprecian las características centrales de cada una de las fases que propone Vásquez. Lo relevante es resaltar que el establecimiento de estos momentos corresponde al entrelazamiento de la actividad económica y los cambios en la estructura física y social de la ciudad, en la infraestructura de las vías, en el aumento poblacional, entre otros.

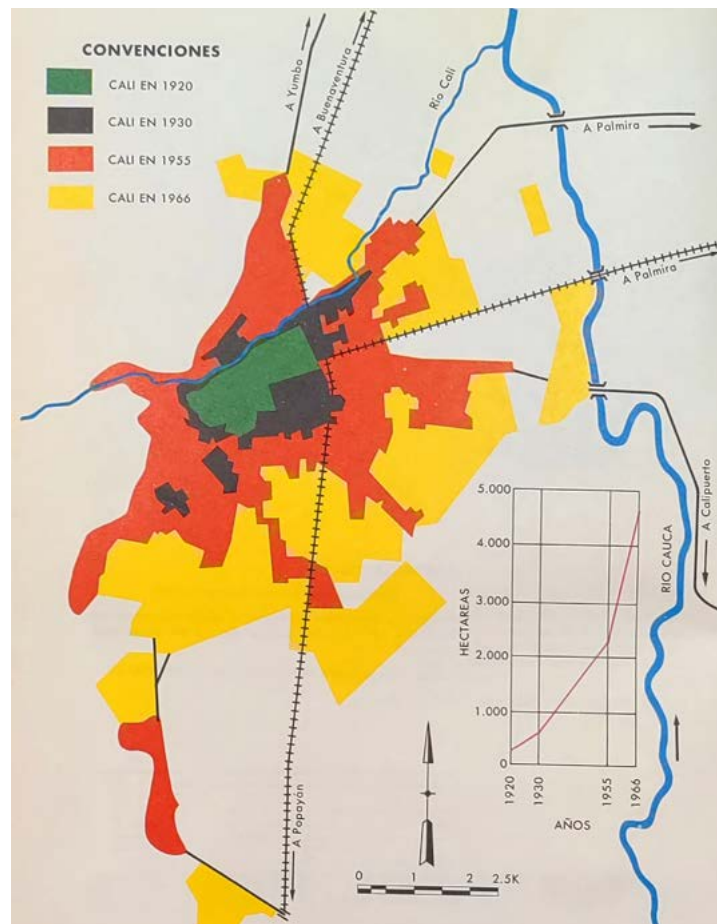
En la Figura 1 se visualiza el proceso de expansión de la ciudad entre los años veinte a sesenta, ligado a la modernización que trajo el ferrocarril, además de impulsar la densificación territorial y la industrialización en el centro fundacional con sus alrededores, para que, a finales de los sesenta, empezara a desplazarse la cuadrícula urbana en el corredor norte-sur. Todo lo anterior conectando con una época de florecimiento de barrios de clase media trabajadora, a mediados de siglo, que continuó con la consolidación de las demás comunas de la ciudad, de la mano de procesos informales.

Para Mosquera (2012) también se pueden identificar unas etapas en la densificación de la ciudad de Cali durante el siglo XX, en relación con la intervención municipal: la ciudad compacta de la Colonia que va hasta el inicio del siglo y que fue controlada; la ciudad dispersa y discontinua en las décadas cuarenta y cincuenta que se relaciona con ocupaciones de hecho e ilegales; el decrecimiento de la construcción oficial en los años ochenta financiada por el Estado y el aumento desde la empresa privada (Corporaciones de Ahorro y Vivienda en 1972, Estatuto de Descentralización Municipal de 1987, UPAC y Ley de Reforma Urbana de 1989); y, finalmente, a partir de la década del noventa se evidencia una participación del Estado con el fomento a la demanda, a partir de la creación del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, en el año 1991, que le da mayor dominio a las empresas privadas de la construcción.

Tabla 4. Fases del desarrollo de Cali.

Fase del despegue (1900-1932)	Fase de la industrialización (1944-1958)	Fase de la transición demográfica (1960-1980)	Fase de finales del siglo XX
<ul style="list-style-type: none"> Configuración de sectores comercial y agropecuario. Ampliación de la estructura fluvial. Construcción del ferrocarril del Pacífico. Auge disminuido por la crisis económica de 1929. Población en 1910 de 26 358 y en 1933 de 87 498. Boom de la construcción de viviendas, edificios y nuevos barrios entre 1922 y 1928. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de sustitución de importaciones. Ingreso de capital extranjero en la nueva área industrial de Cali-Yumbo. Crecimiento poblacional a causa de migraciones. Generación de empleos con salarios favorables. Expansión urbana con construcciones legales e invasión de terrenos. Población en 1945 de 190 015 y en 1958 de 470 076, con tasas de crecimiento anual del 7 % y 6 %, respectivamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento poblacional más lento. Incremento de ocupaciones de hecho de baldíos, laderas y jarillones. Conflicto social de la población con instituciones como CVC, ICT, Emcali, Valorización Municipal, Personería de Ejidos, Invali. Consolidación de la «doble ciudad» centro-periferia. Aparece la economía informal y se fortalece el sector servicios. Construcción de redes viales y uso de automóviles. Establecimiento de las redes con las regiones. Población en 1970 de 858 929. 	<ul style="list-style-type: none"> Irrupción del narcotráfico desde los setenta hasta los noventa, que involucró a gran parte de la población. La violencia y la agresión se toman las calles de la ciudad. Aparición de nuevos bienes de consumo en la década de los noventa. Estilos de vida ostentosos, relacionados con el narcotráfico. Crisis económica y social a finales de los noventa, desempleo y desaceleración. Población en 1991 de 1 746 500.

Fuente: Elaboración propia, con base en Vásquez (2001).

**Figura 1. Mapa de la expansión de Cali.**

Fuente: Bonilla Aragón (1967).

Ese primer periodo de la ciudad compacta tiene que ver con la densificación del área que ya estaba construida para los primeros veinte años del siglo, producto del auge económico que viabilizó la apertura del canal de Panamá, el puerto de Buenaventura y el funcionamiento del ferrocarril. Los primeros barrios que se denominan periféricos fueron El Peñón y Granada, y con la intención de higienización del municipio, se empezó a dotar la ciudad de energía y acueducto, además aparecieron el Teatro Municipal, el matadero de Villanueva y la plaza de mercado de El Calvario. Hacia 1931 se fueron concluyendo las obras del barrio Obrero y hacia 1940 las del barrio San Fernando, para sectores de clase media, además de otros barrios como El Porvenir, Miraflores, Santander, Jorge Isaacs (Mosquera, 2012).

Ya en los años cincuenta y sesenta el poblamiento se fue corriendo hacia las laderas, como en el caso de Siloé, y en el centro se fue desplazando hacia El Vallano, en inquilinatos, por ejemplo, en San Nicolás, y van a ser estos espacios los escenarios de la consolidación de las primeras oleadas de «destechados», como lo refiere Mosquera (2012), que más adelante se complementan con la acción colectiva de ocupación que promovieron Alfonso Barberena y Julio Rincón entre 1947 y 1950, quienes obtuvieron como resultado la Ley Barberena 41 de 1948, para que los ejidos pudieran usarse como terreno en la construcción de viviendas populares, y además se creó la Personería de Ejidos, que más adelante sería el Instituto de Vivienda del Municipio de Cali (Invicali), en 1966.

En los años cincuenta empieza con mayor fuerza el proceso de poblamiento popular, y se continúan expandiendo Siloé, Terrón Colorado,

Villanueva, Primitivo Crespo, Once de Noviembre, Puerto Mallarino, Marco Fidel Suárez, La Independencia, Meléndez, Joaquín Borrero Sinisterra, además de la zona cercana al Cauca.

En la década de 1960 la colonización popular de las tierras bajas cercanas al río Cauca, fue sumando manchas al perímetro construido, siguieron subiendo por los cerros y densificándose los barrios iniciados en el decenio anterior. Los destechados se organizaron en diversas asociaciones, donde se forjaron futuros dirigentes y militantes del movimiento social por la vivienda y el derecho a la ciudad, que unos años más tarde se regaría por el país, liderado por la Central nacional Provivienda (Cenaprov). (Mosquera, 2012, p. 240)

De acuerdo con la autora, el proceso de poblamiento popular siguió fuerte hasta la década del ochenta debido a que se fortaleció la construcción privada, por lo que la ocupación de zonas sin servicios públicos se mantuvo. Después de los ochenta las otras zonas de autoconstrucción espontánea se dan en Unión de Vivienda Popular, Lleras Restrepo, El Diamante, Cinta Larga, Siete de Agosto, Charco Azul, El Poblado y El Vergel.

No obstante, frente a los datos demográficos que se presentan, vale la pena resaltar que hay varias cifras que se dan desde distintos autores para esas primeras cuatro décadas del siglo XX (Tabla 5), que, si bien varían en términos de cifras, lo que intentan es mostrar la gran expansión poblacional (casi cuatro veces más) que tuvo la ciudad y que creó las condiciones para que iniciaran los procesos de desarrollo en lo económico, lo social y lo cultural.

Tabla 5. Cifras demográficas, inicios del siglo XX.

Año/Autor	Édgar Vásquez	Patricia Londoño	Escobar y Collazos	Aprile-Gniset y Mosquera	Fernando Urrea
1912	20 358 (en 1910)		27 747		19 906
1938	87 498 (en 1933)	101 833	101 833	88 366	111 529

Fuente: Rodríguez y Sáenz (2018).

Según Vásquez (2001), en el inicio de siglo XX la configuración espacial de la ciudad arrancaba alrededor de la plaza de la Constitución (actualmente plaza de Cayzedo) con los barrios San Pedro, Santa Librada, La Merced y San Francisco, que eran los lugares de vivienda de las élites de la ciudad. En el barrio Santa Librada destacó la construcción del colegio con el mismo nombre, donde antes vivieron profesionales y élites políticas, mientras que en San Nicolás vivían artesanos y peones.

El sector de El Calvario es referente central porque ahí quedaba la carnicería y se consideraba que quienes vivían allí tenían una condición económica y social de menos estatus. Se puede decir que este sector se consideraba uno de los primeros en identificarse como periférico, justamente por la dinámica social que ahí se presentaba. Según Ruiz y Mera (2015),

la delimitación física del espacio no se fundamenta en aspectos administrativos, sino más bien, por los usos sociales que se dan en dicho espacio, muchos de los cuales están ligados a prácticas sociales que han tenido una valoración negativa para gran parte de los habitantes de la ciudad y las instituciones gubernamentales. Entre estos y en diferentes momentos históricos, destacamos representaciones para el barrio El Calvario como: lugar para pobres, negros manumisos y población indígena (siglo XVII); lugar insalubre y propicio para el abasto de carne (siglo XVIII); lugar para las mujeres públicas (inicios del

siglo XX); zona de tolerancia (mediados del siglo XX); zona negra, olla y zona roja, etc. (2015, p. 25)

Por su parte, Santa Rosa estaba mediando San Francisco y El Calvario y, dependiendo de quienes se ubicaban al norte o al sur, mejoraba o empeoraba su condición económica.

A medida que los predios estaban más cerca del centro, los precios de la tierra eran más elevados. Este comportamiento determinó que los nuevos barrios, para sectores sociales de altos ingresos, se localizaran cerca del centro a pesar de haber salido de él (Peñón, Granada), en tanto que los barrios populares, habitados en alta proporción por inmigrantes pobres (Obrero, Santander, Jorge Isaacs, Benjamín Herrera, El Piloto) se ubicaron en la periferia de la ciudad donde se encontraban tierras de bajos precios y ejidos. (Vásquez, 2001, p. 130)

En el barrio San Antonio, más hacia La Merced, habitaban comerciantes y en la parte alta maestros y funcionarios de ideología conservadora. No obstante, Vásquez (2001) señala que el lugar que se establece como centro económico, político y religioso era la plaza de la Constitución, pues allí se daban distintos usos al espacio como lo era el mercado semanal, actos religiosos, políticos, cabalgatas y distintas ceremonias que hacían del lugar un referente de comunicación y circulación ciudadana a finales del siglo XIX (Figura 2).

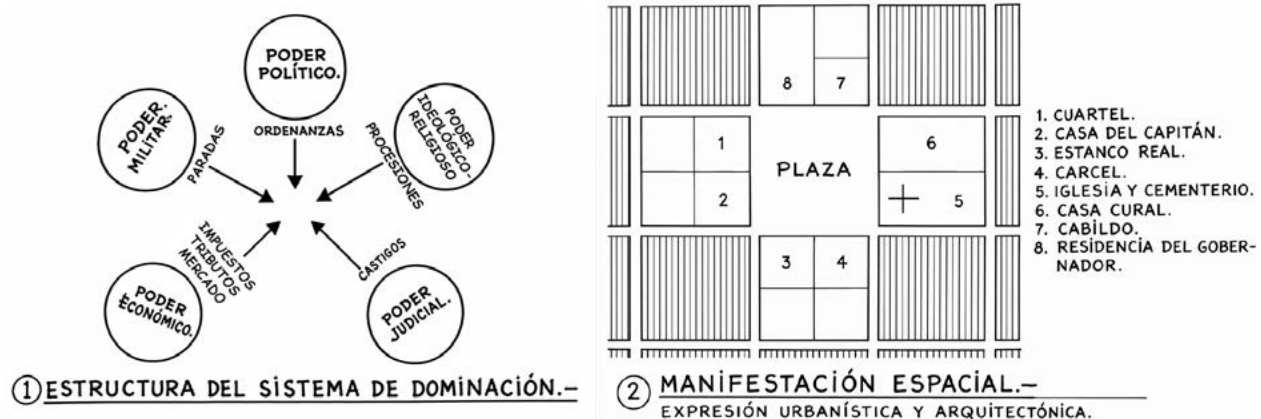


Figura 2. Estructura de la ciudad colonial.

Fuente: Mosquera y Aprile-Gnisset (1978, p. 50).

A partir de 1900, la plaza ya estaba cercada y empezaron en esta década a convertirla en un parque con la siembra de pasto y palmas, por lo que se desplazó su uso como centro de mercado, eventos festivos y celebraciones, pues además se habían construido en la última década del siglo XIX un nuevo matadero y una plaza de mercado. Justo para la celebración del primer centenario de la independencia se cambia el nombre de la plaza a Joaquín de Cayzedo y Cuero, volviéndose un centro más íntimo entre bancas y árboles para tertulias de parejas jóvenes, como relata Vásquez (2001).

A propósito de la vida social de la plaza, vale la pena retomar una nota de prensa de *El Día* del 20 de abril de 1910, donde se describen las actividades festivas de este lugar luego de que saliera el decreto para la constitución del departamento del Valle:

Por las calles iban y venían grupos de gentes cantando el Himno y aclamando al Gobierno, a la Comisión Legislativa y al Departamento del Valle. Se improvisaron oradores que, interpretando el sentir popular, decían palabras de cariño para nuestras hermanas del Valle y para la legendaria y fecunda ciudad que arrulló las cunas de tantos próceres y cuyas cimas oyeron cantar a tantos poetas, la que hasta ayer fue la capital del extenso territorio que se denominó Departamento del Cauca y que hoy lo es de una fértil extensión bañada por caudalosos ríos y cruzada por altivos montes que llevará, según el Decreto del Ejecutivo, el mismo glorioso nombre de antaño. Por la noche tocó la banda militar una retreta de gala y las callejuelas del parque Cayzedo se vieron, como pocas veces, animadas por una numerosa concurrencia, entre la cual figuraba lo más selecto de nuestra sociedad femenil. (*El Día*, 20 de abril de 1910, p. 6)

Otras de las características notables de las primeras décadas del siglo era que el parque ya contaba con iluminación eléctrica y alrededor las familias de élite levantaron casonas, que para este momento contaban con dos pisos. Las zonas consideradas no centrales eran sectores donde no existía este tipo de iluminación y vigilancia, y esto daba para que en ellos surgieran negocios relacionados con la vida fácil, divertida, ilegal o pecadora. Además, se fueron adoquinando las calles y asentándose a sus alrededores otras familias reconocidas, que le imprimían

el poderío social y político al centro de Cali. Es necesario resaltar que la distribución de los barrios alrededor del parque daba cuenta de la primacía del centro fundacional y el lugar ocupado por las élites, mientras que al alejarse de este punto se iban asentando las familias con menos estatus social y económico, marcando una primera relación centro y extremos de la creciente ciudad.

Desde una perspectiva del ordenamiento urbano, hasta aquí se puede describir el desarrollo de la ciudad como un legado colonial y de ciudad compacta, con rasgos del siglo XIX, según lo refiere Benito Garzón (2020), pues a través de la distribución del espacio se ejercía el control de la población y las prácticas, tal como lo identificó Foucault, pues ese lugar específico, que en este caso sería la plaza, se convierte en la figura de poder que fue común a las ciudades colombianas y representa un hábitat de conquista. Garzón también plantea que el aumento demográfico generó la expansión hacia zonas no planificadas, que eran ocupadas por la población de menos privilegios económicos y políticos, lo que trajo como consecuencia zonas poco controladas en las periferias. Al respecto, el análisis sociológico de Foucault explica que la relación entre población, territorio y seguridad implica una configuración geométrica; la ciudad se instituye a partir del lugar central del mando y control, como ocurre con las capitales de un país y el resto de un territorio:

Un buen país tiene, en suma, la forma del círculo y la capital debe situarse en el centro de éste. Una capital que estuviera en el extremo de un territorio alargado e irregular no podría ejercer todas las funciones que le son propias. En efecto, y aquí aparece la segunda relación, es preciso que la capital mantenga con el territorio una relación estética y simbólica. Ella debe ser el ornamento mismo del territorio. Pero la relación también debe ser política, en el sentido de que las leyes y ordenanzas deben tener en el territorio una especie de implantación tal que ningún rincón del reino escape a esa red general constituida por las leyes y ordenanzas del soberano. (Foucault, 2008, p. 26)

Además de los aspectos geográficos para centralizar el poder y las dinámicas de crecimiento de la ciudad en relación con la plaza de la Constitución,

hay otro elemento muy importante en el análisis del desarrollo moderno de Cali y son las instituciones que se empiezan a formar para responder a las necesidades de organización de una ciudad en transición del periodo colonial a la sociedad moderna capitalista, como lo explican Rodríguez y Sáenz (2018), quienes consideran que ese proceso de despegue que Vásquez ubica exclusivamente en el inicio del siglo XX, en realidad estaría enmarcado desde mediados del XIX hasta mediados del XX, y que va a ser en las décadas de los años diez a los años cincuenta donde se evidencian las nuevas instituciones sociales de un orden social moderno que se quiere establecer en la ciudad.

En este sentido, para Rodríguez y Sáenz (2018) es posible identificar dos tipos de instituciones en Cali desde 1910 que son, por un lado, las que van a generar los acuerdos sobre la vida social moderna que debe existir para la época y, por otro, las instituciones que atenderán las consecuencias de ese proceso modernizador. Particularmente mencionan como ejemplos la Junta de Ornato y Mejoras Públicas (JOMP), que tiene un papel fundamental en la ciudad hasta los años veinte, y que poco a poco se ve reemplazada por la Secretaría de Obras Públicas, y que tiene injerencia no solo en el mantenimiento y embellecimiento de la plaza y los parques, sino en la pintura, los letreros, las infraestructuras, incluso el vestuario y demás aspectos de planificación que la ciudad no tenía cómo asumir directamente desde la municipalidad a inicio de siglo.

El tratamiento a la mendicidad y el confinamiento para este grupo de personas es otro ejemplo de las instituciones que en esta transición intentan establecer un orden y unas ideas específicas para dotar a la ciudad de modernidad. Con la creación del primer asilo para mendigos en 1918 —que en algún momento también cumplió funciones para confinar a quienes tenían problemas mentales y que funcionaba al lado de la cárcel—, se configuraba una atención asistencial a las personas que ese sistema social moderno no lograba contener en sus procesos de producción y que se encontraban desafiadas, pero que en palabras de los autores, en realidad eran el reflejo de una «política moral de minorías» que edificaba las nacientes instituciones gubernamentales:

Estos rasgos morales se nutrían predominantemente de las tensiones que al interior de los diferentes grupos de élite se daban entre valores cristianos, modernizadores, liberales, conservadores, aquellos apoyados en la difusión de la ciencia o en convicciones estéticas, en relación con diversos asuntos, pero en este caso con referencia a los pobres, a los indigentes, a los menesterosos y en general a sectores por fuera de ese grupo social, que se podían calificar de «populares». (Rodríguez y Sáenz, 2018, p. 82)

En este orden, las primeras instituciones que se empiezan a configurar para enfrentar el tránsito modernizador de Cali entre los años 1910 a 1940 van a tener una visión predominantemente conservadora, como lo plantean estos autores, sostenida en la Iglesia católica y los grupos de élite que la difunden, estableciendo ciertos valores para el desarrollo de la vida social y el funcionamiento de la incipiente gubernamentalidad en favor de los intereses de esas élites y con el propósito de ordenar y definir el lugar y las condiciones de hábitat para los sectores desafiados y populares de esta época.

Cali y el despegue en los años veinte

Alcanzada la segregación del Cauca y creado el departamento del Valle del Cauca con Cali como su capital mediante el Decreto 340 de 16 de abril de 1910, los recursos del Estado pudieron invertirse mejor en el desarrollo de infraestructuras que comenzaron a proporcionar un paisaje urbano de ciudad con iluminación, calles en mejor estado, construcción de edificaciones y nuevas plazas, el surgimiento de nuevos barrios y vías de comunicación. En ello fue importante la llegada del ferrocarril de Buenaventura a Cali, descentrando el papel del río Cauca como ruta de comunicación, para abrir nuevas rutas terrestres.

Esta época representó para Cali un avance en infraestructura urbana gracias a la construcción del ferrocarril hacia 1915, vías que conectaban con otros municipios, aparición de los servicios públicos y en general el equipamiento de una ciudad que se expandía hacia el norte y hacia el sur. Ya para 1920 se estaba abandonando la navegación por el río

Cauca, que había potenciado el comercio en la ciudad y la región, continuando con el desarrollo urbano de la nueva capital del departamento del Valle del Cauca, establecido en 1910 (Vásquez, 2001).

La navegación por el río Cauca había impulsado el avance económico y de exportación que se consolidó con el ferrocarril, sobre todo la unión de estos dos medios de transporte fue crucial para la exportación de café del centro del país hacia Buenaventura, lo cual generó la conformación de fábricas, bancos, hoteles, bares y demás actividades comerciales alrededor del ferrocarril, que más adelante impulsó la creación de las primeras fábricas en la ciudad (Vásquez, 2001). Ese desarrollo incipiente de la ciudad que ya mostraba la densidad del centro urbano y su expansión hacia los alrededores se puede visualizar en el plano del tranvía que se aprecia en la Figura 3.

El período de 1922 a 1928 se conoce como el del «boom de la construcción» (Vásquez, 2001), pues el impulso del comercio se tradujo en el incremento poblacional y el ímpetu modernizador de

los comerciantes y manufactureros. Lo interesante es que también se expande el área urbanizada y se elevan los precios de los predios en el centro de la ciudad, donde empezaba a aglomerarse la producción empresarial de la urbe, todo esto mediado por la migración de obreros en busca de oportunidades en el auge del desarrollo urbano.

Siguiendo con el autor, esta situación presionó la emergencia de nuevos barrios en la pequeña Cali, pero marcados por la condición que se ha mencionado y es el valor y poder de encontrarse cerca de la ciudad, por lo que van a ser los comerciantes y empresarios quienes con el aumento de su capacidad adquisitiva se ubican en el barrio El Peñón y Granada, mientras los recién llegados y con menos privilegios se instalan en los barrios periféricos como el Obrero, Santander, Jorge Isaacs, Benjamín Herrera, El Piloto. Las clases altas y de mayor élite también empiezan a alejarse de las actividades comerciales del centro y la cercanía con los barrios obreros, por lo que se construyó el barrio San Fernando.

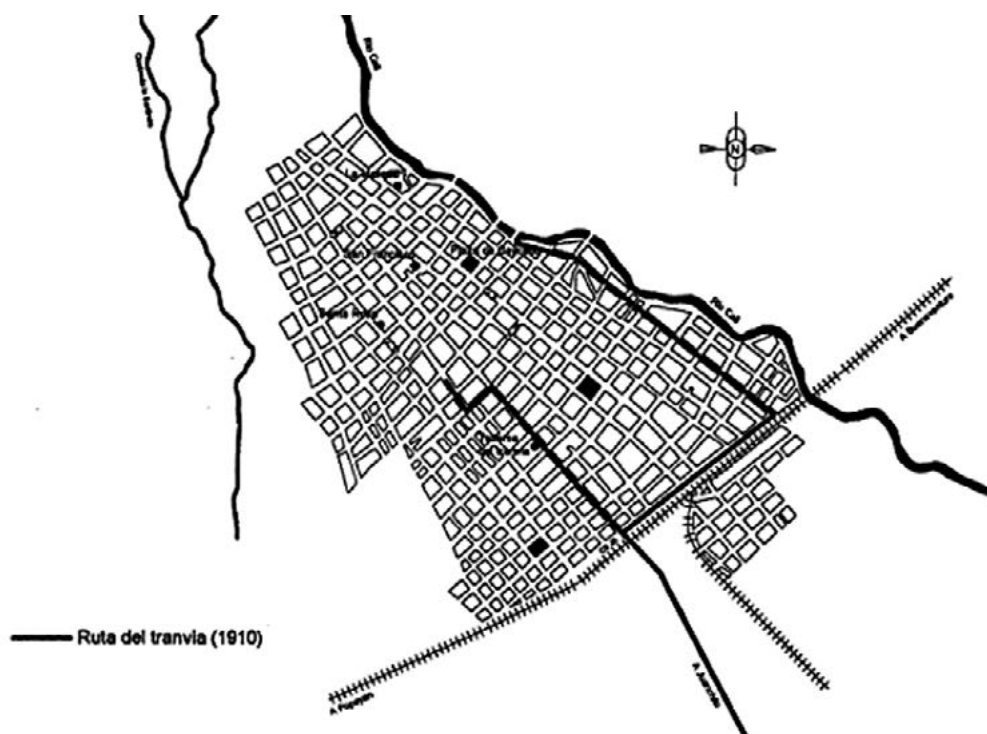


Figura 3. Ruta del tranvía, 1910.

Fuente: Vásquez (2001).

No pocos comerciantes, empresarios y clases medias altas trasladaron su residencia a los nuevos barrios (Peñón, Granada y San Fernando). Por ventajas de localización comercial, la demanda de suelo para este uso se concentró en el espacio central de la ciudad, puesto que minimizaba las distancias entre los almacenes y las residencias de los compradores ubicadas en distintos barrios. Por lo tanto, los precios del suelo eran más altos que en las «periferias». (Vásquez, 2001, p. 130)

Esta distribución es una de las primeras manifestaciones de la relación centro-periferia que se desea rescatar de la configuración espacial de la ciudad, pues claramente se evidencia una preponderancia de la capacidad adquisitiva y el poderío social para asentarse en las zonas centrales donde se desarrollaban la economía, la política y la vida social de la ciudad, en contraste con quienes debían irse alejando del centro por suelos más económicos y donde era más factible ubicarse al ser migrantes pobres y clase popular.

Al respecto, Garzón (2020) indica que la ciudad de 1925 a 1949 es la ciudad extendida, donde se acentúa la configuración norte-sur y se pierde la organización compacta, y esto destaca en el equipamiento urbano y administrativo que se empieza a construir en la zona norte, donde además se encontraban las familias de estratos altos, que luego se fueron moviendo hacia el oeste y el sur.

En el norte de aquella Cali se localizó el Estadio La Galilea, la plaza de Toros de Granada, el Hipódromo de Versailles (que en ocasiones prestó servicios de aeródromo civil), la Biblioteca Departamental, el Conservatorio de Música Antonio María Valencia, el Club de Tennis, el Club Colombia, el Batallón Pichincha, el Teatro Bolívar, el teatro Luna Park, este último en el actual barrio Granada. (Garzón, 2020, p. 17)

Ese auge en la construcción y aparición de nuevos barrios en el centro fundacional también son un referente para analizar lo que la arquitectura de esas primeras viviendas muestra de los dueños de casas, su estatus económico y la demarcación de periferias distintas. Pues las viviendas alrededor de la plaza de Cayzedo y la carrera 12 fueron las primeras en tener más de dos plantas y un diseño en

sus frentes que era distinto al de los barrios como Santa Rosa y San Nicolás, donde vivía la población campesina y recién llegada.

En Cali el proceso se inició hacia 1918-1925 con el Teatro Municipal y con el edificio comercial de Emiliano Otero, en un solar esquinero del Parque de Caicedo. Sigue hacia 1926-1930 con el Palacio Nacional, prolongación del edificio Otero y la Gobernación. Todas estas obras alcanzan una altura promedio de 3/4 plantas. En los mismos años 1925-1930, en un reducido anillo central, se construyen varios edificios de dos o tres plantas, con locales comerciales en el primer piso y usos residenciales en las plantas altas. Bajando por la calle 12 hacia al sur, van disminuyendo rápidamente las especificaciones, pero no la exuberancia decorativa; llegando a Santa Rosa o San Nicolás, con casas de pequeños comerciantes, de artesanos u obreros, a los cuales se pegó sobre la fachada una pechera de adornos con alusiones neo-clásicas. Son modestas viviendas con una o dos plantas, en un lote de seis, ocho o diez metros de ancho sobre la calle. (Mosquera y Aprile-Gnisset, 1984, p. 100)

Justamente el hecho de que alrededor del centro fundacional se empezara a ubicar la clase trabajadora, fue el detonante para que las familias más prestantes de la ciudad requirieran de una zona exclusiva para vivir, que además mostraría una arquitectura similar a la de las clases altas en otras partes del país o que tomaban de referencia de las ciudades internacionales.

Mientras tanto, en la década del treinta, la oligarquía caleña se fortalece en sus exclusivos bastiones residenciales de los barrios Centenario y Granada, volviendo a los trianones, castillos medievales y palacetes franceses y folies. Pero con un tal eclecticismo que ya es difícil saber si los modelos provienen de Europa... o de Chapinero. (Mosquera y Aprile-Gnisset, 1984, p. 100)

El diseño de las viviendas, sumado a la ubicación y el terreno ocupado, empiezan a demarcar en esa década de los años treinta dos zonas diferenciadas, como ya se ha encontrado en otros apartados: el oeste nos habla de una ciudad para una clase social alta y la parte baja del centro fundacional marcada por la presencia de artesanos y trabajadores.

No obstante, el progreso económico que había sido un referente en esta época debido al auge comercial, la expansión urbana y de construcción, además de las mejoras en calidad de vida con la instalación del acueducto y salubridad en la tercera década del siglo, se vio afectado por la crisis económica de 1929 en Estados Unidos, sobre todo por la reducción del crédito externo y la disminución de las inversiones en todo el mundo, pues esa crisis impactó el desarrollo económico que el capitalismo venía dejando en las nacientes urbes a raíz de las grandes migraciones del campo a la ciudad que llamaba la industrialización (Vásquez, 2001). Entre los efectos más notorios estuvieron el estancamiento de obras urbanas y el despido y disminución de sueldos a los trabajadores del ferrocarril, lo que generó manifestaciones populares en la búsqueda de mejores condiciones para emplearse.

Una forma de constatar estas afectaciones de la crisis económica internacional en el auge de la construcción y expansión de Cali es a través de registros del Concejo acerca del endeudamiento que tenía la ciudad en esa época, pues como lo expresa Hernández (2015), entre 1920 y 1930 la ciudad adquirió diversos créditos con bancos internacionales, nacionales y locales, que después de 1929 tuvieron inconvenientes para saldarse y por eso se recurrió a nuevos créditos.

En el primer caso, las deudas externas, resaltan especialmente las constantes comunicaciones emitidas por el Royal Bank of Canada, el Bank of America y el Banco Alemán Antioqueño. En estas comunicaciones se indica que el empréstito no ha sido subsanado aunque, por ser documentos emitidos por los bancos, no se especifica qué obra financió el Municipio con estos recursos, ni el estado de la misma.

Algunas de estas comunicaciones llegaron directamente al Concejo Municipal, como dos del Royal Bank of Canada el 19 de febrero de 1931, en las que piden atención sobre dos asuntos que giran en torno a la cancelación de una deuda que fue adquirida con esta entidad y que asciende a los USD 136.340.

Otras comunicaciones son remitidas desde la Administración Municipal, como fue el caso del 4 de mayo de 1931, cuando la Tesorería adjuntó un comunicado en el que habla de dos deudas: una del Royal Bank of Canada, que solicita la

cancelación de la cuota semianual del empréstito (USD 1346.340), y otra del Bank of America, que recuerda que el valor adeudado es de USD 7125. (Hernández, 2015, p. 19)

A pesar de la desaceleración económica que se dio al final de la década del veinte, con el inicio de los treinta empezó poco a poco a recuperarse la producción y a diversificarse la industria, con lo cual se siguieron dando los procesos de expansión y migración de la ciudad. Particularmente los procesos de industrialización, con la creación de nuevas fábricas y productos, necesitaron de reacomodamientos dentro de la lógica centro-periferia que ya se ha mencionado (Vásquez, 2001). El suelo del centro alrededor de la plaza de Cayzedo y cerca de la línea férrea empezaron a poblarse como zona industrial, además hacia Yumbo, por lo cual las familias de clase alta también se empezaron a mover hacia otros barrios como Juanambú, Santa Teresita, Versalles, Centenario, San Vicente y La Campiña. Las zonas ya construidas también se expandieron, hacia el lado de San Antonio aparecen San Cayetano y Libertadores. El auge de la modernización seguía reflejándose en otras construcciones de la ciudad como lo expresa el mismo autor:

El espíritu modernizador de las élites locales se alimentaba con las imágenes de Buenos Aires y de las ciudades europeas que, en la aldea, tomaron cuerpo en construcciones como el Teatro Municipal, el Edificio Otero, el Palacio Nacional, el Teatro Isaacs y el Hotel Alférez Real que se edificaban en la misma época en que se construía la Avenida Uribe Uribe. En esas imágenes también se encontraban los bulevares, las avenidas amplias, rectas y arborizadas. (Vásquez, 2001, p. 204)

Por otra parte, entre los años veinte a los treinta también se identifican cambios en la estructura y los límites periféricos de la ciudad, sobre todo con la creación de barrios oficiales como el Obrero, que van dando cuenta de la necesidad de las élites de organizar la ciudad, como lo menciona Garzón (2019), pues el proceso de construcción de nuevos barrios es producto de normas, leyes y definición de uso del suelo, pasar de lo rural a lo urbano, establecer quiénes viven en cada parte de la ciudad.

De acuerdo con el Plano de Cali de 1942, el perímetro urbano se encontraba demarcado por los límites que definían los barrios Centenario, Juanambú, Granada, Versailles y Santa Mónica al Norte (margen izquierda del río Cali); El Pueblo, Santander, El Porvenir, Jorge Isaacs, Cascajero y Saavedra Galindo al oriente de la línea férrea; Alameda, Pasoancho, San Fernando y el Sindicato, al Sur de la quebrada La Chanca, y El Nacional, San Antonio y el Peñón al Occidente. (Garzón, 2019, p. 73)

De esta forma, la delimitación de zonas para que vivieran las familias más prestantes de la ciudad y quienes hacían parte de la élite económica y gobernante de la moderna Cali como ya se ha mencionado, también necesitaba ordenar y delimitar dónde vivirían los obreros y demás habitantes que no entraban en la población referenciada al inicio. Es así como la construcción de un barrio como el Obrero, por ejemplo, respondía a «los preceptos higiénicos, morales y hasta laborales que esperaba establecer la municipalidad de Cali, con el fin de construir una clase obrera dócil, laboriosa, sujeta las rutinas del capitalismo en marcha y cercana al mundo de la producción» (Mera y Ruiz, 2019, p. 5).

Un ejemplo de esta configuración de las zonas centrales y periféricas de la ciudad en estas décadas se hace notoria con la aparición del servicio de transporte público en Cali, que, como lo menciona Vinasco-Martínez (2017), surgió en primera instancia para llevar a las familias de élite que vivían en San Fernando hacia el centro o norte de ese primer trazado de la ciudad; es decir, que estas familias podrían tener la comodidad de vivir en las afueras de la ciudad porque tenían cómo desplazarse, algo que no ocurría con el resto de sectores periféricos y de poblamiento popular en la ciudad.

La búsqueda realizada en el *Diario Relator* de los años 1928 a 1930, da cuenta de las siguientes rutas de buses: buses azules con rutas Estación-El Peñón; bus Carro Azul con ruta Plaza de Caicedo-San Fernando; buses amarillos con ruta Estación-Crucero-San Fernando; buses grises con ruta San Fernando-Plaza de Caicedo-Estación-Crucero; buses rojos, con dos rutas: El Peñón-Estación y el Peñón-Granada; todos los buses realizaban recorridos cíclicos. (Vinasco-Martínez, 2017, p. 46)

Sin embargo, la autora menciona que con el paso del tiempo estos servicios tuvieron que ampliarse a las zonas periféricas informales para garantizar la movilidad de la mano de obra de la ciudad y no solo de las familias de élite, mencionando que fue esta necesidad creada desde esas zonas periféricas la que amplió el recorrido y las empresas de transporte de la ciudad, lo cual también estuvo amparado en el Decreto 492 de 1964 «por medio del cual se establece un estatuto municipal sobre el sistema de asignación prolongación o recortes de las rutas urbanas de buses que funcionan en la ciudad de Cali» (Vinasco-Martínez, 2017, p. 49).

El transporte público de Cali es una muestra de la interacción ciudad legal versus ciudad informal sobre la que se ha expandido este municipio, resaltando a la vez la importancia de los sectores populares en el ordenamiento posterior que fue teniendo la ciudad, tanto así que, de las dieciséis rutas de buses que existían para los años sesenta, todas se encontraban en sectores populares y algunos barrios informales, menos la Blanco y Negro, que estaba en Menga (zona norte); mientras que Amarillo Crema y Gris Roja estaban en Villacolombia y La Base (zona oriental); Rojo y Crema en el Bosque Municipal, cerca de Terrón Colorado; Santa Rita en Calima; Gris San Fernando en Siloé y Belisario Caicedo (ladera occidental); Verde Bretaña y Verde San Fernando en El Guabal, Cristóbal Colón y Primero de Mayo (zona suroriental); Puerto Mallarino, Verde Plateada, Villacolombia y Florida-Cali en Alfonso López; Villanueva Belén, Río Cauca, Azul Crema y Azul Plateada en la Unión de Vivienda Popular; Verde Bretaña en los años ochenta se ubica en Meléndez (ladera occidental) (Vinasco-Martínez, 2017).

Cali y el apogeo de los años cuarenta

Todo este proceso concluyó en un periodo de álgida industrialización en la ciudad entre 1944 a 1953, espacialmente concentrado en el corredor Cali-Yumbo y que transformó la producción anterior de bienes de consumo local a través de la manufactura, hacia la producción de capital y bienes intermedios a mediados de siglo. Esta nueva etapa se caracterizó

también por la entrada de capitales extranjeros y la tecnificación de los procesos, así como por el traslado de la zona industrial hacia el norte de la ciudad en donde existían más ventajas en el transporte (carga y descarga) y conexión vial con el puerto de Buenaventura para el intercambio de insumos en comparación con los altos costos del suelo del centro, que cada vez eran más altos (Vásquez, 2001).

Se debe mencionar que este proceso no se dio de manera aislada en Cali, sino que obedece al auge del desarrollo económico e industrial del país denominado como *cuadricéfalia urbana*, como lo propuso Gouëset (1998), el cual plantea que fueron cuatro las ciudades en las que se expresó un proceso de modernización y expansión industrial a inicios del siglo XX: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. En ese inicio de siglo aún no era notoria la concentración económica y no estaba mecanizada la minería ni la agricultura; por el contrario, había un desarrollo local en productos de acuerdo con la región; por ejemplo, en la cordillera Oriental la actividad cafetera, Barranquilla como puerto, mientras Bogotá y Medellín destacaban por ser las ciudades más grandes.

El comienzo de la industrialización con la modernización de la agricultura fue el salto económico que se dio de 1920 a 1930, particularmente con el auge cafetero que se centralizó desde Medellín, Caldas y ahora en Cali, que ahora sería el corredor para exportar el producto desde el puerto de Buenaventura. Pero al mismo tiempo se dio un proceso de especialización de la economía: Magdalena con la producción bananera, Cundinamarca con papa y trigo, la costa caribeña con el algodón, Valle del Cauca con la caña de azúcar, Tolima con el arroz y Caldas con el café. Fue en la década de los años cuarenta donde despegó la industria caleña, alentada principalmente por las inversiones extranjeras que trajo consigo la industria de la caña de azúcar y el puerto de Buenaventura (Gouëset, 1998).

Sin embargo, este periodo también estuvo acompañado de distintas crisis como la energética y de acueducto, además de las deficiencias en el espacio habilitado para la industria y lo inadecuado de las vías, pues el auge industrial avanzaba más rápido que las condiciones de infraestructura de la ciudad, que apenas dejaba de ser la aldea de inicios de siglo (Vásquez, 2001).

A medida que crecía la ciudad, de la misma manera aumentaba la presión sobre servicios públicos como energía, acueducto y alcantarillado, cuyos costos desbordaban las finanzas municipales. Muchos de los nuevos sectores periféricos tuvieron problemas para conectarse con estas redes, lo que produjo efectos en la salud, la economía y el paisaje urbano de estos sectores. Además, se sumó otro proceso que marcó la historia de la ciudad hasta la actualidad y es la crisis del planeamiento urbano, pues la gran presión demográfica, comercial y migratoria hicieron de la expansión física de Cali un proceso legal pero también ilegal, sobre todo en áreas externas al perímetro urbano que estaba delimitado. Las olas migratorias del campo a la ciudad empeoraron la situación, tal como se puede observar en la Tabla 6.

Tabla 6. Servicios públicos en Cali.

Año	Cobertura energía	Cobertura telefónica	Cobertura agua	Característica
1951	79 %			Auge industrial
1964	75 %	19,95 %	66 %	Invasiones, barrios piratas
1973	95 %	26,56 %	89 %	Inversión en infraestructura
1985	89 %	35,91 %	88 %	Aguablanca
1993	82 %			Expansión física

Fuente: Vásquez (2001, pp. 291-292)

Al respecto de los servicios públicos en Cali, vale la pena retomar la investigación de Padilla (2018), en la constitución de las primeras empresas prestadoras de servicios que dan cuenta de un proceso entre las nacientes instituciones y las pujas ciudadanas entre 1910 a 1940, pues la crisis por el déficit de energía o de agua era distinta para las zonas y barrios construidos en la ciudad para dichas décadas.

Hasta 1910, Cali fue un espacio con un centro urbano compacto, comprendido por los barrios San Antonio, San Cayetano, San Juan Bosco, San Pascual, El Calvario, La Merced, Santa Rosa, San Pedro, San Nicolás y El Hoyo, y expandido en la periferia con los barrios Granada, El Peñón,

Jorge Isaacs, Obrero, San Fernando, Alameda, Santander hasta 1930. A partir de la tercera década del siglo y hasta 1944 se conformaron al norte de la ciudad los barrios Versalles, Centenario, Juanambú, Santa Mónica, Santa Teresita, Campiña, San Vicente, Nacional, Terrón Colorado y Bellavista; al oriente los barrios Bretaña, Junín, Belalcázar y El Porvenir. Hacia el sur de la ciudad se pobló Siloé-Belén. En esta diferenciación [...] el centro histórico contó con los servicios públicos, aunque deficientes, de su pasado colonial con vías adoquinadas, pilas públicas y una gran acequia que lo atravesaba; mientras que la periferia tuvo que construir, desde el inicio, los servicios con los cuales se pudiera proveer para una vida que empezaba a regularizarse a través del mercado. (Padilla, 2018, pp. 182-183)

El acceso a servicios también estuvo marcado por esa relación élite y sectores populares que se marcó durante todo el siglo XX y lo que sigue del XXI en lo geográfico, por eso el déficit de servicios públicos no es algo que solo se refleje en el poblamiento informal que se amplía en las décadas del setenta y ochenta que tanto destacan en la historiografía del país y la ciudad, sino que lo vemos desde muy temprano en el crecimiento de las periferias en estas cuatro décadas, destacando además que

no era la misma condición de periferia para los nacientes barrios de élite al norte, como los de la zona oriente y laderas occidentales. Durante la década del cuarenta también se resalta lo que la autora llama un creciente interés público por los servicios fundamentales como agua y energía, una idea modernizadora de un bien para la población general que llevó a exigencias por precios y acceso a los servicios que tenían una injerencia privada (Padilla, 1918).

Este periodo también se caracterizó porque aparecen normativas frente al uso del suelo con el Acuerdo 178 de 1945, el Código Urbano, además de una Junta de Planeación, y posteriormente se da un primer plano de la ciudad con el Acuerdo Municipal 127 de 1948 que delimita la zona urbana, como lo refiere Garzón (2020), quien además menciona que la construcción de distintos monumentos que actualmente son emblemáticos, ayudaron a la representación de ese nuevo ordenamiento urbano y causaron un impacto en los imaginarios y representaciones de los pobladores, como se muestra en la fotografía previa a la construcción de la iglesia El Templete, en Cali, que ilustra el ánimo modernizador de esta época (Figura 4).



Figura 4. Iglesia El Templete.

Fuente: Uribe (1949), como se citó en Garzón (2020, p. 18).

Los barrios ilegales y periféricos de Cali entre 1940 y 1980

Vásquez (2001), en su estudio sobre el siglo XX, planteaba que los barrios ilegales ya existían en Cali antes de los años cincuenta, pero con la expansión acelerada de la época que conecta con el auge económico y los efectos de la violencia, se fueron incrementando hasta 1979. El autor también explica que las construcciones ilegales tenían unas diferencias, por un lado, se recogían los barrios de invasión para esos años como Terrón Colorado, El Hoyo y El Piloto, y, por otro, en el caso de las laderas, se hablaba de barrios piratas que estaban en zonas de alto riesgo por los terrenos irregulares, y ahí entraban los barrios Siloé-Belén, Jordán, La Independencia. Este proceso terminó por desbordar la capacidad administrativa de la administración municipal que no pudo contener y ordenar al tiempo el proceso de planificación de la ciudad y requirió de varias acciones para solventar las dificultades.

Aquí se destaca un proceso muy interesante de la ciudad de Cali y es que si se contrastan estos barrios mencionados con el plano urbano legal que tenemos en la actualidad, la mayoría fueron producto de dinámicas ilegales que poco a poco la administración municipal tuvo que ir legalizando como manera de apropiarse del ordenamiento de la ciudad; es decir, que la realidad de la rápida expansión de la ciudad desbordó la capacidad de gestión y de infraestructura de la ciudad, tal y como había ocurrido tiempo atrás con el desarrollo industrial, mostrando además que era un proceso propio del crecimiento urbano.

Este proceso tuvo que ver también con las acciones colectivas dirigidas por obreros y artesanos de la ciudad, pues como lo menciona Garzón (2018), el periodo entre 1940 y 1953 estuvo marcado por el fortalecimiento de la planificación urbana, donde se contrata a expertos extranjeros para la construcción de un plano futuro para la ciudad y un plan piloto que a su vez se subdivide en diversos proyectos de expansión de barrios. Este impulso por hacerle frente a la situación de ordenamiento de la ciudad en medio de las nuevas construcciones ilegales se relaciona con el efecto de las acciones colectivas lideradas por los obreros como exigencia de vivienda

en un contexto de déficit habitacional y con el respaldo del marco legal para la construcción y uso de los ejidos.

La década del cuarenta, como un momento de crecimiento, mantiene su relación con los procesos económicos que empiezan a tomar fuerza en el norte del municipio, lo que a su vez amplía los sectores económicos de la ciudad y los espacios laborales.

En el área Cali-Yumbo se ubica el 60 % del empleo, pues en esta época llegaron varias firmas extranjeras a la ciudad, como por ejemplo Goodyear, R. Squibb & Sons International, Cartón Colombia, que se construyó con un 66,7 % de capital extranjero. A partir de esta época comenzó una rápida industrialización marcada por la innovación tecnológica, la llegada de las nuevas formas de trabajo y el aumento de la productividad; la ciudad vivió una división por las diferentes actividades que se presentaban y el uso del suelo, pero también por la nueva zona industrial; cabe resaltar que este auge industrial en su mayoría se dio por capital extranjero. (Garzón, 2018, p. 209)

De esta forma se muestra que el crecimiento empresarial y la llegada de capital extranjero fueron claves en el fortalecimiento industrial de la ciudad, pero al mismo tiempo de la configuración espacial de la zona económica que antes fue cercana a la plaza de la Constitución y a los barrios obreros, pero que ahora se ubicaba a las afueras de la ciudad, impulsando el poblamiento y construcción de nuevos barrios en ese corredor sur-norte.

Pero esa demarcación de la ciudad también empezaba a profundizar los procesos periféricos y de segregación en ese nuevo trazado urbano que se expandía, por eso entre los años sesenta y ochenta

se redefinió y consolidó la distribución socio-espacial de la ciudad hasta configurar «dos ciudades»: el espacio de los «excluidos», como anillo que rodea a Cali a lo largo de los cerros y de las márgenes del río Cauca, y la ciudad de los «incluidos» que ocupa el interior. (Vásquez, 2001, p. 4)

Esa temprana idea de dos zonas diferenciadas y con características económicas, sociales, de calidad de vida opuestas, va a reflejarse en el aumento

del poblamiento informal y la ocupación de hecho en estas zonas. Es así como, en el rastreo de las décadas anteriores que se ha referido aquí, es evidente que la zona cercana a la plaza y los barrios hacia el norte de esa plaza son los que se estructuran a inicios de siglo como el lugar de élite donde iban a vivir las clases altas, mientras que la zona sur de la plaza, hacia la plaza de mercado, hacia el matadero, hacia el borde de la ciudad, estaba destinado para las clases bajas y sectores populares. Es decir, que la relación entre dos ciudades se ha mantenido a lo largo de la expansión de la ciudad, solo que hay que evaluar, para cada momento histórico, qué barrios y qué zonas corresponden a esta demarcación simbólica y geográfica.

La mitad del siglo da cuenta de una nueva aceleración en ese crecimiento de la ciudad donde confluyen distintas causas como el periodo de Violencia, que generó migraciones hacia el occidente del país, además de los impulsos económicos que ya se mencionaron, que se ven reflejados en lo siguiente:

Fue tal el fenómeno migratorio ocasionado por la violencia social y económica que, en la práctica, la población que habitó la ciudad de Cali a lo largo de la década de 1950 se duplicó, pues la ciudad pasó de contener 241.300 habitantes a 509.900 habitantes. En igual proporción se comportó la extensión de suelo ocupado, pues de 1.124 hectáreas, se pasó a 2.396 en la misma década. (Garzón, 2020, p. 19)

Entre los años cincuenta y sesenta, este proceso migratorio y de expansión va a demandar servicios institucionales de las entidades del Gobierno, además de requerir organización y planificación del poblamiento; sin embargo, el déficit habitacional y de implementación de los servicios públicos no logró resolver la necesidad de los habitantes, y todo este proceso contrasta con las adecuaciones que entre los años sesenta y setenta se hacen para los VI Juegos Panamericanos, pues el equipamiento hacia el sur de la ciudad va a responder ante esa imagen y adecuación de la ciudad para un evento coyuntural deportivo, mientras en las zonas periféricas de la ciudad se mantienen las condiciones precarias del poblamiento informal.

Sumado a los flujos de migración y cambios arquitectónicos en la ciudad, las décadas del sesenta y setenta reflejaban la desaceleración económica de la que hablaba Vásquez (2001) y se representaba en las tasas de crecimiento del empleo que pasaron de 7,4 % a 4,1 % entre 1958 a 1970, generando crisis en la industria local que ahora se enfrentaba a la llegada masiva de industrias extranjeras, que poco a poco fueron dejando la economía de la ciudad en el sector terciario de servicios. Aspectos que se vieron reflejados en la poca inclusión en el mercado laboral de la población que seguía migrando a la ciudad y desencadenaron en los conflictos por la tierra:

Se presentaron invasiones masivas a terrenos que dieron lugar a fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los invasores, como en el caso de «El Rodeo» y «El Amparo» con resultados sangrientos. Estas invasiones fueron seguidas por otras: Lleras Restrepo, La Paz, Lourdes, Caño Cauquita (hoy Andrés Sanín), Cañaveralejo, Valvanera y Aguacatal. En la misma década (1960-1970) también proliferaban los «barrios piratas»: Asturias, Bello Horizonte, Bellavista (parte), Doce de Octubre, El Carmen, El Cortijo, El Diamante, El Jordán, Jorge Eliécer Gaitán, Jorge Zawadsky, Lleras Camargo (ampliación), Manzanares (parte), Meléndez, Montebello, Primero de Mayo, Puerto Nuevo, San Judas, Santa Fé, Santo Domingo, Terrón Colorado (parte), Unión de Vivienda Popular y Vista Hermosa. Estos barrios no se crearon con base en invasiones, pero se levantaron en terrenos inadecuados, sin ceñirse a las normas urbanísticas, y carentes de servicios públicos. (Vásquez, 2001, pp. 266-267)

Estos barrios fueron producto también de los procesos políticos y organizativos que tuvieron los sectores populares gracias a los partidos comunistas y sindicalistas de la época, que incentivaron la toma de tierras, sobre todo en zonas de ladera occidental y la zona oriental y suroriental, pues antes se habían ubicado eninquilnatos y casas de familia y amigos en el centro de la ciudad, pero luego empezaron estos procesos en las periferias. Dado el déficit habitacional que venía desde los años cincuenta, se generan proyectos de VIS por medio del Instituto de Crédito Territorial (ICT), como lo menciona Vásquez (2001), con los cuales se construyen

los siguientes barrios, antes de 1959: Salomia, Las Delicias, Boyacá, Aguablanca, La Floresta, Atanasio Girardot, Santa Mónica Popular, y entre 1960 a 1970: La Campiña, La Nueva Floresta, El Troncal, Paso del Comercio, El Bosque, El Guabal, Chapinero, Pasoancho, Santa Elena, La Fortaleza, El Guabito, La Base, El Refugio, La Flora, La Merced, Vipasa, Departamental, El Mango, Calima, Villanueva, Periquillo, La Selva, Fenalco, Municipal y Puente Palma, barrios que fueron ocupados por sectores de clase media y algunos sectores populares, pues no todos podían pagar estas viviendas.

Tal y como se evidencia en la Figura 5, que es una noticia sobre «Cali y su déficit de vivienda», entre los años 1964 y 1969 el crecimiento de la ciudad se duplica y esto se veía representado en el surgimiento de asentamientos caracterizados como informales, los cuales además se ubicaban en las periferias consideradas como zonas vulnerables; particularmente, en la noticia se habla de las comunas 1, 20 y 11, de las que hacían parte Terrón Colorado, Lleras y Periquillo, además eran nombrados desde los medios de comunicación de la élite de la ciudad como «tugurios» (*El País*, 10 de julio de 1970), los cuales no contaban con una infraestructura apta para vivir ni con servicios públicos, por lo que el Estado debía atenderlos a través de política social pero estas familias no contaban con los requisitos para entrar a los programas de VIS que se dirigían a grupos sociales con ingresos aportados por la regularidad del empleo, así que este tipo de zonas continúan en expansión en esa década.

Hasta aquí se evidencia que la década del setenta ya dejaba una delimitación en el discurso de los agentes sociales de poder y decisión urbana sobre cuáles eran las zonas vulnerables de la periferia de Cali, marcadas como irregulares y sin acceso a los equipamientos básicos, barrios de autoconstrucción y zonas de riesgo que contrastaban con el discurso que estos mismos agentes creaban sobre la periferia del río Cali, pues los barrios como Centenario y El Peñón sí contaban con planos, arquitectos enviados desde Bogotá, acceso a servicios, reconocimiento y acompañamiento estatal. De ahí que se evidencie una apropiación simbólica del espacio

social que permitió la delimitación de las periferias vulnerables versus los barrios de progreso, y, por ende, un efecto de arrastre para la conformación de cada zona donde el tipo de vivienda, el equipamiento, la inclusión urbana y el *habitus* estaban bien diferenciados.

Estas formaciones espaciales de la llamada ciudad informal representan unos intereses de las clases altas, por lo cual se puede señalar que las noticias que llamaban «tugurios» a las viviendas informales buscaban crear un efecto de naturalización, como lo denomina Bourdieu (1999), de las periferias en Cali, suponiendo que el crecimiento en apariencia «desordenado» refleja un desarrollo unidireccional e inevitable de la ciudad, en la que los grupos sociales que dominan y deciden sobre el espacio borran su huella y responsabilidad.

Hemos visto que el núcleo social motor, o grupo dirigente, es también aquél que logró la ocupación y la apropiación de la zona céntrica del conjunto urbano. Por lo tanto, siempre encontraremos sus aspiraciones y luego sus juicios y decisiones en el origen de las normas y edictos que rigen tanto la zonificación como la sectorización. Del mismo modo son sus exigencias e intereses especulativos los que en forma hegemónica definen los precios de los solares y de las construcciones. Por fin, emite sus normas estéticas, sus modas y gustos, difundiendo sus patrones artísticos y de expresión cultural, las formas que eligió, sus estilos preferenciales, sus repertorios de códigos plásticos o de símbolos ornamentales. (Mosquera y Aprile-Gniset, 1984, p. 108)

Sin embargo, Garnier (1976) problematiza esa idea de ciudad en expansión anárquica y sin orden, al proponer que la planificación urbana tiene como propósito racionalizar el espacio, por ende piensa en cómo dividirlo, define qué zonas van a tener determinado uso y quiénes van a vivir en esas zonas, las políticas de viviendas buscan dividir el espacio, plantear distancias entre los grupos, como diría Bourdieu (1999), y todo en función de la posibilidad o no de reproducir el capital y la vida social (Flores, 2009). Y aunque los grupos de clases altas llamen desordenada y fea a la periferia, les sirve esta división espacial.

Cali, Viernes 10 de Julio de 1970

EL PAÍS 7-A

Cali y su Creciente Déficit de Vivienda

55 Por Ciento de la Población Vive en Tugurios

El déficit de viviendas en el país, fenómeno éste que se viene agudizando en los últimos años como consecuencia de la explosión demográfica, es el más grave problema social que tiene en los actuales momentos Cali, tercera ciudad importante de Colombia.

Este conflicto social, que tiene características similares en el Continente Americano, está siendo estudiado rigurosamente por los organismos oficiales y el sector privado, pero hasta el momento no existe una clara política estatal para implantar mecanismos que hagan posible su superación.

Al déficit habitacional hay que agregarle sus secuelas: desempleo crónico y siempre en ascenso, proliferación de "tugurios", desnutrición, bajos ingresos, analfabetismo y carencia casi total de estímulos de los gobiernos.

Por ejemplo, entre 1951 y 1954, las cuatro ciudades importantes del país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, pasaron de un millón y medio de habitantes en la población urbana a 3 y medio millones. Crecieron en dos millones, que comparados con los seis millones de aumento de población en Colombia en los años mencionados, significa un treinta por ciento de incremento urbano.

Cali, pasó de 245.000 habitantes en 1951 a 690.000 en 1965 y tiene cerca del millón en el 70, lo que la convierte en la ciudad con mayor tasa de crecimiento demográfico.

El crecimiento de las áreas urbanas de la ciudad, de 1960 a 1967, Cali crece en 591 hectáreas. Por éste fenómeno es necesario planificar económicamente la inversión en vivienda como sistematizar criterios y modelos de diseño que correspondan científicamente a la realidad arquitectónica y urbanística.

Déficit Cualitativo

Se puede afirmar que tanto en 1964 como en 1969 los barrios "tugurios" son los mismos; no aparecen nuevos asentamientos urbanos que puedan catalogarse como tales. Estos barrios son: Lleras, Terrón Colorado, Puerto Nuevo, Periquillo, Cauquita, El Rodeo, Fátima, Berlín, San Francisco, Bolivariano, La Isla y Marco Fidel Suárez.

Según cálculos oficiales desde 1969, 168 mil personas habitan en barrios "tugurios", en condiciones infimas de habitabilidad, pues no poseen clase de servicios y el estado de la construcción presenta el más alto grado de deterioro.

Estas 168 mil personas son el 18.34 por ciento de la población total de Cali, que son en estos momentos prácticamente un millón de almas.

Teniendo en cuenta la cifra anterior, en la capital del Valle habrá un déficit de 30.201 unidades —que será el equivalente en ese mismo año, de las unidades tuguriales de la ciudad.

Esta cifra, demasiado alarmante desde el punto de vista social y económico, necesita una inversión de ochocientos millones de pesos por parte de las entidades oficiales, que estarían por encima de las posibilidades financieras de las autoridades seccionales.

Por ello es indispensable que el gobierno, tanto seccional como Nacional, adopten una política de prioridades, pues técnicamente las 32 mil unidades exigen una solución inmediata, a corto plazo.

Dentro del déficit cualitativo de la vivienda, los "tugurios" están ubicados en la escala de ingresos económicos, en el grupo menos favorecido, cuyos ingresos oscilan entre \$ 500. Aun que teóricamente se afirma que la inversión y la amortización de vivienda por familia varía entre un 20 y 25 por ciento de sus ingresos mensuales, en el caso de los habitantes de los "tugurios" este standard se rompe completamente.

El grupo que habita los "tugurios" no puede pagar por su vivienda más allá de un seis por ciento de su ingreso mensual, viviendo en condiciones de total miseria.

Crecimiento de déficit

El déficit cualitativo en 1964 era de 14.996 unidades para 18.968 familias en una relación de 1: 1.4 (vivienda - familia) y para 9909 habitantes.

Estas cifras, comparadas con las anteriormente expuestas para 1969 permiten apreciar que entre 1964 y el 68, el déficit cualitativo de la vivienda en Cali se ha duplicado.

La ciudad crece en general de manera vertiginosa en su extensión física. En el período comprendido entre el 58 y el 64 Cali se ha incrementado en 207 hectáreas y entre 1966 y 1967 en 591 hectáreas. Se ha producido un salto en el último período que demanda grandes inversiones en servicio y esfuerzos.

Déficit Cuantitativo

Este se caracteriza en Cali por la inexistencia de los servicios públicos o por la existencia de servicios parciales y primarios como son letrinas y aljibes, y un estado de la construcción "económico", que no requiere erradicación sino mejoramiento.

El déficit cuantitativo de la vivienda tiene, como en el cualitativo en la escala de ingresos, grupos sociales bien caracterizados.

Los "tugurios" están ubicados en la escala de \$ 0 a \$ 500. Las áreas a rehabilitar están comprendidas entre la escala de \$ 500 a \$ 800 y de 800 a \$ 1.300 mensuales.

Igual que el anterior, este grupo urbano también ha crecido en forma rápida. Entre el 64 y el 69 se ha pasado de 20.000 familias a 50.000, duplicándose aquí el número de unidades. Las personas que habitan estos tugurios son grupos sociales que tienen ingresos de \$112,06 por persona al mes y de \$ 3.74 por persona al día y de \$ 200 por persona al mes y de \$ 6.66 por persona al día que son también ingresos de hambre.

Teniendo en cuenta todas las anteriores cifras oficiales, las anteriores cifras oficiales, las unidades a erradicar y las unidades a mejorar, a proximadamente el 55 por ciento de la población de Cali vive en condiciones altamente deficitarias en relación a la vivienda.

Según los estudios de este grave problema social y económico, en Cali esta situación se viene agravando hace cerca de 20 años, cuando comenzó la migración del campo al sector urbano, por el fenómeno de la violencia.



Figura 5. Noticia sobre Cali y su déficit de vivienda.

Fuente: *El País* (10 de julio de 1970).

A pesar de lo anárquico que pueda parecer, el crecimiento urbano no ha impedido nunca a las clases dominantes el apropiarse del espacio y utilizarlo para sus propios fines, modelarlo y ordenarlo en función de sus necesidades. Lo cual ha permitido a un autor afirmar que la burguesía es no sólo una clase dirigente sino también una clase urbanizante. (Garnier, 1976, p. 3)

Este planteamiento refuerza la idea de que la ciudad caracterizada como informal o ilegal no es en general un proceso espontáneo sin ningún tipo de agente intelectual, sino que las clases sociales

dominantes, dueñas de los suelos, del capital financiero, asociadas con la burocracia estatal, ordenan las zonas de interés como la cuadrícula del centro fundacional y barrios obreros aledaños y llegan a legalizar ocupaciones de hecho que la comunidad autogestiona de forma previa, y en otras zonas permiten que la informalidad se de en la medida que les favorece, bien sea porque se apropien de tierras que las élites no tienen interés de habitar, o porque al hacerlo, también pueden ser futuros acreedores de proyectos de interés social donde las clases bajas y medias necesariamente tiene que endeudarse por décadas.

Un ejemplo de estas zonas periféricas es la ribera de los ríos Cauca y Cali, con los jarillones, donde la construcción de viviendas era producto de las tomas a la fuerza, el loteo y la ocupación ilegal, pero incluso Uribe-Castro *et al.* (2017) refieren en su investigación que los grupos adoptan un esquema para la ocupación de tierras, como ocurrió con los procesos de configuración de Samanes del Cauca y Navarro. La primera parte consiste en identificar una zona baldía o no poblada, ejidos u otro espacio sin control del Estado que se pueda ocupar fácilmente, luego la apropiación se consolida con la construcción rápida de una vivienda que se hace de un día para otro, y después de establecer el asentamiento empieza o la legalización o el desalojo; es decir, el conflicto urbano por la exigencia del derecho a la vivienda versus las decisiones burocráticas de los entes planificadores, por lo que se presenta una medición de fuerza y poder entre los habitantes

y los agentes sociales que dominan el capital simbólico del espacio social.

Todo ese proceso de informalidad social y estatal de una ciudad desbordada (Uribe *et al.*, 2017) es lo que se muestra en la Figura 6, con la ocupación de los diques del río Cauca y del río Cali entre los años 1980 a 2000, en el que las acciones individuales y colectivas de toma de tierras se fortalecieron con la debilidad organizativa y de planificación del Estado para controlar las zonas ejidales de la ciudad. Aunque también refiere Mosquera (1984) que estas familias organizadas colectivamente mediante acciones de exigencia ante el Estado, logran suplir su derecho a una vivienda digna y cubrir las deficiencias que existían de administrar la expansión urbana al tiempo que crecía la población, y luego las administraciones municipales entraban a terminar esos barrios de autogestión que lideraban los destechados de la ciudad.



Figura 6. Panorámica del jarillón.

Fuente: *El País* (2016).

La ciudad desigual y marginal de finales del siglo XX

Describir el proceso de consolidación de las periferias en el siglo XX sirve para romper con el efecto de naturalización del espacio social que refiere Bourdieu (1999), es adentrarse en el proceso de superposición de capas espaciales, cómo se crea la cuadrícula colonial, cómo se orientó el impulso moderno y el desarrollo en los barrios de élite en el oeste del río, qué se permitió y se legalizó en la toma de tierras irregulares, y cómo se omitió el crecimiento irregular que posteriormente representó ventajas para un Estado incapaz de resolver el déficit habitacional, en suma, cómo se sostuvo la división espacial de una ciudad delimitada de sur a norte para unas élites, mientras otros grupos poblacionales quedaban fijados en la marginalidad de las laderas del oeste o la zona plana oriental, que incluso podrían cruzarse con características interseccionales de clase y etnia que muestran las privaciones sociales acumuladas para ciertos grupos, de forma histórica.

Sin embargo, la historia de la vivienda en Cali y los conflictos urbanos de finales del siglo XX no son exclusivos de la ciudad, sino que se relacionan con políticas económicas y de vivienda que son similares en otros países latinoamericanos y a nivel internacional, a la vez que comparten aspectos estructurales comunes como lo son, por ejemplo, las dinámicas de producción en las zonas urbanas, que desde la década de los años ochenta van enganchadas a la economía del libre mercado más que a la producción de las fábricas de los siglos XVIII y XIX que se dieron en Europa y se desarrollaron de manera opuesta para otras regiones como África, Asia y Latinoamérica, según explica Davis (2007):

La urbanización sin industrialización que se ha producido en África, América Latina, Oriente Próximo y gran parte del sur de Asia se debe más a una coyuntura política global, la crisis mundial de la deuda de finales de la década de 1970 y la subsiguiente reestructuración de las economías que realiza el Fondo Monetario Internacional en la década siguiente, que a ninguna ley de hierro del avance tecnológico. (p. 27)

Este contexto internacional es importante porque deja claro que las condiciones en que se erigieron las primeras ciudades industriales del naciente capitalismo de los siglos XVIII y XIX en las grandes potencias mundiales, no son las mismas en la actualidad y no fueron iguales para el surgimiento de las ciudades modernas en América Latina ni en otras regiones del sur global, de ahí que Davis (2007) plantee que el surgimiento de las ciudades de miseria del siglo XXI, que comparten las grandes metrópolis de más de ocho millones de habitantes, responde a la crisis económica mundial donde las zonas urbanas ya no son máquinas de creación de empleo, sino de reproducción de la pobreza en un nuevo orden que es el neoliberal, en las cuales, «en lugar de ciudades de luz elevándose hacia el cielo, la mayor parte del mundo urbano del siglo XXI se mueve en la miseria, rodeado de contaminación, desechos y podredumbre» (Davis, 2007, p. 33).

Por esto se plantea que desde 1970 se está presenciando el surgimiento de áreas urbanas hiperdegradadas, donde se acumulan la pobreza y bajas condiciones de vida, que en la mayoría de los casos se ubican en los círculos periféricos de las grandes regiones urbanas que ahora tienen dinámicas regionales y se convierten en conglomerados metropolitanos, entre ellos capitales como Buenos Aires o Bogotá. Incluso Davis (2007), citando a las Naciones Unidas, plantea que son los mercados informales e ilegales del suelo los que han resuelto la gran crisis de la vivienda urbana en los últimos treinta o cuarenta años.

Situación que además está conectada con las políticas de mitigación de la crisis de 1970, que generó recomendaciones de los organismos multilaterales para las ciudades latinoamericanas, tipo sustitución de importaciones, reducción de sectores públicos, disminución del gasto social, deuda extranjera y demás programas que consolidaron la caída de las clases medias y el empobrecimiento de las poblaciones rurales que migraron masivamente a las ciudades en los ochenta y noventa, donde ya no había posibilidades de industrialización y mucho menos protección del mercado nacional. Esta gran masa de mano de obra sin oportunidades laborales es la que llega a ocupar las áreas hiperdegradadas porque «el mercado formal de la

vivienda rara vez cubre más del 20 por 100 de las necesidades, por lo que la gente se construye sus propios chamizos, se refugia en alquileres informales y divisiones piratas del espacio o se instala en las aceras» (Davis, 2007, p. 31).

Lo que se vivió entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI fue una transición de las nuevas características de la vivienda contemporánea, donde el centro ya no es la producción e industrialización, sino donde coexiste la vivienda formal e informal en medio del mercado del suelo o la también denominada financiarización. De ahí que se resalte nuevamente la temporalidad escogida para esta investigación, que es entre 1990 y 2020, dado que muestra los cambios entre dos casos donde el tipo de vivienda contrasta, pues Terrón Colorado es producto de la formación de barrios periféricos en las décadas de los años sesenta y setenta en Cali, respecto a lo que ocurrió en los años noventa y dos mil, con las políticas de VIS, marcadas por el establecimiento de la economía neoliberal que en el caso de Colombia surgió en medio de una bienvenida al futuro que inauguró el presidente César Gaviria con la nueva Constitución de 1991.

Davis (2007) propone así una tipología de las áreas urbanas hiperdegradadas, que sirve de referencia para el análisis del caso de la ciudad de Cali:

Núcleo urbano: 1. *Formal:* vecindarios (de segunda mano y edificados para los pobres); vivienda pública y hostales, albergues, etc.; 2. *Informal:* ocupados (autorizados y no autorizados) y residentes en la calle.

Periferia: 1. *Formal:* alquileres privados y vivienda pública; 2. *Informal:* subdivisiones piratas (ocupadas por el propietario y alquileres); ocupados (autorizados incluyendo urbanización y servicios, y no autorizados). 3. *Campos de refugiados* [tipología que se usa particularmente para zonas de guerra]. (p. 49)

Respecto a esta tipología, la interpretación de los casos que se analizaron en la investigación está dentro de la periferia: en el caso de Suerte 90 en lo formal, al ser vivienda de política pública, y en los ocupados estaría Terrón Colorado, que al principio era no autorizado y luego entre lo informal y lo

formal. Por eso es algo novedoso para entender la actual configuración de la periferia diferenciada de Cali, en tanto se logró contrastar qué es lo común y distinto en estas dos configuraciones espaciales y qué conflictos urbanos subyacen a cada caso escogido. Para ello también sirven de referencia otros casos estudiados en la ciudad, que muestran características similares.

Por ejemplo, autoras como Franco (2020), con estudios de casos de barrios estatales como Llano Verde, demuestran que el déficit de vivienda en Cali para el año 2013 persistía tal y como ocurrió en los años setenta, y que el Estado sigue sin ofrecer soluciones reales para incluir a sus pobladores en la vida urbana, pues la crisis social, económica y de violencia que hoy enfrentan las familias de la comuna 15 son un reflejo de la marginalidad.

La marginalidad no solo es una condición que afecta las áreas informales más pobres, sino que también puede producirse como efecto no deseado en proyectos de vivienda social promovidos por el gobierno. Las condiciones de marginalidad que emergen rápidamente en barrios estatales, en todo caso, son la consecuencia tangible de la implementación de modelos de planeación y vivienda aceptados tácitamente por una sociedad que ha ido normalizando de manera gradual las divisiones socio-espaciales, la segregación racial y la inequidad urbana. (Franco, 2020, p. 221)

Las condiciones que enfrentan entonces los habitantes de Cali en el siglo XXI no se reducen únicamente a privaciones espaciales por el acceso a una vivienda, sino que tienen que ver al tiempo con la exclusión de derechos sociales básicos como el acceso a empleo, educación, seguridad, participación social, lo que convierte esta característica en un aspecto multidimensional.

La marginalidad urbana se define como un fenómeno multidimensional en el cual las comunidades desfavorecidas enfrentan, de manera sistemática y cotidiana, los rigores de la segregación étnico-racial, la informalidad, el hiperdesempleo y la violencia, en un contexto caracterizado por su participación limitada en la toma de decisiones. (Franco, 2020, p. 100)

De esta forma, la segregación que se instaló históricamente en comunas de ladera como la 1, la 18 y la 20, o en el oriente en la 13, la 15 y la 21, tienen que ver con las decisiones que se tomaron por los entes planificadores al pensar en un desarrollo de sur a norte en la ciudad; particularmente esto se relaciona con la construcción de las autopistas que también son líneas imaginarias que consolidaron la marginalidad de la autopista Simón Bolívar hacia el oriente y crearon otras condiciones de la autopista Sur Oriental hacia el oeste, así como lo muestran Castillo-Valencia *et al.* (2022):

Durante décadas, los tomadores de decisiones han utilizado mecanismos legítimos como la planeación urbana, para mantener la separación espacial entre estratos socioeconómicos bajos y altos mediante el establecimiento de líneas imaginarias que se han ido corriendo del centro a la periferia desde la era colonial y que se consolidaron durante el último cuarto del siglo pasado como fronteras invisibles a nivel de ciudad. Lo que vemos hoy en Cali es una división territorial en la cual tres vías primarias y un canal colector ejercen el papel de líneas divisorias entre la ciudad privilegiada y la ciudad de los pobres: la Vía al mar, parte de la Avenida de los Cerros y su prolongación en el costado occidental de la ciudad y la calle 70 y el Canal Interceptor Sur en los costados oriental y suroriental respectivamente. (pp. 147-148)

Estas condiciones se consideran sistemáticas en la medida que son históricas, pues no es posible estudiar las dinámicas barriales de la ciudad sin explorar las consecuencias de la expansión de los años ochenta, recordando que el espacio social es producto de las interacciones de los agentes sociales respecto a los lugares y cosas físicas, no un producto natural de la urbanización, sino ante todo un proceso histórico. Por eso la ciudad es un espacio social que puede medirse para analizar desde lo micro y lo macro su configuración, pues no solo es posible dar cuenta de las características de vulneración con las necesidades básicas insatisfechas de sus habitantes, sino que la forma en que se ordena la ciudad, en que se delimitan fronteras, el uso económico del suelo, la distribución de las zonas de producción y empresas, los barrios de élites y los

barrios de obreros, todos esas son decisiones que muestran la interacción de los agentes sociales con las instituciones en la disputa por el capital espacial.

Sumado a la segregación histórica de las zonas periféricas, la migración ha acompañado el déficit habitacional desde la década de los años sesenta, conjugando un crecimiento poblacional acelerado versus una ausencia de programas de vivienda que detuvieran el desfase, y esto se muestra en la Figura 7, pues se plantea que a 1969 la ciudad ya tenía un déficit aproximado de 19 000 viviendas y no existía una capacidad institucional que respondiera a esos servicios urbanos, por lo que la ocupación de hecho en zonas sin equipamientos o de riesgo, se volvía la opción más rápida para los recién llegados a la ciudad, lo que, por ende, mantenía su condición de vulnerabilidad social.



Figura 7. Noticia sobre el aumento poblacional de Cali.

Fuente: El País (11 de julio de 1970).

Los anteriores aspectos ya Wacquant (20001) los había identificado para los guetos en Norteamérica o París, pues la fórmula que se concentra en las zonas periféricas se traduce en desempleo, pobreza, bajo nivel educativo, violencia e inseguridad, que además no serán atendidas con interés por parte del Estado, puesto que termina haciéndose a un lado o llegando únicamente con el monopolio del uso de la fuerza. Esta forma de actuar de la institucionalidad para distribuir y ejercer control sobre las zonas de vulnerabilidad permite sostener la división de la ciudad en beneficio de unos grupos de poder y en detrimento de los habitantes de la periferia marginal, como ocurre con las comunas 1 y 21 históricamente, donde el Estado se ha manifestado haciéndose a un lado.

Si los territorios urbanos [barrios populares] segregados quedan por fuera de la regulación del Estado [incluso la presencia en algunas pocas dimensiones], al igual que otras esferas de la vida social, la dinámica de la violencia urbana puede tener mayores implicaciones. Esto significa que son insuficientes la desigualdad y la segregación con exclusión en los ámbitos urbanos para producir violencias urbanas con asesinatos. El tipo de orden social interno en las áreas urbanas segregadas es clave: quién y cómo se controlan las normas sociales de convivencia. En este caso entra el Estado con sus agentes pero también otras entidades, las familias, las organizaciones sociales que representan intereses colectivos y sus representantes, e incluso organizaciones de carácter ilegal con mayor o menor nivel de criminalidad que logran imponer un «orden» respetado por el conjunto de los habitantes de ese territorio urbano. (Quintín y Urrea, 2000, p. 32)

No obstante, las características actuales de la ciudad no se quedan en la prevalencia de estas problemáticas estructurales sino también en su ánimo de lucha y organización social. Por eso se pretende cerrar este capítulo señalando que la historia de la defensa de la vivienda digna en Cali es algo que ha permanecido como la marginalidad o la segregación en medio de contextos violentos. Si bien el surgimiento de los movimientos de los desechados se puede ubicar en la década de los cuarenta y con un auge en los años setenta —como lo

estudió Gilma Mosquera (1984)—, en el siglo XXI los movimientos sociales que enfrentan la renovación urbana del Plan Jarillón de Cali o la renovación del centro en manos de la Empresa de Renovación Urbana (EMRU) dan cuenta de ello.

El caso de la implementación del Plan Jarillón de Cali destaca como un referente de lucha urbana en la ciudad, pues a partir del año 2014 la resistencia de varios habitantes de la zona para evitar el desalojo forzoso fue protagonista a través de varias acciones colectivas por parte de la comunidad, que luego se entrelazaron con otros procesos organizativos barriales como en San Pascual y Julio Rincón. Particularmente resalta el proceso comunitario que encabezaron los habitantes del Jarillón Floralia, al norte de la ciudad, quienes conformaron un comité denominado Asojari y se sumaron al Comité por la Defensa del Territorio, que recogía varios grupos de la ciudad.

A finales del mismo año y por varios medios de comunicación, afirman los habitantes del Jarillón Floralia que se dieron cuenta que el reasentamiento ya no era un proceso voluntario, sino forzoso, y que muchas personas de la zona de Vegas y Venecia habían sido desalojadas por parte de la Secretaría de Gobierno. En medio de dicho proceso, algunos líderes de Vegas y Venecia empiezan a difundir su problemática y a asistir a diversos espacios organizativos de la ciudad como el Comité por la Defensa de Cali (CDC), donde participaban líderes de diversos procesos organizativos de San Pascual, Estación Piloto, Zonas de Ladera, el Sena, Sintraemcali, estudiantes de la Universidad del Valle, de la Universidad Javeriana e Icesi, Congreso de los Pueblos, Polo, Brisas de Comuneros y Julio Rincón. En el CDC también participaba Asojari, una asociación creada por los habitantes del Jarillón Río Cali que llevaba 10 años de haberse constituido. (Ladino-Mosquera, 2016, p. 21)

Otro proceso para destacar ha sido el de los habitantes del barrio San Pascual, en el centro de Cali, dado que el proyecto de renovación urbana liderado por la alcaldía de Cali pretende gentrificar la principal zona comercial de la ciudad, con la finalidad de renovar los barrios El Calvario y San Pascual, en donde se proyecta construir nuevos centros comerciales, proyectos VIS y mejoramiento de la

infraestructura urbana. Sin embargo, la EMRU tiene un plan de gestión social que busca compensar el valor de las viviendas de los habitantes de ambos barrios, pero no tienen un proyecto de reasentamiento, por lo cual los habitantes de El Calvario denunciaron que fueron desplazados de su barrio y no contaron con las garantías para acceder nuevamente a viviendas, por lo que hay una JAC en el barrio San Pascual que se opone al proyecto y llevan años resistiendo a la renovación.

Los vecinos del barrio San Pascual poseen una larga historia de reclamos ante la implementación del Plan Parcial en su territorio y aunque la EMRU realizó varias acciones para interactuar con la comunidad, nunca detuvo el avance del proyecto. Este tipo de iniciativas, ligado a lo que observaron previamente en la implementación del lote donde está la Fiscalía y Plan Parcial El Calvario, hicieron posible el surgimiento de las asociaciones vecinales que generaron diversos reclamos y materializados en protestas colectivas en la vía, impresión de panfletos, comunicados, asistencia a espacios de participación como el Concejo Municipal, reuniones con diversos líderes, políticos, organizaciones y denuncias en los medios de comunicación. (Arboleda, 2019, p. 41)

Algo característico de las zonas en las que están implicados estos proyectos de renovación es que cargan con el efecto simbólico del estigma, pues el barrio El Calvario se conoce en Cali como la zona de la «olla», donde se encuentran habitantes de calle que consumen sustancias psicoactivas y reciclan, lo que hace de la zona un lugar de acopio de residuos diarios, de condiciones de vulnerabilidad extrema, inseguridad, y esta situación ha sido una ventaja para que los funcionarios de la burocracia alta y baja de la alcaldía consiguieran despejar la zona en detrimento del patrimonio de los habitantes.

La ciudad de los años setenta enfrentaba una crisis de vivienda en medio de una desaceleración económica y una reducción del empleo en las nacientes industrias y manufacturas que impedían el poder adquisitivo de la vivienda estatal o los créditos, lo que generó un aumento, a nivel nacional incluso, de la toma de tierras de forma individual y colectiva. Ese proceso es el que se ha dado desde

los años ochenta y se mantiene en las dos décadas del siglo XXI, y ha tenido expresiones concretas en los jarillones de la ciudad y las laderas, entre otras zonas de segregación socioespacial. De ahí que hoy se puedan identificar luchas sociales por el derecho a la ciudad y defensa de la vivienda digna con una variedad de actores, que es lo que también se quiere contrastar con la movilización de los años setenta:

Las condiciones descritas llevan a sumarse a las luchas por la vivienda a nuevos sectores sociales. No se trata ya única y exclusivamente de los inmigrantes de los años 50 y 60. Ya no participan solo artesanos, obreros y subempleados, sino también empleados oficiales y privados, pertenecientes a los estratos inferiores de las capas medias. La gran mayoría de las familias que intervienen en las movilizaciones son oriundas de la ciudad o tienen una gran experiencia de vida urbana. (Mosquera, 1984, p. 133)

En el siglo XXI los llamados «destechados» no han desaparecido, la ciudad sigue sin la posibilidad de otorgar vivienda digna a su población, las familias enfrentan los altos costos del arriendo o lo complejo del endeudamiento de la VIS; al mismo tiempo que afrontan la institucionalidad de la alcaldía, los conflictos hoy se enmarcan en la renovación urbana de zonas de riesgo no mitigable donde la solución es el desalojo; en la exigencia por el respeto al medio ambiente con las constructoras que secan humedales o contaminan ríos; en la soledad institucional donde el Estado no llega con política social sino con la fuerza pública. Los habitantes de este siglo siguen esperando una calidad de vida urbana en el lugar donde nacieron, ya no se habla de migrantes de las oleadas de violencia en Colombia, hoy los destechados tienen generaciones que siguen creciendo hace más de tres décadas, luchando por una inclusión verdadera en la ciudad, y eso es lo que se buscaba con el estudio de dos casos diferenciados como Suerte 90 y Terrón Colorado.

Aquí es importante ubicar la realidad de la vivienda en Colombia y en Cali, con las características que tomó la política de vivienda a nivel internacional a partir de los años setenta, pues como lo muestra Davis (2007), los programas de desarrollo

impulsaron en todo el mundo la deuda externa para la construcción de vivienda social no como una manera de erradicar la pobreza y la hiperdegradación que dejaba la economía de mercado, sino como una reforma a las políticas de bienestar por parte del Estado y las empresas privadas. Es así como, «entre 1972 y 1990 ayudó a financiar un total de 116 proyectos básicos de urbanización y servicios o planes de intervención en áreas hiperdegradadas de 55 países» (p. 101).

La intermediación del Estado fue desapareciendo después de los setenta para darles cabida a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a las empresas privadas que funcionan con los recursos de las entidades internacionales como el Banco Mundial, que al final terminan generando ganancias financieras con la construcción de vivienda en los años noventa, ya no con un sentido subsidiado sino con la posibilidad de acceder a créditos de vivienda y tener títulos sobre el suelo, por lo que las clases más desfavorecidas que no cuentan con experiencia crediticia o ahorros quedan por fuera de las nuevas políticas, como se evidencia en Colombia y Cali para las VIS. Además, esta situación es un factor que socava el sentido solidario que imperaba para las viviendas de autoconstrucción de los años cincuenta y sesenta, pues priman los intereses individuales por acceder a la política.

La regularización también socava la solidaridad entre los colonos, al individualizar la lucha por la vivienda y a dar a los propietarios intereses diferentes del resto de los pobladores. Los inquilinos, ocupantes y los desplazados de la ciudad se muestran más radicales y más dispuestos a las manifestaciones antigubernamentales que aquellos que, de hecho, han sido comprados por el gobierno a través de diferentes políticas de vivienda. (Davis, 2007, pp. 113-114)

La situación de hiperdegradación en los países denominados potencia, al igual que en el sur global como América Latina, es resultado de la política internacional donde la financiarización es la que guía el acceso a derechos sociales como la vivienda, que afecta de manera distinta al continente respecto a otros, indicando que hay agentes sociales que

organizan esas políticas, que invierten en los organismos internacionales, que se benefician de las reducciones del gasto social que hacen las zonas más empobrecidas del planeta, y desde ahí es que cobra sentido comparar el caso de Cali con otras regiones del mundo, retomando el análisis de las relaciones sociales de producción que a inicios del siglo XXI, como menciona Davis (2007), dejan a América Latina con coeficientes de Gini 10 veces más altos que los de Asia, 17,5 veces más altos que los que pertenecen a la OCDE y 20,4 veces más altos que los del este de Europa.

La cara del oriente y la ladera en el siglo XXI

En la actualidad la forma en que el Estado colombiano puede medir la vulnerabilidad y además definir los criterios para atenderla mediante focalización es la medición del Sisbén III, en la cual el puntaje promedio para ingresar a los subsidios es de 42,3, siendo esta la tasa que mantienen las zonas de ladera y el oriente de la ciudad, según la medición del año 2019; es decir, que se sostiene la marginalidad histórica de estos habitantes que no logran satisfacer el índice de necesidades básicas a lo largo de generaciones.

A nivel geográfico, la mayor parte de la población sisbenizada se encuentra en la zona oriente donde se concentra el 31,1 % (comunas 14, 13 y 15 respectivamente). Así mismo, en este sector también destaca la alta concentración de personas en las comunas 6 y 21 (8,6 %, respectivamente). Por otro lado, el 14,4 % de la población vulnerable registrada en el Sisbén se encuentra en la zona de ladera (comunas 18, 20 y 1, respectivamente). (Urrea y Franco, 2020, p. 12)

Llama la atención que la situación de vulnerabilidad no solo es latente en la comuna 1 sino que se comparten los índices con las comunas 18 y 20, pues como lo mencionan Urrea y Franco (2020), particularmente en la comuna 1 habitan a la fecha de la medición 88 432 personas en 19 071 viviendas y ahí se hallan los barrios Terrón

Colorado, Palermo, Aguacatal, Bajo Aguacatal, Altos de Santa Rita 1 y 2, Palmas 1 y 2, El Realengo, Villa Mar, Patio Bonito, Bosque Municipal y Vista Hermosa. La mayoría de sus hogares se encuentra en nivel 1 del Sisbén, como lo muestra la Figura 8, lo cual equivale a 44,7 puntos (Urrea y Franco, 2020).

En la Figura 8 se visualiza además que la concentración de la vulnerabilidad en las zonas de estudio es mayor y de alguna manera se sostiene la idea clásica de periferias vulnerables en los bordes de la ciudad, que además están asociados con las divisiones geográficas y urbanas que ayudaron a mantener esa segregación, como ya lo mencionaban Castillo-Valencia *et al.* (2022), al referirse a la autopista Simón Bolívar, que atraviesa todo el medio de la ciudad; el canal interceptor sur, al oriente; y la avenida de los cerros, al oeste.

En este orden, también se retoman aquí los indicadores socioeconómicos que clasifican los hogares en el Sisbén para tener un detalle de las características de la población, en cuanto a salud, educación, vivienda, NBI y hacinamiento, con lo que se logra identificar que por privación de derechos los hogares de la comuna 1 están en su mayoría en condición de pobreza extrema, sumado a que en la zona se encuentran varios de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto (AHDII) de la ciudad, los cuales son: Las Palmas I y II, Montañitas, Patio Bonito, El Realengo, Puente Azul-Bajo Aguacatal, La Lengua, Alto Aguacatal, Alto Aguacatal-El Diamante, Las Malvinas, Bellavista, Vista Hermosa, Atenas, Pilas de Cabuyal, La Fortuna, Arboledas, Chivirico, Brisas de Los Andes, Villa de Las Palmas II, que corresponden al 11,8 % de los 23 asentamientos que existen en Cali (Tabla 7) (Urrea y Franco, 2020).

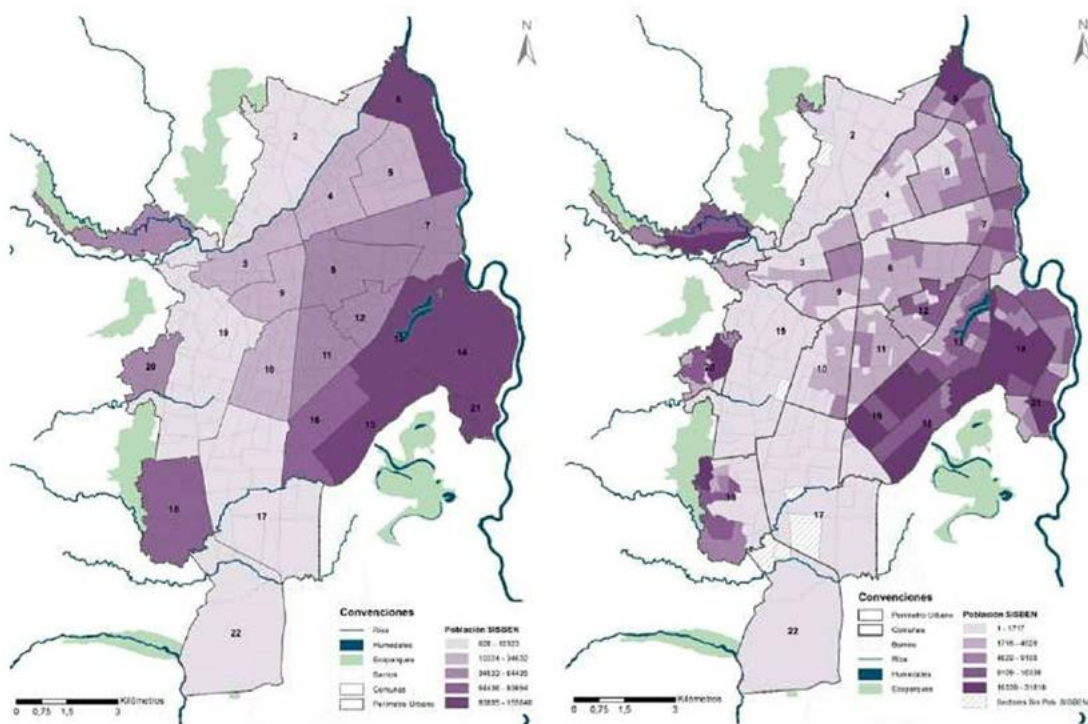


Figura 8. Mapa de beneficiarios del Sisbén.

Fuente: Urrea y Franco (2020, p. 12)

Tabla 7. Indicadores de la comuna 1 y zona oriental.

Indicadores socioeconómicos	Comuna 1	Zona oriental
Clima educativo	7,4	7,3
Salud-no afiliado %	29,0	29,3
Salud-EPS contributiva %	24,4	22,1
Salud-EPS subsidiada %	46,6	48,6
Vivienda-Arriendo %	51,0	53,8
Vivienda-Propia %	26,1	29,8
Vivienda-Otra condición %	22,9	16,3
Hacinamiento %	26,3	22,1
NBI	29,9	27,9

Fuente: Elaboración propia, con base en Urrea y Franco (2020).

Aquí vemos cómo se condensan las características de las formas contemporáneas de desigualdad urbana que define Wacquant (2001) en su libro *Parias urbanos*, en donde las zonas de marginalidad se caracterizan por la exclusión sobre la base del color y reforzado por la clase que es visible en la zona plana oriental de Cali, en la que ha habitado históricamente población migrante del Pacífico, lo que hace del lugar que sea culturalmente homogéneo en cuanto a expresiones étnicas, prácticas culturales, dinámicas de reconocimiento racial y potencialidades artísticas que resaltan alrededor del reconocimiento afro, al mismo tiempo que comparten historias de migración, víctimas del conflicto, baja movilidad social y encerramiento simbólico entre el río y la avenida Ciudad de Cali.

Además, la comuna 21, donde se encuentra el barrio, presenta baja presencia estatal, en donde, por ejemplo, los habitantes de Suerte 90 refieren que desde que se constituyeron como barrio en el año 2000 no han recibido censos posteriores como urbanización, que incluso tienen muchos problemas con el servicio de energía e Internet, y es muy difícil que lleguen a hacer los arreglos de forma ágil, por lo que han optado por tomar otras empresas no estatales para el servicio de Internet. Situación similar en cuanto a inseguridad, pues a pesar de estar cerca al CAI de Potrero Grande, la policía tarda mucho

en atender cualquier caso y los habitantes optan por enfrentar la situación de forma individual como poner rejas en sus negocios (Santiago Aristizábal y Juan de Dios Henao, comunicación personal, diciembre de 2023 y marzo de 2024, respectivamente).

Por su parte, la zona de ladera en la comuna 1 tiene unas diferencias multiétnicas en cuanto a la población, en donde habitan migrantes del centro de Valle, del Pacífico, del sur, pero también gente nacida en Cali, población indígena, afro, entre otros, que dan cuenta de la heterogeneidad étnica y cultural, por lo que en Terrón Colorado aplicaría más una exclusión sobre la base de clase, como lo explica Wacquant (2001), en donde es posible ver mayor presencia de instituciones estatales por el tiempo que lleva constituido el barrio, que además es producto de autoconstrucción y agencia colectiva de sus primeros pobladores a partir de la toma de tierras y la organización comunitaria para obtener servicios. Así mismo, se aprecia mejora en las viviendas y adecuación del entorno barrial, incluso la recreación. Por lo tanto, la gestión de los líderes y el constante relacionamiento con las entidades hace que las instituciones oficiales tengan mayor presencia y es notoria la solidaridad entre los vecinos para resolver situaciones colectivas, a diferencia de los habitantes de Suerte 90, donde la ruptura del tejido social es más evidente.

Pero si es en relación a la solidaridad, la gente aquí financia un pesebre, una escuela de fútbol [...] entonces mucho del desarrollo de esta comunidad es eso, la gente está acostumbrada a que, si nos toca salir a la vía, pues salimos, y por eso precisamente en el paro pasó lo que pasó, nosotros salimos a bloquear La Portada y no permitimos que llegara gente de afuera [...] porque acá permanentemente han intentado quitar los camperos, quitar los buses de Recreativos, desalojar ciertas zonas, y en varios momentos nos ha tocado, como se dice: «tocó salir a bloquear la vía al mar», entonces es como si el Gobierno no nos escucha y las instituciones no nos escuchan, porque sí hay una tendencia del sector público y es, o es una comunidad pobrecita que hay que asistir o es una comunidad peligrosa que hay que mantener ocupada. (Orbay Beltrán, comunicación personal, 27 de marzo de 2024)

De esta forma se revela que los líderes de Terrón Colorado reconocen la solidaridad como un valor comunitario que han practicado durante años, que además saben que es una herramienta útil para ser escuchados por las instituciones y sus funcionarios, por eso reconocen las coyunturas que son oportunidades políticas para «salir a la vía», como ellos lo llaman, y lo más interesante es que estas relaciones se han sostenido en el tiempo. Por ejemplo, en la siguiente nota de campo se muestra cómo ante la falta de un servicio público en un barrio que lleva ya más de sesenta años de fundación, la acción colectiva sigue siendo una opción:

Mientras Orbay se sentó a recibir una llamada, era un señor que al parecer le preguntaba si aún continuaba el bloqueo, pues le respondió: «No, el bloqueo ya lo quitaron porque ya volvió el agua, y estábamos haciéndolo intermitente desde la mañana»; posiblemente la otra persona le preguntaba qué había pasado y continuaba explicando: «Hablé con alguien de Emcali y me dijeron que por la sequía no estaba funcionando bien el bombeo desde el río Cali, y tampoco desde La Elvira, entonces les tocó mandar agua desde la planta de Puerto Mallarino, pero como es tan lejos, bombear hasta bien arriba de Terrón es difícil, porque cerca al puesto de salud sí ha habido agua todo el tiempo, pero acá arriba no». Luego le explicó a la persona con la que hablaba por teléfono que debía colgar porque le iban a hacer una entrevista, pero insistiendo «Usted de todas formas sabe que así no sea todo el barrio, si es necesario salir y cerrar, se cierra y se hace presión porque la gente necesita agua». (Diario de campo, barrio Terrón Colorado, 27 de marzo de 2024)

Hasta aquí recogemos la imagen de dos periferias que a pesar de habitar de forma diferenciada el espacio y tener maneras distintas de gestionar los conflictos urbanos, comparten estadísticas comunes sobre las NBI, ubicándose en el mapa de segregación de la ciudad como las que tienen mayor índice de vulnerabilidad social, similares a los casos que ya ha retratado Wacquant (2001) para las ciudades desde los años ochenta y noventa en el resto del mundo, donde hay población joven que acumula privaciones, trabajadores manuales mal pagados, personal de servicio no calificado, minorías y

migrantes que llegan a estos barrios como efecto del sistema productivo y la desigualdad de la cuestión social, que además es atendida por políticas urbanas neoliberales que cada vez asumen menor responsabilidad en la respuesta a los derechos y fragmentan las políticas de bienestar, como plantea Ziccardi (2001).

La ciudad del siglo XXI no dista mucho de la ciudad de finales de siglo XX y a pesar de las particularidades de Latinoamérica y de Colombia, la comparación con otras zonas del mundo es recurrente, pues a nivel internacional también rige el mismo sistema económico capitalista que es el que sigue ordenando el espacio en tanto se divide y se usa en función de la reproducción de relaciones económicas y sociales, pero al mismo tiempo tienen procesos diferenciados por los sujetos que habitan en cada periferia (Flores, 2009). Aquí, en los casos a comparar, hay una hipótesis inicial de que los habitantes de Suerte 90 tienen menos posibilidades de moverse dentro de la ciudad y pesa en ellos la base del color y clase que los cerca simbólicamente con el resto de la ciudad, mientras que los pobladores de Terrón Colorado, al estar en una vía al mar, donde no hay cerco vial sino que son punto de entrada y acceso, se mueven con mayor facilidad dentro del espacio social y poseen mayor movilidad dentro de otras zonas aledañas, aunque a veces se encuentren con las dificultades que impone el *efecto club* que separa a ciertas clases sociales, como lo explica Bourdieu (1999).

Hasta aquí dejamos el recorrido histórico y en los próximos dos capítulos se detallarán los procesos de formación de los dos barrios y la dinámica de las comunas en las que surgieron. El objetivo seguirá siendo establecer las semejanzas y diferencias en la construcción periférica de Cali, donde por ahora es clara la expresión física de la segregación y la marginalidad, como también la expresión simbólica de la degradación, exclusión y distancia social con el resto de zonas de la ciudad, por lo que ambos casos cargan el estigma territorial del que también habla Wacquant (2001), en donde quienes experimentan la ciudad desde la vulnerabilidad, se encuentran privados de una vida digna, y reciben el estatus de «anomalía social», de «mancha pública» por parte de los demás agentes sociales que se

ubican en posiciones de dominación y ventajas sobre los desposeídos, no solo físicas y económicas, sino la desposesión simbólica de «parias sociales», de no sentirse parte de ni moverse con facilidad dentro de la ciudad, de encontrarse con barreras de *habitus* para cruzar las fronteras que imponen las clases sociales altas sobre la misma distribución que ellos diseñan para la ciudad que han trazado en planos desde los años cincuenta en Cali.

La Cali del siglo XXI es, en consecuencia, producto de una estructura económica y social que se ha materializado desde el centro hasta los márgenes, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, que además se edificó sobre el vestigio de la ciudad colonial que ya venía igualmente demarcada y delimitada entre las élites colonas y criollas que se establecieron en la plaza central y dejaban hacia la parte baja de El Calvario y el matadero a los esclavos negros e indígenas, más adelante obreros que debían ubicarse en dirección opuesta a los nacientes barrios del oeste como el Centenario, entre otros, marcando un crecimiento desde el centro fundacional hasta las zonas más lejanas del núcleo de producción y decisión política y económica, respondiendo a la cuadrícula colonial que tan bien describieron Mosquera y Aprile-Gniset (1978).

La ciudad reciente sigue recibiendo población migrante, que hoy mantiene la segregación del borde, que no puede controlar el poblamiento informal y decide bajo parámetros distintos qué zonas deben ser habitadas para el reasentamiento y la focalización de políticas sociales, y qué otras

para los estratos alto, grupos de poder, élites e incluso extranjeros que entran en el mercado por la disputa del suelo urbano, evidencia que la aparente «anarquía» de la periferia y la «poca participación» del Estado y los agentes de poder en el control de estas áreas, en realidad es una condición histórica y estructural que ha beneficiado siempre a los mismos grupos sociales, como lo explica Garnier (1976):

La especulación del suelo, la segregación socio-espacial, la congestión del centro de las ciudades, el aislamiento de ciertos barrios periféricos, la insalubridad, el sub-equipamiento de zonas de hábitat reservadas a los obreros son contemporáneos al surgimiento de la «revolución industrial». A pesar de ello, durante decenios la burguesía ha permanecido indiferente a estos fenómenos, hasta el punto de no percibirlos como «desorden» [...]. El «desorden urbano» amenaza cada vez más con destruir este mismo orden. En otras palabras, el espacio resultante del dominio de la lógica del beneficio está a punto de convertirse en un obstáculo para la perpetuación de este dominio. (p. 4)

Queda aquí también abierto el análisis sobre la forma en que las políticas urbanas, desde las entidades estatales en conjunto con los grupos de poder, han atendido el «desorden urbano» en la medida que afecta sus posibilidades de rentabilidad y reproducción económica sobre el espacio, algo que explicaremos en la historia de los dos barrios para concretarlo en el cuarto capítulo.

CAPÍTULO 3

CONFIGURACIÓN DE LA PERIFERIA OESTE DE CALI A PARTIR DEL CASO DE TERRÓN COLORADO

Introducción

En este capítulo se presenta la configuración del barrio Terrón Colorado, el origen de sus pobladores, las transformaciones espaciales, el relacionamiento con las entidades estatales y demás agentes sociales, acceso a servicios y características actuales. Para esto se retoman las fotografías del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca, archivos de noticias de *El País* e investigaciones sobre la zona donde se incluyen diarios de campo, entrevistas y conversaciones informales con algunos de sus habitantes.

El objetivo es caracterizar la formación de una periferia en la ladera oeste de la ciudad de Cali, señalando sus formas particulares de habitar y la construcción de trayectorias de participación de sus habitantes que ha sido clave en la consolidación del barrio. De fondo se examinan también las características de la comuna 1 de la ciudad y su relación indispensable con zonas aledañas al ser un corredor hacia Dagua, Buenaventura y algunos corregimientos de la ciudad.

Sobre todo hacer énfasis en la temporalidad en la que se forma el barrio y el proceso de autoconstrucción como característica de las periferias populares que señala Beuf (2012), en el que destacan las alianzas comunitarias, la solidaridad vecinal y el apoyo de otros grupos sociales que fortalecieron la organización colectiva desde sus apuestas políticas, religiosas e incluso de cooperación internacional, que Rodríguez y Bermúdez (2013) identificaron en barrios de Cali donde las organizaciones de base han apoyado al mismo tiempo con programas sociales de bienestar comunitario.

Sobre los orígenes del barrio

Es interesante indicar que, en la historia sociológica de los asentamientos humanos marginales, sobresalen temas de gran importancia como el mito de su fundación, las estrategias de movilización para el ingreso o salida del sector y, sobre todo, las peripecias relacionadas con el acceso a los servicios básicos y el saneamiento, entre los que se destacan los temas del abastecimiento de agua.

Para empezar con el recuento histórico de la configuración de un barrio como Terrón Colorado, se retomarán aquí distintas fuentes de archivo que se triangularon con fuentes primarias de entrevistas para comprender la configuración de una periferia como la comuna 1, dadas las características históricas de Cali, como se analizó en el capítulo anterior. Una fuente inicial corresponde a los tomos de *Historias de mi barrio* que publicó la Biblioteca Departamental entre 1984 a 1986, que reconstruyen la formación de varias zonas de la ciudad.

Refieren Muñoz y Hernández (1986) que el doctor Antonio Mondragón fue pionero del barrio y basándose en un artículo del código fiscal, estableció que los caminos públicos debían dejar un área libre de veinte metros a lado y lado para cualquier variante, el señor Mondragón constituyó una junta para hacer cumplir ese derecho, lo cual quedó por escrito en la Notaría 3 de Cali en el año 1946. Por otro lado, el barrio estaba distribuido desde donde comienza la loma que está ubicada frente a Santa Rita hasta el sector que lleva como nombre La Legua.

Después del asesinato del excandidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, se dio inicio a una oleada de violencia, en la cual el barrio Terrón Colorado también resultó afectado, dejando como resultado el desalojo de varios «ranchos» ya que muchos de sus habitantes fueron amedrentados para abandonar sus hogares, los cuales fueron vendidos posteriormente a extraños. (Bueno de Montoya *et al.*, 1984)

Otro dato para resaltar es el hecho de que el señor Antonio Mondragón, como pionero en la fundación del barrio, consiguió la personería jurídica y creó unos estatutos en los que se consignaba el nombre del barrio como Avenida de los Conquistadores, puesto que por ese territorio pasaron Bolívar y muchos de los conquistadores que reseña la historia. La primera casa que existió en el barrio La Legua fue la del señor Gabriel Quintero, el propietario de ella. Al tiempo fueron llegando más habitantes, entre ellos una pareja de esposos con su hijo en brazos y otras como la del señor Edilberto Martínez (líder reconocido) y su esposa,

también el señor Dominicio Gómez, quien suministraba el agua en un caballo viejo, pues el agua era traída de la bocatoma de la planta (Muñoz y Hernández, 1986).

En el mes de enero de 1948 con motivo de la llegada del Dr. Humberto Guzmán en compañía del Dr. Alfonso Barrera a quienes les debemos la estadía en este humilde barrio, dice Isaura a quien recuerdo con lágrimas en mis ojos por el recuerdo que tengo de ellos, pues de tanto rogarles nos prometieron visita y que si no había 30 o más familias no adjudicaban. En este mes ya había más de 300 casitas, así fue como la primera semana de enero del 48 nos visitaron y nos adjudicaron a cada uno el ID y nos citó para darnos el permiso que todavía tenemos con fecha de 20 de enero de este año. (Bueno de Montoya *et al.*, 1984)

Siguiendo con los relatos de *Historias de mi barrio* (1984), inició la variante de Terrón Colorado hacia la carretera al mar, quitándose así el servicio de transporte (buses) a la parte baja del barrio; al ser retirado el servicio de transporte y no estando todavía la carretera pavimentada un habitante del barrio prestaba el servicio en una camioneta vieja que se estacionaba en la calle 12 con carrera 11, por un valor de 15 centavos. En cuanto al servicio del agua, se menciona al señor Onorio, al cual le decían «El aguador», quien suministraba el agua que transportaba en caballos y la vendía a 60 centavos las dos latas; otro residente del barrio traía ladrillos a 28 y 30 pesos el millar. Los habitantes del barrio llegaron de diferentes partes de Colombia y del exterior del país: del barrio San Antonio de Cali, de España, Caldas, Cauca, Medellín Nariño, Cali, Huila, Antioquia, Italia, Buenaventura, Popayán, Valle, Bogotá, Tuluá, Pasto, Tolima y Puerto Tejada.

Por fin en el año 1959 vinieron y nos colocaron autorización para colocar postes por nuestra cuenta, se seguía estudiando cómo y de dónde cogían la luz para ponerla en el barrio (todo fue por nuestro esfuerzo personal y comunitario). La Junta de Fomento y Ornato solicitó la luz y el acueducto, nos atendió el Dr. Alfonso Barberena; en diciembre de ese mismo año tuvimos servicio de luz. (Bueno de Montoya *et al.*, 1984)

Tan importante como el agua, a los pobladores les interesaba también resolver varios asuntos: los del culto, la seguridad y la definición de un nombre simbólico que representara la vida cotidiana del sector. En lo referente al culto, hacia el lado norte del cruce de la carretera al mar con la avenida del barrio, hicieron los primeros moradores un rancho de paja para rendir culto al Señor; luego, algunos benefactores construyeron la iglesia católica. A su vez, la primera inspección de policía funcionó en la parte baja del barrio y posteriormente la trasladaron al centro del barrio y, por último, la ubicaron más abajo, para luego funcionar en una construcción nueva, enseguida del puesto de salud, es decir, donde comienza el parque Tory Castro.

En el año 1946 llegué a Cali en compañía de mi esposo, él vino contratado como Cabo de obreros desde Buenaventura. Él tuvo la idea de construir un campamento a orillas del camino de herradura en donde solo había canelones y rastros. (Bueno de Montoya *et al.*, 1984)

Desde el inicio de su poblamiento, el barrio ha cambiado de nombre en varias ocasiones, al principio se le llamó Los Conquistadores, San Antonio, Gaitán, María Eugenia, y antes ya se le había llamado Terrón Colorado, por lo cual se retomó este nombre para dejarlo como definitivo. Lo importante es que entre el siglo XVI y a mediados del siglo XX fue esta zona el corredor entre Cali y Buenaventura y los colonizadores nariñenses y caucanos que navegaban el río Dagua y eran arrieros de las laderas de Felidia, El Palmar, El Queremal, San Bernardo, empezaron a poblar el barrio (Cubillos, 2015).

El primer sector poblado de la comuna fue el de El Tablazo. Allí vivió Fidel Puente, «Cajitas», el alcabalero encargado de cobrar el impuesto a la carga de los arrieros que transitaban por el camino nacional a Buenaventura, impuesto que se cobró hasta 1917, época en que se puso en funcionamiento el Ferrocarril del Pacífico. En 1925, el señor Puente vende parte de sus tierras, a quienes serían las familias fundadoras de la comuna. Estas primeras familias eran de Antioquia, el Viejo Caldas, Tolima Grande, Buenaventura, Cauca, Nariño y de otros barrios de Cali. En especial sureños, quienes aún son la población mayoritaria de la comuna. (Cubillos, 2015, p. 2)

Estos relatos reviven el historial de Cali como corredor del suroccidente colombiano y receptora de población del interior del país, además del sur y de las costas occidentales, característica que hasta el día de hoy sigue marcando su proceso de expansión poblacional, de la mano de la migración interna, pues como se ve en el caso de Terrón Colorado, fueron esos caminos de herradura que abrían los trabajadores buscando descanso, mejores oportunidades o fines económicos, los que más adelante traerían nuevos habitantes y barrios a la ciudad.

En esa historia también están las mujeres como protagonistas y bien lo refiere doña Susana, una de las participantes en la investigación, quien cuenta cómo la historia de ella y la de su madre se relacionan con la lucha por la vivienda y de qué forma hoy continúa trabajando por la comunidad:

Mi mamá, ella trabajó muchos años por acá porque esto eran puros negocios, acá eran muchos bailaderos, acá era donde paraban los camioneros porque antes esta era la vía que bajaban todos los camiones con madera, entonces habían casas de hostales, como dice Orbay, y mi mamá cocinaba ahí y ella cuenta la historia que había que comprar las tinajas de agua y traerlas con mula, y cuando llegamos acá nos tocó abrir trocha, nosotros somos fundadores de aquí, nos tocó abrir trocha para entrar los carros con los materiales, irnos para la canal y se paraba aquí el trabajo de la sacada de la roca, porque esto es pura roca, se paraba al medio día para irnos a lavar la losa, para cocinar, o sea, nos tocó con unos líderes luchar... (Susana, comunicación personal, 27 de marzo de 2023)

Esos obreros que iban de paso no viajaban solos, llegaban a ocupar estas zonas aledañas a los sitios donde trabajaban, con sus familias, y por eso la idea de «minga» que se recoge en los relatos que se citan más adelante dan cuenta de la organización comunitaria en cabeza de las mujeres, pues mientras los hombres ayudaban a levantar las primeras viviendas con distintos materiales, las mujeres cocinaban o cuidaban a los niños pequeños, incluso entre ellas se ideaban otras actividades para conseguir fondos y ayudar con otros gastos de la autoconstrucción; lo que en realidad estaban era construyendo tejido social y comunitario.

A partir de 1947, referían sus primeros habitantes, existían unas trece viviendas a lado y lado del camino desde La Portada hasta La Legua, pero en 1948 ya eran cerca de trescientas viviendas (Cubillos, 2015), mostrando así el crecimiento acelerado y cómo esto se relaciona con una etapa inicial de industrialización en la ciudad y surgimiento de luchas sociales para la apropiación de tierras (Figura 9).

El fervor de viviendas que se desató a partir de la inauguración de la carretera al mar, supo aprovechar el «Cajitas», se produjo a mediados de los años 40, precisamente cuando la ciudad inició a desenvolverse a un ritmo sin precedentes. Progresaba la construcción de la central Hidroeléctrica de Anchicayá y se culminaba el carretable de Buenaventura, con lo cual se preveía que Cali se convertiría en uno de los centros industriales y comerciales más importantes del país. Simultáneamente se adelantaba la construcción del Aeródromo, la pavimentación de la recta a Palmira, las obras de la Estación del Ferrocarril y la Avenida de las Américas. El auge en la construcción y pavimentación de la ciudad atrajo enormes oleadas migratorias del Cauca y Nariño, y el Viejo Caldas. La presión por vivienda que se desató en la ciudad se evidenció en Terrón cuando de la noche a la mañana se levantaron ranchos de lata y cartón a lado y lado del camino en medio de querellas interminables. Para 1949, la barriada había crecido como espuma

a lo largo del camino, tanto así, que cuando se organizaron las juntas de fomento para embaular el camino, recolectar fondos y hacer censo, hubo necesidad de diferenciar tres sectores que se llamaron parte baja, Central y La Legua, cada uno con su respectiva junta. (Gustavo Pino y Bernardo Pérez, como se citó en Bueno de Montoya *et al.*, 1984)

Como ya lo refería anteriormente Gilma Mosquera, es en esta época cuando se dan por todo el país poblamientos informales que eran producto de la organización de los habitantes de la ciudad, sumado a los procesos de los migrantes, lo cual consistía en la identificación de tierras, posteriormente el ingreso de servicios públicos y poco a poco el mejoramiento de las viviendas. Esto se evidencia en la búsqueda de acceso al agua y a energía por parte de los primeros habitantes, por eso se encuentra en los registros del barrio que en «el año 1964 ya salen los caballos que cargaban agua a Terrón Colorado, también las empresas municipales retiran las pilas y llega el acueducto al barrio con su respectivo contador a cada familia» (Bueno de Montoya *et al.*, 1984).

Por eso es necesario retomar la configuración de las zonas periféricas, pues en ellas también se registra la llegada de las instituciones y los servicios públicos de la mano de las luchas y exigencias

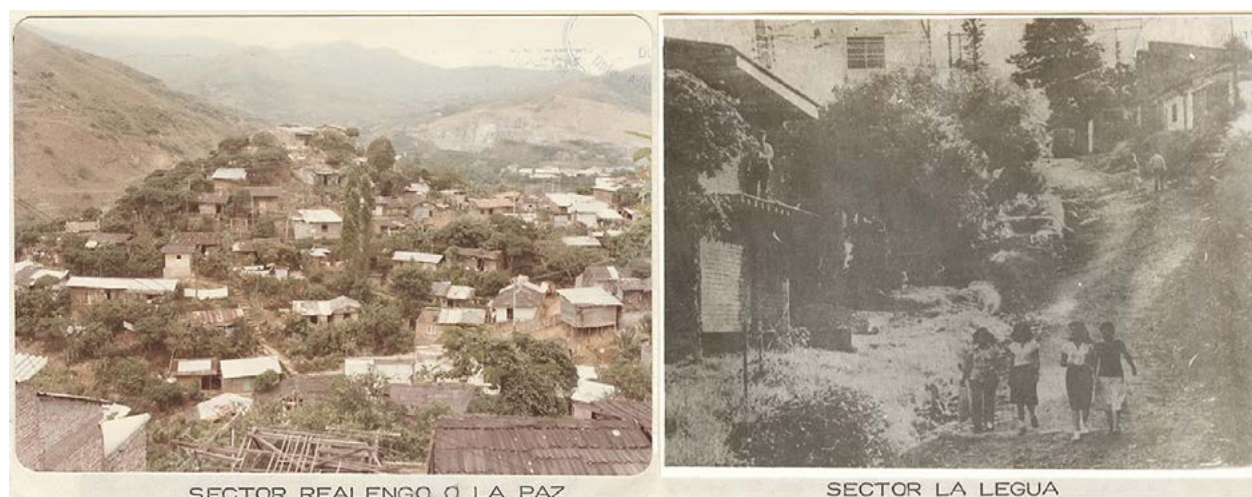


Figura 9. Sectores de Terrón Colorado.

Fuente: Bueno de Montoya *et al.* (1984).

de los pobladores, dado que la planificación urbana aún era incipiente y su desarrollo es la coexistencia de la legalidad y la ilegalidad para consolidar un barrio y suplir el acceso a vivienda que enfrentan los pobladores recién llegados a la ciudad o quienes por su condición social y económica no lograban adquirir las ofertas existentes para la época. Aquí algunos de los relatos asociados a los servicios de agua y energía:

Hasta mediados de los años cincuenta el agua llegó a las casas a lomo de caballo y a hombro de los muchachos que vendían por 5 centavos la lata de 5 galones. A medida que la vía se fue componiendo, aparecieron los carros tanques que llenaban tinajas de 5 galones. Las pilas de agua comenzaron a funcionar en el año 55, surtidas a gravedad por un tanque ubicado arriba, en la loma de Bellavista [...]. Ante el problema y las numerosas solicitudes de agua domiciliaria para el barrio desatendidas por el acueducto, el proyecto planeaba construir un tanque detrás del cerro de las Tres Cruces y de allí canalizar agua loma abajo. Se dice incluso que el barrio adquirió un terreno para construir el primer tanque sobre el cerro de las Tres Cruces en un punto llamado La Castilla, y que no fue sino enterarse del proyecto para que el gerente de Emcali, en ese entonces Borrero Urrutia, se abanderara de tirar agua para Terrón ya que como él mismo lo decía «vender agua es un buen negocio para las empresas municipales». (Gustavo Pino y Bernardo Pérez, como se citó en Bueno de Montoya *et al.*, 1984)

La luz la pusieron primero por la parte baja hasta la iglesia, después de 7 años nos la pusieron para la parte alta, o sea, desde la iglesia hacia arriba.

Luego que quedó establecida la junta comunal y con un auxilio que nos dio el departamento de 20.000 pesos, iniciamos el acueducto del barrio e hicimos una negociación con una familia de apellido Sinisterra, de los terrenos que tiene la cabecera de una quebrada que se llama La Garza; esta negociación la hicimos por 50 plazas las cuales, las vamos a arborizar y las negociaciones por 35.000 pesos de los cuales dimos 1.000 pesos, compramos 389 metros de tubo carbonizado de 4 pulgadas, los cuales, nos lo vendió el señor Gilberto Velasco, propietario de la chatarrería la Colmena; con todos los vecinos del barrio y sus contribuciones en trabajo y dinero efectivo hicimos la BOCATOMA, tanque

dispensador y conducción del agua en tubo de Greg [sic] de 4 pulgadas con registros cada 10 metros hasta dejarla en un tanque de aprovisionamiento ubicado en todo el filo de la loma frente al paraje de Vista hermosa, o sea, en la parte alta del barrio, para de ahí, pasarla por la tubería galvanizada sobre el río Aguacatal hasta salir a la carretera y luego conducirla hasta el barrio donde teníamos ya trazados los tanques de aprovisionamiento. (Luz Esperanza Muñoz H. y Lucrecia Hernández, como se citó en Bueno de Montoya *et al.*, 1984)

Dichos relatos dan cuenta que la lucha por el poblamiento requirió de un proceso organizativo de los habitantes y una confrontación constante con las élites de la ciudad, pues como lo expone Cubillos (2015), la ocupación de estas tierras fue en contra de la administración municipal y de las familias de la clase alta que reclamaban la zona como un espacio de reserva de las cuencas del río Cali y el río Aguacatal, por lo que los pobladores que habían sido fundadores referían, para los años ochenta, que recordaban cómo los inspectores de policía les destruían las construcciones y les tocaba subir ladrillos y maderas a escondidas, en mulas que transitaban en la madrugada a orillas del río Aguacatal.

Estos registros respecto de las confrontaciones para ocupar esta zona de la ciudad son interesantes para el análisis si se piensa que la ruta de la vía al mar había empezado a ser poblada a mediados del siglo XX por las élites que se trasladaron hacia los barrios El Peñón y Centenario, que intentaban diferenciar esta zona del centro y los barrios aledaños que empezaron a ser ocupados por obreros y migrantes, lo cual se puede conectar con la negativa de las élites para la ocupación de Terrón Colorado, que finalmente estaba en un anillo posterior a esta periferia de élite que se estaba formando en la ciudad, lo cual pone en discusión esa configuración de la periferia, pues esta zona verde cercana al río estaba pensada más para el disfrute de las élites y para su futuro habitar en este espacio; así, barrios como Santa Teresita empezaron su construcción en 1940 (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2019), en terrenos aledaños al río Cali, por lo que esta zona no estaba prevista para los migrantes o familias oriundas y desposeídas que se habían tomado los terrenos por la fuerza. Esto se puede

identificar en el siguiente relato, donde se empezaba a notar el crecimiento del barrio hacia 1984 y se reafirmaba esa idea de que la ladera del oeste no estaba tan alejada del centro de la ciudad:

Hoy día se dice que Terrón alberga a más de cien mil habitantes y a diario aparecen nuevas mejoras que se extienden a los márgenes del río Aguacatal y hacia arriba, hasta más allá del kilómetro 8 de la carretera al Mar. Por eso, cuando se dice ir a Terrón, piensa la mayoría de la gente en un sitio lejano. Apartado o no, Terrón para Cali sigue siendo una salida a la llegada de la gente a la ciudad. (Gustavo Pino y Bernardo Pérez, como se citó en Bueno de Montoya *et al.*, 1984)

Este relato se puede contrastar con la realidad que permanece en el siglo XXI en Terrón Colorado, pues las zonas de ladera y el oriente de Cali siguen siendo el espacio de recepción de migrantes en la ciudad, y esto tiene que ver con el efecto de arrastre del que habla Bourdieu (1999), los barrios continúan reproduciendo las características históricas de marginalidad que llevan a índices de calidad de vida bajos, lo que genera, por ejemplo, que los arriendos sean más baratos que en otras zonas y que haya mayor facilidad de acceso porque la informalidad es común en las transacciones. Es decir, un recién llegado a la ciudad, en su condición de vulnerabilidad, en la que no cuenta, por ejemplo, con ingresos fijos, carta laboral, carta de recomendación o fiador, puede arrendar una habitación en un inquilinato de las periferias, con un acuerdo de palabra que no implique firma de contratos y a menores precios que en otras zonas de la ciudad; por lo tanto, las laderas y la zona del oriente han sido históricamente las que más acogen a la población migrante. Aquí se configura otro factor, que tiene que ver con la vigencia de las relaciones comunitarias, donde la palabra sigue siendo sinónimo de confianza y forma legítima de negocios u otro tipo de transacciones, que no están mediados necesariamente por documentos o trámites legales.

La investigación muestra la consolidación de la exclusión de ciertas periferias a lo largo del siglo XX, un espacio social como configuración histórica de relaciones de tensión y poder entre agentes sociales que disputan capitales simbólicos en

lugares físicos; por ende, se logra develar el efecto de naturalización de la realidad del que también habla Bourdieu.

A propósito de sus habitantes, se debe resaltar el capital social que los líderes de la zona vienen acumulando por sus años de trabajo comunitario, en la memoria colectiva están sus primeras estrategias para llevar agua desde el río hasta el caserío; las acciones para evitar que la policía derrumbara las primeras ramadas; el trabajo colectivo para ayudar a construir la casa de los demás vecinos a través de mingas y almuerzos colectivos; la gestión de los líderes más destacados para buscar a los funcionarios de la alcaldía, a los representantes del Estado, a relacionarse con los políticos en campaña que prometían mejorar las condiciones del barrio.

Todo este capital social propicia un mejor relacionamiento de sus líderes con el Estado, a partir de la organización, para lograr acciones de reconocimiento y negociación como ya se había citado en el diario de campo del 27 de marzo de 2024, donde Orbay Beltrán habla de lo rápido que deciden organizar una acción colectiva de bloqueo intermitente para exigir que el carrotanque de Emcali lleve agua a la zona. Esto también se relaciona con lo geográfico, pues no es lo mismo un bloqueo intermitente en la vía al mar en medio de la Semana Santa, que un bloqueo en la calle 121 del oriente de la ciudad, donde la congestión vehicular no obstruiría ninguna salida de la ciudad ni alteraría la circulación hacia otros barrios porque ese es el límite urbano de la comuna 21, y eso es lo que les da una ventaja geográfica a los habitantes de la comuna 1.

Ese relacionamiento en la burocracia intermedia o baja del Estado es una estrategia de lucha que emplean los habitantes del barrio, por eso un investigador de temas urbanos dice: «Sé que los líderes sociales cumplen el papel que el Estado no cumple, en organización, en el agenciamiento de procesos políticos, de resistencia o soluciones a problemáticas» (Pedro Martínez, comunicación personal, 21 de marzo de 2023). En últimas, la organización comunitaria es la que hace frente a las desigualdades urbanas en un contexto neoliberal donde el Estado se hace a un lado de sus obligaciones sobre los derechos sociales básicos como la vivienda digna, con el discurso de fortalecer la sociedad civil.

Por otra parte, las cifras del crecimiento poblacional de Terrón Colorado muestran que a lo largo de los años este ha sido constante, pues como se ha encontrado en los registros, su condición de acogida a población migrante del suroccidente y al ser un corredor regional del Valle, la llegada de habitantes es continua (Tabla 8).

Tabla 8. Proyecciones de la población de Cali según total, cabecera y resto.

Año	Total Cali	Comuna 1
2006	2 108 257	64 692
2007	2 133 143	66 683
2008	2 158 078	68 673
2009	2 183 055	70 662
2010	2 207 994	72 647
2011	2 232 996	75 427
2012	2 388 927	82 676
2013	2 431 955	86 079
2014	2 475 249	89 460
2015	2 518 808	92 823
2016	2 562 632	96 874
2017	2 606 721	100 935
2018	2 651 076	105 005
2019	2 695 696	109 087
2020	2 740 581	113 179

Fuente: Observatorio Social Cali (s. f.).

Según los datos de City-Facts (s. f.), se prueba que en el inicio del siglo XX se incrementó el poblamiento en la comuna 1 y esto puede estar asociado con la escalada de la violencia de los grupos paramilitares, a finales de los noventa e inicios los veinte de este siglo, de la mano del narcotráfico, que además ocasionó oleadas de desplazamiento interno en las ciudades con la incursión de la violencia urbana, lo cual Pérez (2017) explica para las laderas en Medellín, pero que fue un proceso de repercusión nacional que se reflejó también en Cali.

Al respecto, Vinasco-Martínez (2019), que estudia las nuevas reconfiguraciones de los órdenes

sociales alrededor de la violencia y el microtráfico en la segunda década del siglo XXI, relaciona los efectos en los barrios con estos procesos regionales y nacionales del conflicto y la droga:

Para comienzos de la década del 2000, se posicionó con fuerza el Cartel del Norte del Valle, que logró mantener su unidad, y se forjó en el marco de enfrentamientos con los remanentes del Cartel de Cali y en particular con el llamado Clan de los Herrera. Para mediados de la década del 2000, estos grupos comenzaron a atomizarse y transformarse en grupos más pequeños que ampliaron sus estrategias de comercialización de la droga a través del microtráfico en los barrios de la ciudad y de la agencia de las oficinas de cobro, que se utilizaron para zanjar disputas entre sus facciones internas. (pp. 166-167)

Si sumamos el factor desplazamiento por el conflicto armado nacional y a nivel interno a causa de la violencia urbana, más la reconfiguración actual que tienen diversos grupos al margen de la ley operando a pequeña escala en los barrios después de la firma de los acuerdos de paz en 2016, pueden relacionarse estas circunstancias estructurales con la determinación de la expansión física en la comuna 1 y sobre todo al incremento poblacional por estar en medio de la vía al mar, que conecta a dos ciudades, pero también conecta las rutas del narcotráfico.

De corredor comercial a barrio

Como lo dice Cruz de Galíndez (2002), el poblamiento de Terrón Colorado pasó de una forma lineal, que era la que tenía el camino de herradura que conectaba a Cali con Buenaventura, a una lateral, donde se fueron construyendo los demás barrios de la comuna 1, lo cual ella relaciona directamente con los procesos de expulsión de mano de obra en las regiones y los espacios que se convirtieron en receptores.

Este proceso expulsor-receptor que Cruz de Galíndez retoma de Corredor, es el que permite explicar cómo los obreros caucanos y nariñenses que ayudaron a la construcción del tramo del ferrocarril Cali-Buenaventura se convirtieron más adelante, con sus nuevas generaciones, en los pobladores

de Terrón Colorado. Ella menciona que la necesidad de tener poblados para el abastecimiento de los obreros sería uno de los elementos que ayudarían a la formación de los barrios, pues estos primeros habitantes llegaron a formar La Cumbre, Dagua, Loboguerrero, Cisneros, sus hijos poblaron Bitaco, Puente Palo, El Palmar y posteriormente se moverían hacia la nueva construcción de la carretera al mar.

De este auge económico del Valle del Cauca se puede retomar lo siguiente:

El crecimiento demográfico que registraba el Valle del Cauca y especialmente la ciudad de Cali, que entre 1919, momento del despegue económico, social y demográfico del Valle del Cauca, hasta 1946, cuando las obras de infraestructura estudiadas ya habían sido inauguradas o estaban próximas a inaugurarse, el crecimiento de la población fue de 324 %, con un crecimiento del 15 % anual. (Cruz de Galíndez, 2002, p. 16)

Esto quiere decir que la expansión de una ciudad como Cali no escapa al interés de las élites por ampliar la economía más de allá de sacar el café, sino de independizarse de la colonización antioqueña y tener vías para el intercambio y movilidad económica hacia Buenaventura, Popayán y Caldas, por eso las grandes obras viales facilitan ese crecimiento económico y poblacional. Tal es el caso de la carretera al mar, que menciona Cruz de Galíndez (2002); se promovió desde 1926 y fue inaugurada en 1946, lo que propició la creación de nuevos territorios como El Carmen, Tocatá y El Queremal. También destaca la construcción de la hidroeléctrica del bajo Anchicayá, que atrajo mano de obra caucana-nariñense, y que al terminarse dejó pobladores asentados en busca de nuevos horizontes económicos que los llevaban hacia Cali por la vía al mar.

En el caso de Terrón Colorado su ubicación se dio por: la memoria colectiva vivida en la colonización de territorios nacionales, que los llevó a invadir a lado y lado de lo que fuera el camino que comunicaba a Cali con Buenaventura; su experiencia en romper montaña los ubicó en una nueva fuente de empleo, las carboneras y las canteras; su relación con los campesinos de

la franja estudiada les permitió ubicarse en el mercado campesino de los patios de la galería El Calvario para después hacerse a un puesto en propiedad; los servicios que llegó a prestar la tienda en las obras permitió que la población que bajó de la cordillera occidental a Terrón Colorado se empleara como domésticas, vigilantes, arreglo de ropa, sastré, etc. (Cruz de Galíndez, 2002, p. 18)

Además de los aspectos económicos del desarrollo de la industria cañera y el crecimiento urbano de Cali, otro factor importante en la relación expulsor-receptor fue la Violencia bipartidista de mediados de siglo que golpeó las montañas caucanas e impulsó que, entre los años sesenta y setenta, llegaran nuevas familias a Terrón Colorado, como lo fueron población indígena de Cauca y Nariño: los Chigangana, Soscué, Quisoboni, Tumbajoy, Quiguánas, Cuasquer, Alomía, Popó, Viáfara y Balanta. Esto indica que entre 1965 y 1985 las migraciones hacia la ciudad de Cali por la vía al mar se daban en busca de mejores oportunidades de empleo, educación, gracias al desarrollo de la urbe.

Pero la población blanca e indígena no fue la única que llegó a poblar la comuna 1, sino que entre los años ochenta y noventa, debido a la mano de obra que se requería para el florecimiento de la industria de la caña, particularmente en los años ochenta llegan del Pacífico, del valle del Patía, norte del Cauca y sur del Valle, mientras que en los noventa llegan de Chocó, por el fuerte impacto de conflicto armado (Figuras 10 y 11):

En Terrón Colorado a partir de la década de los ochenta se produjo asentamiento de negros en la ribera alta del río Aguacatal, sector de La Paz, más conocido como el Realengo. Dicho asentamiento no tiene las características del poblamiento general del barrio, no corresponde a ese tejido de parentesco o de reciprocidades que se dieron en los primeros asentamientos, hecho que marcó una pauta discriminatoria del sector. [...] A Terrón Colorado llegan a invadir familias negras, que después de buscar posibilidades de vivienda en otros lugares de la ciudad de Cali, se ubicaron en una de las zonas de más alto riesgo ambiental de la Comuna Uno. Balanta, Saa, Arboledas, son algunos de los apellidos de las familias. (Cruz de Galíndez, 2002, pp. 36-37)

Esta perspectiva es interesante porque plantea que también hay diversidad étnica dentro de la constitución de la comuna 1, contrastando con la marcada base étnica del oriente, y que en Terrón no ha sido tan manifiesta para el relacionamiento con el Estado, sino que más bien su condición espacial, los efectos que produce la acción colectiva, la facilidad de organización, de impacto en

las zonas aledañas, tan cercanas a los barrios de fundación de Cali, marcados por su estrato socioeconómico alto, son los factores que tienen mayor peso en la capacidad de negociar y visibilizar los conflictos urbanos ante las instituciones, y el peso de lo étnico no sobresale para caracterizar la comuna o centrar las peticiones de los habitantes en ese aspecto.



Figura 10. Los primeros pobladores del barrio.

Fuente: *Diario Occidente* (1970).



Figura 11. Levantando asentamientos.

Fuente: *Diario Occidente* (1974).

Por otra parte, en el trabajo de López (1994) se retoman algunos testimonios del poblamiento de la comuna 1, destacando que muchas de las familias de los obreros que llegaron a inicios del siglo XX y que se habían establecido más hacia Buenaventura como en Felidia, La Elvira y La Leonera, encontraron en La Legua —como se le conocía antes a Terrón— una zona intermedia para no descuidar sus tierras y bajar a Cali a buscar trabajo o mejores condiciones, sobre todo de estudio.

En el año 1946 llegué a Cali, del Cauca, en compañía de mi esposo Aldemar Montoya, él vino ya contratado como cabo de obreros que abrían carretera de Cali a Buenaventura, él tuvo la idea de construir un campamento a orillas del camino de herradura, que no había sino canelones y rastrojo a lado y lado. Este campamento para servicio de todos los obreros. Ya el contrato que mi esposo tenía termina y queda sin trabajo, en el mes de noviembre de 1947, estando nosotros pagando arriendo a las señoritas Herrera en La Portada río Cali; de ahí tuvimos la idea de regresar al rancho a aquel campamento del callejón, este lo encontramos desbaratado todo, una parte nos fuimos por los rastros y descubrimos cinco ranchos con algunas maderas del campamento, no había nadie en ellos, luego conseguimos como cubrir el campamento, nadie nos dijo nada y fueron viniendo más gentes y resultaron ocho ranchos más. (Entrevista a Aura Montoya, julio 8 de 1993, como se citó en López, 1994, p. 62)

Otro aspecto para mencionar es que la formación del barrio fue por etapas, como lo recoge López (1994); una primera en 1945, cuando se empieza a ocupar desde La Portada hasta la capilla, en tierras de la nación; la segunda va desde la capilla hasta el retén, en 1954, en predios de la hidroeléctrica del río Anchicayá. La tercera etapa es la formación de Vistahermosa, entre 1963 y 1972, en el retén de Las Colinas, con sectores aledaños como Palmas I, II, Villa del Mar; y el cuarto momento se da a orillas del río Aguacatal, en las zonas La Paz, El Realengo y La Fortuna, en 1985, además en el año 1980 se creó Patio Bonito.

Lo interesante es que durante este proceso se van registrando los liderazgos y la organización comunitaria para exigir a la alcaldía de Álvaro Lloreda el reconocimiento de los predios, lo cual se volvió

una puja entre los nuevos habitantes y los dueños de los predios aledaños de las señoritas Herrera y Luis H. Garcés.

En 1947 vinieron a hacernos un censo y de La Portada hasta aquí había ya 82 ranchos, entonces empezó la lucha con el alcalde, pues él quería hacer aquí un paseo estilo gallego, es decir fueron resultando líderes, y aún la policía seguía molestando, después el alcalde da las órdenes para que solo se construyan los 82 ranchos, pero muchos más ranchos se construyeron. (López, 1994, p. 75)

Además de la oposición de la alcaldía en mención, los habitantes del barrio Santa Rita (fundado en el año 1944) también estaban en contra de este poblamiento popular, pues esa zona del oeste se había preservado unas décadas atrás para las familias prestantes, por lo que desde los años cuarenta y cincuenta, el surgimiento de la comuna 1 tuvo que estar de la mano de la organización comunitaria. Como lo menciona López (1994), se creó un Comité de Transformación Social, que enfrentaba las amenazas de desalojo y además activaba la solidaridad para protegerse entre vecinos y adecuar en general el terreno para ser habitable, pues en 1947 se habían dado algunos permisos, pero para quienes recién llegaban se demoraba más el proceso, así que continuó entre lo formal y lo informal. También se formó la «Junta de Fomento y Progreso», de la que hacían parte Alejandro Hurtado y Aristóbulo Muñoz. Todo esto llevó a la formalización del barrio en 1947 por parte del Concejo Municipal. Además, estaba la Junta de Ornato y Fomento, que poco a poco fueron decantando en las juntas de acción comunal hasta la actualidad, o el Grupo Dinamizador, que recoge a varios líderes del barrio.

Aquí se testimonia otro aspecto destacado en la configuración del espacio social y es la lucha colectiva que puede ser nacional o local, como lo menciona Bourdieu (1999), en estas la finalidad es incidir en la política del Estado para que las decisiones se tomen sobre la vivienda, el uso del suelo, la homogeneización de los espacios vulnerados. Por eso, esta construcción es política, en la medida que recoge las confrontaciones entre los representantes de los colectivos de habitantes organizados,

los grupos financieros y los funcionarios del Estado, tal y como se mencionó en la formación de Terrón Colorado: unas élites y clases altas oponiéndose a un barrio popular en las zonas y tierras compradas por ellos, con el respaldo de las alcaldías de turno que impedían las ocupaciones de hecho, pero con un contrapeso organizativo por parte de los habitantes que logró incidir en la legalización de este barrio.

De igual forma, hay que tener en cuenta que el barrio Terrón Colorado se toma como un caso de referencia para analizar de manera más amplia la configuración de la ladera oeste de Cali, pues hay similitudes que se comparten con el crecimiento de otras periferias de la ciudad y también diferencias, por lo que se enlazarán datos de otros barrios e historias compartidas en la comuna 1. Esto también es indispensable porque cuando se habla de este barrio se tiende a pensar que es toda la comuna, pero en realidad hay varios sectores, como lo refiere Cruz de Galíndez; quienes identifican estas divisiones sociales y físicas del espacio son sus habitantes.

Terrón Colorado es un barrio, dividido en I y II, de la Comuna Uno. Solo la violencia que viven sus moradores logra identificar sectores mas no barrios. Para el que no vive en la Comuna Uno le es difícil ubicar Palermo, La Legua, Vistahermosa, Alto o Bajo Aguacatal, a diferencia cuando se le indica Terrón Colorado, llegar a los barrios señalados se realiza por puntos de referencia: banda los ríos, retén forestal, portada al mar, etc. (Cruz de Galíndez, 2002, p. 2)

Cada división da cuenta de un proceso socio-histórico particular y estructural al tiempo, ahí es que cabe la referencia de campo social, pues los lugares se pueden definir por las posiciones y las distancias de los agentes sociales que son los habitantes de la zona respecto a los equipamientos urbanos y respecto a los demás barrios aledaños, pues en últimas un asentamiento urbano termina siendo una competencia por la apropiación de rentas, ganancias de posición y ganancias de ocupación, como lo plantea Bourdieu (1999); es decir, la historia de la comuna y el barrio es la lucha entre la alcaldía, los dueños del capital y del suelo versus los habitantes que buscan mejores condiciones de vida en una zona que lleva décadas de vulnerabilidad social.

Un escrito que desafortunadamente se perdió, de unos relatos de fundadores muy bonitos, y se llamaba «Contra viento y marea», porque las personas empezaron a construir sus viviendas con latas, con esterilla, con cartón, pero las personas que habitaban la parte plana que eran familias ricas, familias digamos del sector empresarial, de la clase dirigente de Cali, para ellos era muy incómodo tener esos vecinos porque les dañaban el paisaje, entonces todo el tiempo estaban presionando a la administración municipal para que viniera a desalojar, entonces permanentemente habían desalojos, entonces los relatos de los abuelos eran cómo mientras las señoras cuidaban los niños de toda la comunidad, preparaban la comida, los hombres se ocupaban era de salir a trabajar, de construir, organizar las viviendas y defenderse de las autoridades que venían permanentemente a hacer esos operativos de desalojos. (Orbay Beltrán, comunicación personal, 27 de marzo de 2024)

Un ejemplo claro de cómo la configuración histórica que las élites y los funcionarios del Estado han respaldado para la comuna 1 como espacio de homogeneización de las vulnerabilidades, tiene que ver con la adecuación de las vías y el mejoramiento de los equipamientos, pues desde los años noventa se da una gestión del riesgo mínima, y así se mantiene en la actualidad la vía que conecta a la ciudad con el puerto más importante del país, que ante cualquier derrumbe deja incomunicada a la ciudad, impidiendo el tránsito de personas y el abastecimiento de productos básicos para el diario vivir.

Dinámica poblacional de la comuna 1

Luego de explorar parte de la historia del barrio y sus pistas para el desarrollo de la comuna 1, se resaltan las relaciones entre los actores comunales y estatales en medio de la lucha por la legalización y el equipamiento de la zona, pues a pesar de los desacuerdos y el choque de intereses, en la Cali de la década de los sesenta y setenta el déficit de vivienda se convierte en una problemática a la cual no puede dársele la espalda y por el contrario debía regularizarse por parte del Estado, por ejemplo, con la oferta de viviendas de interés social o con el

equipamiento y legalización de los barrios informales que iban emergiendo.

El barrio Terrón Colorado evidencia el conflicto propio del espacio social, un cruce de condiciones físicas que aparentemente son favorables al ser una salida principal de la ciudad, pero si sus habitantes no acumulan otros capitales como el económico y el simbólico no podrán tomar las decisiones por sí solos para que mejoren sus condiciones de vida. Por eso, en la Figura 12 se evidencia que la comuna 1, en su totalidad, acumula una desposesión histórica de violencia e inseguridad que se suma a las privaciones de necesidades básicas, y es ahí donde la cercanía con el centro de la ciudad, que está en la comuna 3, o con los barrios de élite en la comuna 2, no tiene mayor peso en el dominio espacial de capitales globales, pues así se encuentren en medio de dos cuencas principales, son otros factores los que definen las burocracias altas para darle mayor jerarquía y prestigio a la zona. Esto no quiere decir que los habitantes no tengan algún rango de movilidad y negociación, como ya lo evidencia la acción colectiva, incluso una posibilidad de generar tensión con otros actores institucionales y dialogar con ellos en mayor medida que Suerte 90, pero no es suficiente para perder el *habitus* de ser una periferia vulnerable.

En el caso de Terrón Colorado, se destaca que para 1962 ya se encontraba en la agenda institucional la construcción de una unidad comunal, pues según una noticia del 19 de abril de 1962 del *Diario Occidente*, Codenal construiría nuevas unidades comunales en Cali con el objetivo de ayudar a los habitantes de todos los sectores de la ciudad en el mejoramiento de su nivel de vida, tanto cultural como personal (Figura 13). En ese momento se adelantaron tres unidades comunales: una en el barrio Nueva Floresta, otra en terminación en el barrio Alfonso López Pumarejo y una tercera en el sector de Terrón Colorado; para esta última, ya se habían elaborado los planos y se contaba con un porcentaje de la financiación. En las unidades comunales funcionaba un centro de salud, un almacén de consumo, un salón para conferencias sobre diferentes aspectos y otras dependencias.

Entre las opciones de atención estatal para enfrentar la ocupación de hecho y el surgimiento de nuevos barrios ilegales estaban también los proyectos de VIS, pensados para los empleados y en general para los grupos desposeídos de la ciudad o los que llegaban de otras regiones. Sin embargo, los altos costos y los pagos a largo plazo hicieron que muchos desistieran o ni siquiera pudieran tomar las ofertas habitacionales.

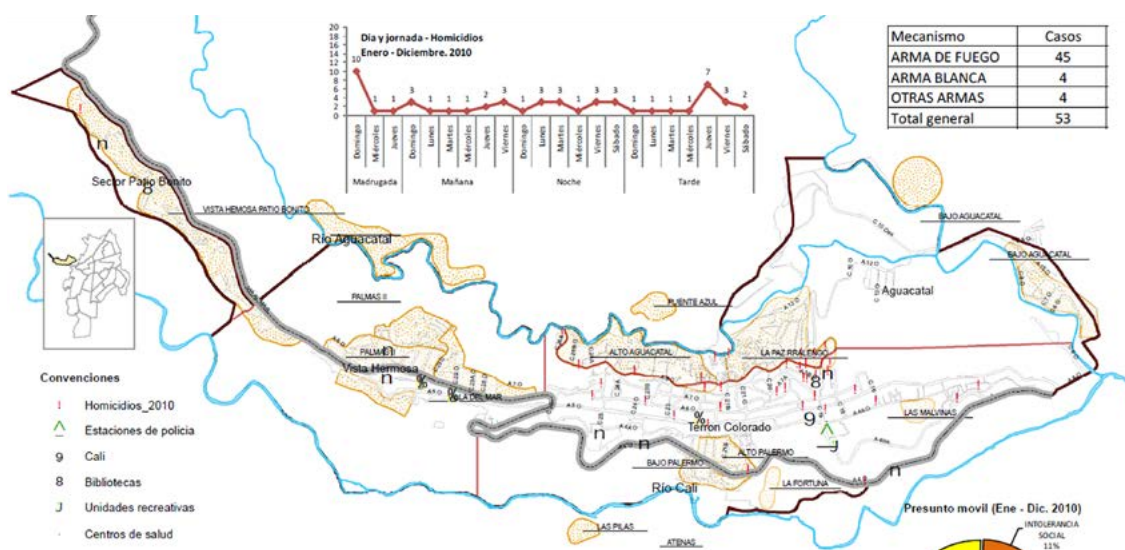


Figura 12. Barrios y asentamientos de la comuna 1.

Fuente: Observatorio Social Cali (s. f.).



Figura 13. Noticia sobre la construcción de nuevas unidades comunales en Cali.

Fuente: *Diario Occidente* (1962).

Esta es una muestra de lo que Bourdieu (1999) llama el poder de la política para decidir sobre el espacio o en este caso sobre los proyectos de vivienda.

A través de una concertación y confrontación entre los altos funcionarios del Estado —ellos mismos divididos—, los integrantes de los grupos financieros —directamente interesados en la venta de crédito inmobiliario— y los representantes de las colectividades locales y las administraciones públicas, como se elaboró la política de vivienda que, en especial a través del régimen tributario y de las ayudas a la construcción, operó una verdadera construcción política del espacio: en la medida que favoreció la construcción de grupos homogéneos con fundamento espacial. (p. 5)

Es decir, que ante el proceso de poblamiento informal que inicia en los años cuarenta y se potencia en las décadas del sesenta y setenta en Cali, la respuesta institucional de la alcaldía y los grupos económicos y de élite de la ciudad fue ofertar créditos de vivienda más allá de dar una solución definitiva a la problemática, lo cual dejó por fuera a innumerables grupos poblaciones que no contaban con trabajos estables y por ende su condición de no asalariados los dejaba por fuera del sistema

financiero, ampliando su condición de desposesión, que se conecta con el efecto arrastre que también señalaba Bourdieu (1999).

De esta forma, la Cámara Colombiana de la Construcción, seccional Cali, elaboró un estudio en 1960 que se publicó en febrero de ese año en el periódico *El País*, en el que se destacan las actividades de desarrollo habitacional, los terrenos para la clase media, baja y alta (Figura 14). El proyecto comprendía 170 lotes, en los que se constataba un gran problema de urbanizaciones en la clase media, ya que estaban comprando los lotes con crédito a largo plazo y una vez adquirido el lote era casi nula su construcción, pues el empleado tendría que pagar por mucho tiempo el lote y no contaba con los medios económicos para iniciar la construcción.

Mientras que las familias quedaban por fuera de los futuros proyectos habitacionales de la ciudad, los sectores como la comuna 1 seguían aumentando su población a la espera de la llegada de servicios públicos, pues como refería el periódico *El País* (1960), hacía quince años numerosos invasores tomaron posesión de los terrenos que han figurado como propiedad de la nación, iniciándose así lo que más tarde albergaría más y más familias hasta alcanzar el número de dos mil hasta esa fecha.

Terrón Colorado siempre ha sido «la oveja negra» de Cali, ninguna de las administraciones de Cali se ha extendido hasta ese sector poblado en su mayoría por familias empobrecidas, no han tenido planes u obras de progreso, algunos de sus habitantes afirman que «la nación los abandonó por ocupar terrenos privados». Cabe destacar que la única administración que ha escuchado las necesidades de este barrio era la vigente en 1960; sin embargo, eran muchas las obras por realizar en el barrio, las numerosas familias que habitaban Terrón —como se le conoce popularmente—, se encontraban en las más precarias condiciones, carentes de acueducto, alcantarillado y comodidades (Figura 15). En cuanto a la educación, muchos niños adolecían de un lugar apropiado para estudiar, si bien es cierto que recibían sus clases en una casa acondicionada para tal fin, también era cierto que ese lugar no contaba con los materiales pedagógicos necesarios para los nuevos métodos de enseñanza de esa época.



Figura 14. Noticia sobre planes de vivienda en la ciudad.

Fuente: El País (febrero de 1960).



Figura 15. Noticia sobre Terrón Colorado sin agua ni alcantarillado.

Fuente: El País (13 de marzo de 1960).

Además de estos procesos de tomas irregulares, paralelos con las nuevas iniciativas de VIS, el loteo en terrenos denominados piratas también avanzaba, por eso en las noticias de esa misma década registran las acciones contra los urbanizadores clandestinos que explotaban a las personas pobres que anhelaban tener un techo propio, y además fomentaban la creación de tugurios con problemas higiénicos, sanitarios y sociales en general.

Las urbanizaciones clandestinas, también llamadas *piratas* por los medios de comunicación local, eran aquellas que se realizaban sin ninguna dirección técnica de la oficina de Planeación Municipal y, consecuentemente, sin la aprobación de esta (Figura 16). Todo urbanizador cuando aspiraba a parcelar un terreno debía cumplir con determinados requisitos que dicha oficina les exigía, las cuales eran normas y leyes municipales consignadas en el Decreto 562 de 1954, que constituía el código urbanístico.

Algunos de los requisitos que debían cumplir los urbanizadores eran: debían ceder de forma

gratuita y mediante escritura pública al municipio el área correspondiente a las vías públicas que necesitaba la urbanización que se iba a ejecutar. Además, debían, por su cuenta, dotar a la urbanización de alcantarillado y servicios públicos en general.

Es por ello que se continuaron dando procesos de desalojo para las zonas aledañas a Terrón Colorado, que siguieron expandiéndose, como es el caso de Bellavista, pues como titulaba una noticia de *El País* el 1 de enero de 1960: «Comienza hoy la campaña para la erradicación de tugurios en Cali» (Figura 17); se hablaba sobre la erradicación de siete tugurios en el sector de Bellavista, como una campaña para la erradicación de construcciones clandestinas en el municipio, campaña coordinada por la inspección general urbana del municipio, que buscaba retirar de toda la ciudad algunas casas que se consideraba que hacían ver fea a la ciudad, las cuales eran un problema permanente para el proceso de urbanismo que intentaba jalonar la administración.



Figura 16. Noticia sobre las estafas con urbanizaciones clandestinas.

Fuente: *El País* (28 de octubre de 1960).

Es recurrente el efecto simbólico sobre las zonas marginales, la forma en que se denomina el poblamiento informal, como se aprecia en la siguiente noticia (Figura 17), que tiene la finalidad de estigmatizar la zona y plantear barreras de circulación, separación, sobre todo diferenciarlo de la zona aledaña como las comunas 2 y 3, que desde la primera mitad del siglo XX fueron las zonas elegidas por las élites de Cali para edificar sus barrios como El Peñón y Centenario.

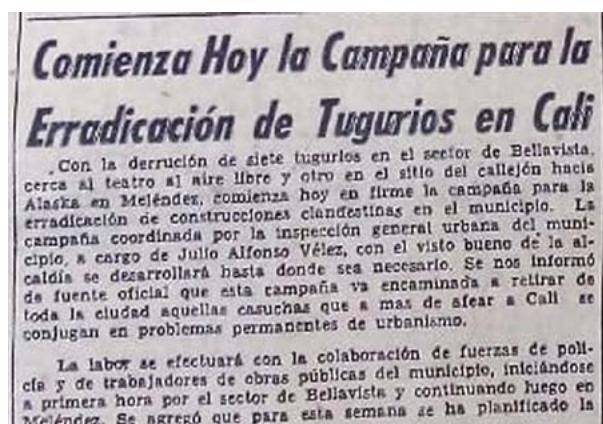


Figura 17. Noticia sobre la erradicación de tugurios en Cali.

Fuente: *El País* (1 de enero de 1960).

Estos procesos de desalojo y campañas por desmontar las nuevas invasiones que surgían aledañas a un barrio que ya estaba en proceso de reconocimiento como Terrón Colorado, daban una muestra de la institucionalización de la informalidad; es decir, el Estado llegaba a ordenar lo que irregularmente habían ocupado los habitantes y es esa otra de las características de la configuración urbana de Cali, una bisagra entre lo legal y lo ilegal, y un conflicto constante entre las ideas de modernidad urbana de las administraciones y de los grupos sociales que llegaban a estas zonas.

Lo más interesante del proceso es que, así como se patentizaba la construcción de bloques habitacionales degradados que sostenían el abandono estatal en medio de condiciones mínimas de vida digna en la ladera oeste de la ciudad, hacia otras zonas se configuraban otros proyectos habitacionales que cumplían una especie de *efecto*

club, como lo denomina Bourdieu (1999), destinados para un tipo de empleados particulares y en zonas adecuadas y con equipamientos habitacionales correspondientes, como se evidenciaba en barrios del norte como La Flora o del suroriente como Periquillo. Además de constituirse un sistema de créditos que sí eran viables para esta clase media asalariada, con otro tipo de estabilidad y de mejores ingresos, contrario a la población popular de las laderas o del oriente.

Uno de estos programas era el Instituto de Crédito Territorial (Inscredial), el cual se caracterizaba por un sistema de autoconstrucción en donde sus beneficiarios eran quienes intervenían de manera directa. En Periquillo (suroriente de Cali, cerca de Aguablanca), tenía el instituto 926 soluciones de vivienda, con un precio de siete mil pesos por unidad. En un segundo sector, había 450 soluciones de vivienda; en Pasoancho segunda etapa, se tenían 86, 1000 en La Flora, 150 préstamos a propietarios de lotes en Cali, 88 soluciones en contrato con técnica de vivienda en Santa Mónica, 56 en La Selva. Por su parte, el Inscredial firmó contrato de 10 viviendas para empleados de la empresa Avianca en el barrio Salomia, 200 casas en el barrio Asturias por cuenta de Fenalco, 20 con la Cooperativa de Residencias de Telecom, 151 más con Vipasa en La Merced (*Diario Occidente*, 17 de enero de 1967) (Figura 18).

Estos barrios es posible catalogarlos como de clase media para la época y permitían unas condiciones de posesión y efecto de arrastre distinto al de las invasiones en Cali o a los proyectos habitacionales que años más tarde se pensaron para el oriente de la ciudad. Incluso, este efecto club que ya se mencionó también institucionaliza un *habitus* y un capital cultural para quienes iban a vivir ahí, quienes claramente no compartían la condición de clase baja o de migrantes, como los instalados en las periferias de la ciudad, que no podrían optar por este sistema de autogestión y de créditos altos.

Esta sería entonces una primera muestra de cómo la configuración del uso del suelo, de sus precios, de quiénes iban a habitar el espacio, de quiénes podían acceder y en qué zonas podrían moverse y relacionarse, era en realidad la concreción de un espacio social de competencia por el dominio de los



Figura 18. Noticia sobre la construcción de viviendas por parte del Inscredial.

Fuente: Diario Occidente (17 de enero de 1967).

lugares, un entramado de competencias por saber qué agentes dominaron y controlaron las tierras que estaban por urbanizar en la Cali de los años sesenta y setenta, y quienes serían subordinados a esos agentes predominantes.

Conflictos urbanos

En la configuración del barrio su posición geoes-tratégica fue fundamental para el desarrollo de los principales conflictos urbanos, dado que Terrón Colorado es incluso hoy el paso obligado de quienes viajan hacia Buenaventura por la única vía al mar que tiene la ciudad, que además parte de la zona oeste, caracterizada por ser, a principios del siglo XX, zona para las élites de la ciudad en los barrios

El Peñón y Centenario, pero que a partir de los años sesenta empieza a poblarse de manera informal.

Por ende, el barrio cuenta con el reconocimiento que le ofrece el lugar donde se ubica, pues los habitantes de la ciudad que usan esta salida hacia Buenaventura o demás corregimientos de Dagua, lo atraviesan. No obstante, este reconocimiento contrasta con las formas en que el Estado ha interactuado con los habitantes de la zona a lo largo de los años, pues han existido iniciativas como el proyecto «Terrón Coloreado», que buscó cambiar los estereotipos sobre el barrio a partir de pintar las fachadas de las viviendas y darle una estética distinta a esta entrada principal de Cali, pero problemas como la titulación de predios aún siguen sin resolverse.

El ejemplo sobre la falta de normatividad para la propiedad versus los recursos invertidos en las

jornadas de pintura, demuestra que el problema social para los gobernantes de la ciudad en ese momento era cambiar la percepción del que cruza la zona, pero no de cambiar las condiciones sociales de vulnerabilidad que afronta la comuna 1. Esta estrategia es además una réplica de programas similares a nivel internacional, «como en Tirana, Albania, con el nombre de Colores para Tirana, realizado antes del año 2000 con el fin de darle una nueva cara a esta ciudad que años antes de comenzar el nuevo siglo pasaba por una fuerte crisis económica» (Urián y Zapata, 2014, p. 75), los cuales parecen más una fórmula para maquillar la vulnerabilidad, aunque no se atacan las razones que sostienen la marginalidad a través de los años.

Por ejemplo, a pesar de que la fundación que lidera las jornadas para pintar las casas y hacer murales lleva varios años en el proceso, problemáticas como la violencia representada en las pandillas y los homicidios siguen destacando en la comuna y sobre todo en el barrio Terrón Colorado, pues como lo plantean Castillo-Valencia *et al.* (2022):

A lo largo de los últimos veinte años la concentración de los homicidios ha persistido en la periferia oriental (Distrito de Aguablanca conformado por comunas 13, 14, 15 y 21) en la ladera occidental (barrios Terrón Colorado en la Comuna 1, Los Choros en la Comuna 18 y Siloé en la comuna 20) y en una fracción del centro que entró en deterioro hace ya varias décadas y en la cual el gobierno local ha iniciado un proceso de renovación urbana. (p. 134)

En la Figura 19 se ilustra mejor.

Mientras tanto los pobladores manifiestan su visión sobre los problemas reales de la zona:

El mayor problema que se presentaba o se presenta en la actualidad es el de la titulación de los predios, ya que muchos no cuentan con escrituras públicas y esto ha sido un eterno problema y generador de conflictos, a pesar de que siempre ha existido diálogo entre las partes como también la buena disposición de los habitantes por legalizar sus predios, siendo esto su mayor anhelo. (Carlos Hernando Reina Sandoval, comunicación personal, 24 de julio de 2023)

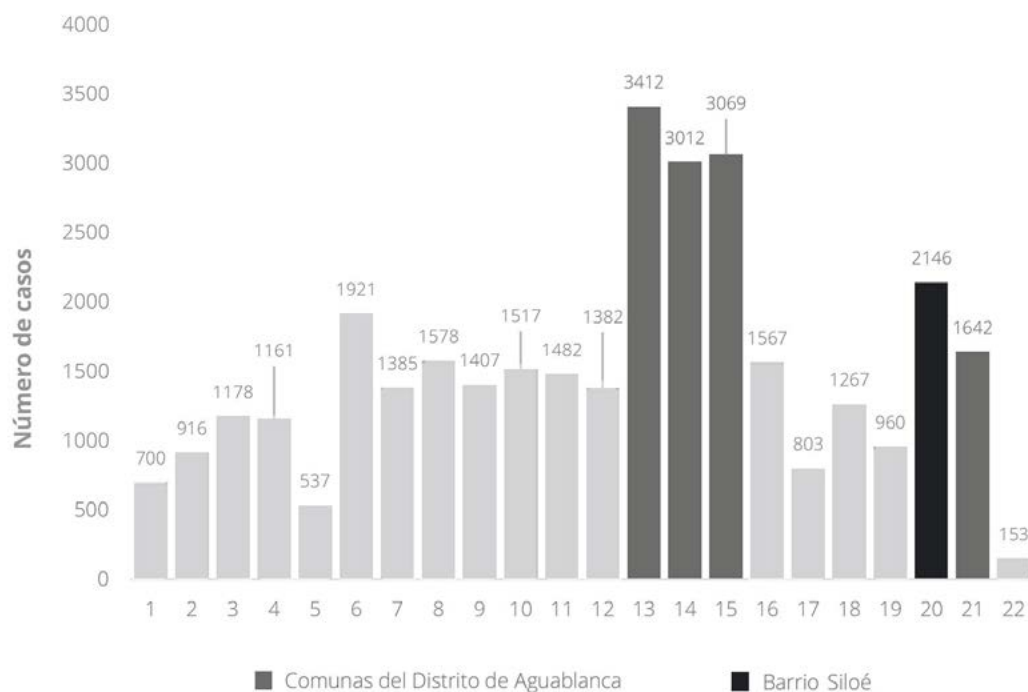


Figura 19. Número de homicidios en Cali, 1999-2018.

Fuente: Castillo-Valencia *et al.* (2022, p. 134).

Incluso sobre la problemática se han establecido programas de gobierno para las alcaldías en varias ocasiones, pero como lo relatan los habitantes, la negativa a la legalización de los predios persiste. Esta situación también muestra que hay un efecto de naturalización sobre la definición del uso del suelo que no dejar ver con claridad el carácter histórico de esta ladera, pues se manifiesta que es una zona de reserva de los ríos Cali y Aguacatal, además de los riesgos de erosión, pero en ciertos momentos para los gobernantes sí existen alternativas de configurar el problema, como ocurrió en 1998:

Cobo Lloreda escuchó en la unidad recreacional Tory Castro de Terrón Colorado, las propuestas y reclamos de representantes de los 32.111 habitantes de este sector ubicado al noroeste de Cali. Lo acompañaron varios funcionarios de su gabinete municipal.

La directora de Planeación municipal, Matilde Lozano, informó que en la próxima semana el Ministerio del Medio Ambiente estaría expidiendo una resolución que levantaría la restricción de uso de la reserva forestal que bordean los ríos Cali y Aguacatal.

La sustracción de los terrenos, 614.48 hectáreas, ubicados en seis corregimientos de Cali y lotes aledaños a Terrón Colorado, se viene gestionando aproximadamente tres años. Desde mediados de 1997, el Ministerio del Medio Ambiente, luego de realizar las visitas correspondientes, tiene lista la resolución del cambio de uso del suelo de la zona forestal, solo hace falta la firma del Ministro del Medio Ambiente. (*El Tiempo*, 19 de enero de 1998)

Lo interesante de esta disputa es que muestra que la presencia de la alcaldía y sus funcionarios ha sido permanente en la zona y se abren espacios comunitarios pero las soluciones no han sido definitivas, y esto muestra también la representatividad que tiene la comuna 1 para las administraciones, pues como lo refiere la misma noticia de *El Tiempo* (1998), para ese año se hablaba de 32 111 habitantes.

Por otra parte, el transporte también se ha percibido como una problemática latente por los habitantes del sector, primero por las autogestiones que se hicieron a mediados del siglo XX para lograr la pavimentación de las vías principales del barrio y en

la actualidad con la regularidad del transporte que para esta zona ha estado acompañada hasta la actualidad de las denominadas «gualas».

Al momento de nuestra llegada al barrio Terrón Colorado existía la problemática del transporte, las rutas de buses que se atrevían a subir la ladera eran bien contadas, en ese entonces existía una llamada la Gris San Fernando, con unos buses muy potentes, pero con motores propios de los años cincuenta donde cada momento presentaban fallas mecánicas propias del desgaste en aquel terreno. (Yesid Muñoz García, comunicación personal, 2 de mayo de 2023)

Considero que el problema socioeconómico que siempre ha aquejado a los habitantes del barrio es el del transporte público; el primero que conocí fue el de chivas o buses escaleras que nosotros llamábamos «líneas». Posteriormente fueron ingresando empresas de transporte público como la Gris San Fernando, Transporte Río Dagua, Coomoepal, pero todas poco a poco fueron desapareciendo por los fracasos económicos, ya que a pesar del exceso de pasajeros o sobrecupo, al iniciar la cuesta o en la mitad, los motores sacaban la mano, alegando los motoristas que era por la topografía del sector; después llegó la empresa Transporte Recreativos, que me parece, no estoy seguro, que es lo que más ha durado, y paralelo a todos ellos están los camperos o gualas de una gran ayuda para la comunidad, solucionando en parte la difícil situación que se presentaba, y terminar hoy en día con el llamado transporte informal o pirata. (Diario de campo, Carlos Hernando Reina Sandoval, comunicación personal, 24 de junio de 2023)

Se puede evidenciar así que estas problemáticas centrales que han sido percibidas por la comunidad de manera histórica aún prevalecen y lo que se ha ido transformando son las peticiones del transporte respecto a la época, sus habitantes y la institucionalidad. Sumado a que en la actualidad los deslizamientos de tierras ocasionan cierres de vías, además de los trancones de vehículos los fines de semana, por ser la única salida hacia las zonas de recreo de la ciudad, que también hacen parte de esa transformación histórica del problema.

Sobre todo, es de resaltar la importancia de la organización comunitaria para enfrentar cada una de las necesidades del barrio de manera conjunta,

desarrollando distintas acciones colectivas a lo largo de los años, fortaleciendo la solidaridad alrededor de fines comunes, primero para el establecimiento de un lugar para vivir y luego para mejorar las condiciones de vida en ese espacio. La gente en general se enfrentaba a la exclusión estructural: «estrangulamiento de los ya insuficientes programas oficiales de vivienda. El empobrecimiento continuo del proletariado y de los sectores populares y el encarecimiento desmedido y progresivo de la vivienda y el suelo urbanos» (Mosquera, 1984, p. 130).

Este barrio recoge parte de la experiencia que significó para el país el Movimiento de Destechados que, como lo planteó Mosquera (1984), fue resultado de luchas agrarias contra el acaparamiento de tierras por parte de la oligarquía en la transición rural a urbana que venía desde 1920, en donde muchos de los participantes habían estado en otros procesos previos de lucha social. Procesos que además se dan por la respuesta inadecuada del Estado que atacó con la fuerza militar en lugar de ofrecer soluciones al problema esencial de acceso a vivienda digna, mientras que el Partido Liberal y la Central Nacional Provienda (Cenaprov) sí capitalizaron bien esta lucha y la mezclaban con los objetivos de cada periodo de elecciones, haciendo que la organización política y barrial de los nuevos habitantes de las zonas tomadas luchara por el acceso a servicios públicos y por otras demandas.

Siguiendo con las ideas de Mosquera (1984), las acciones colectivas de los destechados eran múltiples, no solo consistían en la lucha por la ocupación de la zona sino que existían otras modalidades complementarias: «gestando al mismo tiempo otras modalidades o estrategias de combate tales como la acción jurídica, la denuncia parlamentaria, la compra comunera; las tomas de casas de inquilinato o de viviendas nuevas desocupadas y el enfrentamiento con los urbanizadores piratas» (p. 130). Lo que mostramos aquí es que fueron varios procesos al tiempo y replicados en las principales ciudades del país, dando cuenta de un momento de lucha social por la reivindicación del derecho a la tierra, al suelo urbano y a la vida digna.

Aquí también se debe destacar que los procesos de toma de tierras y destechados en Cali y en

Colombia no son únicos de la región, sino que en otros países latinoamericanos se vivieron experiencias similares que nos ayudan a identificar la existencia de patrones estructurales en la transición del campo a la ciudad a mediados del siglo XX y sobre todo de las formas en que el capital se abre paso en el uso del suelo orientado por grupos sociales que trazan sus intereses en esas divisiones espaciales. Tal es el caso de la investigación de Álvarez-Rivalluda (2017) sobre los asentamientos irregulares en Montevideo, quien identifica procesos de toma de tierras por goteo, organizados, y las políticas estatales aplicadas en la zona para controlar la expansión de estas periferias.

De fondo lo que sigue apareciendo como una característica reiterada es la construcción del tejido social alrededor de la acción conjunta por obtener vivienda digna, una mirada a procesos comunitarios que llevan décadas de trayectoria.

Los vecinos del barrio en los años setenta eran gente muy amable, cordial y servicial, cada uno proveniente de diferentes culturas, con acentos y costumbres bien marcadas; los encuentros de los hombres mayores los hacían en las cantinas más famosas del barrio: El Trapecito, Doña Nelly y la Portada al Mar, allí se escuchaba música popular campesina y se bebía, se bailaba hasta el amanecer. En cada diciembre era costumbre compartir diferentes platillos típicos del departamento del Cauca como era la natilla, los buñuelos y el plato fuerte que bien podía ser tamales o arroz con pollo, además de repartir bebidas como aguardiente, ron y vino; eso se hacía el 24 y el 31 del mismo mes para celebrar el nacimiento del niño Jesús y la bienvenida del año nuevo. Las organizaciones de base eran las juntas de acción comunal y los líderes convocaban a los trabajos comunitarios para arreglo de las vías que poco a poco se fueron autopavimentando con recursos mixtos entre el gobierno local y la mano de obra comunitaria. (Yesid Muñoz García, comunicación personal, 2 de mayo de 2023)

Estas iniciativas con el paso del tiempo fueron encontrando algunas respuestas por la presión de los grupos sociales en la obtención de derechos frente al Estado; en este caso, acceso progresivo a espacios de recreación, por ejemplo, a la construcción de centros recreativos para el disfrute del

espacio habitado, lo que va mostrando la transformación del espacio con el paso de los años, aunque permanecen conflictos por el acceso a esos bienes colectivos, la regularidad en los servicios de agua, el mejoramiento de vías, sumado a los procesos de inseguridad y violencia que persisten en la zona.

En detalle, el problema del agua ha sido histórico; por ejemplo, algunos relatos de los líderes en el año 1998 decían que ya la pelea no era por la pavimentación en los primeros años, que ellos ya habían gestionado, sino por la duración del suministro de agua, algo que hasta la actualidad no depende de la organización comunitaria sino de la gestión municipal.

Hoy los líderes comunales luchan por obtener recursos y como veedores de las obras, como la instalación de la red de acueducto para Terrón, el cual solo cuenta con el servicio de agua durante ocho horas al día. Y es que este ha sido un problema desde que llegaron los primeros habitantes. El río Cali, en el sector de Las Pilas, surtió durante años de agua a los pobladores de Terrón y muchas de las señoras tenían que levantarse a las 2:00 de la mañana para tomar un recodo del río y poder lavar sus vestidos. (*El Tiempo*, 14 de abril de 1998)

Otra situación que ha sido fundamental para los habitantes es su relación ambiental con las montañas de la ciudad y particularmente con el agua. En conversaciones con el líder comunitario Orbay Beltrán (27 de marzo de 2024), este destaca que la gente de otras zonas no conoce la otra cara del río Cali, por ejemplo, pues mientras los habitantes lo reconocen a su paso por el bulevar del río, donde no hay uso vital ni recreativo, sino que hace parte del paisaje turístico de la zona central, los habitantes de Terrón Colorado todavía caminan por las montañas aledañas a la comuna y se bañan en la zona cristalina del río Cali y del río Aguacatal, evidenciando que en esta zona está más marcada la relación rururbana con los corregimientos aledaños, la vía al mar, incluso las casas con sus proyectos de huertas urbanas, alimentada además por esa iniciativa comunitaria que persiste en el nuevo siglo, pero que son relaciones que la misma alcaldía desconoce. Incluso mencionaba el líder su enfado por no ser tenidos en cuenta como un sector ecológico, que podría brindar una mirada en ese sentido a la cumbre de la COP16 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, realizada en el mes de octubre del año 2024 en la ciudad).

CAPÍTULO 4

CONFIGURACIÓN DE LA PERIFERIA EN LA RIBERA ORIENTAL DEL RÍO CAUCA, A PARTIR DEL CASO SUERTE 90

Introducción

En este capítulo se recoge la configuración espacial del barrio Suerte 90, una urbanización dentro de la comuna 21, al oriente de la ciudad, que, como el resto de la zona, tuvo su mayor desarrollo y expansión entre los años noventa y dos mil, marcada por las políticas nacionales de viviendas de interés social, centradas en los procesos de créditos a los estratos más bajos de la ciudad, siendo claro el contraste con los barrios de autoconstrucción resultado de los movimientos urbanos que se extendieron a mediados del siglo XX como Terrón Colorado, o en zonas aledañas como las comunas 13 y 14, que también tuvieron procesos de loteo informal al mismo tiempo que de interés social.

Aquí se inicia hablando de la configuración de la comuna por ser un proceso estatal de diseño de la política urbana, de la división pensada por las élites y el gobierno municipal, que será el marco de referencia para consolidar el margen urbano de la ribera del río Cauca, acumulando por décadas exclusión social, sobre todo condensando el estigma de una gran «mancha urbana», como lo llamaría Wacquant (2001), que en este caso se denomina «Distrito de Agua-blanca». Para ello se usa el archivo histórico a partir de noticias, fotografías, investigaciones previas y se complementa con diarios de campo y entrevistas a los habitantes.

También se detalla el proceso de fundación del barrio, señalando las características del sistema de créditos para adquirir lotes o para adquirir VIS, las políticas nacionales detrás de los planes de vivienda, las dinámicas de los pobladores. Y se procura nombrar los conflictos que enfrentan sus habitantes con las escrituras y con el equipamiento de la zona, que, a pesar de ser una urbanización estatal, enfrentó desde el comienzo un proceso de autoconstrucción que refleja ante todo las características de las políticas neoliberales en la ciudad que, como refiere Ziccardi (2001), evidencian la reducción de la intervención del Estado.

La consolidación de la comuna 21

Hablar del oriente de Cali en el siglo XXI es referirse en términos de división administrativa a las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, que además llevan impregnadas unas condiciones de vulnerabilidad histórica, al igual que estigmas sociales que configuran su segregación espacial. Pensando en su origen, el oriente es resultado de una expansión acelerada en la que confluyeron elementos formales e informales de la planificación urbana; por un lado, las gestiones de élites, empresas y Estado para la desecación de la zona inundable del río Cauca; por otra parte, la gestión nacional de programas y créditos de VIS, y también las acciones colectivas de exigencia y resistencia de quienes habitan esta zona de la ciudad desde los años ochenta.

En este sentido, este espacio urbano fue la consolidación del poder simbólico representado en las élites que piensan, diseñan y plasman de forma física la ciudad, en este caso élites empresariales del Valle del Cauca conectadas con las élites estatales que transformaron las tierras inundables en zonas agrícolas productivas, las cuales más adelante serán más rentables si en lugar de usarlas para la siembra se usan para el capital financiero vía proyectos de vivienda que solo son posibles mediante créditos para los destechados de la ciudad. Lo anterior no era posible sin un marco administrativo de gestión medioambiental y urbana, por lo que el paso central era la creación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que podría direccionar los proyectos de renovación, tal y como lo explica Uribe (2020):

El progreso se veía en la transformación de las tierras inundadas y anegadizas por zonas disponibles para cultivos con métodos modernos agrícolas. Y que esto implica una transformación cultural del campesino tradicional que debía incorporarse en la senda de la modernización y la tecnificación. Y que esta no solo era una tarea de la región sino de la nación. [...] El Gobierno departamental había autorizado obras de desecación y construcción de canales bajo la idea de la necesidad de ingresar en la modernización y la tecnificación del campo: obras, puentes, desecaciones, interconexiones, diques, entre otras obras de ingeniería civil con

las que se pretendía adaptar las tierras rurales a las actividades agrícolas y productivas. Hacer de tierras ociosas, tierras que generaran ingresos y ganancias. (pp. 38-39)

Estos proyectos de infraestructura responden además a las presiones extranjeras sobre el desarrollo económico pensado para el sur global en el periodo de ascenso del capital estadounidense, por lo que las iniciativas de renovación y desecación del Valle del Cauca eran misiones con recursos económicos que se recibían como recetas para la modernización de las tierras. Tal es el caso del Plan Lilienthal con la CVC, en el que se prioriza un modelo extranjero por encima de las necesidades ambientales de las zonas de descanso del río con lagunas naturales:

Toda la parte de Cali, desde la línea del ferrocarril, entre las calles 25 y 26, hacia el oriente debió ser una zona de amortiguamiento para la dinámica de inundación del río Cauca y no un área de expansión urbana. Esto había quedado muy claro en la formulación del Plan de Winner y Sert o Plan Piloto de los años 40, el cual no fue llevado a cabo en su totalidad porque primaron los intereses por fomentar y ejecutar el Plan Lilienthal que diseñó el valle geográfico del río Cauca a partir del modelo del valle del Tennessee en Estados Unidos, con el que se pretendía beneficiar al sector agrícola y agroindustrial. (Uribe, 2020, p. 53)

La idea de desecar se llevó a cabo de la mano del Plan Aguablanca, donde se plasmaron los drenajes y sistemas de canales necesarios para la zona oriental de Cali, así como también se pensó en los diques de protección del río Cauca y del río Cali en las décadas del cincuenta al setenta, zonas que posteriormente se adecuarían por población de Cali y migrantes para ser habitadas de forma irregular y lograron establecer cientos de hogares y familias hasta finales de los años noventa, sin ninguna resistencia de las autoridades medioambientales. Por eso la ocupación de una zona de riesgo no mitigable no es anarquía o causalidad natural de un proceso de expansión, sino que hubo participación estatal, de instituciones ambientales, de servicios públicos, políticos, élites, empresarios, un conjunto de actores que sabían lo que ocurriría en el oriente y les servía porque era una demarcación que ya

estaba proyectada en la ribera del río, donde los procesos sociales no alterarían la reproducción del capital financiero de zonas periféricas de disputa como el sur, el oeste, Pance o demás sectores rentabilizados de la ciudad.

Por su parte, la construcción de la comuna 21 es otra consolidación de las ideas de agentes sociales que cuentan con el poder simbólico de ejecutarlas, y es necesario mencionar esta historia porque se relaciona con el segundo caso de estudio que es Suerte 90, particularmente con el surgimiento del proyecto Ciudadela Desepaz, una apuesta referente en Colombia para la VIS en la presidencia de Ernesto Samper, según lo refiere Osorio (2016), pues se proyectaban 28 000 viviendas en el Poligonal E, que se encontraba delimitado en el Plan de Desarrollo de Cali en 1991, el cual tenía 480 ha disponibles para la construcción, que eran de distintos propietarios.

La población focalizada, como lo refiere Osorio (2016), eran familias de estrato 1, que su rango de ingresos estuviera entre 0 a 2 salarios mínimos; además, tenía el propósito de vincular a distintos agentes estatales, privados y élites: «el municipio vinculó al Programa dos cajas de compensación familiar, dos fundaciones sin ánimo de lucro y un conjunto de constructoras privadas cuya racionalidad económica dista mucho de la subsidiariedad». (Osorio, 2016, p. 13)

En el imaginario estaba que la apuesta por Desepaz era brindar soluciones de vivienda a las familias más vulnerables de la ciudad, a través de la gestión de subsidios del Gobierno, pero la vinculación de cajas de compensación y constructoras privadas hicieron que se privilegiara la garantía salarial y de créditos a las familias, aunque también había una parte destinada a sectores en riesgo.

El proyecto de Invicali, que consta de 2.780 lotes con servicios para desarrollo progresivo, es el más adelantado. Invicali destinó 1.700 lotes para familias con ingresos entre cero y dos salarios mínimos, 1.200 lotes para personas reubicadas de zonas de alto riesgo y 200 para trabajadores del sector informal. El resto de lotes (1.080) fueron vendidos a familias con ingresos de dos a cuatro salarios mínimos. El segundo proyecto más adelantado es el de la firma Holguines (3.677 lotes con servicios y asistencia técnica), que entregará dos mil durante este mes.

Comfenalco y otras cajas de compensación familiar iniciaron obras de infraestructura básica, por lo cual estimo que para diciembre tengamos entre 8.000 y 9.000 soluciones de vivienda entregadas, que corresponden al 30 por ciento de Ciudadela Desepaz, dijo Ulloa. (Rosas, 1995, párr. 16)

Aquí ponemos en juego la *trialéctica* de Bourdieu, que menciona Wacquant (2022) cuando usa la metáfora de llevar este autor a la ciudad, insistiendo en que el estudio de distintas escalas como una esquina, un barrio, una región u otra, deben recoger en una especie de crisol el espacio simbólico, el espacio social y el espacio físico; es decir, hay que analizar la intersección entre personas, lugares, objetos y actividades. Sobre todo, darle un lugar de honor al poder simbólico que es el que genera categorías mentales sobre cómo debe ser el espacio y luego las convierte en realidad a partir de proyectos de vivienda, por ejemplo, y de la mano de ese campo simbólico va aparejado el campo burocrático, donde el actor principal es el Estado.

Por ende, el diseño de la comuna 21 y todos los proyectos de vivienda que desde la década del noventa hasta la segunda década del siglo XXI se han desarrollado, representan el poder simbólico que el Estado ejerce sobre la división espacial de Cali, y esto se ha dado en distintas escalas, desde establecer la infraestructura como el tamaño de las viviendas, los planos, la dotación de capitales, calles, servicios públicos, zonas compartidas y de esparcimiento, que siempre han estado acompañadas de categorías asignadas a los beneficiarios, como la de subsidiados, que ya van con el efecto arrastre de inseguridad, baja calificación, con necesidades y precariedad.

Dar un lugar de honor al poder simbólico, ejercido por los especialistas en producción cultural, que elaboran y difunden constructos mentales autorizados, y experimentado por los urbanitas mientras navegan por el paisaje de la ciudad y absorben las representaciones que lo organizan. Comenzar con el poder simbólico, el concepto característico de Bourdieu, también significa comenzar con el estudio del Estado como agencia material y simbólica suprema que establece los parámetros más amplios del espacio físico, social y simbólico en la ciudad. (Wacquant, 2022, p. 7; traducción propia)

Esta materialización de las categorías mentales va acompañada de estrategias de financiación; sin embargo, como lo señala el periodista, el Gobierno nacional no cumplió con la totalidad de subsidios que se había propuesto para las familias vulnerables y la vía más factible para continuar con los proyectos eran los créditos, a los que no podían acceder quienes venían de zonas de invasión como, por ejemplo, Cinta Larga en Petecuy, que además devengaban su ingreso de actividades informales. De ahí que fuera premonitorio que las familias sin ingresos fijos salariales no lograrían acceder a los proyectos habitacionales y uno de sus caminos fuera la invasión de zonas aledañas como la cresta del jarillón del río Cauca.

Ante la demora en los subsidios, los adjudicatarios de Ciudadela Desepaz entre cero y dos salarios mínimos han tenido que acudir a créditos de corporaciones de ahorro y cooperativas financieras [...]. Si los subsidios no llegan o si los adjudicatarios se cuelgan en las cuotas, las entidades financieras harán efectiva la garantía, con lo que la ilusión de casa digna para familias como la de José Ramírez quedarían frustradas y, seguramente, tendrían que invadir las zonas inundables del Río Cauca. (Rosas, 1995, párrs. 25-26)

Las familias que accedieron a estos megaproyectos de viviendas en el oriente de la ciudad ingresaban bajo el modelo mixto de crédito y subsidios, lo que implicaba mantener unas condiciones de ingresos fijos y trabajo formal que más adelante se convirtieron en el motivo para dejar los proyectos. Además de eso, los proyectos habitacionales no entregaban todo el equipamiento urbano listo, sino que se dejaban como futuros desarrollos mientras hacían las entregas de vivienda en obra negra, incluso el tema de servicios públicos se iba adecuando en el camino; por ejemplo, vías que quedaron en los planos y no se construyeron, entre otros aspectos que no se cumplían. Estas condiciones contrastan con otros proyectos de vivienda para las clases medias al sur de la ciudad, como los de La Selva o San Fernando, donde las dimensiones eran distintas y la infraestructura alrededor de la casa modelo estaba previamente construida, por eso Bourdieu (1999) explica que «quienes carecen de capital son

mantenidos a distancia, ya sea física o simbólicamente, de los bienes socialmente más escasos, y se los condena a codearse con las personas o bienes más indeseables y menos escasos» (p. 4).

Este análisis permite comprender que no es gratuito que a los estratos 0 a 2 se les diseñara estos proyectos habitacionales de la periferia con las condiciones de vida mínimos, sin infraestructura, con área construida para familias pequeñas y no acordes con el contexto de estos hogares, incluso alejados del centro administrativo de la ciudad. Había una intención de segregar los grupos sociales vulnerables de las clases medias que tendrían sus proyectos habitacionales en la comuna 3, 4 o 17, zonas en las que la oferta de centros educativos, de salud, comercios, casas culturales, regularidad de transporte público, restaurantes, entre otros, eran superiores.

La política de vivienda en Cali además tenía un agravante y es que, como lo plantea Olarte Ibarra (2025) en su investigación sobre el barrio La Selva, en el papel se decía que estas viviendas serían para población de estratos bajos sin posibilidad de acceder a las unidades habitacionales, por eso los costos eran inferiores a otros proyectos de la ciudad, pero estas convocatorias a los proyectos no eran publicitadas y terminaban accediendo trabajadores del Estado o de empresas de élite que contaban con ingresos medios y altos, y se quedaban con la oferta para la población vulnerable. De ahí que se mostrarán otras prácticas clientelistas alrededor del déficit habitacional de la ciudad que no eran solo de los grandes proyectos de renovación urbana, sino de muchos de los barrios que se proyectaban construir en suelos valorados espacialmente.

Los proyectos de interés social en la comuna 21, a pesar de estar dirigidos a la población vulnerable, reflejan la contradicción de combinar el capital financiero con la política social, como lo establece el neoliberalismo, pues como se muestra en la Figura 20, el proyecto Desepaz también se pagaba vía crédito y esa condición seguía dejando por fuera a las familias sin empleo fijo y sin historial crediticio; por lo tanto, la ocupación de hecho en las viviendas estatales se convertía en un recurso para los destechados que esta vez sí encontrarían a las instituciones para frenar el proceso.

CALI

SANTO DE CALI SÁBADO 8 DE ENERO DEL 2000 **El País** CORREO ELECTRÓNICO: cali@elpais-cali.com

B3

Fueron desocupadas 118 casas

Desalojada la invasión de Pízaños

De manera pacífica, pero dramática, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cali, realizaron el lanzamiento. Habitantes del sector piden que se refuerce la seguridad para evitar la llegada de los delincuentes a la zona.

Con su colección a cuestas, unos cuantos enseres y la poca ropa que le ha quedado de tantos irs y venirs, Luz Dary Quintero, tuvo que salir ayer, a tempranas horas del día, de la casa del sector de Pízaños que por más de una semana ocupó junto a su esposo, su madre y sus dos hijos.

Como ella, otras 200 personas, que invadieron a finales del año anterior 118 viviendas de esta zona, situada en la Ciudadela Deszap, fueron desalojadas, en un operativo coordinado por la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cali.

Las soluciones habitacionales, dispuestas por la Secretaría de Vivienda para la reubicación de los damnificados del invierno, fueron ocupadas sin autorización alguna, por personas que aprovecharon las festividades de diciembre para encontrar un lugar mejor dónde vivir.

“Las personas tienen que regresar a los sitios donde estaban, antes de invadir estas viviendas. Lo cierto es que el operativo se realizó de manera pacífica y concertada con la comunidad”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Rafael Pardo Cortés.

Sin embargo, el drama de los desalojados no tardó en hacerse presente en el sector. Justo a las 11:00 a.m., en una esquina del ingreso a Pízaños, donde la Policía dispuso un retén para impedir el paso de la prensa y los curiosos al lugar del desalojo, la familia de Luz Dary Quintero descargaba su trasto. Según ella, a diferencia de otros invasores, no tenía ningún lugar a dónde ir.

“Nos tomamos el atrevimiento de ocupar una casa en Pízaños porque el ranchito donde vivíamos, cerca al jatlón del Cauca, se acabó con la última inundación que provocó el río. Si esas casas están desocupadas no entiendo por qué el Gobierno no nos puede ayudar”, precisó esta mujer, oriunda de Ansermave.

Edelmira Cardona, otra invasora que ayer se quedó sin hogar, recordó que no tiene ningún familiar en Cali a quien acudir y que su suerte futura la deja en manos de Dios y de alguien que se compadezca de su situación.

Por otro lado, los habitantes de Pízaños, que actualmente pagan a cuotas sus soluciones habitacionales, pidieron que se refuerce las medidas de seguridad en la zona, para que las casas deshabitadas no se conviertan en nido de delincuentes.

Una investigación, que precise si detrás de esta invasión había algún líder coordinando este tipo de actividades en la Ciudadela Deszap, adelantará la Policía Metropolitana.

“No hemos podido detectar si existe alguna red que esté realizando dichas acciones, pero de ser así serán sancionados”, manifestó el Comandante de la Policía Metropolitana, Rafael Pardo Cortés.

Asimismo, en relación con las denuncias consistentes en que los celadores del sector fueron intimidados y amenazados para permitir la invasión de las viviendas deshabitadas, el Comandante de la Policía aseguró que se tratará de aclarar las dudas al respecto.

Investigación

El drama de las familias, que desalojaron en forma pacífica las viviendas, no se hizo esperar. Algunos aseguraron que no entienden por qué si hay casas deshabitadas ellos no pueden ocuparlas.

Figura 20. Noticia sobre desalojo en Pízaños.

Fuente: *El País* (8 de enero de 2000).

Lo importante de señalar es que los planes de vivienda de los años noventa en el oriente de la ciudad son resultado de una estrategia gubernamental y colaborativa con entidades privadas, que se dio bajo orientaciones y financiación internacional, sumado a los programas de créditos para población de estratos 1 y 2 que el Gobierno diseñó en respuesta al déficit habitacional, y se reconoce la participación de los grupos sociales en cabeza de élites específicas para pensar la ciudad. Por ende, este espacio social de la comuna 21 materializa el efecto simbólico de separación entre grupos

sociales al atribuirles un espacio que carga con estigma de forma previa y desde el mismo momento en que se focaliza la población de los programas sociales, y, por otra parte, condena a los sujetos a espacios de exclusión estructurales, dado que «la exclusión de un lugar, de las condiciones de participación de un entorno construido implica necesariamente la exclusión de un espacio social, de un conjunto de relaciones que hacen del individuo o un grupo social un sujeto social participante de dicho espacio» (Flores, 2009, p. 9).

Sobre los orígenes del barrio Suerte 90

De acuerdo con el Manual del Propietario entregado por la Federación Nacional de Vivienda Popular (Fenavip, 2001) a los propietarios de los predios de Suerte 90, el barrio surge como una iniciativa que reivindica el movimiento viviendista del país y propende al tejido comunitario: «El reto no es sólo construir casas, sino comunidades capaces de ser portadoras de memoria, identidad e historia» (Fenavip, 2001, p. 4), lo cual prueba que la iniciativa venía de procesos políticos previos y que en conversaciones de campo los habitantes militaban en partidos políticos como el Polo Democrático y también exmilitantes del M-19 en Cali, quienes a su vez se conectaban con procesos nacionales por la política social de vivienda.

En el documento se describe, así mismo, que «nuestra diferencia como experiencias autogestionadoras de vivienda radica en que, si bien nos agrupamos en torno a un problema común, que es la carencia de vivienda, este factor no es ni debe ser el único convocante» (Fenavip, 2001, p. 4), por eso el diseño estaba pensado desde un principio como colaborativo y con un grado alto de autogestión, y es en esa medida que la idea de ecobarrio se ligaba a la posibilidad de hacer huertas que contribuyeran a la autosuficiencia de las familias beneficiarias que venían con problemáticas como ser víctimas de desplazamiento o del conflicto armado.

Retomando a Cardona Martínez (2005), el barrio surge como una apuesta ecológica pionera en Colombia y tenía en términos de infraestructura unas dimensiones de 30,8 m² destinados en cada uno de los trece bloques en los que se ubicarían 270 familias, con un costo promedio de \$14 500 000 por vivienda; además se proyectaron 1200 m² para áreas comunes que se esperaba fueran utilizadas para huertas comunitarias. Un aspecto para resaltar es que en el proyecto participaron actores como la Federación Nacional de Vivienda Popular, el Ministerio de Vivienda, Fondos de Comfenalco, Comfandi e Inurbe.

Por otra parte, Arce y Lucumí (2020) plantean que el surgimiento del barrio fue el 20 de julio del año 2000 y que al principio se llamaba «Ricardo Cobo

Naranjo», luego se denominó Ecobarrio, en el 2001, y finalmente quedó con el nombre de Suerte 90.

Se llama Suerte Noventa, porque el barrio está ubicado en el lote número 90 de la constructora Meléndez, entonces, a raíz de eso nació el nombre, de hecho, hay en Palmira un barrio que se llama Suerte Treinta, digamos que eran los nombres que tenían los lotes de los cañaduales. (Comunicación personal, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, p. 51)

Este proyecto respondía a la política de vivienda vigente que en las orientaciones legales decía favorecer a la población más vulnerable y era ejecutada bajo la lógica neoliberal; es decir, intervención mixta entre instituciones estatales y empresa privada. La categoría de «favorecido» o «beneficiario» se construye desde la desposesión simbólica de la condición de ciudadanía y se configura al excluido sin sus rasgos de agencia o movilidad social. Por lo cual no es gratuito que quienes llegan a los programas de vivienda tengan de forma previa otras categorías de exclusión como la de ser desplazados, migrantes, grupos étnicos, minorías, y en general grupos particulares que configuran el espacio social diferenciado individual del que habla Flores (2009): «totalidad de las relaciones sociales en que se inserta, incluida la totalidad de los lugares en que se mueve un individuo (como relaciones pasadas), y que le hacen un sujeto social» (p. 9).

La relación que construye ese sujeto en un espacio individual diferenciado es la que contribuye a la reproducción de la totalidad del espacio social; por ende, los barrios diseñados para población vulnerable son en sí una extensión de la exclusión, más que una respuesta definitiva que rompa con el ciclo de exclusión; las viviendas pensadas desde la construcción simbólica y espacial de la zona, sellan a perpetuidad la sumatoria de exclusiones en la ribera del río Cauca, pues que vivan ahí evitará que afecten las vidas de las clases altas y las élites. Los sujetos «son excluidos de todos los lugares, y con ello, de todos los espacios sociales implicados, con ello se les quita la posibilidad de desarrollarse como sujetos sociales [...] se pueden morir de hambre mientras lo hagan de manera no ofensiva para la burguesía» (Flores, 2009, p. 10). Para el

presente caso, pueden acumular índices altos de NBI, mientras no tengan que estar cerca de las zonas de prestigio en la ciudad.

En Suerte 90 destacan, entre los primeros pobladores, los grupos de desplazados en medio del conflicto armado, que migraron desde zonas como el Pacífico vallecaucano y la costa nariñense, los cuales respondían a la población focalizada para la mencionada política de vivienda de los años noventa.

Suerte Noventa fue primero... la cooperativa llamada FENAVIP, fue los que primero implementan la formación de la urbanización, segundo, hubo acompañamiento de la Secretaría de Vivienda, hicieron acompañamiento y habían 280 viviendas, se fundó el 20 de julio que se hicieron las entregas de las viviendas y el 7 de agosto del mismo año (2000) fue igualmente Suerte Noventa etapa II, o sea que, eran pocas viviendas, en Suerte Noventa etapa I fueron 280 viviendas y Suerte II, 46 viviendas, o sea que, era poca gente que fueron fundadores, ahora ya pocos son fundadores porque ya han arrendado, vendieron sus casas, ya no están viviendo por acá, otras ya fallecidas, ya no hay 200 de tantos fundadores, hagamos una estadística, hay 150 fundadores, del resto, son puros inquilinos o gente que ya compraron sus viviendas, unos vienen de Jamundí, otros vienen de Terranova, otros vienen de Mojica, de otras comunas, de otros territorios, la comuna 7, la comuna 8, la 15, la 17, pero anteriormente fueron 200 viviendas, las entregas de interés social, cuando entregó FENAVIP en compañía de la Secretaría de Vivienda, hacían acompañamiento en las entregas que sean viables, entrega de viviendas a las personas, 2000, 2001 se entregaron las viviendas. (Comunicación personal, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, pp. 52-53)

Estos relatos ayudan a contrastar la idea del efecto arrastre del que habla Bourdieu (1999), en la cual los agentes sociales que tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre dónde deben asentarse ciertos grupos poblacionales planifican concentrar un proyecto habitacional que tiene condiciones socioeconómicas homogéneas como la desposesión de capitales y se nivelan hacia lo más bajo de la exclusión. Por lo tanto, se encierra a estos grupos al dejarlos sin posibilidad de movilidad dentro

del espacio urbano, y son muy pocos los que logran moverse a otro barrio o salir definitivamente del oriente.

En esta misma línea Wacquant (2022) designa al Estado el papel de máquina estratificadora y clasificadora que designa la forma que tendrá la marginalidad y la desigualdad en la ciudad, desde esferas altas, como se patentiza aquí, con políticas nacionales de vivienda, con diseños centrados en la economía del crédito, del papel representativo de la deuda, de la consecución de los permisos para el diseño de los proyectos por parte de las constructoras.

Esto se relaciona con aspectos que detalla Wacquant (2001) al explicar la producción del cinturón negro en Chicago, el cual responde a una política de renovación habitacional y urbana para amontonar a la población negra en el centro de la ciudad (South Side y West Side), mostrando que las políticas de vivienda subsidiadas como forma de sostener la segregación y la exclusión de ciertos grupos viene de modelos extranjeros en los que se han pensado viviendas diferenciadas para clases sociales altas, mientras que para los grupos sociales con desventajas económicas, que además son migrantes y cargan con la condición étnica de racismo estructural, se diseñan viviendas con menor espacio habitacional, en sectores de poco capital espacial, con múltiples mezclas culturales, donde hay violencia, inseguridad, y además se endeudan para poder vivir ahí.

Las viviendas para negros y pobres fue notablemente mezquina [sic]: desde 1937 hasta 1968, se hicieron diez millones de unidades privadas para personas de ingresos medios y altos, con el respaldo de la Agencia Federal de la Vivienda, mientras que sólo ochocientas mil unidades públicas de construcción apresurada y barata se erigieron con subsidios federales. (Wacquant, 2001, pp. 80-81)

La situación de arrastre se contrapone al efecto club del que también habla Bourdieu (1999), el cual ya no se refleja en los barrios de interés social, sino que se puede comparar con las zonas exclusivas donde habitan las clases sociales que pueden acumular más capital económico, social y simbólico,

que además cuentan con el *habitus* necesario para ir a restaurantes de élite, moverse en los carros más costosos, tener viviendas por encima de los 1000 millones de pesos, barrios elegantes que cuentan con áreas construidas de más de 100 m², equipamientos de calidad para zonas de prestigio, todo lo contrario a los barrios de interés social del oriente de Cali que reproducen la degradación simbólica de la periferia y arrastran el *habitus* que en ese mismo barrio circula.

Hasta aquí es importante destacar que se establece un modelo de barrio para los sectores vulnerables que significa proceso de autogestión en la construcción de las viviendas y el equipamiento barrial, sumado a la condición de crédito y subsidio de cajas de compensación; es decir, un modelo de vivienda que responde a las políticas nacionales de oferta de créditos y no de acceso directo y financiado 100 % por el Estado. Además, ese modelo de VIS responde a la mirada de precariedad de sus beneficiarios vistos como población focalizada desde las políticas sociales, políticas que a su vez naturalizan la pobreza (Netto, 2009), pues mantienen el desequilibrio en el acceso a derechos.

Físicamente el barrio, eran las casitas, normalmente de un solo piso, no estaban pavimentados los antejardines, las entregaron en obra negra, no teníamos parques, no teníamos canchas para jugar, teníamos cuatro lotes que, en el parque había lotes, había una cancha en la que se celebraba el aniversario del barrio, se celebraban los torneos, para hacer cualquier cosas eran casetas, huertas comunitarias, se hicieron dos huertas comunitarias para tener fondos para las madres cabezas de familia, después ya se hizo la proyección con la primera JAC, se crearon los nuevos decretos, resoluciones, para tener reconocimiento ante los otros territorios, para ir a pelear en los comité de planificación, defender los recursos del Estado, hacer proyectos para que no se olvide el barrio, mantener la cordura, para tener la personería jurídica de los barrios, para tener un reconocimiento de nuestro barrio, al principio no teníamos Juntas, se creó la Junta para hacer el fortalecimiento. (Comunicación personal, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, p. 61)

Sumado a lo anterior, las viviendas se piensan en los mínimos de condiciones de habitabilidad en

términos del espacio construido, que como se ve en la Figura 21, corresponde a 30,80 m² al promocionar el proyecto, y con promesas de futuros equipamientos que van a depender del trabajo comunitario, más que una responsabilidad directa del Estado, recalcando que en la sociedad de mercado es la sociedad civil la que termina ocupándose de las funciones principales del Estado de bienestar, pues mientras se globaliza la pobreza se institucionaliza la barbarie a través de subsidios que buscan reducir la pobreza, no eliminarla (Netto, 2009); para este caso, contener la pobreza en proyectos de viviendas que sostienen la marginalidad en condiciones de precariedad, como el poco espacio construido (Franco, 2020).

Aquí sería importante resaltar la función del término *participación de la sociedad civil* como un efecto práctico para afianzar la gobernanza de las políticas sociales que desresponsabilizan al Estado y les da una carga central a los ciudadanos en el acceso a derechos. En este caso, como se evidencia en la Figura 22, se invita a los compradores a involucrarse en la construcción del barrio: «organizada-mente buscaremos opciones para un Jardín Infantil para nuestros hijos, donde implementaremos acciones frente al tema de las basuras, sembraremos árboles frutales y otros que nos den sombra y regocijo, lo que consigamos será producto del esfuerzo y la lucha» (Arce y Lucumí, 2020, p. 52), trasladando bajo un discurso comunitario la pérdida de garantía de derechos que en el contexto actual se deben pelear.

La alusión a un trabajo colaborativo para el desarrollo futuro de la vivienda es otra de las formas de darle protagonismo al nuevo poseedor, que además de tener una deuda con el banco, vía crédito de \$4 549 598, como se muestra en la Figura 23, debe pensar en cómo terminar de construir el espacio futuro del predio que podría alcanzar los 91,08 m², pero al momento de la entrega solo iba a tener 30,80 m² construidos. En últimas, ser protagonista de la sociedad civil en la política neoliberal de vivienda significa terminar de poner el dinero que el Estado antes asumía para entregar una vivienda digna y lista para vivir, como en proyectos habitacionales que ya se mencionaron en el siglo XX, como el caso del barrio La Selva.

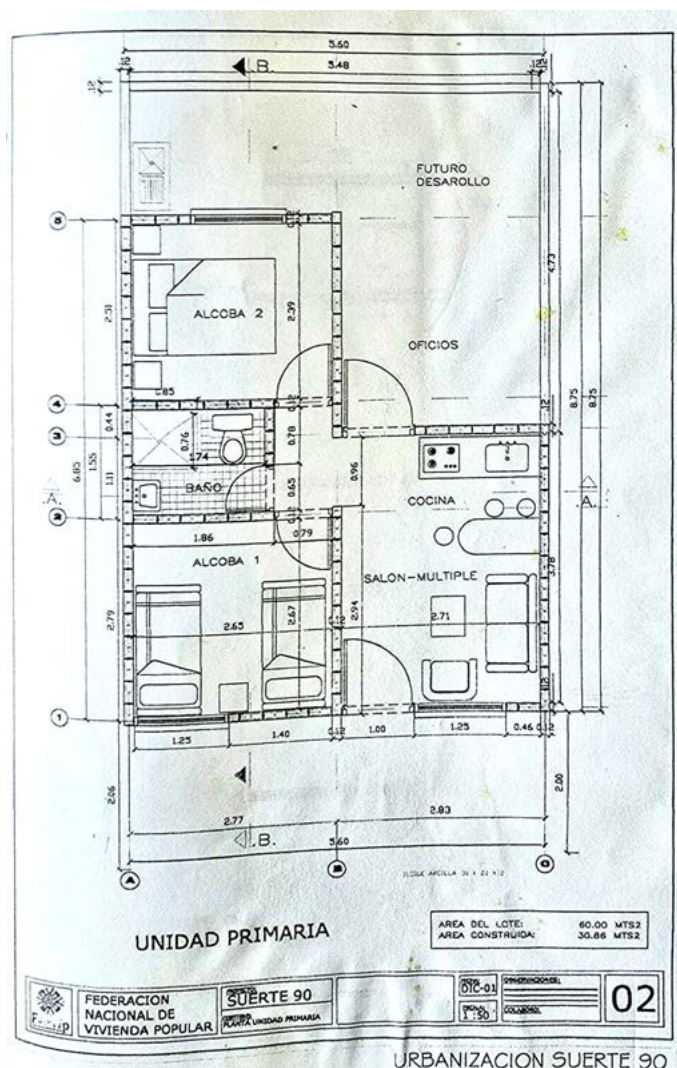


Figura 21. Planos de una vivienda en Suerte 90.

Fuente: Fenavip (2001).

Además de participar de la autoconstrucción del barrio, los habitantes siguen sintiendo una condición de exclusión social a través de los programas sociales agenciados por el Estado, dado que manifiestan desconfianza hacia los funcionarios, falta de sinceridad sobre su condición y una relación de dominio a través de la espera (Auyero, 2018; Wacquant, 2001), como lo expresan los habitantes en otros trabajos de investigación:

Hay un factor que es constante en el tiempo desde el 2002 al 2020 y es el asistencialismo Estatal, que es como la esencia de ellos, ser puntual, ese asistencialismo puntual, ha consolidado programas que se han dinamizado por una mala fuente como es el censo, entonces, hay familias empobrecidas al extremo que no están en ningún programa Estatal, es decir, familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor. (Comunicación personal, 19 de julio de 2020, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, p. 67)

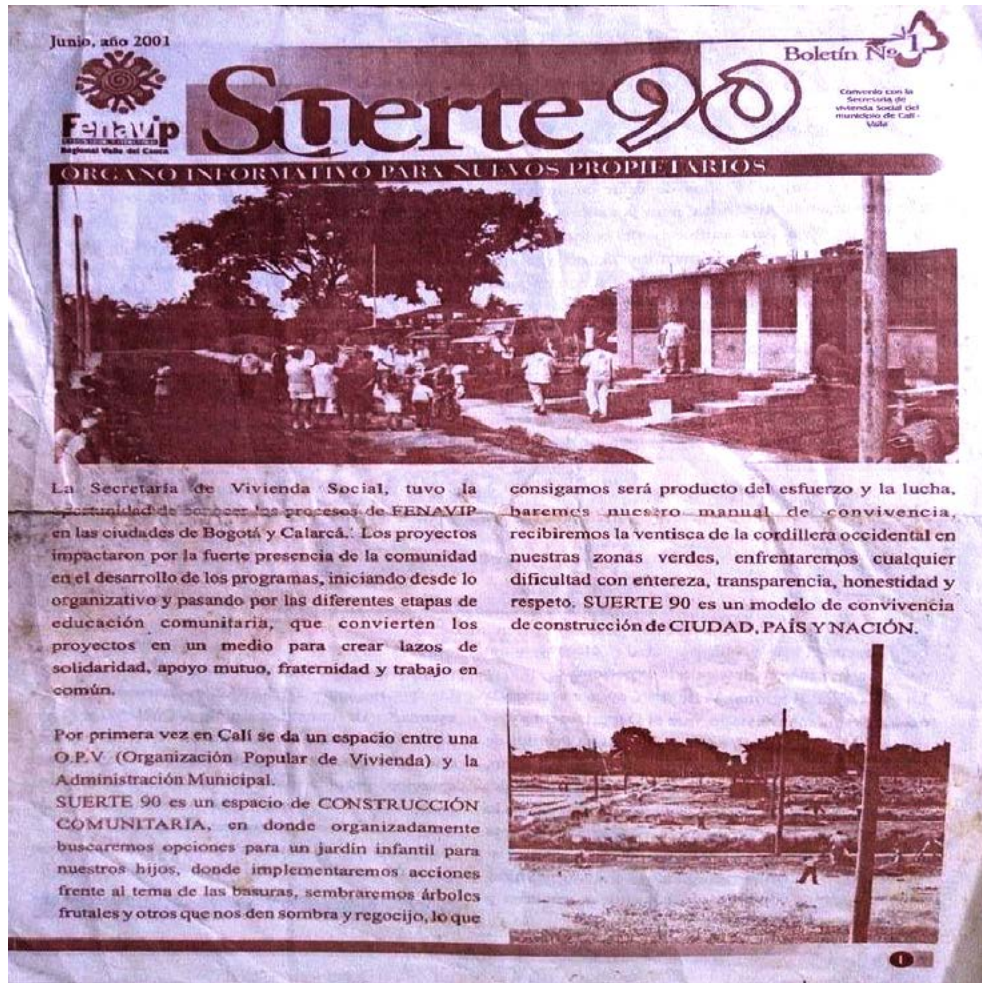


Figura 22. Volante informativo sobre el barrio Suerte 90.

Fuente: Ibarra (2020), como se citó en Arce y Lucumí (2020, p. 52).

Los sujetos entienden que hay una relación con el Estado y su condición de pacientes, como lo denomina Auyero (2018), los pone en una posición de inacción colectiva, pues saben que luego de la entrega de sus viviendas, terminar de pagar la casa y hacerle «mejoras» arquitectónicas vendrá de acciones individuales y de con quién viven en su hogar. También saben que la relación con el Estado será asistencialismo, como lo mencionan en las comunicaciones personales recogidas en la investigación que se cita, por lo que hay una conciencia de esa espera e incertidumbre y por eso la capacidad de agencia colectiva no se desarrolla.

La agencia colectiva, como plantea Sztompka (1995), desde la perspectiva del coeficiente agencial, va a producirse solo si se dan las condiciones en que los sujetos «quieran y puedan actuar», es decir, que deben existir motivaciones para la acción y capacidades para actuar; en términos de lo material y físico, debe existir una conciencia del lugar dentro de la estructura social de los sujetos que reconozca su capacidad de acción y tener los recursos sociales para organizarse y sumar agencias en pro del cambio social. Pero en estos barrios diseñados por el Estado para contener la exclusión social y mantener fija la posición de los sujetos a los que se les atribuye las mismas condiciones de no reproducción del capital



Figura 23. Volante sobre el proyecto de vivienda.

Fuente: Ibarra (2020), como se citó en Arce y Lucumí (2020, p. 59).

como al suelo que habitan, los actores mantienen un papel pasivo que, aunque encuentren estructuras flexibles en la sociedad, no desarrollarán acciones colectivas para buscar un futuro distinto.

Esta característica de autoconstrucción híbrida entre los habitantes, el Estado y los privados encarnados en los bancos y las cajas de compensación para las políticas de vivienda en Colombia a partir de los años noventa y dos mil, marcan la diferencia con los barrios de autoconstrucción que se dieron en Latinoamérica, Colombia y Cali desde mediados del siglo XX hasta los años setenta y ochenta, procesos que Pérez Fonseca (2018) denomina *poblamiento populares*, es decir, espacios construidos

por población empobrecida y marginalizada como alternativa de acceso a vivienda, o que, para el caso de Cali, Uribe-Castro *et al.* (2017) denominan *poblamiento informal*.

Lo interesante para el caso del oriente de la ciudad es que el poblamiento popular que se da en los años ochenta en las comunas 13 y 14, por ejemplo en barrios como El Poblado y Marroquín, respectivamente, cumplen con el ciclo identificado por Pérez (2017): loteo, acondicionamiento del terreno, construcción poco a poco con ayuda de distintos familiares, acceso posterior a servicios y vías, finalmente consolidación de los barrios de la mano del trabajo colectivo, injerencia de actores religiosos, políticos, etc.

Lo anterior en contraste con el proceso de la comuna 21 en los años noventa, donde el Estado crea barrios en sectores excluidos y marginados como política de vivienda, que ahora están en función del valor de uso y del suelo, es decir, periferias policéntricas y autónomas sobre las que el Estado ya no podría generar recursos y ventajas económicas con el endeudamiento de familias que ya son dueñas, como en el caso de las comunas 13 y 14, pero sí lo podía hacer con las VIS en la comuna 21, o con las constructoras y cajas de compensación con las viviendas de interés prioritario en los años 2010 a 2020, con programas de reasentamiento en la política de 1000 viviendas gratuitas del gobierno de Santos.

Esta idea de periferia policéntrica lo que indica es que el conflicto que subyace a la determinación de zonas marginadas sobre las que se puede hacer negocio mediante las condiciones de exclusión y endeudamiento de las clases bajas y medias, es el conflicto por el uso del suelo y por cuáles de los grandes capitales nacionales o extranjeros podrán negociar con ellos. Aspecto que se relaciona con el concepto de periferia diferenciada de Flores (2009), quien menciona que las formas y relaciones de producción de un espacio depende de la valorización y desvalorización del capital, pues en los espacios sociales lo que existen son relaciones de reproducción social.

Aquí la reproducción se da en términos de mantener los privilegios y desventajas de ciertos grupos sociales en relación con el territorio. Mientras los habitantes deben ubicarse en la periferia en su condición de vulnerabilidad, autogestión, precariedad en la movilidad y el equipamiento urbano, endeudarse y hasta perder sus viviendas, los dueños del capital siguen obteniendo ganancias a través de los intereses de los créditos de vivienda, o la celebración de contratos para la construcción por parte de inmobiliarias y cajas de compensación familiar.

Es decir, que sostener la marginalidad y hacer negocio con ella vía créditos de vivienda en el oriente de Cali es una forma mantener una ciudad segregada, ubicada en sectores como la comuna 21 o la comuna 1 que no tienen la misma relación para periferias aledañas como el caso de la comuna 22 o la comuna 2 en Cali.

Continuando con la descripción del surgimiento del barrio Suerte 90, los habitantes relatan:

El barrio, se hizo en varias etapas, se entregaron varias etapas, la primera etapa es por donde vive Paula, de hecho, la casa de Paula es la casa modelo del barrio, hay algo espacial que es muy marcado y es que nosotros debíamos caminar hasta Píamos III, hasta el romboy de Potrero Grande, para coger un bus, para salir a las casas, es decir, que Suerte Noventa existió antes de Píamos II, Píamos II entendido como: Girasoles, Tercer Milenio, Sol de Oriente y todas las demás que puedan existir por allí, entonces digamos que nosotros lo que es actualmente Potrero Grande y Barrio Taller, era un potrero gigante, entonces nosotros estábamos como de las casitas y alrededor una soledad absoluta, con una biodiversidad increíble, con migración de aves cada cierto tiempo, con anfibios que no generaban una molestia en el ambiente. (Luis, comunicación personal, 19 de julio de 2020, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, p. 60)

Aquí resalta esa visión de los habitantes de estar en un lugar alejado de la ciudad, desprovisto de servicios mínimos, que además tiene el efecto arrastre de estigmatización de comunas donde los índices de violencia, inseguridad y NBI son altos. Incluso como se registra en algunos apartados de investigaciones anteriores, la gente prefiere ocultar el nombre del barrio donde vive porque los demás no lo conocen o porque mencionaron lo peligroso que es, como lo decía uno de los entrevistados, Santiago Aristizábal: era más fácil decir que vivían al lado de Píamos o más allá de Píamos, y aun así, los comentarios eran de impresión por los estigmas hacia la zona del fondo del oriente.

Siempre, desde que estudio, cuando me preguntan dónde vivo, omitía decir que Suerte 90 porque daba por hecho que no lo iban a conocer, entonces siempre digo «yo vivo por Píamos, un poquito más al fondo», y la reacción de la gente siempre suele ser: «¡uy, qué fuerte!», pero yo siempre les digo, «mi barrio como tal es un lugar tranquilo dentro de lo que cabe, obviamente siempre ando con cuidado, pero dentro de lo que cabe es un barrio tranquilo»; y siempre les digo que estamos rodeados de otros barrios que sí pueden llegar a ser más complicados. Pero sí, gente que lo conozca solo se me viene a la

mente una compañera que tiene familia aquí, entonces por eso lo reconoció, pero diría que el 95 % de las veces que he mencionado Suerte 90 la gente no lo conoce. (Santiago Aristizábal, comunicación personal, 26 de marzo de 2024)

Este desconocimiento del resto de habitantes evidencia que el efecto de acercamiento/alejamiento que producen las políticas de vivienda que el Estado piensa para la población vulnerable tiene eco dentro de los discursos e imaginarios de los habitantes de la ciudad. Y ese alejamiento se conecta con el efecto club que mantiene cercados en la privación de capitales y de las pocas posibilidades de circular en otros espacios a sus habitantes, pues quienes enfrentan el estigma a diario, que además lo viven en sus desplazamientos desde el oriente a otras zonas de Cali, encuentran muchos obstáculos para ser parte de las zonas de élite de la ciudad. En otros archivos se registra lo siguiente:

Creo que hay algo generalizado y es que somos donde «el diablo pegó el último grito», somos como, de verdad, lo tengo que decir con dolor, somos el escupitajo de Cali ¿por qué? porque nosotros, prácticamente hay un imaginario interno y es que nos dejaron abandonados. (Comunicación personal, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, p. 60)

En este caso se pueden evidenciar los cruces entre los efectos de lugar que genera Suerte 90, el efecto de ilusión empirista que lideran las entidades de control, los demás habitantes con capitales acumulados y sectores de planeación que crean un discurso sobre la marginalidad del Distrito de Aguablanca, aún sin conocerlo, que sirve para sostener expresiones despectivas sobre una zona que se quiere cercar del resto de la ciudad. Lo cual a su vez va acompañado del efecto del poder simbólico que se refleja en la violencia arquitectónica del barrio, de las viviendas, de los equipamientos, y al mismo tiempo los habitantes se adhieren al *habitus* desde las privaciones de capital que los excluye de condiciones de vida digna y les resta posibilidades de moverse a mejores posiciones de la ciudad. Ellos mismos reproducen el lenguaje y las disposiciones de la marginalidad y no encuentran opciones para el trabajo colectivo:

Ventajas: todo es más barato, los servicios o el arriendo, el yipeto, la economía, vivir allá es económico. Las desventajas: la estigmatización, la delincuencia a veces roba a veces también matan no se puede estar tranquilo a veces, creo que la gente debería ser más unida creo que mucha gente se queja de lo mismo que el barrio no progresa pero si no hay unión por los que viven entonces no hay progreso ahí cada quien es como por su lado. (Comunicación personal, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, p. 75)

Aquí, en complemento, otra imagen que representa esa violencia arquitectónica que se aprecia en las casas de interés social respecto al área de vivienda y la zona en que fue pensada, sin adecuación inicial del equipamiento urbano, algo que contrasta con los actuales formatos de venta de VIS, que tienen zonas de adecuación de forma previa, vías nuevas, centros comerciales, gimnasios, salón social, entre otros.

Ubicación y movilidad del barrio

El barrio Suerte 90 está en el límite con el corregimiento de Navarro y los ejidos de la ciudad de Cali, por lo que se ha relacionado en los discursos de sus habitantes y de las instituciones como el «fin de la ciudad». Más aún, cuando se va por la calle 126 (Figura 24) y es el último barrio que cierra la comuna 21 y empieza el corregimiento, y quien viene de norte a sur encuentra a su derecha amplias zonas ejidales y al lado izquierdo la cinta del asentamiento de Navarro, hasta llegar al límite del canal interceptor sur. Alrededor también se encuentran barrios vecinos como Píamos, Barrio Taller, Sol de Oriente y Potrero Grande, algunos construidos después del ecobarrio y con quienes comparten los efectos de arrastre de una zona de acumulación de exclusión social.

Estas imágenes recrean esa idea de estar «al fondo» o en el «límite de la ciudad», pues como se menciona, históricamente la gran laguna de Aguablanca era una zona alejada del centro fundacional de Cali y sus tierras inundables tenían uso agrícola, y hoy específicamente en el corregimiento de Navarro y sobre el jarillón permanecen actividades productivas como sustento de los habitantes, y de ahí que también se le denomine zona rururbana.

En la Figura 25 se puede apreciar que la cría de ganado ha sido una actividad histórica en la zona de Navarro y refuerza el imaginario de estar «fuera de Cali».

En cuanto a la ubicación geográfica, llama la atención que a pesar de que se reconoce como un ecobarrio y hay implicación de instituciones gubernamentales en el diseño y establecimiento de la zona para la construcción de las viviendas, la información exacta sobre su ubicación es difícil de

conseguir y esto se suma al desconocimiento del resto de la ciudad sobre la existencia de Suerte 90. Este es uno de los sentidos de la comparación de distintas escalas analíticas en el estudio del espacio urbano revisar estas brechas y tensiones en la delimitación de la ciudad y la imagen que de los barrios de interés social se consolida, ocultos en el encerramiento simbólico de su arquitectura y apenas visible veintitrés años después para la representación formal en mapas (Figura 26).



Figura 24. Una de las vías pavimentada.

Fuente: Córdoba Erazo (2005a).



Figura 25. Terrenos aledaños al barrio.

Fuente: Córdoba Erazo (2005b).

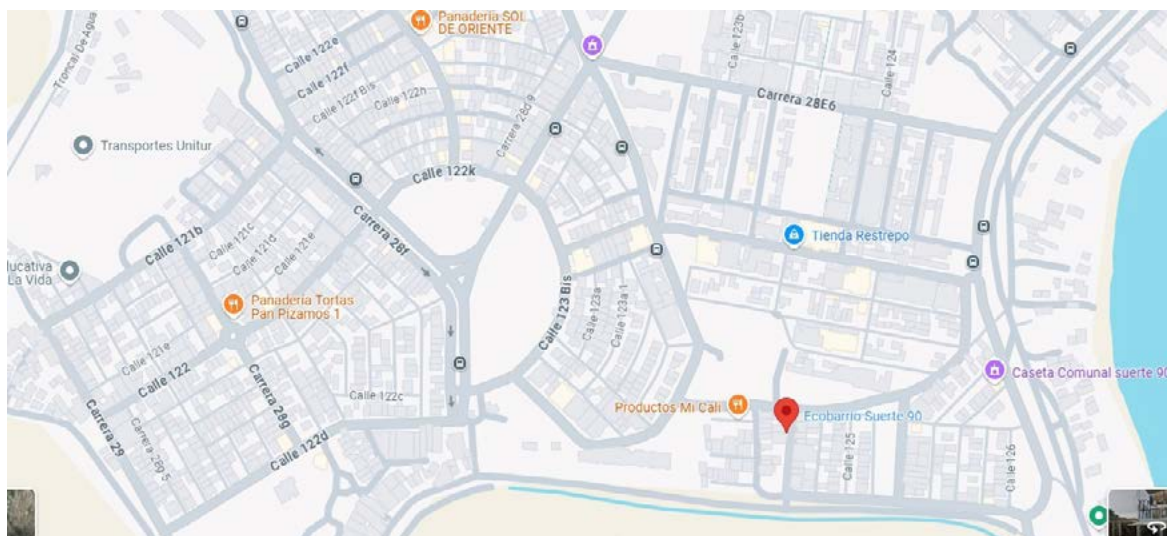


Figura 26. Ubicación de Suerte 90.

Fuente: Google Maps (2024).

En la Figura 26 aparece un punto que señala la ubicación del Ecobarrio Suerte 90 y es algo que en años anteriores no se referenciaba en la búsqueda en Internet, mostrando que ya hay un reconocimiento desde los motores de búsqueda de la existencia de Suerte 90. Además, Santiago Aristizábal, otro de los entrevistados, menciona que en el resto de las estaciones del MIO en el mapa no aparece el barrio, pero en la nueva estación de Aguablanca sí:

en Google Maps no sale el barrio todavía, nosotros salimos como si fuéramos Candelaria, pero últimamente en los mapas de las estaciones del MIO con la construcción de la terminal Aguablanca, ahora sí sale Suerte 90 en toda la esquinita. (comunicación personal, 26 de marzo de 2023)

Como lo plantea Santiago Aristizábal, con la construcción de la nueva estación Aguablanca del MIO, que se inauguró en febrero del año 2023, se ha reconocido la existencia del barrio, llevando a que incluso se ponga Suerte 90 como lugar de destino y se incluya dentro de los trayectos del transporte público. Esto es un cambio significativo después de 23 años de fundado el barrio, que desde el principio se ha ido estructurando junto con las vías de acceso y a espaldas de las principales autopistas y avenidas centrales de la ciudad. Incluso, después de 14 años

de inaugurado el MIO, sus funcionarios reconocen que le darán una solución a una zona que estaba por fuera de las rutas trazadas para la ciudad:

«Con la entrada en la operación vamos a dar solución a la cobertura que teníamos pendiente con las comunas 13 y 14 de la ciudad, fortaleciendo el servicio en barrios como Mojica, Pízamos, Orquídeas, Los Lagos y a la altura del corredor de la carrera 27, conectando esos usuarios con el resto del sistema de transporte masivo», explicó Morán. (Rey, 2023, párr. 5)

También se aprecia que el lugar «olvidado», como lo manifiestan sus habitantes, realmente está desconectado de servicios fundamentales como el transporte, el cual es un referente central de NBI y que es una situación estructural e histórica para varias comunas en la ciudad, principalmente en el oriente y las laderas, zonas que han padecido en mayor medida la desaparición de los buses tradicionales con la exclusividad vial que le otorgaron al sistema masivo, y que hoy en su cotidianidad deben usar múltiples servicios de transporte para llegar al lugar de trabajo, a alguna cita médica, pagando mototaxi, luego guala y luego MIO, haciendo que se deteriore la economía de las familias y las condiciones de vida diaria de los habitantes.

Ruta A57: se reestablecerá su servicio en el sector de Suerte 90 y sus alrededores. Inicialmente en la Terminal Aguablanca, saldrá por la Carrera 28D, Transversal 103, Carrera 28, Calle 120, Carrera 28D, Calle 126, Vía a Navarro, Carrera 125B, Carrera 28E4, Calle 126, Carrera 28D, Calle 120, Carrera 28 y Transversal 103. Hará retorno Sur-Sur previo a la Carrera 27 y Transversal 103 hasta llegar a la Terminal Aguablanca donde finaliza su recorrido. Esta ruta atenderá los barrios Suerte 90, Píamos, Las Orquídeas y el patio taller ETM del MIO. (Metro Cali, 2023, párr. 33) (Figura 27)

Lo anterior está relacionado con que la deficiencia histórica de equipamientos del barrio, como estaciones de transporte del MIO, ha propiciado para la zona oriente un transporte particular de «gualas», las cuales, según los mismos conductores, llevan más de 30 años prestando servicios de movilidad dentro de la comuna 21, pues históricamente sus moradores se han visto en dificultades para salir del barrio hacia otras zonas, y los conductores que también son de la zona, permiten que las personas puedan negociar el costo de los pasajes, usar los vehículos con otros fines y demás negociaciones entre los habitantes, lo que no es posible con el MIO, pues hay una tarjeta para poder usarlo y el pago es una tarifa única, ya establecida.

Diariamente movilizamos alrededor de 300.000 pasajeros, donde el Sistema de Transporte

Masivo (conocido como MÍO) no llega. Las gualas sirven como ambulancias para transportar heridos, se usan caravanas durante los entierros e incluso brindamos un descuento a los estudiantes de 500 pesos para su fácil movilidad. No podemos permitir que nuevas rutas lleguen dañando algo que estaba ya estipulado, dice Deiby Batalla Ramírez, vocera de Cotransnavarro. (El Tiempo, 20 de diciembre de 2016, párr. 6)

El sistema de transporte público de la ciudad ha tenido un reconocimiento desde lo institucional que permite que el barrio aparezca en un instrumento de planeación como un mapa, lo que podría estar relacionado con que ya se identifique en Google maps el barrio (Figura 28), pues como se mencionó con anterioridad, en las búsquedas iniciales que se hicieron en 2021 no aparecía, pero como el MIO usa GPS para indicar rutas y tiempos, la creación de este punto de referencia fue necesario, de modo que aquí se ve una disputa en el campo burocrático del espacio urbano, como lo refiere Wacquant (2022). Esto tiene un impacto especial en el imaginario de los habitantes, pues son reconocidos por las instituciones y por los demás habitantes de la ciudad; como lo mencionaba Santiago Aristizábal, la gente no referencia Suerte 90 cuando lo nombra y por eso es necesario decir que es al lado del jarillón o de Píamos, pero esto además viene acompañado del estigma de «peligroso».



Figura 27. Ruta creada para llegar al barrio Suerte 90.

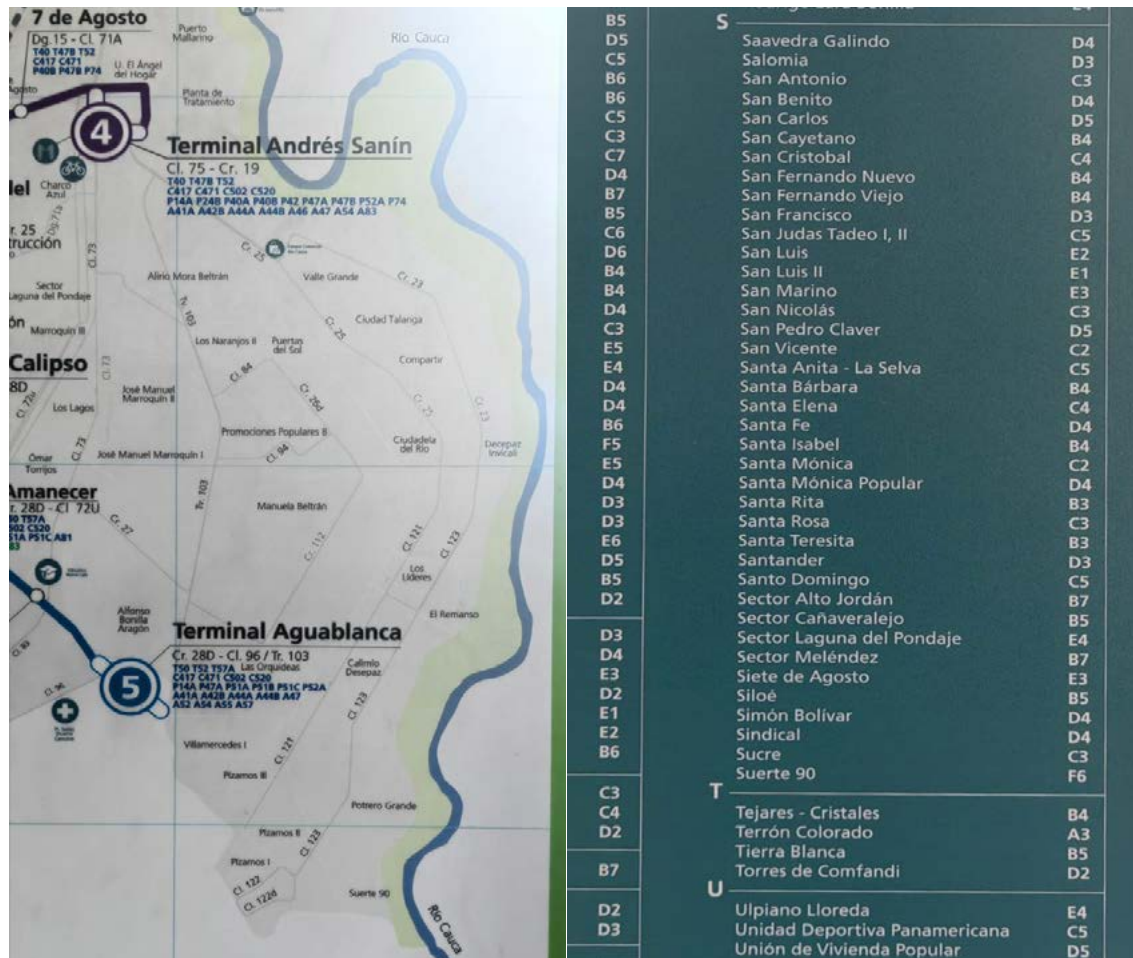


Figura 28. Mapas del MIO donde ubican al barrio Suerte 90.

La pelea en el campo burocrático se puede situar a nivel externo en tanto enfrenta a funcionarios públicos con otros actores de la parte alta del espacio social como políticos, corporaciones o juristas, pues la Secretaría de Movilidad y quienes dirigen la operación del MIO con sus actores privados, se plantean una solución de movilidad para una población que desde la visión de las élites de poder de la ciudad puede mantenerse embotellada en términos de transporte, pues un trancón en la avenida Ciudad de Cali o en el semáforo del puente de los Mil Días, saliendo por el barrio 7 de Agosto, no afecta en nada la movilidad del sur de Cali donde se ubican las universidades y donde viven las clases altas de la comuna 22, ni mucho menos afecta la movilidad del barrio Granada o El Peñón, donde viven otros

actores que poseen diversos capitales sociales en la comuna 3.

Este ejemplo confirma que las orientaciones metodológicas de Wacquant (2022), a partir de su lectura de Bourdieu, son acertadas cuando dice:

Un enfoque neobourdieusiano de la metrópoli estipula que el analista debe pensar geoméricamente y abarcar todo el espacio social y no aislar esta o aquella región de este. ¡Esto conlleva el mandato de conectar analíticamente la producción sociopolítica de los barrios de descenso y de los enclaves de privilegio; y, cuando estos están distantes espacial y fenomenológicamente, como suele ser en las metrópolis occidentales, rastrear cómo se (re)produce esta desconexión: mediante mecanismos de mercado, diseño ecológico, obstáculos físicos, decisiones políticas, vigilancia, etc. y con qué efectos. (p. 8)

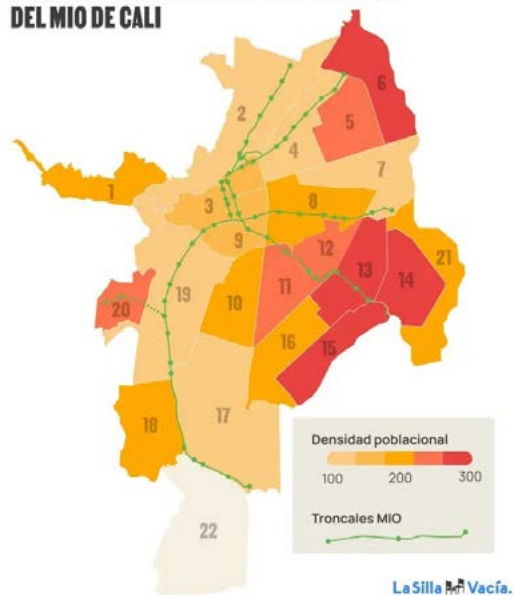
Aunque durante décadas se haya cercado simbólicamente el oriente de la ciudad y al mismo tiempo materializado con la exclusión de rutas frecuentes de transporte público para que los habitantes salgan hacia otras partes de la ciudad donde trabajan, mal pagos, donde estudian o donde van al médico, los niveles altos y bajos a nivel externo e interno de la burocracia están en constante tensión por atender las exigencias que los habitantes hacen de forma dispersa, pues el Estado llega a través de los burócratas de la calle, que son los profesionales cualificados para atender a estas poblaciones, quienes llegan a mediar y a reproducir la dominación de los grupos de poder que distribuyen el espacio.

En ocasiones ni siquiera llegan estos burócratas de la calle ni las políticas o programas sociales, como ha ocurrido con el transporte masivo MIO en la comuna 21, que a pesar de ser una comuna pensada desde los años ochenta por las élites, no cuenta con una red troncal ni una estación central en el interior de sus barrios, por lo que los alimentadores tienen poca frecuencia y no responden a la alta densidad poblacional de la comuna, como se

muestra en la Figura 29, situación que ha generado que los habitantes usen otros medios de transporte distintos al MIO.

El espacio social contiene los distintos capitales y en su interior hay una lucha constante entre los agentes por la acumulación de estos recursos físicos y simbólicos, con la finalidad de establecer posiciones y oposiciones entre los que dominan el espacio y quienes no tienen mayor capacidad de movilidad. Por lo tanto, la lucha entre los diferentes actores es desigual, pues están quienes representan el capital precarizado, que enfrentan la segregación en la vida cotidiana a través de un trayecto en el masivo, versus los empresarios dueños de las empresas de las troncales que necesitan tener pasajeros y no pueden dejar que la población que habita en el oriente de la ciudad les sea disputada por el transporte pirata. Estas contradicciones son las que al tiempo van facilitando la movilidad en el espacio social, pero reflejan la coexistencia de capas urbanas, funcionarios estatales, habitantes, políticos, instituciones, todas chocando de forma diferenciada en la ciudad, pero siempre en función

DENSIDAD POBLACIONAL Y RED TRONCAL DEL MIO DE CALI



MEDIO DE TRANSPORTE MÁS USADO EN CALI 2015-2022

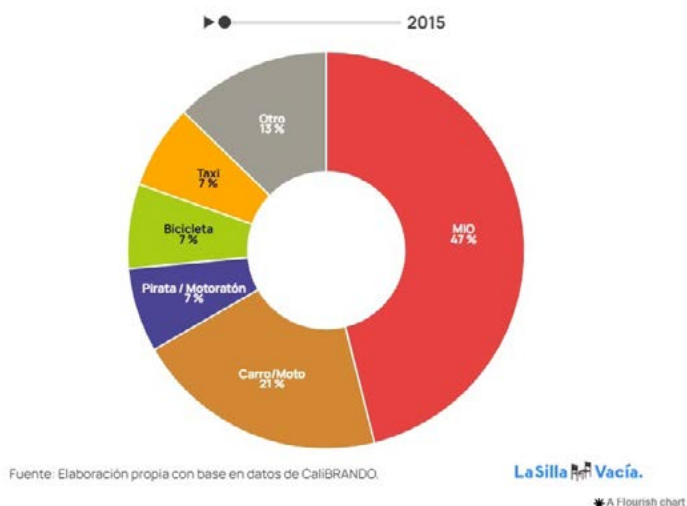


Figura 29. Red troncal del MIO vs. medio de transporte usado.

Fuente: Caicedo y Galvis (2023).

de la urbanización. De hecho, el transporte ha sido históricamente una de las formas en que el Estado empezó a formalizar los barrios informales en el siglo XX, con una finalidad económica:

Al igual que los barrios informales, muchas empresas de transporte surgieron y funcionaron sin constituirse legalmente; modalidad que encontraba sustento en las necesidades de la ciudad que crecía física y demográficamente sin encontrar soluciones en los pocos intentos de organización desde la Administración Municipal. La extensión constante e incontrolada de la ciudad en todas sus direcciones, demandaba una solución profunda a las necesidades de movilidad, la cual fue suplida por los empresarios del transporte, con ánimo exclusivo de lucro, y con la connivencia de los concejales y alcaldes de turno que encontraban en las formas de operación de los empresarios privados un escape al problema que se debía enfrentar desde el sector público. (Vinasco-Martínez, 2017, p. 63)

El tema del lucro es interesante aquí porque la llegada del MIO a más zonas del oriente se relaciona con las pérdidas que tiene esta modalidad de transporte en tanto no logra transportar a diario la cantidad de pasajeros que le permita un punto de equilibrio y de ganancia para los empresarios, por lo que ahora deben disputarse los pasajeros que transportaron por cerca de 30 años en la comuna 21.

La movilidad dentro del barrio y hacia otras partes de la ciudad muestra la condición de borde y amplía el sentido de la ubicación de la comuna 21. El oriente de Cali está lejos de las comunas donde se concentra la producción del capital, las grandes empresas y las zonas prestigiosas de cultura y esparcimiento del oeste, es opuesta a la comuna 3 donde está el centro fundacional y esto diferencia a Suerte 90 de las condiciones de movilidad de Terrón Colorado. De nuevo aquí se presenta la caracterización del espacio en relación con su posibilidad de reproducción del capital, y una zona alejada al jarillón que es de riesgo no mitigable, que era tierra inundable no apta para vivir y que se aleja de las zonas centrales de renovación y gentrificación, que siguen sin alterar la vida y el panorama visual de las clases burguesas dueñas de la producción.

La población residente «no solvente», que ha debido trasladarse a zonas periféricas muy alejadas de los principales «polos terciarios». Con la ayuda de la especulación, las capas sociales con ingresos más elevados se han beneficiado de las escasas operaciones de renovación. [...] Debido a esta estrategia segregativa, que no por «informal» es menos rigurosa, la mayoría de los empleados subalternos que trabajan en las zonas donde se concentran las oficinas debe efectuar cada día largos y pesados viajes entre éstas y su domicilio. (Garnier, 1976, p. 4)

Por eso la existencia del transporte informal, como los piratas (motos o carros) y transporte alternativo como el de las gualas, es representativo de la zona (Figura 30), y ha servido como una solución ideada por las mismas comunidades segregadas, incluso para generar empleo en sus habitantes, que por fuera no encuentran mayores posibilidades de empleo.

Volviendo al tema del reconocimiento espacial del barrio, la existencia de mapas detallados del mismo es muy problemático, incluso es difícil hallar referencias de este tipo dentro de los informes sobre comunas que desarrolla la alcaldía. Aparece en los documentos que comparte la oficina de Planeación que la ubicación de Suerte 90 se integra con el barrio Píamos 1 (Figura 31).

Esta información sobre las características del barrio respecto a su ubicación también se relaciona con el origen; aquí, por ejemplo, aparece el relato del presidente de la Junta del barrio:

Mira, anteriormente este barrio era un hundi-miento, como tipo hueco, con mucha agua, la cual en el 2000, noventa familias —por eso se llama Suerte 90—, noventa familias se metieron en un proyecto de vivienda, las cuales no sabían que las iban a reubicar acá, entonces ya Fenavip, que eran las personas encargadas de estas casas, las entregó, pero no en aptas condiciones, entonces la gente venía aquí a podar la calle porque esto aquí es una urbanización, no un barrio como tal, aparecemos como Píamos II - Urbanización Suerte 90, somos un ecobarrio porque fue construido en un sector donde había mucha agua. (Juan de Dios Henao, comunicación personal, 10 de diciembre de 2023)



Figura 30. Terminal de gualas del barrio Suerte 90.
Fotografía de la autora, 10 de diciembre de 2023.



Figura 31. Mapa de la zona de Pízaños, con el barrio Suerte 90 integrado, pero no diferenciado.
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Comunal y Comunitario (PEDCC) (diciembre de 2019).

Aquí la explicación alrededor del mapa, de cómo aparece en los registros, de cómo lo registran sus habitantes, da cuenta del efecto del poder simbólico que las élites de la ciudad han sostenido durante décadas para el oriente de la ciudad, una zona que no interesa que aparezca en el mapa, que acumula estigma y desconocimiento en el resto de la ciudad, y que en últimas atraviesa el espacio personal de los habitantes, el espacio laboral, el espacio doméstico, etc.

Exacto, bastantes personas, la gente piensa, para adquirir una casa le dicen Suerte Noventa, pero cuando van a un territorio, cuando usted va a ir a una entrevista de trabajo, preguntan ¿usted en dónde vive? ah, yo vivo en el barrio Suerte Noventa ¿y dónde es eso? ¿Es una vereda, un corregimiento? entonces hay un desconocimiento de ese barrio, porque no han hecho recorrido en los territorios, conocer la escrituración, el tema de los módulos de cómo se conoció el barrio, ese es el desconocimiento que hay del barrio, no solamente acá, también los barrios aledaños. (Comunicación personal, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, p. 65)

Por otra parte, ante la poca claridad frente a la demarcación geográfica del barrio, se hizo la solicitud a la Secretaría de Vivienda de los mapas, encontrando que sí hay una delimitación clara de las calles que componen el ecobarrio, el cual está ubicado entre las calles 124B en la zona occidental, carrera 28E-4 hacia el norte, carrera 28G hacia el sur y calle 126 al oriente. Además, está compuesto por diez manzanas, y a la fecha en que inicia la construcción, los únicos barrios aledaños que aparecen son Potrero Grande, el jarillón y los ejidos del corregimiento de Navarro.

También llama la atención que en la Resolución CU1-0121 del 28 de febrero de 2000, de la Curaduría Urbana Uno, aparece que el espacio destinado para el proyecto urbanístico de loteo en las coordenadas arriba descritas se llamará «Ricardo Cobo Naranjo», por lo que no es claro bajo qué circunstancias cambia el nombre a Suerte 90 y su condición de ecobarrio (Figura 32).

En la Figura 33 se aprecia la muestra del mapa.

RESUELVE :

ARTICULO 1:	CONCEDER LICENCIA DE URBANIZACIÓN PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE URBANISTICO DE	
LOTEO	DENOMINADO URBANIZACION " RICARDO COBO NARANJO"	
AL SEÑOR (A)(ES)	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	
IDENTIFICADO CON NIT	890.399.011-3	DE PARA EL PREDIO No
MAT. INMOBILIARIA No.	370-529110/529111	DEL BARRIO O URBANIZACION CIUDADELA DESEPAZ - E-1
UBICADO EN (DIRECCION O COORDENADAS) VER ANEXO		
CON VIGENCIA DE 24 MESES, PRORROGABLES POR UNA VEZ POR 12 MESES ADICIONALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA SU EJECUTORIA. LA SOLICITUD DE PRORROGA DEBERA FORMULARSE DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO.		

Figura 32. Acta de creación del barrio Suerte 90.

Fuente: Curaduría Urbana Uno (2000).



Figura 33. Mapa de las manzanas del barrio Suerte 90.

Fuente: Secretaría de Vivienda de Cali (2000).

Lucha por la vivienda digna

El surgimiento del ecobarrio tiene las características de las VIS pensadas en los años noventa para Colombia, donde la aprobación de créditos y las alianzas entre el Estado y el tercer sector, junto con privados, ofrecían la posibilidad de construir viviendas con financiamiento. Pero Fenavip, que es el intermediario en este proceso, desaparece, y los habitantes quedan en una incertidumbre desde hace casi 20 años:

Se aborda la situación de más de 200 propietarios de casas del barrio Suerte noventa de la comuna 21, al oriente de Cali; manifiestan que ya pagaron la totalidad de sus viviendas pero no poseen las escrituras, esta situación se presenta porque los dineros fueron cancelados al contratista y no a la secretaría de vivienda con la cual según la comunidad había un convenio, varios de los propietarios de estas viviendas que ya pagaron dicen haber pagado las escrituras a la cooperativa Fenavip la cual hizo convenio inicialmente con la secretaría de vivienda,

la comunidad hace un llamado a la alcaldía de Cali exigiendo una pronta solución a las personas que ya pagaron las escrituras a Fenavip. (Súper Noticias del Valle, 2013)

Este proceso ha sido una constante en la obtención de vivienda para las clases sociales bajas de la ciudad, quienes pueden acceder en su condición de focalización a los proyectos, pero en la medida que avanzan los procesos con el pago de cuotas, aprobación de créditos, entrega de escrituras, equipamiento urbano, entre otros, deben desistir de los proyectos, quedar nuevamente sin el derecho a la vivienda y retornar a lugares de ocupación informal en zonas aledañas a la misma comuna 21 como en el jarillón o en otras zonas de la ciudad en condición de vulnerabilidad.

Incluso las familias beneficiarias con el proyecto de vivienda tuvieron que pelear desde el principio para que se adelantaran las firmas de compraventa, como se describe en la Figura 34. Los primeros viviendistas se acercaron al Centro Administrativo

Municipal (CAM) para solicitar celeridad con dicho proceso y por medio del periódico barrial que tenían difundían al resto de habitantes. Esto además contrasta con las condiciones actuales de las viviendas, pues a pesar de que la organización comunitaria destacaba en el 2001, a 2026 las familias siguen sin tener escrituras de sus viviendas porque Fenavip quedó debiendo \$343 092 234 a la Secretaría de Vivienda (Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, 2022), y no hay ningún tipo de organización colectiva que dialogue con la alcaldía para solucionar este problema.

Esta problemática asociada al pago de la vivienda que los propietarios reclaman que ya hicieron, ha traído un efecto pantalla sobre el espacio social, pues los vecinos han estado ocupándose en cómo resolver esta situación de forma individual; unos decidieron pagar, otros dijeron que no pagarían, generando divisiones y rompimiento de los lazos de solidaridad para resolver un problema colectivo.

A través del tiempo, solo hemos tenido dos Juntas de Acción Comunal, la primera, del señor Carlos Alberto Hernández Nuñas, con él se hicieron unas actividades cuando él era el presidente, tanto que teníamos club de patinaje, club de fútbol, muchas cosas, pero con el conflicto este que se dio en el 2005 más o menos (hubo un período, más o menos entre 2005, 2008, la violencia fue muy fuerte y es este asunto intocable del narcotráfico), entonces, las acciones a raíz de la segunda Junta de Acción Comunal, pues fueron acciones encaminadas hacia algo más burocrático, por decirlo así, es decir, que la limpieza del barrio, la construcción del parque, pero la construcción del parque fue que se gestó desde la idea inicial del barrio, no es que sea parte de la Agenda de la presidenta como tal que eso genera muchos conflictos porque la gente, los viviendistas saben perfectamente que eso es parte del proyecto y que nos quedaron debiendo algo, entonces la gente se está organizando desde lo de las ollas comunitarias generando nichos poblacionales en los cuales van a poder aterrizar muchos de los recursos del Estado y van a poder como cumplir sus procesos como tal que tengan cada uno. (Comunicación personal, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, p. 79)



Figura 34. Revista del barrio Suerte 90.

Fuente: Ibarra (2020), como se citó en Arce y Lucumí (2020, p. 59).

Aquí se resalta que el proceso de autoconstrucción del barrio fue una de las características iniciales del proyecto de vivienda, más pensado desde la lógica de gobernanza que de lucha colectiva, y con una clara intención de las instituciones de hacer recaer las responsabilidades en los propietarios y desresponsabilizar al Estado. Por lo cual, desde un inicio parece que es un proyecto que funciona de forma colectiva, pero que en la medida que el avance en cada una de las viviendas es también responsabilidad individual, se podría decir que ese sentimiento de lo colectivo va desapareciendo. Esto se evidencia en la Figura 35, donde se aprecia que las viviendas se empezaron a entregar sin estar completamente construidas, y tampoco contaban con el equipamiento urbano listo, como carreteras y áreas comunes.

De esta forma, la lucha por la vivienda que en los años setenta y ochenta para Cali estuvo marcada por la acción colectiva y los alcances de ciudadanos, fue el reconocimiento formal de zonas ocupadas, el equipamiento y demás ganancias. Para la vivienda de los años noventa, particularmente para el oriente de la ciudad, ha sido un proceso a

cuentagotas que ha debilitado el accionar conjunto, donde se burocratizan los espacios de representación barrial, lo que genera desconfianza entre los mismos vecinos, porque —volviendo al tema de las escrituras— en la actualidad la pelea por tener un documento que certifique la propiedad es un propósito de cada hogar.

Las casas cuando fueron pagadas con una empresa, a Fenavip, pidieron una plata, a la cual se le pagó casi como 5 millones, 7 millones cada casa, la cual como las casas no eran de Secretaría de Vivienda, las casas aparecen con la deuda de esos 7 millones, entonces aquí ninguno ha pagado esos 7 millones porque ya los pagamos, entonces ninguno quiere pagar, entonces ninguna casa tiene escritura, solamente tienen paz y salvo de vivienda que pagaron ya la totalidad pero falta que les entreguen escrituras hasta no pagar el excedente que Fenavip se robó, entonces algunas casas ya pagaron y ya tienen escrituras y porque el señor ya ha firmado los papeles, lo han ido a buscar a la casa y demás para que se firme y ese señor ha firmado algunas casas, de resto casi la mayoría no están firmadas. (Juan de Dios Henao, comunicación personal, 10 de diciembre de 2023)



Figura 35. Construcción de equipamiento del barrio.

Fuente: Córdoba Erazo (2005c).

Avance en materia de autoconstrucción

A este proceso de autoconstrucción, que a lo largo de los años ha debilitado el accionar colectivo y ha volcado los conflictos hacia los mismos habitantes en lugar de direccionarlos hacia el Estado en busca de soluciones colectivas, también se suma la intención de mejora de vivienda, que es otra expresión del sentir individual de cada familia. Si bien desde el principio las viviendas fueron entregadas a cada familia con igualdad de condiciones para empezar la mejora, con los años vinieron las remodelaciones (Figura 36).

Dentro de esos procesos de mejora de viviendas también se evidencia que no todos están de acuerdo con los procesos de representación colectiva y hay habitantes que consideran que se puede aportar al desarrollo del barrio desde otras acciones, pues también desconfían de las acciones burocráticas de las entidades de participación.

Aquí en el barrio, primero que todo, hay pocos líderes que hacemos y los pocos líderes nos reunimos para mejorar algún proyecto que sea favorable para el barrio, de los pocos líderes, se hacen muchas gestiones, se hacen muchos cambios por medio de la JAC o hasta más bien, la comunidad también apoya, hacen cualquier

actividad y nosotros también podemos aportar ideas, podemos aportar estructuras, podemos apoyar acompañamientos o podemos buscar recursos para el fortalecimiento del barrio, porque dentro de la JAC hay mucha corrupción. (Comunicación personal, como se citó en Arce y Lucumí, 2020, p. 81)

La condición de desposesión que enfrentan los habitantes es parte de los procesos que viven en general quienes acceden a los créditos de interés social, una espera e incertidumbre por una mejora en las condiciones de vida que no se sabe si llegará, pero que parece se compensa con la ilusión de tener una vivienda propia, con lo cual se puede identificar que las familias enfrentan esta situación de exclusión estructural y generacional con la resignación de tener algo, a cambio de lo que podría ser nada, con lo cual se evidencia la consolidación de un *habitus* precario, despojado de agencia y exigencia ciudadana, una producción de espacios sociales diferenciados con los que los sujetos van moviéndose por la ciudad bajo el rótulo del conformismo y la certeza de que existe poca movilidad social, algo que soportan con la ilusión de ser los beneficiarios de futuros subsidios (Figura 37), de salir elegidos por un Estado ausente que juega a la lotería con los desposeídos; una expresión de la dominación.



Figura 36. Mejoras a las viviendas.

Fuente: Córdoba Erazo (2005d).



Figura 37. Noticia sobre subsidios asignados en los años dos mil.

Fuente: *El País* (5 de enero de 2000).

Esa condición de espera se mantiene después de obtener la vivienda que ha implicado una cantidad de estrategias de movilidad, de posicionarse bajo la dominación del Estado y dialogar con las burocracias callejeras que son las que finalmente entregan los subsidios a través de profesionales sociales. Muchas de estas familias debían revisar, por ejemplo, si sus postulaciones salían en el periódico *El País* (Figura 38).

Construcción estatal de espacios urbanos racializados

Las investigaciones desde la perspectiva interseccional y la mirada decolonial retoman conceptos como la polis y la biópolis para estructurar la categoría de necrópolis, un espacio social urbano que es

diseñado bajo el estereotipo de la ciudad griega de hombres blancos en democracia, como lo plantea Alves (2020), en el cual las poblaciones de cuerpos negros se oponen en tanto representan inferioridad, violencia y peligro para el resto de habitantes, correspondiente con la mirada esclavista de la ciudad colonial instalada en Latinoamérica.

La blanquedad de la ciudad construye un ideal de la biópolis que disciplina los cuerpos, por eso la multiculturalidad se ve atravesada por los procesos de lucha de los habitantes de las periferias para ser incluidos. Se habla de una pigmentocracia espacial donde los ideales de clase, de vestimenta, de comportamiento, de relaciones del «ciudadano blanco» se deben replicar para moverse parcialmente por la ciudad. Esto se equipara a la idea de capitales y *habitus* que poseen los sujetos dentro del espacio.

Breves
DEL MUNICIPIO

PLANES DE VIVIENDA

La Administración Municipal determinó darle continuidad a la inscripción de aspirantes a obtener subsidios de vivienda de interés social, a través del Inurbe, hasta tanto la Nación determine la fecha límite, que será probablemente en julio próximo.

Así lo dio a conocer el Secretario de Vivienda encargado, Luis Felipe Campo Vidal, quien aseguró que los interesados en dichos subsidios, pueden acceder a cualquiera de los nueve programas habitacionales que actualmente dispone el Municipio para familias de escasos recursos de la capital vallecaucana.

Los planes habitacionales del Municipio, con más de 3.200 viviendas de interés social son: Tercer Milenio, con 326 unidades básicas; Sol de Oriente, con 300; Píamos II, con 776; Ciudadela del Río I, con 703; Ciudadela del Río II, con 402; La Alhambra, con 45, Ricardo Cobo Naranjo, con 231, y Píamos III, con 535 soluciones.



Estas son algunas de las viviendas de interés social de la urbanización Píamos II.

PARA VER DE OTRA MANERA

Dentro del ciclo de conferencias promovido por el movimiento cívico cultural 'Para ver de otra manera', en el mes de julio están programadas las siguientes charlas: La violencia histórica de Colombia, ¿mito o realidad? y Las maravillas desconocidas de Colombia.

Para este sábado, en la Cámara de Comercio, se tiene prevista la primera de ellas, ofre-

Figura 38. Anuncio de postulaciones al proyecto Ricardo Cobo (Suerte 90).

Fuente: *El País* (28 de junio de 2000a).

En las ciudades latinoamericanas no está marcada la blancotopía de EE. UU., como lo menciona Alves (2020), pero sí hay una medición positiva del espacio a partir de qué tan blancos o mestizos son los que los habitan, por eso en sus investigaciones este autor trata de mostrar ejemplos de varias ciudades en Latinoamérica, sugiriendo que el concepto puede servir para comparar casos de estudio. Y esto no solo se refleja en las infraestructuras de la ciudad y en sus centros históricos gentrificados, por ejemplo, sino en los indicadores y las estadísticas que logran demostrar que hay diferencias étnicas cuando de medir la pobreza y cruzar con tasas de homicidio se trata.

La metrópoli blanca tiene mejores indicadores educativos, recreativos, sociales, calidad de aire, medios de transporte, en contraste con los cuerpos negros que cuando van a ciertas franjas de las políis, se marca su relación laboral con actividades de servicio doméstico, colectores de basura, porteros. Incluso la población blanco-mestiza ubicada en estas franjas de despojo también tienen indicadores de privación de derechos, pues siguen experimentando la relación estructural de división espacial. Por eso el análisis del espacio debe cruzar diversas categorías para mostrar las distintas formas de experimentar la ciudad desde lo simbólico y social de cada agente.

Como lo muestran Alves *et al.* (2014) en su investigación sobre la interseccionalidad en el oriente de Cali, existe un cruce entre las variables de homicidios altos con las zonas geográficas que concentran la pobreza extrema, las cuales coinciden con las comunas 1 y 21 que son parte de la presente investigación, y para el caso de Suerte 90 se ubica en la comuna 21 que conforma la delimitación simbólica y espacial del Distrito de Aguablanca, que durante años ha sido lugar de llegada e instalación de población negra migrante, con altos índices de vulnerabilidad. Por ende, aunque no se busca equiparar el concepto de necrópolis que se ha estudiado en otros casos de Estados Unidos o América Latina, sí hay coincidencias espaciales frente a las características de una ciudad que tiene recursos materiales y simbólicos opuestos entre barrios como Terrón Colorado o Suerte 90 con Ciudad Jardín, por ejemplo,

la cual sería el símil de las polis de mayores ventajas socioespaciales en la ciudad.

Dos de los proyectos de vivienda de interés social aquí en estos momentos están en pésimas condiciones de espacio público, mira el espacio público de la comuna 17, 22 respecto a la comuna 21, compara la vegetación, la urbanización, los equipamientos, los servicios de salud, todo. (Pedro Martínez, comunicación personal, 21 de marzo de 2023)

Este concepto de necrópolis propone la delimitación de una espacialidad donde habitan las personas negras privadas de su condición de ciudadanos y de su vida. Es decir, tiene que ver con los altos registros de homicidios y muertes que se expresa en lo físico y estadístico de las cifras: «de los 1.480 homicidios ocurridos en Cali en los primeros nueve meses de 2013, el 52 % corresponde a las comunas 6, 13, 14, 15 y 21» (Alves *et al.*, 2014, p. 9), al mismo tiempo que en lo simbólico desde el sentido civil, puesto que son lugares donde la gente puede morir de cualquier cosa y en cualquier parte (Alves, 2020). Una ciudad doblegada y de rodillas ante las instituciones legítimas de la biópolis de clase alta, que se opone a estos márgenes donde los cuerpos negros pueden ser controlados por la fuerza, dado que con ellos se puede usar «la espada de la soberanía», la defensa a partir de la muerte, que puede ser extralegal o prematura. Como en el caso de abusos de autoridad que se han presentado contra población joven negra en Llano Verde, donde en el año 2020 aconteció la masacre de cinco niños.

La prevalencia de la victimización negra, aun cuando personas no-negras también sean interpeladas por esta estructura de poder. Especulamos que la condición negra es una condición tan precaria que blancos/mestizos compartiendo espacios racializados habitados por las personas negras se exponen a los riesgos a que los negros y negras están expuestos. (Alves, 2020, p. 20)

Esto se puede evidenciar en el barrio Suerte 90 donde no toda la población pertenece a grupos étnicos que históricamente han acumulado desventajas sociales al ubicarse en la ribera del río Cauca

como la población afro migrante del Pacífico o de Nariño, pero donde esta población blanco-mestiza se encuentra en situación de precariedad y su cercanía con barrios de poco capital simbólico, económico y social como Potrero Grande, Pízamos, Barrio Taller, los asentamientos del jarillón, entre otros, acumulan y reproducen la división espacial generada por el Estado y los grupos sociales de las esferas altas de la sociedad y en el nivel intermedio de funcionarios estatales que influyen en las decisiones gubernamentales.

Se recoge entonces un discurso producido en torno a las categorías de clase, raza y espacio urbano, que se refleja en la manera en que se denomina el Distrito:

Es necesario aclarar que el Distrito de Agua-blanca corresponde a una construcción socio-histórica y no formal, que se ha quedado en el imaginario de los habitantes de Cali como un sector deprimido y peligroso, debido a las altas cifras de pobreza y violencia que presenta. Asimismo, la alta presencia de afrodescendientes que habitan este sector ha servido para crear un discurso que asocia raza y pobreza como factores explicativos de la violencia en la ciudad; estigmatizando a sus habitantes y aumentando sus condiciones de desigualdad social y falta de oportunidades. Las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, que concentran aproximadamente el 70 % de la población afrodescendiente de la ciudad, también concentran las tasas más altas de trabajo informal y el mayor número de homicidios. (Vinasco-Martínez, 2019, pp. 165-166)

Algo interesante es que las manifestaciones de clasismo y racismo quedan ocultas ante los ojos de la población mestiza que las compara con otras cosas o las sitúa fuera de ellos, por ejemplo, es recurrente decir: «el peligroso es el barrio de enseguida», como referían Santiago Aristizábal y Juan de Dios Henao en las entrevistas. Incluso plantean: «los que dañan el barrio son los vecinos de otra parte, aquí no hay inseguridad, aquí no ocurre eso», lo cual se puede entender desde la desmovilización de clases sociales que se genera en las categorías de la biópolis que busca unificar a los ciudadanos y no verlos en su diversidad racial, donde emergen con mayor facilidad procesos de activismo por el derecho a la ciudad (Torino, 2024).

Otros elementos para contrastar son los discursos que se reproducen entre profesionales sociales que han trabajado con programas del Estado, que han ejecutado políticas sociales en el nivel bajo de la burocracia e incluso tienen un trabajo cara a cara con los habitantes de la zona, pues son quienes ejercen el control estatal en las entrevistas o visitas domiciliarias donde la intervención es bajo márgenes de maniobra cargados de estereotipos de los profesionales, como plantea Dubois (2014), quienes además no reconocen que a nivel inconsciente reproducen discursos de discriminación y racismo (Viveros, 2007) que representan a los grupos de poder, élites que piensan la ciudad y logran materializarla en proyectos de intervención a los que llegan los profesionales que, se supone, aplican soluciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes pero que en otros espacios expresan la forma en que ven a quienes habitan lugares como el oriente de la ciudad:

Yo creería que no llenarnos de cárceles ni todo este tipo de gobierno de Bukele que no me gusta, pero pues tampoco me agrada cien por ciento, sería ciertos individuos extirparlos de la sociedad, o sea, retirarlos de esa zona para poder rescatar a la gente buena que habita en estas zonas, porque es que siento que están como en un bucle, generación tras generación, que los ídolos de los niños es el que anda en la motico, el que anda en lo otro, ¿cómo lo consiguió?, haciendo esto, haciendo lo otro [...] entonces yo creería que sí hay que como extirpar ese cáncer que hay en ciertas zonas y yo creo que podría haber muchísimo potencial, se podrían hacer muchísimas cosas, pero erradicar ese problema sería la clave desde mi punto de vista e iniciar un cambio realmente significativo. (Miguel Ángel Venegas, comunicación personal, 17 de abril de 2024)

Estas palabras de los profesionales sociales, de la burocracia baja, que se encuentran en los programas con los habitantes de las periferias que sufren violencia, exclusión estructural, que habitan espacios racializados, que se les arrebató su derecho a ser ciudadanos plenos que eligen, son reflejo de la forma en que se manifiestan los agentes del poder estatal y económico cuando deciden que deben moverse de zonas de riesgo o que delimitan dónde

van a vivir, zonas que aparecen como soluciones en formas de vivienda social pero que reproducen su lugar de vulnerabilidad como en Suerte 90.

Aquí de nuevo aparecen las tensiones por la disputa de apropiación del espacio social, su distribución, sus capitales y sus beneficios, por eso es un arma que usan las instituciones para demarcar sus ideas sobre la división espacial más adecuada para los grupos sociales que se piensan la ciudad, definiendo distancias y modos de moverse. Pero también puede ser un arma en el sentido contrario de los habitantes, quienes a través de las categorías y jerarquías del espacio logran reconocer sus identidades comunes frente a los grupos que materializan sus ideas de ciudad a través de la dominación de los capitales espaciales, como ocurre con las poblaciones étnicas.

La movilización basada en la categorización étnica existente en el campo político permite a diferentes poblaciones reclamar recursos públicos y privados, como acceso protegido, preferencial o de recuperación a la educación, el empleo y el voto, como ocurre con los programas de acción afirmativa en la Unión Soviética, Unión Europea, India y Estados Unidos. (Martin, 2001; Weisskopf, 2004, como se citaron en Wacquant, 2022, p. 3)

Sin embargo, donde no hay reconocimiento étnico es muy difícil trazar una agenda de movilización, como ocurre con los habitantes de Suerte 90, donde la composición de población blanco-mestiza lleva a una percepción de la realidad espacial por fuera de esta categorización. Distinto a otros colectivos afroorganizados en el oriente de la ciudad, que lideran procesos de estudio y concientización frente a la exclusión estructural e histórica de las comunidades negras, como por ejemplo la Casa Cultural El Chontaduro, con su Preicfes Comunitario Paulo Freire, que le apuesta a la conciencia política de los jóvenes racializados. Iniciativas que también se conectan con la academia para generar espacios de formación con seminarios como el de «Colonialismo urbano», diseñado desde el Departamento de Sociología de la Universidad del Valle, en Cali, y la Universidad de California, en Santa Bárbara, EE. UU., de la mano de procesos organizativos de base en el oriente de la ciudad.

Por ejemplo, hay un caso particular con dos de los entrevistados que muestran una relación entre condición étnica ligada a la organización comunitaria, uno es Juan de Dios, que es presidente de la JAC de Suerte 90, y su madre ha hecho parte de procesos de defensa del barrio; y por otro lado está Santiago, quien vive con sus padres y hermana, tienen una tienda y comenta que no pertenecen a ninguna iniciativa comunitaria. Aunque hacen parte de la zona de estudio y sus padres son poseedores, las historias de vida de ambos jóvenes han llevado a que se identifiquen en lugares identitarios diferenciados en lo étnico, lo organizativo y su posicionamiento ante el barrio. De hecho, Juan de Dios desde que se presenta se enuncia desde su condición étnica como afrodescendiente y habla en nombre de las juventudes organizadas del oriente, presentando su presidencia como forma de resistencia y disputa ante la ciudad, algo que no se encuentra en Santiago, que desde su condición mestiza no lo enuncia, incluso habla de los procesos de participación barrial como ajenos a él y además considera que hay más bien iniciativas individuales dentro de la población para enfrentar problemáticas asociadas a la violencia o la inseguridad.

Aunque ni la interseccionalidad ni el componente étnico fueron centrales en los objetivos de la investigación, se propone que para futuras investigaciones se pueda profundizar en la relación entre las categorías de privación identitaria y la motivación de los jóvenes por la organización comunitaria, y estas circunstancias cómo pueden variar de acuerdo con los capitales espaciales. Los ejemplos de Juan de Dios y Santiago no buscan una generalización; de hecho, se busca problematizar la idea de no organización juvenil y su dependencia de lo étnico, más aún cuando se muestran otros procesos donde participan los jóvenes de Suerte 90 como «Movimiento Juvenil Impactando Vidas sin Límites», de la comuna 21, en el cual la juventud se encuentra desde distintas características, generan alianzas institucionales con la Secretaría de Salud en el caso de la pandemia por COVID-19, o desarrollan otras actividades de bienestar colectivo como la «olla comunitaria» o la «estrategia de solidaridad del semáforo» para enfrentar el hambre de la comuna.

A propósito de la estrategia del semáforo, vale la pena resaltar que esta iniciativa comunitaria fue una apuesta vecinal para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, pues como se encuentra en la página de Instagram @ecodesuerte, creada por unos jóvenes habitantes del barrio, hay una publicación del 12 de abril de 2020 que es una imagen con un semáforo que indica lo siguiente: «El color rojo, personas que no tienen nada para comer; el color amarillo es para las personas que tienen, pero poquito; el color verde son las personas que tienen y pueden esperar» (Ecodesuerte, 2020); lo cual buscaba que cada vivienda indicara su estado y bajo este aviso, el grupo que recibía los mercados estipulaba a quién debían entregarle cada semana.

En estos espacios organizativos también aparece la iniciativa de mujeres jóvenes, incluso estudiantes universitarios que a través de la academia se interesan por recuperar la memoria de sus barrios, sus historias de resistencia y ver de qué forman conectan su vida diaria con propósitos por el reconocimiento, la visibilidad de su entorno, la exigencia de acceso pleno a derechos frente a un Estado que ha dado la espalda. Aquí destaca también el sitio que estos jóvenes organizados del barrio han creado en Instagram como @ecodesuerte y muestran otra narrativa distinta a la que las élites han construido sobre el oriente de Cali.

Desde estos espacios organizativos de base también se están formando los jóvenes en Cali y desde ahí se tejen resistencias sociales, algo que no es tan claro en la juventud de Terrón Colorado, por lo que el componente étnico sería un aspecto para profundizar en futuros estudios para entender las transformaciones recientes de la movilización y acción social por el derecho a la ciudad. Por ende, el uso del concepto de geografías de la muerte no refleja un antagonismo estático sobre ser y no ser ciudadano, sino que muestra matices de una ciudad opuesta que enfrentan quienes viven en zonas racializadas y quienes no lo hacen, lo cual no borra la esperanza de cambios, iniciativas organizativas y procesos de resiliencia, pues desde esos mismos espacios se usan estas categorías teóricas para cuestionar la forma en que habitan la ciudad los jóvenes del Distrito de Aguablanca.

CAPÍTULO 5

LOS CONFLICTOS URBANOS COMO DINÁMICA ESPACIAL DIFERENCIADA EN LA PERIFERIA DE CALI

Introducción

En este capítulo se muestra la construcción diferenciada de periferias en Cali a partir de la comparación entre los dos casos de estudio, específicamente desarrollando el concepto de espacio diferenciado desde las distintas nociones de varios autores y complementándolo con la particularidad de la ciudad. Para eso se hará la comparación de los procesos históricos que subyacen a la configuración espacial en las ciudades del nuevo milenio con el caso del oriente y la ladera, reconociendo los procesos internacionales e históricos que influyeron en lo que es hoy la ciudad latinoamericana.

De igual forma, se puntualizan los conflictos que son comunes a los barrios Suerte 90 y Terrón Colorado y cuáles son las problemáticas particulares que reflejan las diferentes relaciones que los habitantes en estas zonas generan con el espacio vivido, qué es lo que hay en el suelo, su rentabilidad, su entorno, el tipo de actores que toman las decisiones, la capacidad organizativa y la manera en que se relacionan con las instituciones estatales para el acceso a derechos urbanos.

Incluso, mostrar a partir de los casos cómo se ha configurado la lucha actual por el derecho a la ciudad y si quedan vestigios de los primeros movimientos de destechados de mitad del siglo XX o si lo que restan son nuevos retos para estudiar la ciudad a partir de escalas y capas que se cruzan en los distintos espacios sociales y aún no definen con claridad un movimiento anti-segregación a futuro.

Producción espacial del Estado: uso del espacio y relaciones

Teniendo en cuenta que la teoría del espacio social plantea la configuración del espacio desde los agentes de la burocracia de la planificación urbana, en este caso de estudio se establece que es el Estado el que configura las distintas periferias de la ciudad de Cali, y ese establecimiento espacial es atravesado principalmente por el uso económico, el tipo de vivienda, equipamiento

alrededor, medios de transporte y movilidad en la ciudad, además de gestiones gubernamentales sobre la definición del tipo de suelo en lo jurídico; todos estos aspectos que Bourdieu (1999) señala como centrales en la construcción de un espacio diferenciado.

En complemento, Flores (2009) habla de los espacios sociales diferenciados:

Los espacios sociales diferenciados constituyen la forma concreta en que los seres humanos consumimos, producimos y reproducimos el espacio social total y las relaciones sociales inherentes. Relaciones sociales que reproducimos según nuestra posición en el proceso productivo, en la estructura genealógica o de parentesco, ante las instituciones socialmente instituidas y, en su caso, de nuestra posición de clase, entre otros. Estos espacios sociales diferenciados en tanto creación y recreación del espacio social comportan experiencias distintas, según la clase de los sujetos sociales involucrados y sus presupuestos. (p. 7)

Aquí se puede observar la forma en que la ladera y el oriente de la ciudad se configuran como producto de relaciones sociales de clase que planificaron o que intentaron detener el poblamiento según la zona, pues mientras para el lado de Terrón Colorado, en los años cuarenta a sesenta, se construían ramadas para la toma de tierras por la fuerza, estas luego eran demolidas, con el uso de la fuerza legítima del Estado, y para la zona de Suerte 90, a inicios del siglo XXI, lo que se estaba creando era

un barrio producto de la intervención estatal a nivel nacional y local, pensado para población vulnerable que más que recibir una solución ante el déficit de vivienda, se convirtió en población focalizada para el endeudamiento por décadas, que además debían enfrentar todos los procesos de adecuación de las zonas al mismo tiempo en que llegaban, esperando otros años más el verdadero equipamiento urbano que los proveería de hospitales, colegios, vías, etc. (Tabla 9).

Algo que llama la atención en este estudio es que los agentes sociales que dominan el espacio, a través de la construcción y el sostenimiento de la marginalidad desde la acción, lograron intervenir el lugar físico para que las avenidas principales como la autopista y la Simón Bolívar consolidaran la división imaginaria de la ciudad, y generaron que hoy las comunas 1 y 21 compartan índices de vulnerabilidad en la segregación, pero aun así, sus conflictos urbanos son diferenciados. Terrón sigue enfrentando la disputa contra las élites aledañas al río por vencer la informalidad del suelo, y Suerte 90 sigue intentando pagar las cuotas restantes de un proyecto de vivienda que disolvió su organización y aún no entrega escrituras definitivas a sus poseedores.

Aunque pareciera un fenómeno propio del movimiento por la vivienda en Cali de mediados del siglo XX, actualmente en el siglo XXI persisten las luchas por la vivienda: quienes ya cuentan con barrios legalizados que fueron resultado de la autoconstrucción, exigen la mejora de su equipamiento urbano y

Tabla 9. Características socioespaciales de los casos de estudio.

Características socioespaciales	Terrón Colorado (ladera oeste, comuna 1)	Suerte 90 (zona plana oeste, comuna 21)
Construcción del barrio	Toma de tierras a la fuerza (autogestión para la construcción)	Proyecto de VIS (estatal-subsidios y créditos)
Población	Provenientes del suroccidente del país (Nariño, Valle del Cauca-vía al mar)	Provenientes de la costa pacífica (Buenaventura) y costa nariñense
Agentes en disputa	Élites de la ciudad, alcaldía, policía, secretarías de planeación	Comunidad de habitantes, funcionarios del Estado (proyectos de intervención), fondos de vivienda
Conflictos urbanos actuales	Títulos de las viviendas, carreteras, inseguridad, necesidades básicas insatisfechas, equipamientos urbanos, transporte	Equipamientos urbanos, poco transporte, inseguridad, violencia, muerte de jóvenes, necesidades básicas insatisfechas, escrituras públicas

de la calidad de vida, además de la conexión plena a servicios públicos. Por otra parte, quienes siguen ocupando el lugar de «destechados» continúan tomando por la fuerza zonas irregulares y de riesgo, esperando que el Estado les dé una respuesta, así como ocurre en otras zonas de renovación urbana que se construyen en la ciudad. Lo más interesante es que en ambos casos ya no son únicamente migrantes, son habitantes de Cali que llevan décadas reproduciendo la marginalidad.

De ahí la pertinencia de la metáfora de un campo social de disputa por el capital espacial, pues ese análisis teórico ayuda a entender que el carácter de barrio vulnerable o zona de élites está definido por las posiciones de los agentes sociales que habitan ahí, y su relación de distancia o cercanía con otros capitales o con otros agentes sociales que toman decisiones sobre el uso del suelo. Ambos barrios muestran que viven en una constante competencia por la apropiación de rentas y ganancias de posición y ocupación entre los habitantes que desean una verdadera calidad de vida urbana contra los dueños del capital, la alcaldía, funcionarios, élites empresariales. Las tensiones entre los agentes por la lucha de acumular el capital simbólico que ayude a dominar o a adquirir ventajas en el espacio, se puede observar con un detalle operativo a través de los efectos de lugar, es decir, a través de las prácticas e interrelaciones que los sujetos ejecutan en el espacio social, lo que se explica mejor en la Tabla 10.

Los efectos de lugar son precisamente una muestra de las relaciones de los distintos agentes por la definición del uso y representación de un espacio, por lo que al retomar lo descrito en el cuadro anterior, se puede identificar que la ilusión empirista de la que habla Bourdieu (1999) se refiere a los discursos en su mayoría estereotipos sobre las zonas que se sostienen entre los habitantes del resto de la ciudad, donde además están incluidos profesionales de la burocracia baja del Estado.

La verdad, en 38 años que tengo, no he ido nunca a Terrón Colorado [...] desafortunadamente todo lo que se escucha son aspectos negativos, obviamente no podemos generalizar, sabemos que hay gente buena, pero sí la mayoría de los comentarios que se escuchan del barrio es que

es un lugar bastante complejo. [...] Que si se te roban la moto está en Terrón, que las oficinas de sicariato están en Terrón, mejor dicho, se te robaron el vehículo y te lo deshuasaron, están en Terrón. (Miguel Venegas, comunicación personal, 17 de abril de 2024)

Estos imaginarios también están ligados con el efecto de naturalización que puede considerar el desarrollo y crecimiento urbano como un proceso espontáneo y sin limitaciones; la gente va llegando a donde haya espacio vacío y reconoce las condiciones sociales en que surge cada barrio periférico de la ciudad, por lo que implica datos históricos que no son manejados por los habitantes de zonas alejadas o profesionales que están en el último eslabón de ejecución de la política social como el relato anterior de Miguel Venegas, un preparador físico vinculado a programas deportivos. Sin embargo, este conocimiento sobre el origen de las zonas que se van a intervenir sí es un conocimiento necesario para la burocracia intermedia, como lo son los profesionales de Planeación Municipal.

La comuna 1 y la 21 son territorios que comparten algunas características. Ambas se localizan en la periferia, en el borde urbano de la ciudad. Distancia con el centro que se refleja en una gobernanza frágil; esto es debilidades en el control territorial como en la prestación de servicios sociales y de transporte público. Tiene diversidad socioeconómica. Algunas áreas son más desarrolladas al contar con todos los servicios básicos, mientras que otras pueden enfrentar problemáticas asociadas a la pobreza, el desempleo y la inseguridad. (Carlos Gálvez, comunicación personal, 27 de abril de 2024)

En cuanto a los efectos del poder simbólico, la arquitectura es clave en la materialización de estas desigualdades y distancias entre distintos actores sociales, de acuerdo con la acumulación de capital que posean, y aquí las características de las viviendas son claves en relación con el equipamiento urbano. Para quienes viven en Terrón Colorado y lograron ampliar y mejorar sus viviendas, que fueron las primeras de la zona, el espacio con el que cuentan hoy es suficiente para vivir con su familia extensa e incluso desarrollar un negocio informal dentro de la casa, pero eso no reduce la diferencia

Tabla 10. Comparaciones entre los distintos efectos de lugar en los casos de estudio.

Efectos de lugar	Terrón Colorado	Suerte 90
Ilusión empirista	Se considera una zona peligrosa por los estereotipos del lugar y sus habitantes cargan con el estigma, reduciendo sus posibilidades de movilidad dentro de la ciudad, dado que se producen discursos desde afuera. Sobre todo las cifras de violencia dentro de la comuna refuerzan estos estereotipos.	La diferencia con los habitantes de esta zona es que se suma el factor de etnia que, como explica Wacquant (1999), es una desventaja que no se elimina al andar la ciudad. Sin embargo, la población de Suerte 90 no es en su mayoría afro pero el discurso construido alrededor del Distrito de Aguablanca es que son desplazados del Pacífico en su totalidad.
Efecto de naturalización	La gente llegó a la zona porque no había control en esa periferia a mediados del siglo XX y aún no se tenía un diseño de la ciudad. La migración y el no acceso a vivienda generaron esta ocupación en la salida al puerto de Buenaventura y no es un asentamiento natural y voluntario, como se presenta en el imaginario.	Las élites de la ciudad, junto con los planificadores, pensaron en dónde deberían vivir los hogares con altos índices de NBI, por eso desecaron las tierras inundables con los jarillones (años sesenta y setenta) y empezaron a construir VIS y viviendas de interés prioritario (VIP), lo que supone una vida de endeudamiento, con lo cual se constata la participación de la clase dominante en el diseño de la ciudad.
Efecto del poder simbólico	Viviendas en la ladera de la carretera al mar que se consideran en zona de riesgo versus apartamentos de 1000 m ² en la zona de El Peñón, que cuestan entre 2000 y 5000 millones de pesos. La arquitectura de estas zonas de prestigio se opone a los capitales barriales y populares de la zona; así la crujen en camino a su casa, no pueden ser parte de ella.	VIP de 45 m ² para familias extensas que tenían uso mixto de la vivienda; las casas se entregan sin equipamientos de educación, salud ni parques, sino que van llegando posteriormente (165 millones de pesos). La reducción de la calidad de vida a un espacio habitacional reducido también es una violencia arquitectónica.
Efecto de la delegación	Tiene que ver con la posibilidad de que la clase dominante y que posee los capitales, pueda apropiarse de los beneficios de la zona e incluso marginar a la población a través de programas sociales que han abundado de manera histórica en Terrón Colorado, pero que de todas formas no han traído soluciones definitivas a los conflictos que enfrenta la población.	A partir de la delegación se logra estar sin hacer presencia constante en los lugares donde están las clases bajas y sin poder de disputa por el capital urbano. El oriente de Cali también ha sido una zona histórica de intervención y de alguna manera el Estado llega a ella y a sus habitantes a través de la burocracia baja, como una manera de contener su desplazamiento a otras zonas de la ciudad donde podrían exigir sus derechos sociales y ciudadanos.
Efecto de proximidad / efecto de acercamiento	Terrón Colorado queda al lado de la comuna 3 de Cali, donde están los barrios de estrato socioeconómico alto (5) y es una de las comunas que concentra los espacios culturales, el centro de la ciudad y demás equipamientos privilegiados.	Las personas de la comuna 21, además de sostener la marginalidad (Franco, 2020) pensada desde las viviendas y su ubicación, tienen problemas para salir de la zona, existe una única vía de acceso que genera en horas pico trancones de dos o tres horas y deben pagar múltiples transportes para recorrer distancias cortas (por trabajo).
Efecto club	Los habitantes no cuentan con el <i>habitus</i> para circular por las zonas alejadas de élite que requieren de un capital económico y social que no comparten, es decir, que sus redes de relaciones los sigue ubicando en espacios comunes de exclusión.	Algunos habitantes de la zona ni siquiera conocen parte de la comuna 3, donde se concentran las actividades centrales de la ciudad, además porque en el oriente consiguen todo lo que requieren para sus necesidades básicas, por eso se habla de un «encerramiento simbólico».
Efecto de arrastre	Se trata de la acumulación y desposesión de capitales, lo que les excluye de zonas de la ciudad y del goce de privilegios de otras zonas de élite. Viven cerca del lujoso barrio Granada pero no tienen cómo consumir en sus negocios.	Quienes viven en Suerte 90 comparten los estereotipos de vivir «al fondo» del oriente, al lado del jarillón de Navarro, una vía en deterioro y un barrio al que todavía le falta terminar equipamientos, entre otros aspectos.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Uribe (2022, p. 1).

entre el equipamiento urbano que tiene un barrio como El Peñón, a 10 minutos de la vía al mar, donde la vulnerabilidad es baja. Y si se contrasta con Suerte 90, ya el diseño de la vivienda es más reducido y se opone a la conformación tradicional de familias extensas que también se refleja en el oriente de la ciudad.

Respecto al efecto de delegación se identifica que estas comunas han recibido históricamente programas de intervención social que en últimas es la forma en que el Estado hace presencia y, como diría Dubois (2014), ejerce un control social que termina siendo una maniobra del profesional en el encuentro cara a cara, como las visitas domiciliarias. Esta delegación a partir de profesionales sociales también es la confirmación de que en el Estado neoliberal la atención a la cuestión social es personalizada y se va desdibujando la gran infraestructura del Estado y su acción a gran escala en la política por formas de focalización en las zonas que se consideran de mayor riesgo social.

Por lo menos en la comuna 21, en Potrero Grande, son sectores que en términos de vulnerabilidad social son muy altos, entonces de una u otra forma las cargas institucionales buscan eso, desde el deber ser es poder contribuir a transformar esas dinámicas, pero en el deber hacer vuelve el tema, cómo estamos entrando, si estamos realmente entrando para impactar a largo plazo o realmente estamos impactando como el paño de agua tibia; para mí es eso, puro paño de agua tibia que se está desarrollando con estas comunas. (Diego Sarmiento, comunicación personal, 17 de abril de 2024)

Por otra parte, el efecto de proximidad/acercamiento social pone en tensión la cercanía entre dos zonas diferenciadas en términos de capital espacial, pues la proximidad física no necesariamente va a generar cercanía social, y se ha enfatizado mucho en cómo la zona alrededor del río Cali donde está el museo La Tertulia, el monumento a los gatos, el parque El Peñón, los restaurantes alrededor como el Obelisco, entre otros cercanos al parque, requieren de un capital económico y cultural que se acumula con mayor facilidad para las clases dominantes o para las clases medias metropolitanas, como diría

Jouffe (2011), los cuales no poseen los habitantes de Terrón Colorado, quienes pueden estar transitando en algunos casos hacia la clase medianizada-metropolitana pero ahí aparece el efecto club que es capaz de excluir a quienes no tienen las disposiciones de clases económicas altas.

Además, aparece el efecto arrastre que opera de forma interesante en los dos casos de estudio; por un lado, Terrón Colorado ha sido marginado y aún exige mejoramiento en las condiciones del hábitat y se encuentra en una zona que posee un valor económico por ser vía de ingreso a la ciudad, las zonas verdes y el río que pasan por su lado, pero aun así enfrentan las decisiones de las élites en contenerlos para que no tengan un mayor desarrollo urbano, por lo cual siguen enfrentando la falta de escrituras y reconocimiento de la zona que les podría ayudar a tener movilidad residencial.

Y en el caso de Suerte 90, ubicado en el Distrito de Aguablanca para que cargue con el estigma social, a pesar de que las clases dominantes han planeado dónde debe vivir la población vulnerable y de capitales barriales populares, aun así no pierden oportunidad de generar capital económico con la marginalidad, pues en últimas estas familias ingresan al sistema financiero a través de las políticas de la VIS, y aunque acumulan desposesiones, deben pagar durante décadas su vivienda a las constructoras privadas que se benefician de esta situación.

Todas las constructoras se volvieron una cosa, con un apetito inmenso, se les abrió el apetito por coger el metro cuadrado que puedan coger y captarlo [...]; sucede hoy en día por los lados de Yumbo, por los lados de Candelaria, sucede hoy en día en el mismo Cali, que no se les está escapando metros cuadrados por construir y yo estoy diciendo que eso es una voracidad tremenda porque bueno, están hablando ahora una cosa de que en un simposio me invitaron y yo entiendo eso que las tierras de Candelaria por lo menos están ya productivas porque la caña llega a una parte donde ya va dejando la tierra estéril, ya la van soltando para poder que ya las constructoras entren, pero tiene que estar muy saturada la tierra para poder hacer una cosa de esas. (Yoider Gómez, comunicación personal, 6 de agosto de 2023)

En complemento, la idea del espacio diferenciado ayuda a poner énfasis en las relaciones de los sujetos con la reproducción social, como explica Flores (2009); para el autor la sociedad en sí misma es el espacio social y dentro de él están los sujetos, los medios de producción, el entorno y los contenidos socialmente atribuidos. De ahí que el autor proponga que no se vea de forma aislada a la sociedad y al espacio como si su naturaleza fuera distinta, sino que se entienda que las periferias son producto de relaciones de producción en los suelos en que se ubican y dependiendo de la posición en esas relaciones, así mismo se va a apropiarse el espacio y a transformarlo.

Esas relaciones sociales a su vez se convierten en una unidad social que Flores (2009) denomina como espacio-temporal: «que establece un sujeto con los distintos elementos del espacio social a lo largo de su desarrollo como tal, de acuerdo con los procesos históricos que se asimilan unos a otros, en distintas escalas, y de composiciones temporales diversas» (p. 13). Aquí también se relaciona con el «contexto de momento», que sería la interacción entre actividad humana y los componentes de dicha actividad. No es simplemente un sistema de objetos, sino que el espacio social es su contenido histórico, es una unidad social, un conjunto de relaciones, por eso el análisis de los barrios es una forma de microescala pertinente.

Lo fundamental es ver la ciudad como un cruce de las tres categorías fundamentales e históricas de la perspectiva neobourdieusiana: el espacio social, el espacio simbólico y el espacio físico.

El espacio físico entra entonces de manera crítica en la fórmula de la acción, no sólo a través de las limitaciones materiales que impone y las facilidades que permite, sino también como el espacio de concretización de categorías mentales (como cuando la imagen de la ciudad en la mente de los dominantes se vuelve realidad topográfica y arquitectónica) y divisiones sociales (como cuando las particiones del espacio social se convierten en barrios separados). (Wacquant, 2022, p. 2; traducción propia)

Trazados mentales que los urbanistas concretan en la construcción de los planes de vivienda o en la permisividad y miopía frente al crecimiento

periférico de la ciudad que no afecta las ganancias y rentabilidad del uso del suelo de los círculos de poder, como refiere Garnier (1976). Y es que la ciudad informal también es un beneficio para el Estado, pues la gente termina supliendo, por medio de la autogestión, los derechos sociales como la vivienda, que deberían proporcionar las instituciones; por eso, llegar luego a legalizar es una ganancia para el cobro de impuestos sobre lo que se levantó sin esfuerzo estatal, tal y como se muestra en la Figura 39, donde los carros y la maquinaria llegan a pavimentar un barrio que ya está delimitado.

Las relaciones y los espacios sociales son finitos, por lo que depende de las condiciones que se dan en un espacio-tiempo específico, esto explica que las periferias en Cali hayan cambiado en el siglo XX. Dependen de las prácticas y los procesos sociales que reproducen la vida social, además pueden ser cíclicos, es decir, regulares en el tiempo, tal y como ocurrió en varias zonas periféricas de la Cali de los años setenta y ochenta con el poblamiento informal. Incluso hoy que se vuelve a hablar del incremento de población migrante por la escalada del conflicto armado después de la firma de los acuerdos de paz, y con ello el aumento de población migrante en Cali en 2023.

El rompimiento de los acercamientos entre las disidencias de las Farc y el Gobierno Nacional están generando, entre otras cosas, que se incremente el número de familias desplazadas por la violencia, quienes llegan a la capital del Valle.

Durante un foro coordinado por la personería se conoció que 80.000 personas llegaron a la ciudad huyendo del conflicto armado durante el 2023.

[...] «Debemos prepararnos como ciudad porque la problemática social se va a incrementar y como instituciones estamos llamados para eso, para posicionar, para explorar medidas que nos permitan lograr mitigar el impacto de la violencia», dice Gerardo Mendoza, personero de Cali. (Dávila, 2024)

Sumado al incremento de población desplazada, a mediados del siglo XX, con el periodo de la Violencia en los años cincuenta, distinto al desplazamiento producto del narcotráfico y el paramilitarismo en los años ochenta y noventa, pero que se



Figura 39. Llegada de la legalización a los barrios informales.

Fuente: Foto Guerrero (1996).

expresaron en la expansión de los barrios por toma a la fuerza y ocupación del oriente y de la cresta del río Cauca, se da cuenta de los ciclos de migración que reconfiguran una ciudad como Cali que es corredor del narcotráfico y está afectada por el microtráfico actualmente, y, por ende, ese aspecto histórico debe considerarse para entender las transformaciones futuras de las periferias con estas nuevas olas migratorias, que incluso se dan al lado de una nueva crisis por la vivienda social del Estado que está ocurriendo.

La nueva crisis empezó desde el año 2023, cuando cambiaron las reglas para el acceso a los subsidios de vivienda, con la reestructuración de la medición del Sisbén IV, modificando población beneficiaria de los subsidios de cuota inicial, donde aplicaba sobre todo población asalariada entre 1 y 4 salarios mínimos legales vigentes; además de favorecer el flujo de caja de las constructoras que recibían el subsidio de manera anticipada y lo utilizaban en inversiones previas a la entrega de la vivienda. Sin embargo, estos cambios han generado que en febrero del año 2024 cayeran las tasas de construcción de vivienda en 55,6 %, puesto que solo se han construido 6675 viviendas VIS, según noticias del periódico *El Tiempo* (Quiroga, 2024).

Un país con la dinámica poblacional de Colombia requiere de un sector constructor que tenga la capacidad de superar las 250.000 viviendas iniciadas por año. Actualmente, la cifra se ubica por debajo de las 130.000 unidades, lo cual es, a todas luces, insuficiente para cubrir la formación de hogares, que se estima en cerca de 370.000 por año, y atender el déficit cuantitativo de vivienda que afecta a cerca de 1,3 millones de hogares. (párrs. 8 y 9)

Es decir que, después de 30 años, el déficit habitacional de la ciudad y en general del país, está volviendo a un ciclo de caída en el que las consecuencias para la informalidad urbana pueden verse reflejadas como en años anteriores, sobre todo porque se mantiene la tendencia de que los sectores de clase media que acceden a los proyectos de vivienda confían en que obtendrán los subsidios, pero al ser negados y verse enfrentados a los altos costos de los créditos que oscilan entre los 100 y 150 millones de pesos, de acuerdo con los costos totales, no cuentan con el respaldo de los bancos. Situación que vivieron muchas familias de clase media y baja en los proyectos estatales de los años noventa.

Este ciclo contrasta con los procesos de acción colectiva y toma de tierras de las décadas del setenta, en donde, por ejemplo, Pérez (2017) habla de un

ciclo similar al de Cali en las laderas de Medellín, en el cual se muestra el proceso de autoconstrucción de vivienda como un fenómeno colectivo donde los habitantes desde su lugar de exclusión de la ciudad y sin las instituciones, se valieron de recursos simbólicos, solidaridad y lucha colectiva para acceder a la vivienda, procesos que incluso pasaron por varias generaciones de las familias para consolidar su sobrevivencia. No solo pasó por el alistamiento del terreno, la construcción en distintos materiales, sino también el acceso a servicios y en el camino ir fortaleciendo los lazos comunitarios, muy similar al proceso de Terrón Colorado.

Volviendo con Flores (2009), quien cita a Harvey (1979), lo que define a un espacio son las prácticas humanas que se dan ahí, por ende, cada sujeto produce y transforma el espacio y lo diferenciado no son los lugares sino las relaciones sociales, son «un determinado nivel de integración de relaciones sociales [...] que tienen lugar en una determinada área o extensión física [...] las relaciones sociales sí definen y cualifican el lugar» (Flores, 2009, pp. 16-17).

En el caso de las relaciones que pueden tener los sujetos con el espacio que van a construir en el año 2024 en Cali, es posible afirmar que están directamente relacionadas con la capacidad de endeudamiento de los hogares de clase media, que a su vez están desistiendo de la compra de la vivienda en los nuevos términos, reforzando la mediación financiera para el acceso a vivienda, donde la brecha de acceso mediado por el tercer sector deja de nuevo a las capas sociales más bajas y vulnerables excluidas de la posibilidad de una vivienda, mientras las clases altas acceden con facilidad a la compra de bienes raíces e incluso población extranjera que tenga la fuente de intercambio del suelo, que es el capital económico.

En esta medida, los sujetos y las familias en la actualidad están buscando de manera individual resolver su capacidad crediticia para acceder a las políticas estatales de vivienda o, en los casos extremos, ocupando de nuevo zonas de mitigación de riesgo y zonas aledañas al oriente de la ciudad y las laderas para esperar una respuesta estatal, ya no movidos por el tejido social y la lucha obrera que fue antesala del movimiento de destechados en los

cincuenta y sesenta, sino en las individualidades frente a la institucionalidad.

Se han contabilizado aproximadamente 1700 nuevos techos que han sido levantados por los pobladores. «Estamos trabajando para ver cómo lo vamos a resolver y qué decisiones tomaremos porque sí se puede decir que tenemos un retroceso. También es importante entender que los presupuestos son finitos, la estructura financiera de los proyectos también es finita, pero no podemos seguir con estos procesos de reinvasión constantes. Estamos formulando las estrategias que nos permitan una gobernanza del jarillón, que no tengamos en un futuro estos procesos de reinvasión», agregó Danna Carrillo. Estas nuevas 1700 familias, según explicó la entidad, no pueden ser atendidas y contadas dentro de la línea base inicial de 8777, por lo que tendrán que surtir otros procesos. (*El País*, 14 de marzo de 2024, párrs. 5-7)

Todos estos procesos actuales se oponen a la construcción del tejido social en lo cotidiano, que Pérez (2017) menciona en el poblamiento popular, desde la unión de fuerzas para enfrentar la carencia y gestionar soluciones. Estas relaciones sociales se fortalecieron en medio del compartir no solamente las necesidades, sino también las fiestas, los alimentos, la recogida de agua, etc. La reunión y el convite en sí fueron espacios para planear y fortalecer el trabajo colectivo, donde la escuela y más adelante las JAC juegan un papel destacado.

Porque aquí todavía se conservan muchas tradiciones de la cultura rural, entonces muchas de las problemáticas de la comunidad se resuelven a base de minga, entonces la pavimentación de las vías inicialmente fue a base de minga, entonces la gente se reunía y el de esta casa y el de esta casa colocaban los materiales pero todos los vecinos salían a pavimentar ese pedazo, o cuando alguien tenía que construir; muchos de los desarrollos de las viviendas por acá han sido por autoconstrucción, entonces lo que pasaba era que las personas convocaban a sus vecinos y el trabajo era fundir una plancha o levantar una pared, entonces el dueño de su vivienda colocaba los materiales, el sancocho, la cerveza, y las personas no iban por un trabajo, por una remuneración, sino por ese espíritu de la solidaridad y de la cooperación en relación a un familiar o a una persona muy cercana. Y en la medida en

que la familia se fue haciendo muy extensa, pues las personas empezaron a pavimentar el patio o el antejardín, entonces empezaron con la crianza de las gallinas, de los conejos, de los cuyes, del ganado, entonces nos encontramos con esas grandes casas en donde viven cuatro o cinco generaciones. (Orbay Beltrán, comunicación personal, 27 de marzo de 2024)

Pérez (2017) también refiere la diversidad identitaria de estos espacios, destacando aspectos como lo rururbano, lo afro, las diversidades de género, adscripciones religiosas o políticas diferentes, entre otros aspectos que se retoman de forma general para señalar las diferencias de sus pobladores que confluyen en las memorias colectivas de los espacios que comparten. Incluso plantea la incursión de actores como la Iglesia o los grupos armados ilegales que desde distintos lugares han tenido que ver con el desarrollo de estos barrios. Esta participación de actores distintos al Estado muestra los efectos de la gobernanza en la exigencia de los derechos y los grandes retos que enfrentan los sujetos para enfrentarse a los dueños del capital financiero.

Aquí también se puede distinguir la potencia del concepto del espacio social diferenciado, entendiendo que es producto de relaciones que son distintas por la cualidad de cada sujeto que interactúa en determinada fracción espacial; habla a su vez de la conjugación de variables identitarias que definen el espacio; es decir, que caben distintas categorías como lo étnico, el género, la clase, el lugar de origen, el uso del suelo, entre otras, para definir un lugar, y rompe con el esquema clásico de la periferia como un borde marginal que en términos geográficos se homogeniza en el mapa, pero que en realidad está en función de las relaciones.

La propuesta de Flores (2009) es darles mayor énfasis a las interacciones que al sentido físico como espacio en el que se mueve el sujeto; por ende, el espacio social es «lo que posibilita la totalidad de las relaciones sociales entre los seres humanos» (p. 17), y un lugar desde lo físico es una de las tantas expresiones de esas condiciones sociales en la relación. Pero ese espacio social no es continuo porque no garantiza la reproducción *per se*, ya que es el reflejo de múltiples espacios-tiempos diferenciados que no son absolutos ni continuos.

Por ejemplo, así compartan características similares los proyectos de reubicación implementados por el Plan Jarillón en planes habitacionales de la comuna 21 como Río Cauca o Ramalí, en la comuna 6, estas viviendas de propiedad horizontal presentan dinámicas y relaciones distintas entre sus habitantes, marcadas por el hecho de tener zonas aledañas como Puertas del Sol, en el caso de la comuna 21, o Petecuy, en el caso de la comuna 6, pero sobre todo porque los habitantes que han llegado a las viviendas vienen de otras zonas de la ciudad y han acumulado individualmente espacios diferenciados para moverse en la estructura de exclusión social, con capitales espaciales distintos.

Los sujetos en tanto mantienen sus relaciones históricas de reproducción que pueden ser de privación de capitales o de acumulación de capitales, sostienen las condiciones del espacio social, pero no es el espacio como una superestructura desarticulada sino los sujetos y sus acciones: «su reproducción está sujeta a que cada uno de los sujetos repita cíclicamente su actividad, refuerce sus relaciones precedentes y cree otras nuevas y, con ello, las condiciones objetivas de su existencia» (Flores, 2009, p. 18).

No obstante, en los lugares donde las relaciones de exclusión y privaciones de NBI han marcado el espacio social y la forma de habitar de los sujetos, la reproducción se da sobre las mismas condiciones de vulnerabilidad, conectando de nuevo con el efecto arrastre del que habla Bourdieu (1999), donde el sujeto se mueve bajo las mismas interacciones de desposesión simbólica y de capitales que lo ubican en la posición de dominación y subordinación de otras clases sociales. O en palabras de Franco (2019), sosteniendo la marginalidad en los lugares donde son reubicados, como en el caso de Llano Verde, en la comuna 15 del oriente de la ciudad, o en Río Cauca, en la comuna 21.

Aparece de nuevo la evidencia de la bio(necro)polis de la que habla Alves (2020), en la que biópolis y necrópolis están juntas, coexisten en medio de distancias simbólicas muy grandes pero con cercanía espacial, pues la idea de una vivienda nueva como apartamentos y un centro comercial al lado como referentes de lugares modernos que aparentemente están incluyendo a los cuerpos negros,

siguen marcando el olvido que el resto de la ciudad ha concretado en una única entrada al oriente por la carrera 15, que luego se convierte en carrera 25 cuando pasa por la estación de Andrés Sanín, y que poco altera la vida del resto de la ciudad.

Noticias como la que se presenta más abajo (Figura 40), al mismo tiempo cumplen la función de legitimar la producción discursiva entre etnia, violencia y pobreza; ante todo concretar el lugar de muerte de la necrópolis y la validez de enfrentarla junto con sus habitantes para defender al resto de los habitantes de la biópolis. De ahí el papel de las fuerzas militares en mantener los intereses de los blanco-mestizos bajo la securitización (la imposición de la seguridad en ciertos barrios, a través de la presencia constante de policía o militares) de ciertos entornos, justificando el terror policial y paramilitar que se encarga de «poner a cada quien en su lugar» (Alves, 2020), incluso si esto significa alejarse de las formas «legales» de segregación racial y usar lo que Auyero (2013) denomina patadas clandestinas o la mano izquierda del Estado, para doblegar y mantener al margen a los cuerpos negros que representan el crimen y a quienes hay que temerles como estrategia política de las élites de poder.

Adicionalmente, Flores (2009) propone ver los espacios diferenciados de acuerdo con una clasificación por escalas, señalando los siguientes: (a) el cuerpo y sus vestimentas, (b) el espacio personal, (c) espacio de trabajo, (d) espacio doméstico, (e) espacio comunitario, y (f) espacio social inferible o regional (barrios o vecindarios). Estos niveles permiten operativizar mejor la comprensión de las relaciones en los espacios sociales diferenciados, por ejemplo, al hablar del espacio-cuerpo se refiere al producto histórico que es sumado a la relación que tiene el desarrollo biológico del hombre en determinadas condiciones físicas y sociales específicas, pues un recién nacido que no cuente con la ingesta nutricional necesaria tendrá unas privaciones que afecten su crecimiento. De ahí la importancia de incluir en el análisis factores como el índice de NBI para comparar los espacios.

Esta articulación del espacio con las condiciones en que se desarrolla el cuerpo también permite comprender que las posiciones en el espacio para la búsqueda de vida digna tienen su origen en los alimentos, el vestido, el cuidado, los factores de exclusión étnica o de género, que se manifiestan en la corporalidad. Esta escala se puede relacionar con

Una mujer fue asesinada en los apartamentos Río Cauca, en el oriente de Cali

El homicidio causó conmoción en las primeras horas de la mañana del lunes 17 de julio.

17 de julio de 2023
Por: Redacción El País



La identidad de la fallecida aún no ha sido revelada. Foto: Getty Images

Figura 40. Noticia sobre asesinato en urbanización Río Cauca, comuna 21.

Fuente: Cortez (2023).

las categorías de necrópolis abordadas por Alves (2000), quien refiere que la segregación espacial se da con base en criterios de racialización que pesan en la definición de lugares de vida, de condiciones dignas para desarrollarse según los estándares blancos y masculinos de la biópolis en las ciudades de la utopía democrática, pero ocurre todo lo contrario en las zonas destinadas para que habiten los cuerpos negros y demás tonos de piel distintos al blanco, caracterizados por la reproducción de geografías de la muerte, desposeídos de su ser, asociados a la violencia e inseguridad, relacionados como enemigos y peligrosos, y, por ende, con menores posibilidades de existencia en la ciudad.

En esta línea, hablar del espacio-personal tiene que ver con el conjunto de relaciones en las que se inserta el sujeto y participa del espacio; él en sí mismo es una integralidad de todas las relaciones que lo atraviesan, como pensar la intersección de identidades de las que habla la teoría de la interseccionalidad. Por eso cuando se habla de la terminación de las distintas relaciones en que se mueve el sujeto se puede entender el suicidio como un colapso del espacio personal.

En cuanto al espacio-laboral tendrá que ver con los modos de trabajo y los procesos que dentro de la actividad productiva desarrollan los sujetos; o el espacio-doméstico que tiene que ver con la estructura y organización dentro del hogar. También están el espacio-comunitario como el reflejo de las clases sociales dentro de la ciudad, acordes con los procesos productivos en el espacio; y los espacios-inferibles a nivel regional que tienen que ver con la mezcla entre una unidad territorial donde hay propiedad y la propiedad en un contexto sociohistórico.

Este último espacio-inferible se relaciona con esa idea del «contexto de momento», en donde se hace énfasis en las relaciones con el uso del espacio que tienen los sujetos en él, dependiendo de las condiciones sociales de un momento específico en una fracción espacial específica, y ahí se insiste en que no son los mismos conflictos los que enfrentaban los primeros pobladores de Terrón Colorado en la década del cincuenta cuando había tomas de tierra por la fuerza, o los conflictos que experimentan hoy en su condición de barrio legalmente constituido pero con privaciones de capital,

en donde se ven excluidos de ciertas condiciones de vida digna.

No obstante, Flores (2009) deja claro que su intención no es mostrar las escalas como entidades fijas y cerradas, sino que la apuesta es por una comprensión multiescalar, es decir, ver la relación y yuxtaposición de los espacios diferenciados que permitan entender de forma compleja estos lugares de estudio.

Dada la relación e integridad de las escalas, un hecho social puede repercutir de distinta manera en cada una de las escalas (espacios sociales diferenciados de distinto nivel de integridad socio histórica) en cuanto obedecen a distintos niveles de relaciones sociales. Un análisis ampliado tendría que explicar cuál es el impacto socialmente producido en las distintas escalas, no solamente en su espacio social de origen. (Flores, 2009, p. 27)

Las capas espaciales que destacan para los casos de estudio tienen que ver con el nivel estatal donde aparece el Gobierno local desde alcaldía, concejales, secretarías de planeación, empresarios, partidos políticos, élites sociales que, a través de discusiones, reuniones, disponen el diseño de la ciudad, su ampliación, regulación y ordenamiento físico y simbólico. Este es el nivel más alto del espacio social de la ciudad de Cali y desde ahí se tramitan múltiples proyectos de ordenamiento que impactan diferenciadamente los barrios, comunas, zonas comerciales, zonas medioambientales, etc. Luego viene un nivel bajo donde aparecen los profesionales y actores representativos de la comunidad, dueños de negocio, líderes, habitantes organizados y resto de población, el espacio donde se concreta la burocracia callejera y el Estado se presenta a partir de «la feria de chalecos», como lo denomina Buchely (2017), burocracias blandas que se articulan con las comunidades, aunque la distancia de las burocracias duras no las tenga en cuenta, y ese relacionamiento con los profesionales sociales portadores de programas de bienestar de forma simbólica los está dejando en un nivel bajo de negociación e impacto real de sus reclamos como habitantes, por eso se convierte en algo diferencial cuando esa negociación cambia para cada barrio de estudio.

El contraste que reciben mediante la interlocución burocrática quienes viven en la periferia de la comuna 21 no es el mismo que un borde urbano como la comuna 22; de hecho, en la noticia que se aprecia en la Figura 41 se muestra cómo estas altas burocracias del espacio social proponen la creación de una nueva división administrativa para los barrios Pance y Ciudad Jardín, en el año 2000, mientras en la comuna 21 la gente debe esperar a salir favorecida en un listado de subsidios que luego deberán completar con créditos de vivienda. Es clara la agencia material y simbólica del Estado en la producción de dos comunas periféricas, pero con un valor del suelo diferenciado que se refleja en la arquitectura de sus viviendas, el entorno de las casas, el equipamiento alrededor y las disposiciones que adoptan sus habitantes en el diario vivir, sumado a procesos sociales como el narcotráfico, que marcó un estilo de vida urbano en Cali asociado al exceso de capital económico y las prácticas de consumo y cultura de estas familias que diseñaron varias de las mansiones de Ciudad Jardín.

Mientras tanto, en otras zonas diferenciadas de la ciudad unos esperan ser beneficiados con un subsidio o se agrupan para reclamar el derecho a

la ciudad, solicitando expansión de las zonas aptas para construir proyectos habitacionales, reclamos desde líderes de las comunas agrupados para dialogar con el Estado a través de las burocracias blandas que les conceden foros de discusión y espacios informativos que no toman las decisiones de los concejales o alcaldes que se reúnen con élites y empresarios de la comuna 22 por fuera de los espacios de representación democrática. Es por eso que las decisiones de la burocracia estatal son efectivas con los intereses de las clases altas de la ciudad, pero se convierten en tensión hacia abajo con los habitantes desprovistos de capital económico y simbólico como las clases populares que aún no tienen vivienda en Cali, o como el resto de los barrios de la comuna 1 o 21.

La ciudad surge, crece y se renueva definiendo un modelo de organización coherente con la posición social de los individuos, de tal suerte que la morfología urbana reproduce en el espacio la estructura de clases sociales existente. Desde esta perspectiva, a la ciudad cabe interpretarla como un «mosaico de mundos sociales» que actúan y se organizan como si se tratase de las piezas de un *puzzle*. (Rodríguez Jaume, 2002, p. 286)

Características

Los barrios y sectores que integrarían las Comuna 22, de acuerdo con el proyecto llevado al Concejo son:

Cañas Gordas, La Umbría, El Retiro, La Finca, La María, Piedra Grande, Los 21, Alférez Real, Hacienda Cañasgordas, Ciudad Jardín, Ciudad Campestre, Brisas de California, Urbanización Río Lili, Caserío Lili y El Campestre.

En esta zona residen cerca de 10.500 personas pertenecientes a los estratos dos, cinco y seis.

Además, el sector cuenta con todo el equipamiento urbano establecido por la reglamentación, para la constitución de esas unidades político administrativas necesarias en el orden municipal.

Igualmente, es una de las zonas de la ciudad con mayor proyección de crecimiento tanto urbanístico como poblacional.

Ciudad Jardín y Pance se desprenderán de la comuna 17

Proponen crear la Comuna 22

La creación de la Comuna 22, que estará conformada por Ciudad Jardín y las denominadas parcelaciones de Pance, comenzará a ser estudiada hoy por el Concejo Municipal.

Según Diego Ramos, gestor de la propuesta, se trata de permitir a los habitantes de esa zona mayor participación en la toma de decisiones, ya que es muy escasa la representación que los dos sectores tienen en la Junta Administradora Local de la Comuna 17, a la cual pertenecen.

Además, dice la iniciativa, la creación de la Comuna 22 fue un compromiso adquirido por el hoy Alcalde Ricardo Cobo, durante la campaña de 1997.

“Con la institucionalización de esos dos sectores en una entidad territorial municipal independiente, se garantiza también que la Administración se comprometa de manera directa con la solución a la problemática que afrontan”, dijo Ramos.

Explicó, que si bien se trata de sectores ubicados en el estrato seis, carecen de los servicios de acueducto y alcantarillado, además de que el 70% de sus callejones y vías internas están sin pavimentar.

Agregó Ramos que el constituirse en comuna independiente, le garantiza a esos dos sectores contar con un situado fiscal municipal, que podrá ser asignado y administrado de manera directa por la Junta Administradora Local, JAL.

Dice la argumentación del proyecto, que las necesidades de los habitantes de parcelaciones de Pance y Ciudad Jardín, ubicados en el sur de la comuna, son muy diferentes a las de los barrios ubicados en la parte norte del sector.

El proyecto de acuerdo de creación de la comuna 22 recibirá hoy apertura de estudio y primer debate en las Comisiones de Presupuesto y Plan de la Corporación Municipal.

Figura 41. Noticia sobre creación de la comuna 22.

Fuente: *El País* (28 de junio de 2000b).

En ese mosaico de mundos sociales el poder simbólico se ejerce de forma distinta y por eso cambia la gestión de los conflictos urbanos por el uso de la tierra y el acceso a vivienda, siendo el Estado el actor clave en el despliegue de posibilidades u obstaculizando la acumulación de privilegios de la mano de la posesión de capitales para dominar el espacio social. En el mundo social de las élites que

necesitaban crear la comuna 22 para su gestión, las definiciones ya están tomadas, pero para el resto de la ciudad y los barrios periféricos que necesitan viviendas y espacio para establecerse, lo que quedan son reclamos, como se aprecia en la Figura 42, donde se anuncian las necesidades de los comuneros, que de igual forma no van a traducirse en decisiones espaciales.

C2 **CALI** CALI, MIÉ

Para algunos el Plan es sólo "un manual de buenas intenciones"

Comuneros urgen vivienda en el POT

Urgen expandir a Cali para abaratar la tierra, pero sin invadir los cerros. Proponen foro.

Priorizar la construcción de vivienda social en el Plan de Ordenamiento Territorial que, de paso, contribuiría a la reactivación económica de Cali, pidieron comuneros de la ciudad.

A instancias de El País, los comuneros caleños opinaron sobre el POT y expresaron su preocupación por el tratamiento que se da en ese Plan a temas como las áreas de expansión, la vivienda social, el medio ambiente, la disposición final de basuras, y aspectos sociales como el empleo, la inseguridad, la salud y la educación.

El presidente de la Asociación de Comuneros de Cali (y de la JAL 19), Jesús Salazar, dijo que es necesario considerar la expansión de la ciudad para abaratar el precio de la tierra y ofrecer vivienda a bajo costo a las clases populares que lo requieren.

"La vivienda reactiva la economía, da solución a la falta de techo de muchas familias, mejora la calidad de vida y da crecimiento ordenado a la ciudad, porque permite soluciones planificadas en servicios

El corredor vial entre Cali y Jamundí, es la única área de expansión definida en el POT. Sin embargo, la vivienda social allí sería limitada.

públicos domiciliarios, educación y seguridad", dijo Salazar.

Ximena Gutiérrez, dignataria de la Comuna Cinco, criticó la definición de las áreas de expansión en el POT y sostuvo que ellas "responden a los intereses de los dueños de la tierra".

"La proyección de las necesidades urbanísticas a 20 años es sólo un manual de buenas intenciones. Al no existir en el Plan una base para el desarrollo de una malla vial urbana, la ciudad seguirá plagada de calles ciegas, vallas atravesadas y avenidas a cuyo paso se erigen sorpresivamente moles

de cemento", dijo Gutiérrez.

"Con un Concejo que le debe muchos favores a los grandes electores de la ciudad, será difícil tener un resultado sensato en esta materia", puntualizó la comunera.

Fabiola Granados, dignataria de la Comuna Diez, señaló, por su parte, que "hay preocupación sobre la posible expansión de la ciudad hacia los cerros tutelares" (esta expansión figura como áreas de régimen diferido).

"Los comuneros de esa zona nos han expresado su inquietud porque hay una tendencia a invadir los cerros, lo que plantea varios problemas, porque de un lado, se queda

Cali sin pulmones ecológicos y, de otro lado, va a haber choque entre las nuevas urbanizaciones y condominios que se hagan allí, y los sectores rurales humildes que hoy existen", dijo Granados.

Juan de Dios Zapata, líder comunal del corregimiento de La Buitrera, rechazó la posibilidad de que el traslado definitivo del basuro de Navarro se haga para su sector.

"A los comuneros no nos han tenido en cuenta en esa decisión, aunque sabemos que la disposición final de residuos sólidos va para La Buitrera", dijo Zapata.

Pidió más claridad y democracia en el manejo del tema de la vivienda, porque según denunció, "hay ayudas nacionales que llegan a Cali, pero las distribuyen políticamente con el fin de recoger votos".

El dignatario comunal pidió también un tratamiento equitativo en el POT en materia de servicios públicos para la zona rural.

Propuesta de participación

La Asociación de Comuneros de Cali propuso al Concejo realizar con urgencia un foro ciudadano de tres días sobre el POT, con base en documentos de participación previamente radicados en mesas de trabajo y con vocería sectorial de juntas comunales, juntas administradoras locales y universidades.

El objetivo es que durante la mañana se hagan las exposiciones sobre el POT y en la tarde se reúnan las mesas de trabajo para hacer relatorías sobre temas específicos.

Al final de los tres días de foro, se tendrá una relatoría general para que los concejales con sus asesores la trabajen y la incluyan en el Plan de Ordenamiento Territorial.

"La idea es replantear el esquema de participación comunitaria para hacerlo más efectivo; que en vez de que la participación se convierta en un mecanismo inoficioso de desahogo emocional contra el alcalde, los políticos, el gobierno o las instituciones, aporte verdaderamente al proyecto", dijo Salazar.

"Conseguimos \$453 millones por transferencia nacional para construir un acueducto con ayuda del Cinara de Univalle que hizo los estudios; pero en vez de \$180 millones que costaba la primera de las tres plantas de potabilización, se gastaron \$330 millones".

"Hoy no tenemos agua tratada y ahora se necesitan \$500 millones más para terminar todo el acueducto de La Buitrera", puntualizó Zapata.

Edison Hernández, de la Comuna 16, dijo que "los comuneros estamos esquivos con el POT porque siempre que mandamos 20 proyectos, cuando llegan al Concejo sólo salen cinco y nosotros quedamos mal ante la comunidad".

William José Guerrero, de Pichindé, opinó: "el POT me parece bueno para que en 20 años Cali sea distinta, pero me preocupa lo del metro, porque estamos en una gran crisis en la ciudad, hay mucho desempleo y falta inversión social".

¿Y LA MALLA VIAL?

"Al no existir en el POT una base para el desarrollo de una malla vial urbana, Cali seguirá con calles ciegas".

ARCHIVO / EL PAÍS



Figura 42. Noticia sobre solicitud de comuneros de Cali.

Fuente: El País (7 de junio de 2000).

Tipos de conflictos urbanos

Los barrios que se contrastan en la presente investigación surgen en dos espacio-tiempos distintos, como lo menciona Flores (2009): Terrón Colorado, en medio de las luchas urbanas por la vivienda que se extendieron en el país a mediados del siglo XX, alentadas por las luchas obreras de las décadas de los años veinte y treinta en las que muchos líderes habían participado, como lo estudió Mosquera (1984), que generaron las oportunidades necesarias para emplear distintos modos de ocupación informal y lucha multimodal desde la ocupación de tierras hasta las exigencias jurídicas ante el Estado, con lo que además se consolidaron trayectorias de participación comunitaria y organizaciones de base para un recorrido de exigencias por mejorar el barrio.

Por su parte, Suerte 90 es producto de la respuesta estatal a la crisis de vivienda que en Cali venía desde mediados del siglo XX, pero que con el proceso de desecación de las lagunas, la construcción de los jarillones y la planeación diseñada desde modelos internacionales para adecuar amplias extensiones de tierra para la VIS, empezaron a aliarse con la empresa privada, constructoras, políticos y funcionarios del Estado para implementar sistemas de créditos con los cuales las clases de los estratos más bajos accedieron a la vivienda que el oriente de la antigua laguna de Aguablanca les ofrecía, y que se sumaba al aumento de población migrante en la ciudad y al empeoramiento de las condiciones de vida digna de los oriundos de Cali.

Los dos momentos generan condiciones distintas sobre el uso y rentabilidad que se le puede dar a los suelos de la ciudad, pues como refiere Flores (2009), para comprender las decisiones, adecuaciones y relaciones sociales de producción hay que mirar las condiciones históricas y temporales del espacio social inferible, en este caso, los barrios que se inscriben en comunas. Incluso podría relacionarse cómo las viviendas de interés social pensadas en proyectos habitacionales como Desepaz, Valle Grande o Potrero Grande entre las décadas de los noventa y los dos mil en la comuna 21, tienen una configuración distinta a barrios como El Poblado, Marroquín o El Vergel, en comunas aledañas como

la 13 y la 14, que hacen parte de ese entramado que se ha denominado Distrito de Aguablanca.

Estos ejemplos para ilustrar que coexistieron en el oriente de la ciudad procesos informales de toma de tierras, de loteo, de participación de población organizada, adscritas a grupos políticos e incluso grupos armados, junto con organizaciones de base que en el caso de barrios como Marroquín, Yira Castro o Siloé, también estuvieron impulsadas por el intervencionismo extranjero con los programas de cooperación internacional, ligados a entidades religiosas o a iniciativas gubernamentales de alianzas para el progreso (Rodríguez y Bermúdez, 2013), mostrando que las formas de acceso de vivienda en los años setenta-ochenta son distintas que en los años noventa-dos mil, y que en ese inicio del siglo XXI, el incentivo nacional que se refleja en los programas locales de vivienda es el bancario, a través de créditos parciales a las poblaciones excluidas.

Este tipo de vivienda muestra así un «orden espacial» que problematiza la idea de «desorden urbano» o de «anarquía urbana» que las élites usan en sus discursos o en sus medios de difusión, dado que, como lo plantea Garnier (1976), la planificación urbana quiere frenar el peligro de la expansión colectiva de tierras por medio de la ocupación informal o de la organización de grupos que lideren acción colectiva en medio de los conflictos por el derecho a la ciudad (Tabla 11), con el fin de que no alteren los beneficios que las élites han conseguido en la lógica de la urbanización. Podríamos decir aquí que, a los grupos de poder de la ciudad de Cali y en general del país, les interesa diseñar una zona marginada, alejada del centro de la ciudad, de las zonas de decisión, de los barrios de élite para que vivan las poblaciones vulnerables, y con esto garantizar que la «gran mancha de parias urbanos», como lo refiere Wacquant (2001), no llegue a zonas cercanas a El Peñón, Centenario, Ciudad Jardín, La Flora, Vipasa, Santa Teresita o Tequendama.

Vemos entonces que la historia particular de cada barrio los lleva a la reivindicación de ciertos derechos o exigencias. Para el caso de Terrón Colorado se mantiene la exigencia por acceso a servicios públicos de calidad y la constancia en los mismos, pues a pesar de llevar alrededor de setenta años de

surgimiento, los habitantes de esta ladera deben estar haciendo bloqueos constantes en la vía cuando les quitan el agua por dos días seguidos, o acciones para reclamar el arreglo de la vía que divide al barrio que además lleva a Buenaventura y es la salida de la ciudad, donde se evidencian múltiples conflictos

en momentos de vacaciones, con trancones que pueden durar horas mientras las clases altas salen a sus fincas en el kilómetro 18 o en el 30, y los habitantes quedan a merced de los pitos, el humo de los carros, vías ocupadas e incluso, si tienen vehículos, con retrasos para llegar a su casa.

Tabla 11. Tipo de conflictos urbanos en cada barrio.

Tipo de conflicto	Barrio Terrón Colorado	Barrio Suerte 90
Por acceso a servicios públicos (energía, alcantarillado, agua, recolección de basuras, Internet)	A pesar de que, desde la construcción de su barrio, Terrón Colorado ha estado peleando por el acceso a servicios públicos, la zona más alta sigue sufriendo en la actualidad, como hace veinte años, la falta de fuerza para que el bombeo surta la parte más alta de la montaña de la comuna 1, por lo cual son frecuentes las acciones colectivas de presión a la alcaldía cuando hay cortes de agua seguidos.	Suerte 90, al ser un barrio de construcción estatal, cuenta con los servicios públicos de alcantarillado, energía y agua que se fueron instalando después de la entrega de los primeros lotes. No obstante, en entrevistas se refiere que los cortes de energía son constantes y sobre todo de Internet, por lo que varias familias han decidido contratar con otras empresas que no son de la ciudad para resolver esta dificultad con la conectividad.
Por cobertura y servicio de transporte público	La vía al mar en Cali, que atraviesa Terrón Colorado, tiene servicio de transporte público como busetas, gualas, masivo MIO, buses intermunicipales y transporte «pirata», y han sido las gualas, lideradas por los habitantes de Terrón, las que lograron, a través de negociaciones, compartir rutas con el servicio MIO hasta la iglesia San Ignacio de Loyola, al final de la primera década del siglo XXI. Pero en la actualidad se han dado conflictos entre los servicios de transporte intermunicipal y el transporte pirata, por la competencia de pasajeros.	El barrio Suerte 90 desde su inicio ha tenido dificultades para conectarse con el resto de la ciudad, por lo que el transporte de gualas es el que ha acompañado a los habitantes de la zona desde su inicio hasta la fecha, combinado con mototaxis, piratas y algunos buses de transporte público, pero no todos entran hasta el barrio. Desde el funcionamiento del MIO, en el 2009, los habitantes han pedido rutas y mayor frecuencia del MIO para el barrio.
Por seguridad y disminución de la violencia (fronteras invisibles, actores armados, hurtos, homicidios, microtráfico)	La presencia de actores armados en la zona, por ser un corredor estratégico de la droga, ha hecho que la configuración de órdenes dentro del barrio esté delimitada por esta presencia, como lo refieren los profesionales sociales que han trabajado en la zona; generando altos índices de violencia y sobre todo la muerte de los jóvenes. Ante este conflicto, la organización de base, a través de iniciativas culturales, ha querido enfrentar el problema.	En Suerte 90 se perciben como barrio afectado por las dinámicas violentas de las zonas vecinas; plantean los habitantes que los robos que se presentan son por personas que vienen de otros barrios, que califican como inseguros y diferentes al de ellos, y que las familias han tenido que asumir estrategias individuales porque no han encontrado respuestas de entidades como la policía.
Por el medio ambiente	Los habitantes de Terrón Colorado se perciben como una zona rururbana, conviven con el río Cali y la zona montañosa, por lo que en la actualidad piden reconocimiento de su barrio como ecobarrio, pues sus viviendas e interacción con la tierra les ha permitido generar huertas y otras dinámicas alrededor de la montaña. Incluso denuncian que no han sido incluidos en los procesos de la COP16. Por otra parte, refieren que los trancones de los fines de semana que se forman en la vía al mar, por la gente que va al kilómetro 18 o hacia sus fincas en la vía a Buenaventura, afectan la calidad del aire de la montaña.	A pesar de que hay algunas referencias de Suerte 90 como ecobarrio, las dinámicas de zona rururbana no se identifican, incluso no tienen una relación ambiental con el río Cauca, que es más de quienes habitan el jarillón de Navarro, ni se identifican actividades agrícolas como en el corregimiento aledaño. Sus reclamos ante la cuestión ambiental se orientan más en pedir mayor atención en la disposición de basuras, pues la vía que los divide con el jarillón sigue en mal estado y la no recolección de basura genera otros problemas como la proliferación de plagas (ratas, insectos) transmisoras de enfermedades, contaminación de aire, suelo y agua.
Por escrituras públicas de vivienda	La primera delimitación del barrio contaba con permisos, producto de la negociación de los líderes, pero hay zonas informales donde es el límite con el área de reserva de los ríos y allí no cuentan con escrituras, por lo que a 2012 todavía llegaban promesas de las alcaldías de habilitar zonas para escriturar.	Fenavip quebró y la deuda de las viviendas la asumió la Secretaría de Vivienda Social, unos habitantes pagaron y otros se rehúsan a hacerlo, por lo cual no cuentan con escrituras hasta la fecha. Esto recorta la movilidad social de sus generaciones, a pesar de que tienen «vivienda propia».

Sobre la exigencia del abastecimiento de agua para la parte alta, se comparan a continuación dos noticias que retratan cómo en el año 1998 se registraba el mismo problema que persiste en 2024:

El gerente de Acueducto y Alcantarillado (Acuacali), Marco León Villegas, manifestó que para solucionar el problema de abastecimiento de agua potable para la parte alta de Terrón Colorado, y otros sectores, se firmó el contrato para el acueducto de estos barrios y en esta semana se iniciarán las obras. Los líderes comunales pidieron además la construcción de una vía alterna de conducción de acueducto desde el hotel Dann hasta La Portada con el fin de surtir los tanques de abastecimiento de la comuna. (*El Tiempo*, 19 de enero de 1998, párr. 10)

Lo que destaca es la forma distinta de resolver los conflictos y la legitimidad y facilidad de relacionamiento que tienen los líderes de Terrón Colorado con el Estado, evidenciando que el espacio social es una zona de lucha de los agentes sociales y dependiendo de la zona, los capitales de los actores y la fuerza de la acción colectiva van a darse de forma distinta, pues a pesar de su condición de marginalidad, a Terrón Colorado lo atraviesa una vía de acceso y salida a la ciudad que además tiene su entrada a La Portada, en la zona de élite Cali —por ejemplo, el barrio Santa Rita—, así que las burocracias altas los deben escuchar e incluso ir hasta el barrio:

Con pie derecho inició Cobo su administración al venir hasta acá, afirmó Humberto Garcés, otro líder de la comuna 1. El reunirse con la gente y escuchar sus problemas es una base para iniciar un plan de trabajo acertado. Pedimos a la Administración municipal nos dé viabilidad y disponibilidad para mejorar la recreación, la salud y los servicios públicos y brindar mayor seguridad a los habitantes. (*El Tiempo*, 19 de enero de 1998, párr. 23)

En la Figura 43 se lee una noticia sobre este mismo conflicto en los años dos mil, mostrando la persistencia en el tiempo del problema de acceso al agua en la parte alta, contrastando con los esfuerzos por la creación de alcantarillado para la nueva comuna 22 que vimos en noticias anteriores versus un barrio con más de sesenta años de fundación.

Sin embargo, hay que mencionar que los habitantes de Terrón Colorado negocian más fácil con el Estado que los de Suerte 90, y en general el Distrito ha tenido menos reconocimiento en las altas esferas del espacio social y la burocracia vertical, por lo que siempre se privilegia la burocracia media o baja, muy a pesar de la tradición organizativa de los barrios de autoconstrucción que también existen en las comunas 13 y 14. En la Figura 44 se observa que a pesar de proponer acciones desde una Asociación de Economía Solidaria, las respuestas no son tan efectivas como las de otros líderes de otros espacios sociales.

Frente al tema de servicios públicos en el oriente, en Suerte 90 cuentan con las redes de energía, agua y alcantarillado desde que empezó la autoconstrucción de las viviendas, que, como ya se revisó en el capítulo 3, tuvo un ejercicio de gobernanza para adecuar los lotes y posteriormente el equipamiento urbano. Pero presentan algunas dificultades respecto a la intermitencia con la energía y con la atención frente a las fallas en el servicio de Internet, como lo explica uno de los habitantes:

Sí, Emcali a veces viene a hacer ciertas revisiones, también como los funcionarios a ver los contadores. Ahora que me mencionas Emcali me acuerdo de otra problemática que tenemos y es que aquí, cuando el clima está lluvioso, se va mucho la energía, y es una problemática como que es solo del barrio, porque aquí siempre se va la energía cuando el clima está así, pero enfrente uno ve energía. Aquí por ejemplo en redes de Internet usamos el Internet de una empresa independiente, si no estoy mal compra las megas a las otras empresas, y creo que todos en el barrio usamos esa red para el Internet; hay gente que sí usa esas empresas de Emcali o Claro, pero según lo que he hablado con vecinos, casi todos usamos como una red independiente de Internet, porque más que nada es la atención, porque si decimos está malo el Internet, casi siempre vienen rápido a arreglar los problemas y también es por el precio. (Santiago Aristizábal, comunicación personal, 10 de diciembre de 2023)

Los habitantes de Suerte 90 consideran que si hay mala atención de servicio de Internet, por ejemplo, la salida es pasarse a otra red privada, o en el caso de la energía dicen que es recurrente pero no

SANTIAGO DE CALI, VIERNES 30 DE JUNIO DE 2000 **EL PAÍS** CORREO ELECTRONICO: cali@elpais-cal.com

Gerente interventora ordenó no contratar más carrotaques

La ladera se quedó sin agua

El suministro de agua potable en sectores de ladera no era rentable para Emcali y fue suspendido. Alcalde pide restablecer el abastecimiento del líquido.

Sectores afectados

Los barrios y sectores afectados por la suspensión del abastecimiento de agua a través de carrotaques son asentamientos subnormales ubicados en la parte alta de la ciudad y dos corregimientos, uno de la parte plana y otro de la vía al mar.

Tales sectores son:
Kilometro 18, El Saladito, Corregimiento de Navarro, Hormigueros - Cauca, Cristo Rey, Altos de Normandía, Las Tres Cruces, Morgan - Pailita, y el Estero.

El tiempo que determinaba suspender el abastecimiento de agua potable a más de cinco mil caleños, por falta de financiación, la gerente interventora de las Emcali, Blanca Doris García, anunció la entrega de nueve vehículos blindados para los integrantes de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores.

En efecto, en carta enviada al alcalde Ricardo Cobo, la Gerente de Emcali manifiesta que la empresa no prestará más el servicio de suministro de agua a los habitantes de zonas de ladera y corregimientos de la parte plana de la ciudad hasta tanto el Municipio asuma su costo.

En los sectores afectados por la medida, algunos de los cuales no reciben el preciado líquido desde hace diez días, el agua era subida por carrotaques, contratados a un costo de \$300 millones anuales, según dijo el gerente de acueducto, Miguel Edinson Zuluaga.

Entre tanto, en otra comunicación a la directora general para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Claudia Patricia Cáceres, Blanca Doris García solicita se asigne un carro blindado para el servicio del presidente de Sintraemcali, Alexander López, ya que un automóvil Monza, también blindado, y que ya le había sido asignado por la empresa, fue rechazado. La misiva dice, además, que se concede permiso a quince trabajadores para que acompañen a los directivos del Sindicato.

Agrega la gerente interventora de las Empresas Municipales, que igualmente acordó con Sintraemcali dar prioridad al pago del anticipo de cesantías para el presidente de la organización sindical.

Carrotaques como el que aparece en la foto, no se volverán a ver en las laderas de Cali, por disposición de la gerente interventora, hasta tanto el Municipio asuma los costos.

Respaldo

Al referirse al desabastecimiento de agua potable en las laderas, el gerente de acueducto, Miguel Edinson Zuluaga, dijo que la ley no delega de manera expresa esa responsabilidad en Emcali y que, como consecuencia de las dificultades económicas por la que atraviesa la empresa, no se volverá a contratar con terceros, lo cual supone una sequía para los habitantes de dicho sector.

Zuluaga agrega que "la Ley 142, de servicios públicos, es clara en torno a que no es una obligación para la empresa llevar agua potable a los sectores subnormales, dado que no se garantiza su calidad, además de que no está clasificado como un servicio domiciliario, por lo que no se puede cobrar. Advierte, también, el gerente de Acueducto que, durante 1999, la empresa invirtió un promedio de \$60.000 anuales por persona en las zonas de ladera, incluidos los costos administrativos, los cuales no pueden ser asumidos hoy por la empresa.

No obstante el respaldo de Zuluaga a la gerente interventora, el alcalde Ricardo Cobo dijo que Emcali no puede perder su sentido y misión social que ha cumplido durante 68 años y reclamó el restablecimiento del servicio en las zonas afectadas.

"Ninguna disposición de la Ley 142 impide que Emcali preste el servicio público domiciliario de agua potable mediante el uso de carrotaques", manifestó el mandatario.

Y, agregó, que los problemas económicos de la empresa no provienen de la prestación de un servicio esencial con un carrotaque, y que esta decisión no sólo está afectando a las personas más humildes, sino incluso a los agentes de la Policía que prestan el servicio de vigilancia en la Estación de las Tres Cruces, quienes desde hace dos semanas no tienen agua.

Figura 43. Noticia sobre desabastecimiento de agua en el sector.

Fuente: *El País* (30 de junio de 2000).

se evidencia ningún tipo de acción colectiva para enfrentar el asunto, contrastando con la movilización constante de los habitantes de Terrón Colorado que con dos días de no tener regularidad en el servicio de acueducto, programan bloqueos sobre la vía al mar, a diferencia de Suerte 90 que una de sus vías centrales es de acceso al corregimiento de Navarro y de los ejidos, que no paraliza la movilidad de la ciudad (Figura 45).

Respecto al tema de seguridad y violencia, tanto la comuna 1 como la 21 han acumulado históricamente las cifras más altas de homicidios en la ciudad, especialmente en la 21, por la marcada combinación de factores de etnia y clase en un espacio geográfico, donde los actores armados han permanecido y reconfigurado sus prácticas a través del microtráfico, como lo estudió Vinasco-Martínez (2019) para el oriente de la ciudad.

SANTIAGO DE CALI, LUNES 19 DE JUNIO DE 2000

El País

CORREO ELECTRONICO: cali@elpais-cali.com

Comerciantes de Aguablanca quieren que los exoneren del pago de impuestos

Distrito insiste en 'zona especial'

Los pequeños empresarios de este sector presentarán la iniciativa al Concejo el próximo 28 de julio.

Los pequeños comerciantes del Distrito de Aguablanca insisten en convertir este vasto sector de la ciudad en una 'Zona de despeje económico o Especial'.

La iniciativa, que no tuvo mayor eco en el Concejo el año pasado, vuelve a abrirse paso, esta vez con suficientes elementos de juicio por parte de los promotores del proyecto, quienes presentarán la propuesta al Cabildo el próximo 24 de julio.

Así lo dieron a conocer a El País representantes de la Asociación de Economía Solidaria del Distrito de Aguablanca (Aesda), luego de una reunión de comerciantes realizada el fin de semana en la parroquia San Luis Beltrán del sector de Lagos I, en la cual se dieron los últimos ajustes al proyecto que busca exonerar del pago de impuestos a los pequeños negocios de esta zona deprimida del oriente de la capital del Valle.

Según Clara Inés Ramírez, presidente de Aesda (gremio que agrupa a 20 empresarios de economía solidaria), la cancelación de las obligaciones tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, y ante la Cámara de Comercio, tiene asfixiados a cientos de pequeños comerciantes que, en promedio, deben cancelar entre \$300.000 y \$500.000 anuales cada uno por estos gravámenes, sin incluir lo correspondiente a Catastro.

"Esto --dice la dirigente gremial--, aparte de los pagos de servicios públicos que tiene que hacer mensualmente el tendero o propietario de un humilde negocio".

Un caso que ejemplariza la situación que afrontan miles de comerciantes de esta deprimida zona, es el de la familia de Jorge Elián Romero, que hace un año se unió con otras tres familias para montar una pequeña ferretería. "El negocio genera mensualmente entre \$280.000 y \$350.000 en promedio. Pero así mismo tenemos que pagar, como sea, \$400.000 de servicios públicos, alquiler del local, la cuota del préstamo que nos dieron para montar el almacén y los aportes que se les deben dar a las esposas de los socios por el trabajo que ellas desempeñan", comenta Jorge Elián, al tiempo que señala que este año debieron cancelar \$500.000 en trámites de impuestos ante la Dian y la Cámara de Comercio.

Aunque no se sabe con exactitud cuántos negocios existen en el Distrito de Aguablanca, un informe de la Dirección de Planeación Municipal señala que casi el 80% de los 700.000 habitantes de esta zona vive de la economía informal, representada en tiendas, chatarrerías,



MARÍA DEL PILAR RUIZ / El País

Impuesto por estratificación

La iniciativa de la Asociación de Economía Solidaria del Distrito fue acogida por el presidente de la Comisión de Presupuesto del Concejo, Carlos Urresty, quien dijo que también adelanta una propuesta similar, pero enfocada a que el pago del impuesto de Industria y Comercio sea aplicado de acuerdo a la estratificación económica de los comerciantes.

"De esta forma --explicó el concejal-- lograríamos un alivio total a todas las pequeñas empresas ubicadas en los estratos uno, dos y tres. Es que un tendero de

Aguablanca está tributando la misma cantidad que un comerciante del centro".

Entre tanto, el edil José Luis Arcila indicó que "hay que mirar, desde lo social, qué resuelve la iniciativa y si ésta logra estimular la generación de empleo y la permanencia de los actuales empleos."

"También habría que saber cuáles son las actividades comerciales que se pretenden beneficiar, toda vez que en materia de economía solidaria también está incluido el sector del transporte urbano", puntualizó Arcila Córdoba.

La Transversal 27 con Calle 73 es una de las cuadras de Aguablanca con mayor número de negocios informales, conformados por grupos de familias.

misceláneas, pequeños supermercados y talleres, entre otros. En cada cuadra hay, al menos, dos negocios.

"Es una forma de sobrevivir a la pobreza que padece esta población, pues el 60% de la gente del Distrito está desempleada", dice el sacerdote José Demierre, de la parroquia San Luis Beltrán, quien desde hace un año asesora al grupo de pequeños empresarios.

Carlos Martín Rivera, uno de los coordinadores del proyecto de 'Zona Especial', explica que aunque la ini-

ciativa busca, en primera instancia, exonerar del impuesto a las empresas de economía solidaria, se espera que el Concejo extienda el beneficio a los demás negocios pequeños de Aguablanca.

Para sacar adelante este proyecto, la Asociación de Economía Solidaria del Distrito se basa en antecedentes históricos a la Ley Páez, la cual exoneró de impuestos a las empresas que se instalan en la zona siniestrada del departamento del Cauca.

Figura 44. Noticia sobre propuesta de zona especial en el Distrito.

Fuente: El País (19 de junio de 2000a).



Figura 45. Vías de acceso a los barrios.

Imagen izquierda: calle 126, al lado de Suerte 90; imagen derecha: vía al mar, en Terrón Colorado.

A lo largo de los últimos veinte años la concentración de los homicidios ha persistido en la periferia oriental (Distrito de Aguablanca conformado por las comunas 13, 14, 15 y 21), en la ladera occidental (barrios Terrón Colorado en la Comuna 1, Los Chorros en la Comuna 18 y Siloé en la Comuna 20) y en una fracción del centro que entró en deterioro hace ya varias décadas y en la cual el gobierno local ha iniciado un proceso de renovación urbana. Estas áreas, a su vez, ostentan los mayores índices de pobreza y desempleo. (Castillo-Valencia *et al.*, 2022, p. 134)

Con lo anterior se reconoce que las distintas capas espaciales que son producto de relaciones sociales diferenciadas, aunque tienen aspectos comunes en los barrios en tanto zonas de marginalidad que refuerzan la violencia, al entrar en identidades específicas como la etnia, particularizan los conflictos y consolidan al Distrito de Aguablanca como espacio diferenciado racializado y empobrecido. Y a pesar de que Terrón Colorado tuvo una época de violencia más marcada entre los años noventa y dos mil, ha bajado el índice en las últimas décadas.

Lo anterior se puede evidenciar en la disminución de la cifra de homicidios en la comuna 1 entre los años 1999 y 2018, donde se ubica Terrón Colorado, que tuvo 700, mientras que la comuna 21, donde está Suerte 90, en esta misma temporalidad tuvo 1642 homicidios (Castillo-Valencia *et al.*, 2022, p. 134).

El tema de la violencia y la inseguridad no aparece mucho en las entrevistas a los habitantes de

Terrón Colorado, pero en conversaciones con algunos funcionarios de la alcaldía que han trabajado en programas sociales desde la burocracia callejera, aparece como un aspecto marcado en la intervención social.

Con ellos uno puede moverse según las características del contexto y ellos son los que conocen las dinámicas, entonces en ese sentido, por lo menos en el sector de Realengo fue así, de hecho muy particular, porque posteriormente al empezar a hacer el ejercicio de intervención social en el contexto, la misma comunidad me hicieron llegar a los líderes de las bandas, y muy particular también porque en ese momento, imagínese 2010, estamos hablando que no era la banda sicarial, o la banda de pandillas, sino que eran ya actores armados del conflicto, eran Rastrojos, me llevaron donde el señor, a donde el patrón porque allá mismo le manifestaban «el patrón», al punto que él me dijo, «bueno yo sé que vos estás haciendo un trabajo comunitario, estás trabajando con los niños, pero eso sí —y me tocó el hombro, recuerdo tanto—, lo llevo a ver con un tomo —tomo igual policía— te tumbo la cabeza, te hablo claro», así me habló, al pan, pan, al vino, vino, y yo también fui muy claro: «si ustedes me están dando la autorización para poder entrar a su territorio —porque finalmente es el territorio de ellos—, no va a haber ningún problema porque ustedes son los que mandan acá». Esa es la dinámica del conflicto y de la calle como tal, ese es el lugar que ellos manejan. (Diego Sarmiento, comunicación personal, 17 de abril de 2024)

El testimonio de este profesional social nos lleva de nuevo al campo social como arma de lucha, en este caso de la parte baja de la burocracia donde quienes desarrollan los programas estatales son los que enfrentan las dinámicas directas de los territorios y negocian con los habitantes de la zona, donde evidentemente ni la burocracia alta ni los agentes de poder se molestan en interactuar. Es más, como se menciona en el testimonio, se le solicita que no llegue la institucionalidad como la policía, si desea proteger su vida, y así puede realizar el trabajo de intervención, donde además el burócrata de la calle acuerda en que las reglas las establecen en el barrio y él como profesional las respeta.

De otra parte, en Suerte 90 se identifica un aspecto y es que el barrio se aparta de la situación de violencia, donde los habitantes insisten que lo que ocurre es del barrio de enseguida y no de donde ellos viven, mostrando que hay una intención de diferenciarse de otras zonas más vulnerables y marcando una distancia con los imaginarios e identidades atribuidas al territorio como si fueran naturales en el caso de la violencia.

Primero que nada es la inseguridad, pues yo considero que entre los habitantes del barrio nos conocemos todos, como es tan pequeño, normalmente no hay problema entre los habitantes del barrio pero estamos rodeados de otros barrios que también son marginales y están en conflicto, como lo son Pízosos, Sol de Oriente, Barrio Taller, entonces muchas veces llega gente de esos barrios a robar, ha habido casos de apuñalamientos, de violencia, no ha habido muchos temas de pandillas, pero sí ha habido uno que otro, un par de asesinatos también pero no son tan comunes, porque como digo, entre la comunidad no nos afectamos el uno al otro, casi todos nos conocemos, casi todos son de los barrios que nos rodean. (Santiago Aristizábal, comunicación personal, 10 de diciembre de 2023)

En suma, ambos barrios conviven a diario con la violencia y han enfrentado de forma diferenciada esta problemática, incluso podríamos decir que comparten estrategias de resistencias similares en ambas comunas por los procesos organizativos culturales y de base que entre los años noventa y dos mil enfrentaron los barrios marginales con la

llegada de actores armados a la ciudad; sobre todo en Terrón Colorado o en barrios como Marroquín, la multiplicidad de estrategias comunitarias, de tercer sector y estatales para intervenir con los niños, niñas y adolescentes son una constante, pero en la actualidad, con la reconfiguración de los conflictos armados urbanos, mediados por el microtráfico, la instrumentalización de la violencia por medio de la cooptación de los jóvenes para los nodos de venta de drogas en las esquinas, ha cambiado las herramientas de lucha de los habitantes.

Al respecto, Moreno y Mornan (2015) hablan de subjetividades resistentes que consiste en construir sentidos propios en el territorio en contra de los imaginarios hegemónicos, desplegando el lugar del sujeto político. Para el caso del Distrito de Aguablanca, esto ha sido liderado por mujeres afrocolombianas, migrantes y víctimas del conflicto que hoy siguen enterrando a sus hijos jóvenes por la «producción política de la muerte» ante la negligencia estatal. Viven una «segunda trata que es la del destierro urbano» a partir de experimentar la violencia económica, simbólica y homicida.

Las formas de resistencia que han encontrado estas madres y sus familias con el apoyo de instituciones como la Casa Cultural El Chontaduro, que se ubica en el barrio Marroquín, de la comuna 14, como lo plantean Moreno y Mornan (2015), han variado en las últimas décadas de acuerdo con la reconfiguración del conflicto; por ejemplo, en la década de los años ochenta las mujeres debían dejar a los niños y jóvenes con otras mujeres jóvenes para que los guardaran de las balaceras que ocurrían por los grupos armados que se enfrentaban y que aún no vinculaban a los menores al conflicto.

Siguiendo con Moreno y Mornan (2015), en la década de los años noventa, cuando los jóvenes entran a las pandillas, entonces aparecen estrategias culturales de las organizaciones de base, que se pueden conectar con las estrategias de otros barrios de la ciudad como en Terrón, Yira Castro, Siloé, Los Chorros o Meléndez, como también estudiaron Rodríguez y Bermúdez (2013), donde el apoyo de las ONG fue clave. Mientras que en la década de los dos mil, al aumentar los homicidios infantiles, de jóvenes y mujeres, con la aparición de fronteras invisibles, las madres cambiaron sus estrategias a formas

de resistencia colectiva a través de los reclamos en lugares públicos, tomándose las calles del oriente y sensibilizando a sus mismos habitantes.

Este aspecto de la resistencia es clave porque va de la mano de un reconocimiento étnico que lideran varias organizaciones de base en el oriente de la ciudad, que particularmente no se recoge en el barrio Suerte 90 ni en Terrón Colorado, y es por eso que la acción colectiva en esta zona de la comuna 21 no es representativa y para el caso de la comuna 1, líderes como Orbay plantean que los jóvenes prefieren salir del barrio porque no hay una identidad territorial de resistencia en la zona, por lo que vemos pertinente considerar el componente de etnia como un aspecto relevante en las formas de resistencia y lucha por el derecho a la ciudad.

Otro de los aspectos centrales de los conflictos urbanos en las dos comunas de estudio es el relacionado con el tema ambiental, pues la zona que se encuentra en el cañón del río Cali y El Aguacatal posee una diversidad ambiental y distintas cascadas y charcos para el turismo verde que se viene fortaleciendo en la ciudad, incluso uno de los líderes, Orbay Beltrán, realiza recorridos a visitantes extranjeros, colegios o universidades que no conocen la comuna 1 y mucho menos su riqueza natural, mencionando que la comuna tiene un potencial enorme para crear cadenas alrededor de la economía del turismo donde los mismo habitantes de Terrón lideren las iniciativas, pero que no son tenidos en cuenta y los funcionarios del Estado muchas veces desconocen su trabajo e introducen en la zona agencias, entidades privadas y demás instituciones que buscan la ganancia del turismo pero no viven en la zona.

Siempre he mantenido un trabajo social acá en la comuna 1, entonces en el 2012 como me contrataban en diferentes fundaciones o secretarías, yo decía, hacen turismo en ciudad Bolívar, hacen turismo en la comuna 13 en Medellín, hacen turismo en la comuna 20, pero yo digo es un turismo morboso porque es hablando de la muerte, que la historia de violencia, y por acá en Terrón Colorado que se puede una ruta por la vida, porque nosotros podemos voltear eso, pero como te digo, desafortunadamente, desde el sector empresarial y el sector público la comuna no ha sido una prioridad, entonces ojalá con Eder [...].

Yo digo siempre, es que el desarrollo no se planifica y se prioriza solamente desde lo que falta, sino también desde lo estratégico, y esta comuna al estar una vía nacional, la proyección a los farallones, la posibilidad, sino en el paro no más el desabastecimiento que hubo, cuando tuvimos a Dagua para hacer mercados campesinos. La comuna es un corredor estratégico, entonces la perspectiva que tenemos ahora y como te digo, afortunadamente están los vecinos del oeste, porque ellos son el Movimiento Cívico del Oeste.

Lo que pasa es que tenemos una relación con los líderes de ellos, pero ellos nos dicen que por ejemplo que ellos son como 500 familias asociadas dentro de los edificios y conjuntos, pero nosotros hablamos es con ellos, lo que queremos es mirar que si aquí hay famiempresas y ellos programan un pulguero, entonces qué necesitamos, necesitamos clientes, canales de comercialización y distribución, entonces ahí es donde nos sirve tener esa relación con ellos, por eso ellos me dicen «Orbay, organice la oferta para que nosotros podamos presentar ese portafolio», entonces por eso estamos pensando que esto sea un ecosistema o un clúster de innovación y emprendimiento sustentable asociado a esta relación con el entorno natural. Por ejemplo, tenemos pendiente una relación con Mabel Lara, secretaria de turismo para decirle: «Secretaria, usted habló de Cali como la Houston de Colombia en relación a la salud, pero que no sea solamente la salud quirúrgica y estética, sino la preventiva, asociada al yoga, a la meditación, a la medicina forestal, a la hidroterapia», entonces eso es lo que te digo que estamos como en esa idea de que la comuna cambie esa mentalidad de la cositería de estar resolviendo problemas, soñemos en grande. (Orbay Beltrán, comunicación personal, 27 de marzo de 2024)

Esto también se relaciona con el capital ambiental del que habla Auyero (2018), en donde es claro que no «todos beben el mismo agua ni juegan en el mismo parque», como describe con su caso de Villa Inflamable, y es que aquí donde se configura un conflicto particular en Terrón Colorado porque esta zona desde su surgimiento ha sido estratégica, no solo en términos de ser una vía de conexión intermunicipal y de movilidad comercial hacia y desde el puerto de Buenaventura, sino por su entorno ambiental, por su cercanía a los ríos, por estar al lado de la zona de formación inicial de las élites caleñas

por Santa Teresita, El Peñón, el zoológico, zonas de museos como La Tertulia, Caliwood, hoteles como El Obelisco, sectores turísticos como El Gato de Tejada, además de la relación con la naturaleza, la frescura de la ladera, las zonas verdes, el clima que es más frío y por estar a 10 o 15 minutos en transporte del centro fundacional de la ciudad.

Este aspecto ambiental sirve de contraste para conectar con las características del barrio Suerte 90, que enfrenta una paradoja y es que en algunos registros bibliográficos aparece como «ecobarrio», incluso asociado a una iniciativa nacional de configurar zonas aledañas a bordes rururbanos como ocurre con este barrio al estar al lado del corregimiento de Navarro, a la zona de ejidos y cercano al jarillón del río Cauca y el Canal Interceptor Sur, pero que en la práctica carece de una relación práctica con el río Cauca y no tiene desarrolladas iniciativas de agricultura urbana o huertas en su zona, que fue una propuesta al principio de la constitución del barrio, pero que poco a poco, con el surgimiento de otros conflictos centrales, fueron desapareciendo.

A propósito de este caso, se contrasta el caso de Samanes del Cauca, que sí tiene una relación rururbana clara en el dique del jarillón, y que incluso tiene una cualidad dual entre el barrio Navarro, que a la altura de Potrero Grande y Suerte 90 tiene un diseño de viviendas más parecido al urbano, con espacios más reducidos y donde se aprecian inquilinatos, y la parte de Samanes, que está más relacionada con la actividad productiva, donde las familias tienen aves, marranos, lagos de pesca, vacas, patos, etc. Y se habla más de viviendas rurales y su relación con el espacio se explica a nivel de territorio (Ladino-Mosquera, 2020). Incluso ganaron una disputa con el Plan Jarillón de Cali y con los programas de reubicación agenciados por la Secretaría de Gestión del Riesgo y hoy están en proceso de construcción de viviendas rurales en las afueras de la ciudad.

No obstante, a pesar de los reclamos de sectores como Samanes del Cauca en la comuna 21 o de Terrón Colorado en la comuna 1 respecto a su relación ambiental con los ríos, las prácticas de agricultura urbana y apuestas por huertas, para los entes de planeación y funcionarios de la burocracia del Distrito de Cali, el barrio que sí debe resaltar como

un modelo de hábitat saludable y como ejemplo de ecobarrio es San Antonio, un barrio emblemático por ser considerado patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, ubicado en la comuna 3, zona central establecida por la ciudad y con zonas aledañas a lugares de prestigio del oeste como el barrio El Peñón (Figura 46).



Figura 46. Mapa del ecobarrio San Antonio.

Por eso los autores que retoman el espacio social y sus disputas por el uso del suelo y las condiciones del entorno, señalan que lo que se juega es la apropiación por espacios que se consideran privilegiados y, por otro lado, organizar y mantener al margen a los que acumulan privaciones, lo que genera que para los primeros se den mayores oportunidades de mejorar el desarrollo social y la calidad de vida, y en los segundos que se degrade el ambiente a pesar de que exista construcción estatal de la vivienda, pues lo material va acompañado de lo simbólico y es lo que crea el espacio social.

El espacio social se divide en zonas distintas que posicionan mejor a unos agentes sociales que a otros, oponiendo calidad de vida versus miseria, que como lo explican Alves (2020) y Auyero (2018), se manifiesta en que la gente no respira el mismo

aire, ni toman la misma agua ni juegan en los mismos parques, así como morir es diferenciado y va a tener más relevancia en un lugar que en otro donde ni siquiera interesa que mueran después de que no se afecte la reproducción del capital (Flores, 2009) o el desarrollo económico y social de las clases burguesas (Garnier, 1976). En suma, el contraste de vivir en la biópolis o en la necrópolis.

Una muestra de ese espacio diferenciado se aprecia en la Figura 47, dado que las condiciones ambientales para el oriente de Cali (comunidades 13, 14, 15 y 21) son más complejas en cuanto a malos olores y disposición de basuras, mientras que en comunas hacia el sur como la 17, por ejemplo, el tema ambiental está afectado por los gases de los vehículos o por la aglomeración de establecimientos comerciales, antes que por canales de aguas lluvias.

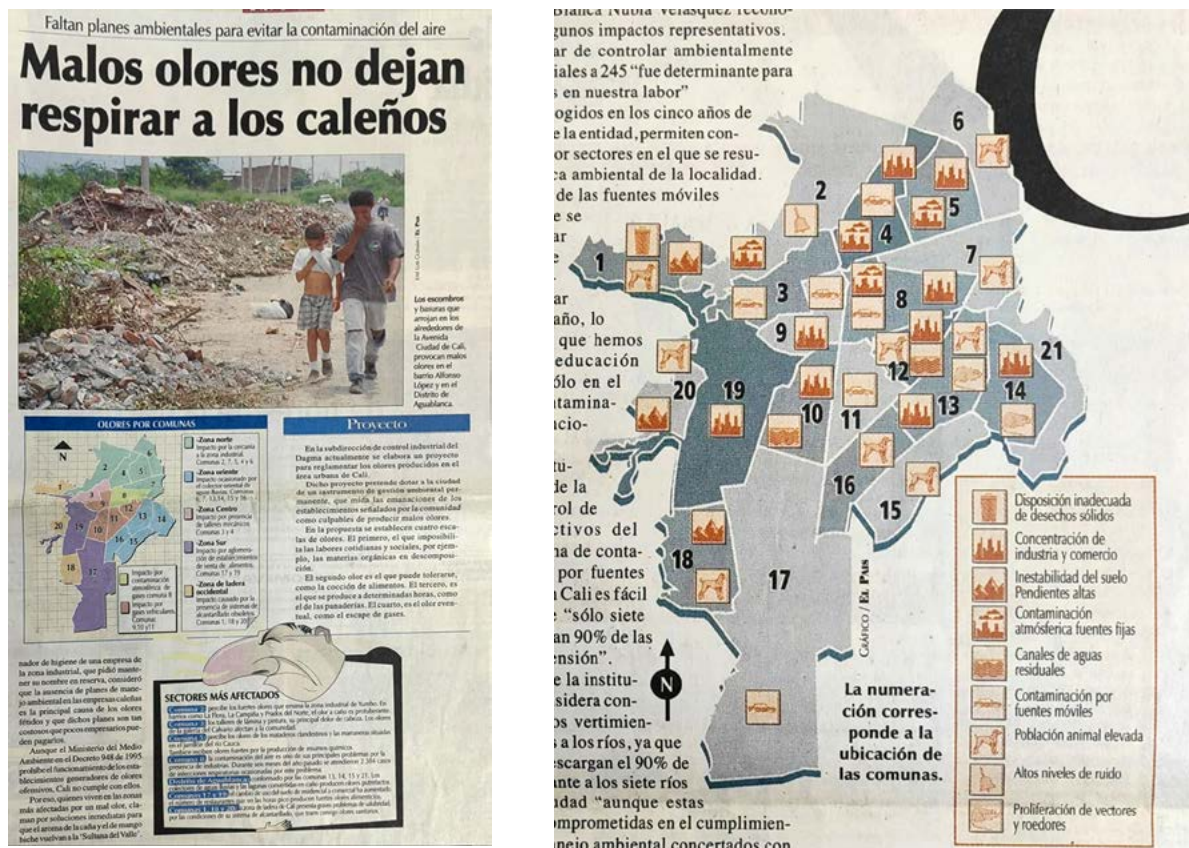


Figura 47. Noticias sobre afectaciones al medio ambiente en la ciudad.

Fuente: Imagen izquierda: *El País* (22 de junio de 2000); imagen derecha: *El País* (2 de junio de 2000).

Los pobladores de ciertas periferias en Cali deben movilizar sus recursos organizativos y políticos para tener condiciones de vida digna en la ciudad, por eso la construcción de su espacio se da a través de la lucha, a diferencia de otros sectores, que deben pelear por una movilidad hacia el trabajo, pelear por equipamientos para la comunidad, pelear por servicios públicos, por escrituras, por no ser considerados zona de riesgo. Y en este último punto destaca que en zonas de ladera ubicadas en la vía a Cristo Rey, o

en los Cristales o al lado del río Cali y antes de llegar a La Portada al mar, sí se construyen apartamentos de 1000 m² donde no aplica la condición de riesgo por deslizamiento de la montaña o por inundación. O como se muestra en la Figura 48, hay zonas de vivienda que además de contar con amplios espacios, se les suma zonas recreativas como la ciclovia, que tiene puntos centrales en la ciudad, y se ve en el mapa que hacia el oriente de Cali son pocos los puntos para esta actividad de esparcimiento familiar.

El trazado de 30 kilómetros cubrirá quince comunas

Cali tendrá una nueva ciclovia desde julio

A partir del 9 de julio, las ciclovías de los domingos y días festivos en la ciudad sufrirán una profunda modificación, para constituir un solo recorrido continuo que copará 30 kilómetros de vías y atravesará 15 de las 21 comunas caleñas.

Según el secretario de Recreación y Deportes, José Luis Echeverry, se busca desarrollar una estrategia que les permita a los caleños nuevas alternativas de recreación.

Durante el circuito, que tendrá un extremo en la Avenida Tercera Norte con Calle 47 y, otro en el sur, en la Autopista Suroriental con Carrera 66, las entidades públicas comprometidas con el proyecto coordinarán diversos programas deportivos y recreativos, encaminados a lograr la integración de la comunidad.

El trazado diseñado de la nueva ciclovia recorrerá vías la Avenida de las Américas, la Carrera Quinta, la Avenida Los Mangos, la Calle Novena, la Carrera 66, La Autopista Suroriental, la Carrera Octava y la Calle 34.

Igualmente, cada domingo se instalarán tarimas en el Puente de los Mil días, la Calle Novena con Carrera 34 y la Avenida Tercera



Norte con Calle 44, en donde se hará la presentación de orquestas, grupos folclóricos de la comunidad, monitores de aeróbicos y recreacionistas.

Figura 48. Noticia sobre ruta de ciclovías en Cali.

Fuente: *El País* (19 de junio de 2000b).

Como dice Wacquant (2022), es necesario estudiar la desposesión de capitales y también las zonas de privilegio para evidenciar el contraste de las condiciones de vida. Pensemos en un ejemplo de cómo se asume que los lugares centrales de la ciudad son los que pueden acceder a servicios de recreación segura como las ciclovías y todo su despliegue institucional, mientras que ni la comuna 21 ni la 1 aparecían para los años dos mil en esos trazados de los urbanistas y planificadores.

Comparando las formas espaciales, las representaciones simbólicas y la consolidación del espacio social en las comunas o barrios de Cali, se puede comprender la complejidad de la división urbana, entenderla como una red con distintos nodos y donde lo central es identificar las posiciones de los agentes, los componentes del espacio físico, las fuerzas de dominación, alianza, oposición, tensión, entre otras, que se dan por el control del espacio con la dialéctica de Bourdieu, la cual asume el espacio social como reflejo de luchas pasadas y por ende un arma en dos sentidos, como Wacquant (2022) lo explica a continuación:

La disposición geográfica es un arma que puede ser desenvainada para facilitar u obstaculizar estrategias de cierre, negativamente, como ocurre con el uso de obstáculos naturales y artificiales para acorralar a poblaciones y actividades indeseables, y, positivamente, como cuando la proximidad física y la densidad geográfica de las redes de instituciones facilitan la movilización colectiva y la formación de grupos en el espacio social. (p. 3)

Por otra parte, los habitantes de Suerte 90, a diferencia de Terrón Colorado, hoy se enfrentan a un conflicto que se describe como central, de acuerdo con las conversaciones de campo, y es el hecho de no tener las escrituras de sus viviendas. Esto se debe a que el barrio vivió uno de los efectos nacionales que se generaron con el incumplimiento en la entrega de subsidios a las familias que se postularon a la VIS en los noventa, pero además a la quiebra de las cooperativas de ahorro y organizaciones que entraron como intermediarios en la política de vivienda, resultado de las políticas de gobernanza que se instalaron con el Estado neoliberal

y los cambios a democracias entre los años ochenta y noventa en América Latina, como lo describe Zurbriggen (2011).

Hoy los habitantes de esta parte del oriente tienen incertidumbre sobre su posesión porque manifiestan que no van a pagar a la Secretaría de Vivienda lo que ya pagaron a la cooperativa que quebró, pero aquí se fractura el tejido social porque no todos los líderes ni los habitantes están de acuerdo, lo que ha generado una distancia y poco reconocimiento colectivo de la lucha social por la calidad de vida urbana y donde cada habitante termina buscando cómo «sobrevivir» a la marginalidad de manera individual, desdibujando su condición de ciudadanos con derechos y convirtiéndose en lo que Auyero (2013) denomina «pacientes del Estado», habitantes que no actúan frente a la incertidumbre de lo que va a suceder, que terminan personalizando su relación con el Estado y cada quien implementando estrategias para resolver sus intereses y siempre a «espera» de que venga alguien de afuera a resolver sus problemáticas sociales.

Fenavip, entre comillas, le compró el lote a Secretaría de Vivienda, entonces las personas hacían su pago a Fenavip y pues llegó el momento en que se declaró en quiebra esa cooperativa, entonces estaba la dificultad porque al municipio no le habían pagado la totalidad, y usted sabe que eso hay que cobrarlo como sea porque eso puede entrar en un detrimento patrimonial, ¿entonces la Secretaría qué hizo?: «Bueno, listo, vamos a asumir esa cartera para que ellos nos la paguen a nosotros, vayan pagando», pero hay gente que paga pero yo lo que digo es que el valor del lote con relación a lo que usted pagó, la Secretaría dice: «no le puedo dar escritura porque a mí no me han pagado la totalidad, pague a Fenavip, vaya allá para que ellos miren cómo van a hacer allá porque ellos tienen que pagar eso», entonces ahí están con eso. La gente siguió pagando su predio, termina de pagar, pero aquí hay gente que todavía no ha pagado; por ejemplo yo, hasta el 2000, traía la factura acá, entonces esa es la polémica porque la Secretaría está cobrando el valor del crédito, la totalidad, y entonces usted pagó y el tema de la escritura es una vaina dura con ese representante de Fenavip, y la verdad aquí había una presidenta vitalicia, sino que ella tenía unos pensamientos de izquierda y dice no vamos a pagar y siguen en eso,

entonces pasa como allá en Potrero, la comunidad se cree, no paga y la deuda va subiendo y entonces llega el momento que ella decía no tenemos que pagar, entonces básicamente es eso. (Héctor Ibarquén, comunicación personal, 10 de diciembre de 2023)

Esto significa que las familias van a seguir con la problemática de las escrituras a pesar de ser un proyecto habitacional diseñado por el Estado porque hay un lío jurídico y es que aunque paguen lo que deben a la Secretaría de Vivienda, quien debe emitir la escritura es el representante legal de Fenavip y ya solamente queda un señor vivo que, a voluntad, entrega estas escrituras, pero que en últimas no es proceso vigilado por la Secretaría ni se aborda de manera colectiva, sino que cada integrante decide resolver de manera aislada, además que a la institucionalidad y burocracia alta y baja poco les importa la situación de estos habitantes, manteniendo su posición de subordinación y despojo de ciudadanía.

Aquí se vuelve a llamar la atención sobre los protagonistas de la producción espacial en cabeza del Estado, pues lo que hoy viven estas familias del oriente es una proyección de la ciudad imaginada para los años dos mil; no fue un proceso natural y aleatorio y por ende desordenado, es un imaginario materializado, el Estado busca «distribuir dotaciones en capitales y facilitar u obstaculizar su acumulación y transmisión, a través de apoyo a los ingresos, impuestos, leyes de herencia y políticas hacia el trabajo, las empresas y la vivienda (por el lado del capital económico)» (Wacquant, 2022, p. 7).

Es por eso que las familias que llegaron con la ilusión de una vivienda propia a la comuna 21 en las últimas tres décadas siguen padeciendo la vulnerabilidad simbólica del despojo, ¡tienen casa, pero no escrituras, tienen casa, pero la deben y, en el peor de los casos, tienen casa, pero la pueden perder porque los acuerdos de pago no son suficientes!, y esto ya se veía en la década del dos mil (Figura 49).

En estos barrios de interés social es notorio que las iniciativas individuales son las que más abundan para resolver los problemas del espacio como la inseguridad, como en el caso de Santiago Aristizábal, quien comenta que en la tienda de sus padres

tuvieron que poner rejas ante las dos ocasiones en que los robaron, pero que no se han diseñado estrategias colectivas entre los vecinos para buscar otras soluciones. Contrario al proceso de acción colectiva que es más fuerte con la JAC de otros barrios del oriente en la comuna 21 o los demás líderes barriales como en el caso de Terrón Colorado.

Finalmente, también se constatan los conflictos por el transporte y la movilidad en la ciudad, pues la realidad compartida por las comunas 1 y 21 es el uso de transportes alternativos para movilizarse; muchos han tenido que comprar vehículo propio porque de lo contrario moverse por la ciudad puede significar pagar dos o tres pasajes en cada trayecto, entre yipetos y MIO. No obstante, hacia la comuna 1 el factor de estar en la vía al mar le da mayores ventajas para que las opciones del transporte varíen porque incluso hay buses intermunicipales que también prestan el servicio de traslado dentro de la ciudad en su trayecto hacia la terminal, y los conflictos se han generado sobre todo entre las gualas-yipetos con el MIO, al negociar las rutas por las que transitan, y entre los buses intermunicipales con los piratas porque sustentan que el transporte «ilegal» está perjudicando a estas empresas.

Hernán Reina, conductor de la Flota Magdalena desde hace 20 años en la ruta Cali-Buenaventura, arguye que la gente elige el transporte informal, «porque los “piratas” recogen y dejan los pasajeros puerta a puerta, por eso la gente ya no viene a la Terminal y eso nos tiene jodidos a los propietarios de los buses y busetas con las letras (de crédito), con llantas y combustible, sobre todo en el corredor del Pacífico». «Necesitamos que le pongan orden a esto porque el producido se nos ha bajado a un 70 %; antes movíamos el 90 % de pasajeros, pero eso (la piratería) nos ha bajado los ingresos de los conductores afectando a nuestras familias, y a las empresas transportadoras legales también; es preocupante», reclama Reina. (*El País*, 15 de diciembre de 2019, párr. 13)

Mientras que en el caso de Suerte 90, los habitantes desde la fundación del barrio casi que tenían como servicio exclusivo a los yipetos, que fueron los que primero tuvieron una terminal de transporte en el barrio, antes que los buses de transporte público o el MIO, pero que en la actualidad tienen diversidad

CALL MIÉRCOLES 3 DE MAYO DE 2000 **El País** E-MAIL: economia@elpais-cali.com

Alivios a deudores hipotecarios costarán \$700.000 millones: Icav

Entre apatía, vencen hoy reliquidaciones

COMPENSA Y REDACCIÓN
SANTA FE DE BOGOTÁ - CALI

En Cali sólo 20.000 usuarios en mora han solicitado beneficios contemplados en la Ley 546.

En medio de un clima de apatía entre 100.000 deudores morosos —40.000 de ellos en Cali— se vence hoy el plazo para la reliquidación de créditos hipotecarios, otorgado por la nueva Ley de Vivienda.

La inconformidad y las dudas que aún persisten sobre el tema, según admitieron ayer las propias corporaciones de ahorro y vivienda (CAV) llevará a que sólo el 60% de los usuarios con préstamos atrasados se beneficie con la reliquidación.

La resistencia de los deudores obedece a que muchos consideran que el monto a revisar y los alivios otorgados por el Gobierno son muy pequeños, frente al sobre-costo que han pagado a lo largo de la vida del crédito. (Verrecuados).

las reliquidaciones elaboradas hasta el momento, aunque recalco que únicamente se han formulado dos mil quejas ante la Superintendencia Bancaria.

"El proceso de reliquidación no fue fácil. Las CAV tenían miedo de que se presentaran problemas mayores, pero esta tarea se manejó con seriedad", señaló la dirigente gremial.

Sin embargo, ayer el presidente de la Asociación de Usuarios del Sistema Financiero, Anusif, Humberto Martínez Aranda, declaró que las inconsistencias en las reliquidaciones son generalizadas.

Reveló que en Cali sólo 20.000 de los 40.000 usuarios de préstamos hipotecarios que están en mora, han acudido a las entidades para solicitar el beneficio de la reliquidación.

Subrayó que si la corporación o banco no responde, las personas pueden entablar un derecho de petición y demandar poste-

Un alto porcentaje de propietarios de vivienda han considerado que los alivios son muy bajos, ya que los saldos de los créditos siguen por las nubes.

De todas formas, las corporaciones de ahorro y vivienda, al igual que los bancos hipotecarios, consideran que los deudores morosos esperarán hasta el último momento, por lo que decidieron extender hoy sus horarios de atención.

En Colpatria, 5.300 de 8.700 han hecho lo mismo y, finalmente, en Conavi el mismo trámite ya lo han hecho 13.000 de los 18.000 morosos.

A nivel nacional, el Banco Granahorrar tiene la mayor cantidad de deudores morosos.

En total son 40.000, de los cuales 28.000 ya se han notificado para ganar la reliquidación. Entre tanto, de los 18.000 clientes morosos de AV Villas, 13.000 ya han pedido la reliquidación.

En Colmena cerca de 12.000 de sus 17.000 clientes en mora enviaron su comunicación por escrito.

En Davivienda cerca de 20.000 clientes con crédito hipotecario vencido han pedido formalmente la reliquidación.

En Colpatria, 5.300 de 8.700 han hecho lo mismo y, finalmente, en Conavi el mismo trámite ya lo han hecho 13.000 de los 18.000 morosos.

Por entidades

Foto: R. Pina

BODEGA DEL MUEBLE

ESCRITORIOS
MADERA DE NOGAL - 3 CAJONES - GAVETA CENTRAL
DESDE \$199,000
MESAS COMPUTO METALICA \$95.000 NOGAL \$135.000

CALLE 44 #10-63 TEL. 445-7171 / 445-2228 ABIERTO DOMINGOS 9:00-2:00 PM

"Más facilidades" "Un asalto" "No hay alivio"

Figura 49. Noticia sobre no pago de viviendas en comuna 21.

Fuente: El País (3 de mayo de 2000).

junto con los mototaxis y carros piratas, y se han creado rutas del masivo que van hasta el barrio, aunque la frecuencia de estos alimentadores es una problemática que se mantiene.

En cuanto a transporte, diría que estamos bien porque de aquí surgen lo que viene siendo los yipetos, hay un control de los yipetos, las rutas 8 y 3 que se mueven por todo el oriente de Cali, también tenemos una ruta de MIO, entonces siento que por transporte no es mucho problema. Otro problema es que todo está muy lejos, o sea, para transportarnos como a los centros de salud, al trabajo mismo, muchas veces hay que pagar bastante transporte, aunque casi todo el mundo que trabaja aquí está con su moto. (Santiago Aristizábal, comunicación personal, 26 de marzo de 2024)

Llama la atención que el entrevistado señale que la mayoría de los habitantes han tenido que comprar moto porque todo es muy lejos pero que al mismo tiempo diga que el transporte no es un

problema, donde se evidencia que no hay un reconocimiento de las causas estructurales de la falta de ventajas para moverse en la ciudad ni que relacione la frecuencia del MIO con la existencia de otros transportes alternativos, como lo señalan Buchely y Castro (2016), quienes encontraron que el mal funcionamiento de este servicio de transporte es el que refuerza el uso de yipetos, incluso por las posibilidades de negociar el valor del transporte con los conductores, lo que no ofrece la registradora del MIO, que funciona con tarjeta electrónica, o incluso en los yipetos pueden tener plazo para pagar.

Las usuarias son, en su mayoría, personas entre los 14 y los 60 años de edad que coinciden en que es una alternativa viable ante la ineficiencia del servicio de transporte público prestado por el Masivo Integrado de Occidente (MIO) y los escasos buses o pocas busetas en el servicio privado. Las usuarias reportan que la tarifa general es de \$ 2.000, la cual aumenta según el lugar de destino. No obstante, algunas usuarias resaltan

la flexibilidad del costo: algunos conductores disminuyen ese precio cuando la pasajera se los solicita, aunque no está permitido dentro de las organizaciones a las que pertenecen. Ellas «tienen formas de hacer que la tarifa baje», afirman. (Buchely y Castro, 2016, p. 244)

Este ha sido un problema histórico para la comuna 21, pues como se observa en el mapa de la Figura 50, para mayo del año 2000 la radiografía de la oferta de transporte para la comuna 21 era deficiente, mostrando que, a pesar de ser agenciado por el Estado, garantizar una calidad de vida y funcionamiento integral de la comuna con todas las instituciones de la alcaldía nunca ha sido prioridad.

Los conflictos urbanos aquí detallados son la base para argumentar que el espacio social de las periferias en Cali es diferenciado, pues cada zona de borde al oeste, oriente, norte o sur no es únicamente una formación marginal en función de la relación centro-periferia geográfica, sino que es resultado de la interacción de lo físico, lo simbólico y lo espacial, específicamente de relaciones de tensión, conflicto y lucha por la apropiación de capitales por parte de agentes sociales que logren dominar el espacio en función de sus intereses.

Lo central es que a pesar de que se muevan dentro del espacio varios agentes, el lugar de honor en esa disputa topográfica se la lleva el Estado y su burocracia, que tiene mayor apropiación de capitales para aliarse con otros grupos de poder y establecer en los planos, en los diseños y en cada equipamiento urbano, un imaginario del tipo de ciudad que debe existir, la división necesaria y ante todo la concentración de lugares óptimos de reproducción del capital financiero y la contención de espacios y agentes sociales que atenten contra estos intereses.

Toda planificación capitalista, ya sea urbana o no, puede analizarse como la intervención de la instancia política, es decir, de los aparatos del Estado, sobre las diferentes instancias de una formación social, económica, ideológica y política, así como sobre las relaciones recíprocas de unas con otras (articulaciones) a fin de garantizar una extensa reproducción del sistema capitalista [...]. La planificación urbana respeta siempre la lógica estructural del modo de producción capitalista (dominante), es decir, sus articulaciones esenciales. Por consecuencia está subordinada a esta lógica y no puede corregir más que sus articulaciones no esenciales. (Garnier, 1976, pp. 9-10)



Figura 50. Noticia sobre radiografía del transporte público.

Fuente: El País (14 de mayo de 2000).

De esta forma, cada capa del espacio que se estudia para conocer la complejidad del espacio social está en función del valor del suelo y del uso que se le pueda dar; tal es el caso del valor de venta que algunos privados han establecido sobre los ejidos de la ciudad que se decidieron que serían para VIS, pues como lo refería la noticia titulada «Lío por avalúo de ejidos», del 17 de junio del año 2000, en el periódico *El País*, el metro cuadrado de ejidos cambió su valor para ese año en \$1200 para hacer transacciones con las constructoras, cuando dos años atrás el metro cuadrado del ejido era a \$19 000; entonces, luego de ver que el Estado desarrollaría proyectos vía crédito, el costo de los mismos bajó, cambiando la rentabilidad de la zona, que además de tener una función social, como se enuncia desde los funcionarios del Estado, está generando ganancias exponenciales para los privados que son élites y para empresarios a los que el mismo Estado les paga.

De este modo, las contradicciones por el uso del suelo en la actualidad siguen mediadas por la rentabilidad financiera, la cual es avalada por el Estado y su alianza con sectores estratégicos que son los que rigen las políticas actuales de vivienda en el proceso neoliberal —por ejemplo, las constructoras y los bancos— y son estas entidades las que deben enfrentar los movimientos actuales de vivienda y las iniciativas organizativas de las distintas zonas de la ciudad, luchas que van a continuar en tanto los agentes seguirán disputándose el espacio para establecer sus intereses en la división física del espacio social, por lo cual es pertinente adelantar el estudio a escala de los conflictos urbanos en barrios como Terrón Colorado y Suerte 90, lo que en conjunto permitirá unir las piezas para describir el espacio social de la ciudad de Cali.

Las luchas por el espacio también pueden asumir formas más colectivas, ya se trate de las que se desarrollan en el plano nacional en torno de las políticas habitacionales o de las que se sitúan en el nivel local, con respecto a la construcción y asignación de viviendas sociales o a decisiones en materia de equipamientos públicos. Las más cruciales tienen por objeto último la política del Estado, que posee un inmenso poder sobre el espacio derivado de la capacidad de

decidir sobre el mercado del suelo, de la vivienda, y también en gran medida, del trabajo y de la escuela. (Bourdieu, 1999, p. 5)

Todos estos conflictos vienen encontrándose en la ciudad desde el año 2014 con las distintas agrupaciones de habitantes de sectores que han sido desalojados como en el jarillón, o que enfrentan los proyectos de renovación como en El Calvario y San Pascual, o las familias que siguen ocupando de hecho los apartamentos destinados para reubicación en Altos de Santa Elena, o estableciendo nuevas ramadas en los cañaduzales al lado de Píamos y Suerte 90, o las acciones colectivas como la toma a La Ermita, en el año 2020, donde familias sin techo siguen encontrado estrategias, hasta la actualidad, para reclamar una política de vivienda digna para la ciudad.

El reto sigue siendo el derecho a la ciudad para las clases bajas y sectores desposeídos de capitales económicos, simbólicos y culturales que deben enfrentarse en el complejo espacio social con los sectores que toman decisiones al lado del Estado. Y es que el derecho a la ciudad se restringe cada vez más «en la mayoría de los casos, a una reducida élite política y económica que se halla en condiciones cada vez más de conformar las ciudades de acuerdo con sus propios deseos» (Harvey, 2008, p. 37).

Por eso a nivel global se vienen discutiendo las condiciones de mejoramiento de la calidad de vida de los asentamientos humanos, instando principalmente a que el Estado lidere las estrategias de la población más desfavorecida en el mundo y que lo haga de forma participativa. Estos discursos de las élites de poder y las altas burocracias que siguen pensando el desarrollo de la ciudad futura dan cuenta de la prominencia del capital simbólico de las instituciones para modificar las estructuras mentales que existen de la ciudad, por lo tanto, la discusión es una batalla política, económica e ideológica, como lo evidencian las conferencias mundiales sobre el hábitat, donde los dirigentes de la urbanización deben reconocer su lugar en la reproducción del espacio y tomar acciones.

Ya hay un diagnóstico a nivel mundial sobre las condiciones de vida de las poblaciones marginales de finales del siglo XX y la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) (Naciones Unidas, 1996) sabía que superarlas requería de tiempo, pero sobre todo compromiso y voluntades políticas de las burocracias estatales, pues entre las problemáticas comunes se proyectaban

1.000 millones de personas que seguirán sin hogar o en viviendas inadecuadas y peligrosas; las ciudades superpobladas seguirán estando mal preparadas para el creciente número de personas que acuden a ellas; los males urbanos de nuestros tiempos —pobreza, delincuencia, drogas, juventud marginada, aire y agua contaminados— no habrán desaparecido; y cientos de millones de personas seguirán sumidas en la desesperación en zonas rurales estancadas que ofrecen escasas esperanzas para el mañana. (Naciones Unidas, 1996, p. 251)

A treinta años de estos mandatos para el mundo, que buscaban una apuesta colectiva por una vivienda digna, en Cali se mantiene el mandato de vivienda diferenciada dictada por el capital financiero, haciendo que coexistan viviendas VIP y VIS con una medida mínima de 42 m², al tiempo que otros tipos de vivienda se ofertan entre los 200 m² y los 1000 m², por fuera de los programas subsidiados por el gobierno. Ni las voluntades ni la materialización de esa ciudad futura más igualitaria que anunciaba la ONU, se han consolidado en los programas de vivienda actuales, pues lo que se evidencia es que los enfrentamientos contra las élites económicas tienen menos margen de maniobra si lo que está en juego es la rentabilidad del capital.

Así que, el desarrollo de esta tercera década del siglo XXI para la ciudad de Cali indicará las nuevas formas de los conflictos urbanos en los espacios diferenciados y tendrán que seguirse estudiando las transformaciones de las resistencias, las nuevas contradicciones y la reconfiguración de los liderazgos y acción colectiva para hacer efectivo el derecho a la ciudad o si se mantendrán las actuales condiciones de diferenciación urbana.

La democratización de ese derecho y la construcción de un amplio movimiento social para hacerlo realidad son imprescindibles si los desposeídos han de recuperar el control sobre la ciudad del que durante tanto tiempo han

estado privados, y desean instituir nuevos modos de urbanización. Lefebvre tenía razón en insistir en que la revolución tiene que ser urbana, en el más amplio sentido de este término, o no será. (Harvey, 2008, p. 39)

Capital espacial, clases socioterritoriales y habitus en las periferias de Cali

La propuesta teórica central de la presente investigación parte del concepto de espacio social como unión de aspectos simbólicos y materiales que se configuran en la manera de diseñar, habitar y moverse por el espacio de cada agente que en su posición diferenciada ostenta mayores ventajas o desventajas por el tipo de capitales sociales, culturales y simbólicos que posee. En el caso de los barrios periféricos en el oriente y la ladera de la ciudad de Cali, se observa que la participación del Estado por medio de los funcionarios de la alcaldía o la implementación de políticas de vivienda y planeación, ha sido determinante en la condición de vulnerabilidad y conflictos urbanos que presenta cada barrio, y en donde al mismo tiempo han tenido influencia las élites de la ciudad como empresarios y políticos que no solo negocian el destino de la ciudad con la burocracia alta del Estado, sino que en ocasiones han llegado al encuentro cara a cara con los líderes en procesos electorales, entre otros.

En este sentido, la teoría sobre el espacio social y los efectos de lugar que se pueden observar en la realidad social a través de estudios de caso, es un marco conceptual de alcance intermedio que conecta los fenómenos físicos con los aspectos simbólicos, que además se muestran por medio de los conflictos que los habitantes enfrentan con agentes de poder estatal y élites aliadas en la historia de configuración de las periferias, y de esa definición amplia se desprende otro concepto clave que es el capital espacial y deriva de los planteamientos de Bourdieu, pues como lo dicen Apaolaza y Blanco (2015), «un capital es inherente al sujeto (eventualmente grupo), a la vez que acumulable, intercambiable, etc., pero simultáneamente reservando un lugar central al territorio en tanto que condicionante de las posibilidades materiales» (pp. 10-11), lo cual

vuelve a unir la dimensión objetiva del territorio de acuerdo con la naturaleza del espacio y la dimensión subjetiva relacionada con la capacidad del sujeto de apropiarse de las ventajas del espacio.

Por ende, el concepto de capital espacial es acorde con los planteamientos más amplios de los efectos de lugar y sirve para entender que la ubicación de los habitantes de Terrón Colorado y Suerte 90 tiene ventajas distintas sobre los espacios que habitan; por ejemplo, los jóvenes en Terrón Colorado se mueven con mayor facilidad por la ciudad porque viven en una vía principal que es la salida al mar y esta condición hace que migren con mayor frecuencia de su lugar de origen, como lo planteaba el líder Orbay Beltrán, dado que la ventaja de conectarse a solo 15 minutos con las zonas más prestigiosas de la ciudad como El Peñón, Centenario, el centro administrativo de la ciudad, etc., permite mayor acceso a zonas que quienes habitan el oriente de Cali no frecuentan con regularidad.

Vení te comento una cosa, aquí hay algo muy desafortunado con la comuna, aquí hay gente con mucho talento, pero desafortunadamente apenas pueden salir, lo que hacen es salirse del barrio, no se quedan en esta comuna, en cambio vos ves en el distrito, en Siloé, se quedan trabajando allá. Entonces eso también limita precisamente que ese tejido social y que esas iniciativas sociales no sean tan cualificadas, entonces a mí me toca hacer de todo, yo soy el que publico, el que redacto, el que hago el video, el que lo edito... (Orbay Beltrán, comunicación personal, 27 de marzo de 2024)

Esta situación que describe el líder de la comuna evidencia que los procesos sociales de solidaridad y comunidad que caracterizaron el origen del barrio en los años sesenta y setenta se han ido perdiendo a nivel generacional, y que quienes desean que permanezca y continúan en su ejercicio organizativo son las personas fundadoras del barrio, quienes expresan ese arraigo por la zona y el gusto de trabajar en lo colectivo. Y aquí es donde podemos decir que esos capitales espaciales tienen la doble dimensión, y es que los sujetos también calculan los beneficios y ventajas que poseen para moverse por la ciudad, por lo cual, los jóvenes que acceden

a cualificación para el trabajo y van ganando experiencia en un oficio, al momento de encontrar la posibilidad de moverse de la zona en la búsqueda de mejores oportunidades, lo hacen, y ese capital social de los fundadores del barrio deja de ser una ventaja para los más jóvenes.

Pero en el caso de Suerte 90, la movilidad espacial es más compleja para los jóvenes, dado que el oriente de Cali tiene dos vías centrales de acceso, una que es la avenida Ciudad de Cali y carga con el estigma del Distrito de Aguablanca como un lugar peligroso, que además no conecta con el centro de la ciudad ni con los lugares más prestigiosos del oeste en la comuna 3 o Ciudad Jardín, en la comuna 22, por lo que es una avenida que conecta todas las comunas del Distrito de sur a norte y los mantiene cercados en el sentido que quienes no viven en estas comunas, no circulan comúnmente por ahí. Y la otra vía que conecta con el resto de la ciudad es la autopista Suroriental, que solo tiene una entrada por el barrio 7 de Agosto y es muy angosta para movilizar con facilidad y rapidez a los habitantes del oriente, incluso el MIO es insuficiente en su capacidad e integración a las demás zonas, por lo que coexiste el transporte de gualas, piratas particulares y motorratones.

Y en estos barrios la movilidad espacial hacia otras zonas es más compleja y los jóvenes permanecen allí ligados a procesos organizativos, por lo que se podría decir que su lugar de exclusión también configura un capital de resistencia y conciencia sobre la zona en la que viven, pero también hay una desventaja territorial y es que están más lejos de zonas de prestigio, las visitan con poca regularidad en comparación con quienes viven en la ladera de Terrón Colorado, y es ahí donde la condición objetiva de la ubicación del barrio ofrece opciones y ventajas distintas para los grupos de jóvenes en ambos barrios, a pesar de que comparten condiciones de vulnerabilidad similares.

La noción de capital espacial permite entender el sentido diferenciado de habitar las periferias y nutre el marco teórico de la investigación, por lo cual se considera que es un concepto que amarra las perspectivas y los autores abordados a lo largo del libro,

una misma oferta y configuración territorial puede ser ventajosa para un determinado sujeto o grupo social y no para otro, a la vez que, obviamente, unas mismas competencias subjetivas pueden resultar ventajosas en ciertos contextos territoriales y no en otros. (Apaolaza y Blanco, 2015, p. 11)

Incluso alude a las posibilidades de cambio en la apropiación del capital por parte de los sujetos si cambiaran las condiciones materiales, lo cual estaría sujeto a las iniciativas y negociaciones de grupos de poder que plasman su idea de ciudad sobre el uso del suelo, lo cual nos facilita conectar con la importancia del papel estatal y de sus funcionarios en los proyectos de vivienda urbana que se construyen y el destino que determinan para sus habitantes, como lo recoge Wacquant (2022).

Recordemos que decía lo del alcalde Guerrero que sabemos con Bourdieu cómo los capitales políticos, económicos, culturales se mezclan en la forma del Estado nuestro y terminan siendo las mismas familias, los mismos grupos en las élites económicas, culturales, sociales los que terminan ocupando cargos de poder que de eso ya también hemos venido hablando: la alcaldía, la gobernación, en los ministerios, pero desde esa época hay una amplia tradición, por ejemplo, Eder fuera ministro de fomento de Rojas Pinilla en el año 58 cuando se hizo luego el proyecto de Aguablanca y esta es la génesis de todo y están los Garcés dirigiendo la CVC que era el promotor del proyecto Aguablanca. (Pedro Martínez, comunicación personal, 21 de marzo de 2023)

De esta manera, otro concepto complementario a lo anterior es el que propone Jouffe (2011) sobre las clases socioterritoriales; este autor plantea que las grandes desigualdades en Latinoamérica devuelven la vigencia del concepto sobre clases sociales, ya no por el lugar del individuo en la producción sino por su lugar en la ciudad. El autor propone que la combinación entre movilidad y proyecto de vivienda generan un capital territorial individual, dado que la posibilidad de moverse en la ciudad disminuye cuando se es pobre o en función de mayor edad, lo cual genera desigualdad. Por ende, la mayor capacidad de movilidad no sería un capital central sino un capital que está en función de otros

capitales como el económico, cultural y social, por lo que se denominaría un *paracapital*.

Así, Jouffe (2011) propone unir los conceptos de paracapital de movilidad junto con el hábitat para identificar el capital territorial, en el cual el objeto de acumulación y lucha es la vivienda, accesibilidad urbana y proximidad barrial que representan el hábitat. El capital territorial está compuesto a su vez por los capitales económico, social, cultural y físico.

Integra primero el territorio individual, apropiado desde la vivienda, a la vez acumulación simbólicamente cargada de capitales sociales y económicos y construcción específica de códigos culturales y afectos personalmente significantes. En segundo lugar incluye el paracapital de movilidad que es la capacidad de uso del territorio colectivo y que leeremos como la capacidad de uso y construcción del territorio individual en la medida que el territorio individual se construye en su uso. (p. 10)

El capital territorial además es acumulable en el sentido de bienes materiales dentro de la vivienda y en la posibilidad de moverse a otras viviendas que ofrezcan mayor tamaño, mayor valoración por la ubicación y mejor acceso a la movilidad cotidiana. «El capital territorial acá considerado comprende entonces el territorio individual alcanzado por el sujeto y su capacidad de movilidad que incluye en particular las herramientas de movilidad» (p. 13), pero lo que lleva a su acumulación es la lógica del acceso. El autor propone en su estudio de las periferias de Santiago de Chile observar el capital territorial a partir de características materiales del hábitat que se ven reflejadas en las prácticas de uso y construcción del territorio; el uso tiene que ver con la movilidad cotidiana y la representación en forma de relatos, mientras que la construcción está asociada con la realización de proyectos residenciales, determinar la localización y reconstruir las representaciones del territorio.

El capital territorial sería un concepto complementario a la discusión sobre capital espacial, dado que es un bien acumulable e intercambiable a partir de las prácticas de uso y construcción del territorio, y se compone de una combinación entre capitales económico, cultural, social y físico, que

de todas formas no se desprenden de las lógicas materiales del territorio que pueden ser opuestas como la financiarización del suelo, por lo cual las luchas sociales por el hábitat como la calidad de vivienda o la movilidad se relacionan con el acceso y no es exclusivamente una capacidad individual. Para los casos de Cali, los habitantes de Terrón Colorado poseen un capital territorial con mayores ventajas en la movilidad cotidiana y en la valoración de las viviendas autoconstruidas respecto a Suerte 90, pues son viviendas rururbanas de suficiente espacio para convivir con varias generaciones de la familia, algunas tienen uso agrícola o venta de servicios y se encuentran cerca a los ríos Cali y Aguacatal, además de un clima de montaña; mientras en Suerte 90 las viviendas tienen la medida de interés social que son menos de 50 m² y a pesar de su cercanía con el río Cauca no hay relación ambiental con el mismo.

Otra categoría analítica que sirve de contraste para las periferias de Cali es la de clase socioterritorial, aunque es necesario decir que en la presente investigación no se indagó en profundidad sobre las características de movilidad en la ciudad al no ser parte de los objetivos específicos, pero sí hay algunos datos que posibilitan el contraste conceptual y sería una línea interesante de estudiar en futuras investigaciones. Así las cosas, Jouffe (2011) propone hablar de *clase media metropolitana*, que se define por sus recursos individuales en cuanto a capital económico y saber escolar, y *clase popular del repliegue*, que no cuenta con recursos disponibles para competir con las clases medias, aunque posee fuerza física y lazos vecinales que son recursos sociales de pequeño alcance. En esta última clase hace tres subdivisiones: pobreza organizada, pobreza asistencial-clientelista y guetoizada.

Partiendo del autor, las clases socioterritoriales son tipos ideales que se combinan y no son estáticas, lo cual permite que sean una referencia conceptual para comparar con otros casos como el de Cali, por lo que podríamos decir que el capital metropolitano y el capital barrial coexisten en Terrón Colorado y Suerte 90. Sin embargo, teniendo en cuenta los grupos etarios, son los fundadores del barrio Terrón Colorado los que describen en sus prácticas cotidianas el arraigo (lazo afectivo

con el hogar), integración (lazos vecinales), aspiración (quedarse en el barrio), trabajo informal local, transporte (caminata y bicicleta), y ocio (cuidarse y ayudar a los vecinos), mientras que los jóvenes, de acuerdo con los relatos de los líderes comunitarios, lo que privilegian son los rasgos de capacidad de cambiar de casa (arraigo), lazos amistosos difundidos (integración), surgir socialmente (aspiración), trabajo calificado distante, transporte público o privado (transporte) y consumo distante (ocio) (Jouffe, 2011), esto gracias a los programas sociales y los procesos comunitarios de los adultos y adultos mayores, lo que es contradictorio pues no logran mantener el arraigo generacional.

En Suerte 90 también coexisten el capital medio metropolitano y el capital popular barrial, pero tiene mayor peso el segundo porque el paracapital de la movilidad en la ciudad es más difícil para sus habitantes, lo cual no quiere decir que no se puedan desplazar a otras áreas de la ciudad, pero quienes viven en el oriente deben gastar más dinero moviéndose hacia el lugar de trabajo o el médico, como lo expresaba uno de los jóvenes, habitante del barrio, debido a que pagan el transporte público y el pirata en un mismo trayecto, pero su capital económico no les permite movilidad habitacional, esto sumado a la dificultad que tienen con las escrituras de la vivienda, por lo que deben permanecer en los barrios junto con las dos o tres generaciones de la familia, e invierten en la mejora de la vivienda como forma de repliegue barrial.

Jouffe (2011) sugiere que la configuración popular barrial genera organización por la defensa de la calidad de vida en el barrio, y aunque hay JAC en Suerte 90, donde además participa un joven de 24 años como Juan de Dios, aún falta consolidar ese tejido colectivo porque priman las condiciones privadas de la VIS agenciada por el Estado, lo cual no permitiría ver aún consolidada una clase socioterritorial en el oriente ni en la ladera, sino más bien que coexisten las clases medianizada-metropolitana y medianizada-barrial que se mueven en la lucha por ambos capitales territoriales, mostrando una vez más que los aspectos físicos y simbólicos están conectados en el intercambio y acumulación del capital espacial de uso y construcción del territorio en las periferias.

Adicionalmente, otro concepto que complementa la discusión sobre el espacio social es el de *habitus*, el cual según Bourdieu (2007) son «condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia [que] producen *habitus*, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones» (p. 86), por lo cual, es histórico y es producto de condiciones sociales. Si consideramos que existen capitales metropolitanos y barriales en cada caso de Cali, entonces hay unas disposiciones para cada tipo de capital, un deseo permanente de luchar por mejores ventajas y por ende mejores condiciones de vida urbana en los habitantes de Terrón Colorado y Suerte 90 y un sentido organizativo de la acción comunitaria para alcanzarlo, pues en los dos barrios hay procesos colectivos que apuntan a exigir mejores condiciones de vida, pero ese *habitus* de lucha urbana y organización social se ve en conflicto con las condiciones físicas de los proyectos de vivienda y las definiciones sobre el uso del suelo que hacen los actores dominantes; sin embargo, este concepto no se exploró en profundidad y sería un buen tema para futuras investigaciones, con el cual se tendría que profundizar en la descripción de prácticas urbanas más específicas por parte de los agentes sociales y llegar a una escala más microsocioal.

En esta línea de discusiones sobre otros aspectos por profundizar en futuras investigaciones, también se sugiere pensar en la relación que los conceptos de capital espacial y clase socioterritorial tienen con el de multiterritorialidad, dado que esta propuesta de Haesbaert (2013) cuestiona las formas en que se usa el concepto de territorio y desterritorialización, dado que el autor considera que el territorio tiene que ver con el poder y el control de un espacio, pero no todos los actores tienen el mismo poder sobre ese territorio y aunque los conflictos urbanos muevan a los actores hacia distintos lugares, cuando son las élites o burocracias altas las que se desplazan, no pierden control sino que se reterritorializan estratégicamente, que es lo contrario que ocurriría con comunidades desplazadas por la gentrificación o la desaparición de fábricas,

por ejemplo, que pierden el territorio y su poder sobre el espacio; pierden su identidad.

Esta propuesta teórica es interesante porque cuestiona que la idea del poder estatal sobre el espacio desaparezca en la era contemporánea, dado que se habla de la reducción del Estado, pero en contextos de migración, por ejemplo, se retoma el levantamiento de muros para controlar las fronteras entre países. Lo que se llama desterritorialización hoy, aludiendo a la desconexión con un espacio físico o donde no vemos actores específicos, como podría ser el capital financiero, en realidad es un ejercicio de poder por múltiples medios, por eso lo que existe, según Haesbaert (2013), es una multiterritorialidad; es decir, los actores dominantes, el Estado, las élites, viven en varios territorios que son funcionales y dominan, no pierden control, sino que lo ejercen en distintas escalas y esto está conectado en redes que los mismos grupos dominan.

Esta perspectiva conecta con el problema de la vivienda en el mundo y cómo la financiarización que se expresa a pequeña y gran escala responde a esas redes de poder que los agentes sociales con poder simbólico controlan, pues las empresas privadas, las constructoras, los bancos y estos a su vez aliados con el Estado y sus funcionarios, definen la deuda y los créditos como única vía para enfrentar la vulneración al derecho fundamental de la vivienda en los barrios del sur global y de las potencias del norte. Pero ese será un tema que deba tratarse en futuras investigaciones.

Para cerrar este último capítulo que recoge la categoría de análisis central de la investigación, se define la *periferia diferenciada* como un espacio social que une las formas sociales con los procesos sociales a partir de los conflictos urbanos que enfrentan a los agentes sociales con la burocracia estatal y los actores privados, entre los habitantes de los barrios con los profesionales sociales de programas de bienestar, las empresas de servicios públicos, los secretarios de la alcaldía, el alcalde, los empresarios, las constructoras y las cajas de compensación familiar, por la disputa de un capital espacial que recoge mejoramiento del equipamiento urbano, movilidad eficiente en la ciudad y oportunidades laborales y educativas para jóvenes

y adultos, en medio del aumento de la financiarización del uso del suelo en las dos primeras décadas del siglo XXI.

La propuesta de unir aspectos microsociales de la vida cotidiana de los agentes sociales con el análisis estructural e histórico de la ciudad a partir de la disputa por la definición del costo y uso del suelo de la periferia urbana de Cali, aporta a la perspectiva estructural constructivista propuesta por Bourdieu, añade más casos de estudio que operativicen la dialéctica de espacios sociales de la que habla Wacquant, y mantiene la idea de que el espacio es una relación social, como lo dice Lefebvre, y esto se explica por la confluencia de formas espaciales físicas y procesos sociales económicos y de reproducción del capital, como lo plantea Harvey. A su vez, se podrán entender los procesos diferenciados en otros escenarios como el de Latinoamérica o en el mundo, a partir de la comprensión de la configuración del mercado del suelo y la definición de su costo, uso, transformación o delimitación por parte de los agentes sociales con mayor capital social, económico y cultural acumulado.

A modo de cierre

A través de la investigación se pudo demostrar cómo la configuración de sectores periféricos urbanos no se debe asumir como un proceso social homogéneo, sino diferenciado. Las existencias de las periferias urbanas están asociadas a las condiciones sociales de posibilidad que pueden (o no) potenciar su sociogénesis y sus desarrollos históricos urbanos. Ellas surgen en condiciones muy particulares del desarrollo histórico que adquiere la ciudad, de las políticas estatales de índole político, económico, social y ambiental, así como de otros factores, muchos de ellos de incidencia internacional provenientes de entes globales asociados a los temas del desarrollo urbano de las ciudades latinoamericanas y, por supuesto, colombianas.

A pesar de que a nivel mundial las Naciones Unidas (1996) y los distintos jefes de Estado reconocen que la explosión urbana tiene efectos directos en la baja calidad de vida de los asentamientos humanos, que golpea con mayor fuerza a los niños,

jóvenes y mujeres, y que se han hecho recomendaciones sobre la disminución de los presupuestos de guerra para invertirlos en los USD 100 por persona que costaría a cada nación dar vivienda digna a todos sus ciudadanos, los efectos para la ciudad latinoamericana siguen siendo más alarmantes que los diagnosticados en 1996. Sobre todo a nivel local se siente con mayor efecto el detrimento de las capacidades humanas en cada esquina de los barrios marginados donde la posibilidad de un mejor entorno para desarrollarse muere con cada joven asesinado por el microtráfico.

Es por esto que el estudio de dos barrios, uno en la ladera oeste y el otro en la ribera oriental del río Cauca en Cali, hace posible comprender la producción del espacio como un escenario de interacción de capitales y competencias de los distintos agentes que buscan, por un lado, el acceso a una vivienda digna para desplegar al máximo sus proyectos en sociedad, y, por otro, pequeños grupos sociales que se siguen negando a perder beneficios económicos y sociales con los cuales dominan la creación de planos en la ciudad, pero, principalmente, líneas de segregación, distancias enormes en términos simbólicos y la proliferación de mayores índices de pobreza multidimensional.

La periferia no surge solo en el espacio donde se encuentran los barrios, sino que ellas también provienen de los marcos políticos de desarrollo urbano que se crean desde los centros de poder, por eso la teoría del espacio social de Bourdieu insiste en representar el dominio del Estado en cada circunstancia en que se forma un barrio en la ciudad, y la comparación evidencia escenarios diferenciados que no se pueden quedar únicamente en el trazado geográfico (físico) del espacio, sino cruzarlo con el espacio social y simbólico. Esto quiere decir que la periferia, aunque la materializan las condiciones de vida de la población de los barrios, es producida desde otros escenarios, algunos de ellos políticos.

El concepto de capital espacial también es un complemento para entender los procesos barriales y de configuración territorial en las periferias de la ciudad, conectando las prácticas de los agentes sociales desde su incidencia material en el diseño urbano y el poder de las representaciones y expectativas de los grupos de poder al definir los límites y

usos del suelo de manera diferenciada. Así mismo, permite articular la mirada intermedia que conecta fenómenos estructurales con experiencias cotidianas de los habitantes, sumando el sentido subjetivo en el análisis físico de la ciudad sin desligarse de la dinámica económica, de producción y financiación que engloba a los procesos urbanos en la actualidad.

Estos conceptos además sugieren que analizar las dinámicas espaciales a través de casos de estudio comparados amplía la teoría, la problematización de los conceptos y otras líneas analíticas; por ejemplo, a partir de este estudio se pueden realizar nuevas indagaciones que caractericen los *habitus* dentro de las periferias, que detallen los capitales metropolitanos y barriales en otras comunas, que contrasten los datos de prensa y entrevistas con encuestas, y que incluso comparen comunas periféricas con barrios centrales de la ciudad, temas

que se hubieran querido profundizar en el trabajo de campo pero que no se establecieron desde un comienzo en los objetivos específicos, por lo cual serían posibles proyectos futuros en esta línea temática que la investigadora viene adelantando en su trayectoria académica.

Se considera que esta investigación abre el camino para nuevas categorías que se pueden seguir indagando y profundizando, como lo son las identidades individuales que se juegan en la disputa espacial, las prácticas y el *habitus*, entre otros aspectos que implican seguir bajando en la escala microsocial de las relaciones sociales en los lugares. Se espera que en futuras investigaciones se pueda seguir empleando la dialéctica de Bourdieu, como la denomina Wacquant, como una herramienta analítica y metodológica para estudiar los vacíos que el estudio espacial a gran escala no permite ver de manera diferenciada.

CONCLUSIONES

El despliegue temático realizado favoreció la descripción del proceso de desarrollo urbano de la ciudad durante el siglo XX, indagando para cada oleada de poblamiento y fase de desarrollo las condiciones socioespaciales particulares que dieron origen a un poblamiento informal y popular en la comuna 1, frente a un poblamiento agenciado desde el Estado en la comuna 21. Se estableció que los parámetros de división espacial de las élites de la ciudad a inicios del siglo XX se sostienen en la actualidad en la expansión de las periferias y el relacionamiento que mantienen estas zonas respecto al centro de la ciudad, de los lugares privilegiados del capital y las otras periferias donde el uso del suelo y la rentabilidad financiera crean mejores condiciones de vida para los sujetos.

Se identificó que las condiciones de creación de la comuna 1, entre las décadas de los años cincuenta y sesenta, permitieron que los migrantes que llegaban de la vía al mar y demás pobladores de Cali lideraran tomas colectivas de tierra y acciones multimodales para exigir la legalización de las zonas como acción ciudadana por el derecho a la vivienda, respaldados por un contexto de oportunidades políticas a nivel nacional que venía de las luchas obreras de inicio de siglo, de tal manera que esta organización comunitaria logró entablar diálogos con las burocracias altas y bajas del Estado para ser reconocida formalmente.

Por su parte, para el caso de Suerte 90 se señala que es producto de un diseño abierto y pensado por las élites políticas junto con la alcaldía, respondiendo a marcos internacionales sobre el desarrollo económico donde ese ideal de calidad de vida que promovían las Naciones Unidas para finales del siglo pasado, se reemplaza por la intención de ganancias económicas vía derechos sociales de la política neoliberal, lo que evidencia que las disposiciones y recursos internacionales que se obtuvieron para la desecación de la laguna de Aguablanca en función de viviendas de interés social, en últimas, antes que erradicar la marginalidad y la pobreza, extiende la vulneración de los sujetos despojados de ciudadanía y desprovistos de capital, que no cuentan con la acumulación necesaria para moverse dentro del espacio social y lograr una calidad de vida real respecto a los agentes que dominan la división urbana.

Se identificaron los temas comunes sobre los que se han dado las luchas urbanas en la ladera oeste y en la ribera oriental del río Cauca, encontrando que las problemáticas están más centradas en el servicio de agua para la ladera y en los servicios de energía e Internet para la zona plana oriental. Un conflicto que comparten es el de la movilidad urbana y las condiciones del transporte público, pues por un lado en la ladera oeste cuentan con diversas modalidades y servicios, incluso los buses intermunicipales, pero en la ribera plana del río Cauca ha sido predominante el servicio particular de yipetos-gualas, principalmente para Suerte 90. En ambas zonas opera el transporte masivo MIO y desde el momento en que entran en funcionamiento también se dan disputas con los conductores de yipetos-gualas por los acuerdos de rutas y tarifas, aunque en general la movilidad es más factible para los habitantes de Terrón Colorado, mientras que quienes viven en el oriente han tenido que acceder en mayor medida a vehículos propios, por lo difícil que es conectarse con otras zonas apartadas de la ciudad.

De forma diferenciada también se presentan los conflictos en cuanto a la legalización de las escrituras y los procesos de pago de las viviendas de interés social en Suerte 90, mientras que los procesos de legalización para Terrón Colorado se dieron en su mayoría en los años setenta y ochenta. Otro conflicto diferenciado es el relacionado con las dinámicas ambientales, dado que a pesar de que Suerte 90 aparece en algunas referencias bibliográficas como ecobarrio, es en Terrón Colorado donde se ve que los habitantes tienen rutas ambientales y viven con una relación más directa con los ríos Cali y Aguacatal, pero esa relación con los farallones y las montañas no son reconocidas desde los entes estatales.

En suma, a través de los capítulos se identifica que la producción espacial es un escenario constante de tensión entre los distintos agentes sociales, lo que hace pertinente el estudio de casos a pequeña escala y compararlos en términos de relaciones sociales entre los actores del espacio social. Al respecto, se encontró que hay poca unión de los líderes y de la población en Suerte 90 para dirigir la movilización ciudadana por el derecho a

la ciudad, lo cual les podría permitir el reclamo de mejores condiciones de vivienda, pues el efecto arrastre y el efecto simbólico de la exclusión y precariedad que vive el oriente de la ciudad se refleja en sus habitantes.

Aquí vale la pena diferenciar el liderazgo entre los jóvenes del oriente y los de la ladera de Terrón Colorado, pues se manifiesta que en Terrón los jóvenes buscan salir del barrio, indicando mayor movilidad espacial, mientras que los del oriente se quedan para reivindicar su espacio, en donde el tema cultural es fundamental para el arraigo espacial en otras comunas como la 13 y la 14, pero muy difusas aún en Suerte 90, que incluso podrían estar marcadas por las dificultades que tienen con la escrituras de la vivienda. Por ende, el análisis del espacio personal es otra de las categorías importantes para profundizar en un estudio posterior que baje a una escala menor para detallar la privación de capitales y su traducción en prácticas más específicas de los sujetos como sus distintos *habitus*.

La participación comunitaria destaca entre los habitantes de Terrón Colorado, pues lo que mencionan los mismos líderes es que la población está dispuesta a la acción colectiva de contingencia pero no a los procesos organizativos largos; por eso, algunos líderes permanecen mucho tiempo en las presidencias de las JAC y es más bien baja la representación de jóvenes; como ellos mismos lo mencionan, los jóvenes no tienen tanto arraigo en la zona como los adultos y buscan salir del barrio; contrario al oriente, que la identificación con el territorio es visible para quienes se reconocen como afrodescendientes.

Aunque en Suerte 90 no se refleja la totalidad de población afro que caracteriza las geografías de la muerte, y la base de segregación no es solo la etnia, sino que está centrada en la clase, pero es interesante lo que ocurre con un presidente de la JAC tan joven y que tiene esa historia de su madre en la misma condición de clase. Pareciera que hay posibilidades de movilidad social pero la gente no se ha ido, además de tener el problema de las escrituras, los habitantes tienen arraigo con la idea de tener una vivienda propia, y eso parece que cierra el objetivo estatal de generar el cercamiento simbólico. Las burocracias del Estado saben que

entregar las viviendas en esa zona pensada para la exclusión, los créditos y la reproducción de la marginalidad, va a mantener a la gente allí, por el peso simbólico de la casa propia, aunque falten muchas condiciones de vida digna, que a su vez desmovilizan la posibilidad de una lucha colectiva por el derecho a la ciudad.

Vale la pena resaltar que esa movilidad social y negociación que se testimonia en los habitantes de Terrón Colorado ha sido histórica, gracias a los procesos de poblamiento popular que vivieron en la década del cincuenta y sesenta, por lo que tienen un repertorio de acción colectiva en el imaginario de los líderes de mayor edad, además que siguen con un trabajo de base, solidaridad, incluso negocian con sectores aledaños, con la alcaldía. Hoy se sienten con un poder de agencia con otros sectores y saben que la acción colectiva es su opción de resolución y gestión de los conflictos.

Además, cuentan con una ventaja geográfica y es que, al estar atravesados por la vía al mar, poseen mayores oportunidades políticas para ser escuchados que los habitantes de Suerte 90, que aun si cerraran las vías que rodean al barrio, no generarían ningún impacto en la movilidad de la ciudad.

En síntesis, el estudio de ambos barrios permitió analizar que el peso del estigma social sigue teniendo una fuerza superior en la construcción social o el efecto de naturalización del espacio, en donde quienes viven en el oriente son excluidos directamente de trabajos por el lugar donde viven, algo que no se evidencia tan fuerte en Terrón y podría relacionarse con la movilidad social. Hasta aquí se logra dar cuenta de la formación de dos barrios y los distintos efectos de lugar implicados, enfatizando en los tipos de conflictos que enfrentan sus habitantes y por ende la condición diferenciada de las periferias de la ciudad de Cali.

REFERENCIAS

- Acuerdo 069 de 2000* [Concejo Municipal de Santiago de Cali]. Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali. 26 de octubre de 2000.
- Acuerdo 178 de 1945* [Concejo Municipal de Santiago de Cali]. Por medio del cual se crea el Código Urbano del Municipio de Santiago de Cali. 28 de julio de 1945.
- Acuerdo 127 de 1948* [Concejo Municipal de Santiago de Cali]. Por medio del cual se delimita el perímetro urbano de la ciudad.
- Almario, Ó. (2012). Cali y el Valle del Cauca: configuración moderna y reconfiguración contemporánea de la región y la ciudad-región. En G. Loaiza Cano *et al.* (dir.), *Historia de Cali siglo xx* (Tomo II: Política, pp. 70-93). Universidad del Valle.
- Álvarez-Rivalluda, M. J. (2017). *Invasiones y políticas de la marginalidad en Uruguay*. Palgrave Macmillan.
- Alves, J. A. (2020). Biópolis, necrópolis, negrópolis: notas para um novo léxico político nos estudos sócio-espaciais sobre o racismo. *Geopauta*, 4(1), 5-33. <https://doi.org/10.22481/rg.v4i1.6161>
- Alves, J., Moreno, V. y Ramos, B. (2014). *Notas preliminares para un análisis interseccional de la violencia en el Distrito de Aguablanca (Cali-Colombia)*. Documentos de trabajo del CIES, Serie Estudios Afrodiaspóricos.
- Apaolaza, R. y Blanco, J. (2015). *Sobre capacidades, experiencias y posibilidades de uso y apropiación de la ciudad: Breve estado del arte del concepto de capital espacial*. XI Jornadas de Sociología. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Buenos Aires. <https://www.aacademica.org/000-061/969>
- Aprile-Gnisset, J. (2010). *La ciudad colombiana* (vol. 4). Programa Editorial Universidad del Valle.
- Arboleda, N. (2019). *Renovación sí, pero no así: Mecanismos de resistencia ciudadana en el barrio San Pascual en Cali* [Tesis de Maestría, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. <https://hdl.handle.net/10656/10661>

- Arce, D. C. y Lucumí, L. L. (2020). *Proceso de configuración y consolidación del barrio Suerte Noventa de Cali: una mirada retrospectiva desde la memoria de sus habitantes* [Tesis de pregrado]. Universidad Católica Lumen Gentium.
- Arzaluz, S. (2005). La utilización del estudio de caso en el análisis local. *Región y Sociedad*, 17(32), 107-144. <https://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v17n32/v17n32a4.pdf>
- Auyero, J. (2001). Introducción: Claves para pensar la marginación. En L. Wacquant, *Parias urbanos: Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio* (pp. 11-30). Manantial.
- Auyero, J. (2013). *Pacientes del Estado*. Eudeba.
- Auyero, J. (2018). Llevando a Bourdieu a los márgenes urbanos. *Antropologías del Sur*, 20(9), 17-28. <https://share.google/XVMFLtgvxTEzDor1H>
- Becerra, L. (2014). *Transformación urbana del área de expansión de Cali: Estudio de caso: corredor Cali-Jamundí 2000-2013* [Tesis de pregrado, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario]. https://doi.org/10.48713/10336_9017
- Beuf, A. (2012). De las luchas urbanas a las grandes inversiones: la nueva urbanidad periférica en Bogotá. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 41(3), 473-501. <https://doi.org/10.4000/bifea.344>
- Bonilla Aragón, A. (1967). *Cali, ciudad de América*. Carvajal y Cía.
- Bonilla, E. y Rodríguez, P. (2005). *Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales*. Editorial Norma-Universidad de los Andes.
- Bourdieu, P. (1999). Efectos de lugar. En P. Bourdieu, *La miseria del mundo* (pp. 119-124). AKAL.
- Bourdieu, P. (2002). *La miseria del mundo*. Fondo de Cultura Económica.
- Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico*. Siglo XXI Editores.
- Buchely, L. (2017). Estado empático y ciudadanía precaria: reflexiones en torno al caso emblemático de Bellavista (Bojayá-Colombia). *Revista da Faculdade de Direito UFPR*, 62(1), 211-230. <https://doi.org/10.5380/rfdufpr.v62i1.50742>
- Buchely, L. y Castro, M. (2016). Mujer, espacio y poder: ciudad y transporte público como dispositivos de exclusión. Reflexiones desde la ciudad de Cali. *Estudios Socio-Jurídicos*, 18(2), 227-252. <https://doi.org/10.12804/esj18.02.2016.08>
- Bueno de Montoya, M. I., Correa, R., Sánchez, E. E., Córdoba de Filigrana, M. y Muñoz, G. (1984). *Historia del barrio Terrón Colorado*. Departamento Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal.
- Caicedo, J. C. y Galvis, M. (4 de octubre de 2023). El MIO de nadie: el problema del transporte público en Cali. *La Silla Vacía*. <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-mio-de-nadie-el-lío-del-transporte-publico-en-cali/>
- Cardona Martínez, A. A. (2005). *Propuesta de un módulo sostenible de vivienda de interés social* [Tesis de pregrado, Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental]. <https://hdl.handle.net/1992/22805>
- Carman, M. (2011). *Las trampas de la naturaleza: Medio ambiente y segregación en Buenos Aires*. Fondo de Cultura Económica.
- Carvajal, A. (2006). *Elementos de investigación social aplicada*. Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo.
- Castells, M. (2008). *La cuestión urbana*. Siglo XXI Editores.
- Castillo-Valencia, M. P., Jiménez, D. M., Franco, A. M., Salazar, B. y Caicedo, M. I. (2022). *Barreras invisibles: Jóvenes, pobreza y violencia*. Flacso-Programa Editorial Universidad del Valle.
- City-Facts (s. f.). *Terrón Colorado, Cali, Colombia*. <https://www.city-facts.com/search?s=Terr%C3%B3n+colorado&auto=>
- Córdoba Erazo, N. L. (2005a). *Imagen tomada en exterior, donde se aprecia una vía pavimentada por la que transita un vehículo de color azul*. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. <https://audiovisuales.icesi.edu.co/items/999c53a5-97ed-4976-ab64-e5ff3464218e>
- Córdoba Erazo, N. L. (2005b). *Plano general*. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle

- del Cauca. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. <https://audiovisuales.icesi.edu.co/items/19aaf1bc-360d-4460-a345-45f19af046cf>
- Córdoba Erazo, N. L. (2005c). *Imagen tomada en exterior, donde se aprecia en el extremo inferior una vía despavimentada y en el centro algunos hombres trabajando en construcción*. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. <https://audiovisuales.icesi.edu.co/items/025f8a7e-5971-4891-9601-a86b6c371645>
- Córdoba Erazo, N. L. (2005d). *Imagen tomada en exterior, donde se puede apreciar un sendero peatonal en concreto, que define una diagonal hacia la izquierda y al fondo la fachada de varias viviendas con muros de colores*. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. <https://audiovisuales.icesi.edu.co/items/2b2fd342-7369-48b3-9e69-6c35526fd73d>
- Cortez, L. (17 de julio de 2023). Una mujer fue asesinada en los apartamentos Río Cauca, en el oriente de Cali. *El País*. <https://www.elpais.com.co/judicial/una-mujer-fue-asesinada-en-los-apartamentos-rio-cauca-en-el-orient-de-cali-1742.html>
- Cruz de Galíndez, O. (2002). *Los barrios de invasión, un producto de la modernización sin modernidad: Terrón Colorado o Comuna 1*. Universidad del Valle, Diplomado en Historia de los Conflictos en Colombia.
- Cubillos, C. X. (2015). *Caracterización de los procesos organizativos socio-culturales en los barrios TIO: oferta social, dinámicas y proyecciones. Caracterización de la comuna 1*. Cedecur. <https://docplayer.es/189834997-Characterizacion-de-los-procesos-organizativos-socio-culturales-en-los-barrios-tio-oferta-social-dinamicas-y-proyecciones.html>
- Dávila, S. (17 de abril de 2024). 80.000 desplazados llegaron a Cali en 2023 por el conflicto armado. *Noticiero 90 Minutos*. [Acceso en noviembre 2024] <https://90minutos.co/cali/80-000-desplazados-llegaron-a-cali-en-2023-por-conflicto-armado-17-04-2024/>
- Davis, M. (2007). *Planeta de ciudades de miseria*. Ediciones Foca.
- Decreto 340 de 1910 [Presidencia de la República]. *Por el cual se da cumplimiento a la Ley 65 de 1909, sobre división territorial*. 16 de abril de 1910. D. O. n.º 13969.
- Decreto 492 de 1964 [Alcaldía de Cali]. *Por medio del cual se establece un estatuto municipal sobre el sistema de asignación, prolongación o recortes de las rutas urbanas de buses que funcionan en la ciudad de Cali*. 10 de octubre de 1964.
- Decreto 562 de 1954 [Junta Planificadora]. *Código Urbano Moderno*. 20 de noviembre de 1954.
- Delgado, M. (1999). *El animal público*. Anagrama.
- Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2019). *Inventario de bienes inmuebles de interés cultural de Santiago de Cali: casa barrio Santa Teresita*. https://idesc.cali.gov.co/download/bic_2014/BICM2-85.pdf
- Diario Occidente (19 de abril de 1962). Codenal construirá nuevas unidades comunales en Cali. *Diario Occidente*.
- Diario Occidente (17 de enero de 1967). Vivienda por 48 millones construirá el Inscredial [Fotografía]. *Diario Occidente*.
- Diario Occidente (1970). *Invasiones en Terrón Colorado* [Fotografía]. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. <https://audiovisuales.icesi.edu.co/items/d16a2041-7433-4bd9-a655-ec3e753d4600>
- Diario Occidente (20 de noviembre de 1974). *Invasión Terrón Colorado* [Fotografía]. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. <https://audiovisuales.icesi.edu.co/items/c62a52cc-a807-4598-b133-518eb5324d16>
- Dubois, V. (2014). The state, legal rigor, and the poor: the daily practice of welfare control. *Social Analysis*, 58(3), 38-55. <https://doi.org/10.3167/sa.2014.580304>
- Ecodesuerte [@ecodesuerte]. (12 de abril de 2020). *El semáforo es una idea para organizar la prioridad en la ayuda alimentaria, es fácil lo único que tene-*

- mos que hacer es compartir* [Imagen]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/B-6GiNCDkX0/>
- Eder, P. J. (1954). *El fundador Santiago M. Eder: recuerdos de su vida y acotaciones para la historia económica del Valle del Cauca*. Editorial Antares.
- El Día (20 de abril de 1910). Denominación de Cali como capital del departamento. *El Día*.
- El País (3 de febrero de 1960). Ambiciosos planes de vivienda se están desarrollando en la ciudad [Fotografía]. *El País*.
- El País (13 de marzo de 1960). Sigue «Terrón Colorado» sin agua ni alcantarillado. [Fotografía]. *El País*.
- El País (28 de octubre de 1960). Clásicas estafas son las urbanizaciones clandestinas que invaden hoy a Cali. [Fotografía]. *El País*.
- El País (10 de julio de 1970). Cali y su creciente déficit de vivienda. [Fotografía]. *El País*.
- El País (11 de julio de 1970). Cali triplicó su población en 20 años. [Fotografía]. *El País*.
- El País (8 de enero de 2000). Desalojada la invasión Pízamos. [Fotografía]. *El País*.
- El País (14 de mayo de 2000). Los pecados del transporte público [Fotografía]. *El País*.
- El País (2 de junio de 2000). Mapa de situación ambiental comunas de Cali [Fotografía]. *El País*.
- El País (7 de junio de 2000). Comuneros urgen vivienda en el POT. [Fotografía]. *El País*.
- El País (17 de junio de 2000). Lío por avalúo de ejidos. *El País*.
- El País (19 de junio de 2000a). Distrito insiste en «zona especial» [Fotografía]. *El País*.
- El País (19 de junio de 2000b). Cali tendrá una nueva ciclovía desde junio. [Fotografía]. *El País*.
- El País (22 de junio de 2000). Malos olores no dejan respirar a los caleños. [Fotografía]. *El País*.
- El País (28 de junio de 2000a). Planes de vivienda. [Fotografía]. *El País*.
- El País (28 de junio de 2000b). Proponen crear la comuna 22. [Fotografía]. *El País*.
- El País (30 de junio de 2000). La ladera se quedó sin agua. [Fotografía]. *El País*.
- El País (3 de mayo de 2000). Entre apatía, vencen hoy reliquidaciones. [Fotografía]. *El País*.
- El País (28 de agosto de 2016). Mapa panorámico del jarillón. [Fotografía]. *El País*.
- El País (15 de diciembre de 2019). Transporte «pirata» gana terreno en las rutas intermunicipales del Valle. *El País*. <https://www.elpais.com.co/cali/transporte-pirata-gana-terreno-en-las-rutas-intermunicipales-del-valle.html>
- El País (5 de enero de 2000). Cali, un solo subsidio de vivienda. [Fotografía]. *El País*.
- El País (14 de marzo de 2024). Más de 3000 familias continúan viviendo en el jarillón del río Cauca; este es el plan de la Alcaldía para reubicarlas. *El País*. <https://www.elpais.com.co/cali/mas-de-3000-familias-continuan-viviendo-en-el-jarillon-del-rio-cauca-este-es-el-plan-de-la-alcaldia-para-reubicarlas-1453.html>
- El Tiempo (19 de enero de 1998). Agilizan cambios de uso del suelo en la comuna 1. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-772245>
- El Tiempo (14 de abril de 1998). Terrón Colorado, historia de líderes comunales. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-828700>
- El Tiempo (20 de diciembre de 2016). Pugna de cooperativas de las «gualas» por los pasajeros en el oriente. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/movilidad-gualas-se-disputan-pasajeros-en-el-oriente-de-cali-50101>
- Espinosa, L. D. (2006). El Plan Piloto de Cali 1950. *Revista Bitácora Urbano Territorial*, 10(1). 222-233. <https://www.redalyc.org/pdf/748/74831071018.pdf>
- Fenavip (2001). *Manual del propietario: Urbanización Suerte 90, convenio Asociativo FENAVIP-Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali*. Fenavip.
- Flores, J. A. (2009). Espacios sociales diferenciados: apuntes para una teoría de las escalas. *Boletín de Antropología Americana*, (45), 5-32. https://bibliotecadigital.inah.gob.mx/janium/Documentos/IPGH/BOANAM_00_0045_2009_P005.pdf

- Foto Guerrero (28 de febrero de 1996). *Berrio Distrito de Aguablanca* [Fotografía]. Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. <https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/70892>
- Foucault, M. (2008). *Seguridad, territorio, población*. Akal.
- Franco, A. M. (2020). *The production of marginality: Paradoxes of urban planning and housing policies in Cali, Colombia* [Tesis de doctorado, Universidad de Cambridge]. <https://doi.org/10.17863/CAM.50138>
- Franco, A. M. (2020). *Marginalidad oculta: Políticas de vivienda social y vivienda gratuita en Colombia*. Programa Editorial Universidad del Valle.
- Galeano, M. E. (2018). *Estrategias de investigación social cualitativa: El giro en la mirada* (2.^a ed.). Universidad de Antioquia, Fondo editorial FCSH.
- Galeano, J. y Londoño, C. (2019). Patrones de ocupación del territorio y modelos de ordenamiento en la construcción de región. En J. Galeano, F. Urrea-Giraldo y M. I. Caicedo (eds.), *Cali, ciudad-región ampliada: Un territorio metropolitano* (pp. 65-104). Universidad del Valle-Universidad de San Buenaventura Cali.
- Garnier, J. P. (1976). Planificación urbana y neocapitalismo. *Geocrítica*, 1(6), 1-26.
- Garzón, J. B. (2018). Acciones colectivas contenciosas, cultura política y construcción de ciudad: Cali, 1910-1953. En E. Rodríguez y A. J. Echeverry (eds.), *Poder y ciudad en Cali: Hacia la construcción de un orden urbano, 1910-1950*. Editorial Icesi-Programa Editorial Universidad del Valle.
- Garzón, B. (comp.) (2019). *Creación de barrios obreros en Colombia a inicios del siglo XX: La higiene como excusa, la eugenesia como propósito, el control como finalidad*. Sello Editorial Unicatólica.
- Garzón, B. (2020). Ordenar el territorio, construir ciudad: Una mirada al ordenamiento territorial de Cali en la primera mitad del siglo XX. En O. Eusse, A. M. Henao, N. Jiménez y J. B. Garzón (eds.), *Atlas histórico de Cali* (pp. 16-20). Editorial Unicatólica.
- Google Maps (2024). [Mapa de Suerte 90]. Recuperado en mayo de 2024 de <https://acortar.link/gygeditores14022026>
- Gouëset, V. (1998). *Bogotá: Nacimiento de una metrópoli: La originalidad del proceso de concentración urbana en Colombia en el siglo XX*. Tercer Mundo Editores.
- Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y Representaciones Sociales*, 8(15), 9-42. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102013000200001&lng=es&tlng=es
- Harvey, D. (1977). *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI Editores.
- Harvey, D. (2008). El derecho a la ciudad. *New Left Review*, (53), 23-39. <https://newleftreview.es/issues/53/articles/david-harvey-el-derecho-a-la-ciudad.pdf>
- Harvey, D. (2018). *Justicia, naturaleza y geografía de la diferencia*. Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
- Hernández, J. S. (2015). *El endeudamiento del municipio de Cali a inicios de la década de 1930*. Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, Departamento de Historia.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill-Interamericana Editores.
- Hiernaux, D. y Lindón, A. (2004). La periferia: voz y sentido en los estudios urbanos. *Papeles de población*, 10(42), 101-123. <https://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v10n42/v10n42a5.pdf>
- Jouffe, Y. (2011). Las clases socio-territoriales entre movilidad metropolitana y repliegue barrial: ¿tienen los pobladores pobres una movilidad urbana de clase? *Transporte y Territorio*, (4), 84-117.
- Ladino-Mosquera, V. A. (2016). *Si el río suena, en su orilla hay resistencia: exigencia por la participación comunitaria en el Plan Jarillón de Cali*. Universidad del Valle, CIDSE. Documentos de Trabajo, 15284.
- Ladino-Mosquera, V. A. (2020). Samanes del Cauca: Contradicciones de la rururbanización en el oriente de Cali. *Vivienda y Ciudad*, (7), 136-154.

- <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/30133>
- Ladino-Mosquera, V. A. (2021). Imaginarios y planificación urbana: encuentros y desencuentros entre los habitantes del oriente de Cali-Colombia y el proceso de ordenamiento territorial. *Revista Lumen Gentium*, 5(1), 70-83. <https://doi.org/10.52525/lg.v5n1a5>
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Capitán Swing Libros.
- Ley 41 de 1948. Ley Barberena. Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre terrenos ejidos y sobre Personeros Delegados. 17 de noviembre de 1948. D. O. n.º 16920.
- López, J. (1994). *Procesos de colonización caucana-nariñense en el Valle del Cauca: el caso de Terrón Colorado* [Tesis de pregrado]. Universidad del Valle.
- Macuacé, R. (2017). *Del crecimiento urbano al rurbano*. Editorial Universidad del Cauca.
- Mera, H. y Ruiz, A. (2019). Génesis del barrio obrero de Cali: Ignacio Torres Giraldo y Julio Rincón: tópicos historiográficos desde dos célebres habitantes, década 1920. En *Memorias: XIX Congreso Colombiano de Historia* (pp. 4-29). Editorial Academia de Historia del Quindío.
- Metro Cali (27 de enero de 2023). *La terminal Aguablanca prestará servicio con 22 rutas* [Boletín de prensa]. <https://gitmasivo.com/web/wp-content/uploads/2023/02/BOLETIN-06-RUTAS-DE-LA-TERMINAL-AGUABLANCA.pdf>
- Moreno, V. y Mornan, D. (2015). ¿Y el derecho a la ciudad?: aproximaciones al racismo, la dominación patriarcal y las estrategias feministas de resistencia en Cali, Colombia. *Revista CS*, (16), 87-108. <https://doi.org/10.18046/recs.i16.1987>
- Mosquera, G. (1984). El movimiento de los destechados colombianos en la década de los años 70. *Revista Mexicana de Sociología*, 46(4), 127-144. <https://www.jstor.org/stable/3540349>
- Mosquera, G. (2012). Vivienda popular y acción colectiva en Cali, siglo XX. En G. Loaiza (ed.), *Historia de Cali siglo XX* (Tomo I: Espacio Urbano, pp. 238-270). Editorial Universidad del Valle.
- Mosquera, G. y Aprile-Gnisset, J. (1978). *Dos ensayos sobre la ciudad colombiana*. Universidad del Valle.
- Mosquera, G. y Aprile-Gnisset, J. (1984). *Clases, segregación y barrios*. Universidad del Valle.
- Muñoz, L. E. y Hernández, L. (26 de marzo de 1986). *Historia del barrio Terrón Colorado 1984*. Departamento Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal-Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.
- Naciones Unidas (1996). *Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), Estambul (Turquía)*. Autor.
- Netto, J. (2009). La concretización de derechos en tiempos de barbarie. En E. Borgianni y C. Montañó (coords.), *Coyuntura actual, latinoamericana y mundial: Tendencias y movimientos* (pp. 17-33). Editora Cortez.
- Observatorio Social Cali (s. f.). *Comuna 1, perfil* [Archivo PDF]. Mapoteca Universidad del Valle.
- Olarte Ibarra, M. (2025). *Formas de segregación socioespacial en los proyectos de vivienda de interés social en Cali durante los años sesenta* [Tesis de pregrado. Universidad del Valle]. <https://hdl.handle.net/10893/41110>
- Osorio, N. (2016). *Análisis del proceso de expansión del oriente de Cali: el caso de ciudadela DESEPAZ* [Tesis de pregrado, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario]. https://doi.org/10.48713/10336_12578
- Otero, R. (2017). *Sociología e historia de la ciudad desconcentrada*. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Padilla, J. (2018). Relaciones entre lo público y lo privado en los servicios de acueducto y electricidad en Cali, 1919-1944. En E. Rodríguez y A. J. Echeverry (eds.), *Poder y ciudad en Cali: Hacia la construcción de un orden urbano 1910-1950* (pp. 141-185). Editorial Icesi-Programa Editorial Universidad del Valle.
- Pérez, N. (2017). Desarrollo rural y movilización social en la zona rural de la subcuenca del río Pance (Cali, Colombia). *Revista CS*, (21), 69-96. <http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n21/2011-0324-recs-21-00069.pdf>

- Pérez Fonseca, A. L. (2018). Las periferias en disputa: procesos de poblamiento urbano popular en Medellín. *Estudios Políticos*, (53), 148-170. <http://doi.org/10.17533/udea.espo.n53a07>
- Pino, G. y Pérez, B. (1984). Cuentos y recuerdos de Terrón. En: *Concurso Historias de mi barrio*. Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal.
- Plan Estratégico de Desarrollo Comunal y Comunitario (PEDCC) (diciembre de 2019). *Informe Diagnóstico —JAC-Barrio Pízzamos I-Suerte 90, Comuna 21—*. Alcaldía de Santiago de Cali.
- Quintín, P. y Urrea, F. (23-25 de noviembre de 2000). *Segregación urbana y violencia en Cali: trayectorias de vida de jóvenes negros del distrito de Aguablanca*. La société prise en otage. Stratégies individuelles et collectives face à la violence. Réflexions autour du cas colombien. Marseille, Centre de la Vieille Charité.
- Quiroga, L. (14 de marzo de 2024). Ventas de vivienda de interés social siguen sin recuperarse y en febrero cayeron 20,6 %. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ventas-de-vivienda-de-interes-social-siguen-sin-recuperarse-y-en-febrero-cayeron-20-6-3324765>
- Resolución CU1-0121. Para conceder licencia de urbanización. Curaduría Urbana Uno. 28 de febrero del 2000.
- Rey, D. (19 de febrero de 2023). Así funciona la nueva terminal Aguablanca del MIO en Cali: hay pasajes gratis. *Infobae*. <https://www.infobae.com/colombia/2023/02/19/asi-funciona-la-nueva-terminal-aguablanca-del-mio-en-cali-hay-pasajes-gratis/>
- Rodríguez Jaume, M. J. (2002). ¿Es el espacio urbano alicantino un espacio social diferenciado? *Alquibla*, (8), 281-297.
- Rodríguez, A. N. y Bermúdez, C. (2013). *Intervención social y organizaciones comunitarias/populares en Cali*. Editorial Universidad del Valle.
- Rodríguez, E. y Sáenz, J. D. (2018). «Cali un garaje con obispo»: transición, modernidad e instituciones Cali 1910-1937. En E. Rodríguez y A. J. Echeverry (eds.), *Poder y ciudad en Cali: Hacia la construcción de un orden urbano, 1910-1950* (pp. 59-93). Editorial Icesi-Programa Editorial Universidad del Valle.
- Rojas, J. M. (1985). Sobre el papel de los empresarios en la formación del sector azucarero. *Boletín Socioeconómico* (14-15), 7-33. Universidad del Valle, CIDSE.
- Rosas, M. (8 de julio de 1995). Desepaz modelo de vivienda de interés social. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-360732>
- Ruiz, A. y Mera, H. (2015). *Entre El Calvario y El Paraíso: Memorias, contrastes y voces de ciudad*. Alcaldía de Santiago de Cali.
- Sabatini, F. y Brain, I. (2008). La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y claves. *Revista Eure*, 34(103), 5-26. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612008000300001>
- Secretaría de Vivienda de Cali (2000). *Plano 02 PH Suerte 90*. [Suministrado en CD]. Autor.
- Secretaría de Vivienda Social y Hábitat (2022). *Informe de Gestión SVSH al 31 de diciembre de 2022*. Autor.
- Supernoticias del Valle (Productor) (31 de julio de 2013). *Comunidad de Suerte 90 asegura que no les entregaron escrituras* [Archivo de video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=xJeDplH1ErU>
- Sztompka, P. (1995). *Sociología del cambio social*. Alianza Editorial.
- Torino, G. (2024). Mestizo urbanism: enduring racial intersections in Latin American cities. *Journal of Latin American Studies*, 56(1), 37-62. <https://doi.org/10.1017/S0022216X24000063>
- Urian, A. M. y Zapata, Y. (2014). *Análisis de la percepción de líderes comunitarios, integrantes del proyecto y habitantes del sector de Patio Bonito, con respecto al proyecto Terrón Coloreado en términos de interacciones entre los integrantes de esta comunidad* [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Occidente]. <http://hdl.handle.net/10614/8132>
- Uribe, H. (2009). Acción colectiva y toma de tierras en los jarillones de los ríos Cali y Cauca en Santiago de Cali-Colombia. En M. Rodríguez y J. Roze (eds.), *Ciudades latinoamericanas IV: Políticas*,

- acciones, memoria y reconfiguración del espacio urbano (pp. 69-90). Universidad Autónoma de Guerrero.
- Uribe, H. (2020). *Destruir la naturaleza para rediseñar el territorio: El caso del Valle geográfico del río Cauca, Colombia*. Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente.
- Uribe-Castro, H., Ayala, G. y Holguín, C. (2017). *Ciudad desbordada: Asentamientos informales en Santiago de Cali, Colombia*. Universidad Autónoma de Occidente.
- Urrea, F. (2012) Transformaciones sociodemográficas y grupos socio-raciales en Cali a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En G. Loaiza (ed. gral.), J. B. Garzón Montenegro (coord. tomo I), *Historia de Cali siglo XX* (Tomo I: Espacio urbano, pp. 145-194). Universidad del Valle, Facultad de Humanidades. <https://es.scribd.com/document/245212265/Historia-de-Cali-SXX-Tomo-I-Espacio-Urbano>
- Urrea, F. y Franco, A. M. (2020). *Una mirada a los asentamientos informales de Cali: Análisis de los datos Sisbén III 2019*. Universidad del Valle, CIDSE.
- Vargas, J. C. y Amparo Alves, J. (2010). Geographies of death: an intersectional analysis of police lethality and the racialized regimes of citizenship in São Paulo. *Ethnic and Racial Studies*, 33(4), 611-636. <https://doi.org/10.1080/01419870903325636>
- Vásquez, É. (1990). Historia del desarrollo económico y urbano en Cali. *Boletín Socioeconómico*, (20), 1-28. <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/5486/1/Historia%20del%20desarrollo%20historico%20y%20urbano%20en%20Cali.pdf>
- Vásquez, E. (2001). *Historia de Cali en el siglo XX: Sociedad, economía, cultura y espacio*. Artes Gráficas del Valle.
- Velasco, J. (2009). Algunos comentarios: el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali; qué opinan los urbanistas y planificadores. *Revista CITCE: Territorio, Construcción y Espacio*, (2), 34-56.
- Vergara, R. (2009). *El desarrollo de la estructura físico-urbana en la ciudad de Cali (1968-2008): Un caso de análisis de política pública* [Tesis de Maestría]. Universidad del Valle.
- Vinasco-Martínez, D. (2017). Transporte público en Cali: aspectos generales de su configuración en el siglo XX. *Revista CS*, (21), 41-67. https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/2295
- Vinasco-Martínez, D. (2019). Pacificando el barrio: orden social, microtráfico y tercerización de la violencia en un barrio del Distrito de Aguablanca (Cali, Colombia). *Cultura y Droga*, 24(27), 157-187. <https://doi.org/10.17151/culdr.2019.24.27.8>
- Vivas, H. (2013). Persistencia de la segregación residencial y composición del capital humano por barrios en la ciudad de Cali. *Ensayos sobre Política Económica*, 31(70), 121-155. https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/espe_art3_70.pdf
- Viveros, M. (2007). Discriminación racial, intervención social y subjetividad: reflexiones a partir de un estudio de caso en Bogotá. *Revista de Estudios Sociales*, 1(27), 106-121. <https://doi.org/10.7440/res27.2007.07>
- Wacquant, L. (2001). *Parias urbanos: Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio*. Manantial.
- Wacquant, L. (2022). Rethinking the city with Bourdieu's trialectic. *City*, 26(5-6), 820-830. <https://doi.org/10.1080/13604813.2022.2125181>
- Wirth, L. (1962). *El urbanismo como modo de vida*. Paidós.
- Ziccardi, A. (2001). Las ciudades y la cuestión social. En A. Ziccardi (comp.), *Pobreza, desigualdad social y ciudadanía: los límites de las políticas sociales en América Latina*. CLACSO. <https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/pobreza/pobreza.html>
- Zurbriggen, C. (2011). Gobernanza: una mirada desde América Latina. *Perfiles Latinoamericanos*, 19(38), 39-64. <https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/124>

LA AUTORA

Vivian Andrea Ladino Mosquera

Profesora de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle. Investigadora. Trabajadora social y especialista en Procesos de Intervención Social, Universidad del Valle; magíster en Estudios Sociales y Políticos, Universidad Icesi; doctora con distinción meritoria en Sociología, Universidad del Valle. Coautora de los libros *Condiciones laborales de trabajo social: Realidades y retos en el Valle del Cauca* (2024), *La intervención encarnada: Reflexiones en cuanto a las experiencias de trabajadoras/es sociales del sector salud frente al COVID-19* (2023), *Historia, política y sociedad: Investigaciones sobre ámbitos de la realidad moderna y contemporánea del Valle del Cauca* (2018). Entre sus artículos destacados se encuentran: «Percepciones de profesionales de trabajo social sobre las condiciones laborales en Cali: años 2019-2020» (2024), «Imaginarios y planificación urbana: encuentros y desencuentros entre los habitantes del oriente de Cali-Colombia y el proceso de ordenamiento territorial» (2021), «Samanes del Cauca: contradicciones de la rururbanización en el oriente de Cali» (2020), «Vida cotidiana de las mujeres mineras de Higuerillos, municipio de Buenos Aires, Cauca: una mirada a sus familias, su trabajo y su participación política» (2014).



Programa  ditorial

**Vicerrectoría
de Investigaciones**

**Universidad del Valle
Campus Meléndez**

Calle 13 N.º 100-00, Cali

Tfnos.: (57) 602 3212227 | 602 3212100 ext. 7687

Edificio Administración Central E01, espacio 1001

<https://programaeditorial.univalle.edu.co>

programa.editorial@correounivalle.edu.co

    | [programaeditorialunivalle](#)